



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER

**LA VIOLENCIA SEXUAL:  
DESARROLLOS FEMINISTAS, MITOS Y RESPUESTAS  
NORMATIVAS GLOBALES**

---

**SEXUAL VIOLENCE:  
FEMINIST DEVELOPMENTS, RAPE MYTHS AND  
THE INTERNATIONAL REGULATORY RESPONSE**

Memoria presentada para optar al grado de Doctora presentada por  
**Bárbara Tardón Recio**

Dirigida por  
**Dra. Cristina Sánchez Muñoz**

Madrid, junio de 2017

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER  
PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTUDIOS  
INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO

TESIS DOCTORAL

**LA VIOLENCIA SEXUAL:  
DESARROLLOS FEMINISTAS, MITOS Y RESPUESTAS  
NORMATIVAS GLOBALES**

---

**SEXUAL VIOLENCE:  
FEMINIST DEVELOPMENTS, RAPE MYTHS AND  
THE INTERNATIONAL REGULATORY RESPONSE**

DOCTORANDA

**Bárbara Tardón Recio**

Directora de la tesis doctoral

**Dra. Cristina Sánchez Muñoz**

*A mis abuelas (Chiqui y Sole), y a mis abuelos (Recio y Laureano), que a pesar de vivir en los tiempos más sombríos de la reciente Historia española, en mitad de esa oscuridad, fueron artífices del legado moral y ético que con tanta contundencia me han transmitido mis padres: el talento para vivir consiste en ser “buenas personas”*

## AGRADECIMIENTOS

---

La elaboración de esta investigación no puede presentarse como una tarea aislada. Habría sido imposible culminar este trabajo si no hubiera existido desde “tiempos inmemorables” toda una red de personas presentes y otras ausentes que han influido de forma definitiva en la decisión de desarrollar esta tesis doctoral.

A todas ellas quiero agradecerles su inmensa bondad. Algunas ni me conocen, pero han sido una luz fundamental en mi camino:

A mi directora, Cristina Sánchez Muñoz, imprescindible en mi biografía académica y personal, cuando después de 19 años, desde que me abrió las puertas a la teoría feminista siendo mi profesora en la UAM (1998), he culminado, gracias a su dirección y apoyo determinante, esta investigación.

A mis padres, Paloma y Gustavo, eterna gratitud por su soporte incondicional desde el día en que el azar les llevó por el camino que nunca hubieran imaginado. Fieles a nuestros compromisos, esta tesis lo demuestra. Nunca nos aburriremos juntos.

A mi psicóloga Arabella y la psiquiatra M<sup>a</sup> Fe Bravo por enseñarme a vivir sin miedo y libre, aprendiendo a enfrentar los fantasmas de mi cabeza, con los que he conseguido lidiar gracias a ellas. Sin vosotras tampoco podría haber escrito todo esto.

A mis grandes amigas y amigos, acompañándome siempre, sin fisuras, alegrándose de los triunfos individuales y compartidos, indignadas y felices de no conformarnos con nada hasta el último día de nuestras vidas: Tati, Jesús, Cristina, Gabriela, Lau, Ana, Yaiza, Nieves, Laura, Ángelo, Itziar, Juanjo, Silvia, Elena de Ron, Carolina, Dominique, Michael y esa larga lista de gente que me quiere tal y como soy... (el orden no altera el producto).

A la jurista María Naredo que me ha enseñado tanto, que no tengo espacio ni para nombrarlo.

A la psicóloga Sonia Cruz que fue la primera persona en mi carrera profesional que me abrió los ojos a la violencia sexual.

A todas mis compañeras y amigas feministas, maestras y activistas sin las cuales este trabajo tampoco merecería la pena: Yoya Fortún, Noelia Landete, Lidia Fernández, Cristina de la Serna, Irati, Begoña San José, Elena Laporta, Beatriz Sagrado, Isabel Soriano, Tania Sordo, Graciela, Alicia, Rocío, Vicky, Yedra, Rosa Méndez, Lupe, Montse ...

A las organizaciones e instituciones que me han brindado la oportunidad de trabajar en ellas para aprender a amar mi trabajo. Especialmente agradecer las oportunidades que me han dado las profesoras Trinidad Donoso Cortés, de la Universitat de Barcelona y a Teresa Orozo y Martha Zapata, por abrirme las maravillosas puertas, a través de mi estancia académica, de la Frei Universität de Berlín.

A los amigos y amigas de mis padres que siempre me han querido como si fuera parte de su familia. Verano, tras verano, e invierno tras invierno. A Carmen Campos y a Lola, que se fueron cuando no debían de hacerlo.

A mi pequeña, pero increíble familia: a mi abuela Chiqui, M<sup>a</sup>.Toñi, Miguel, Mavi, Juana, Eugenio, Aldo, Gonzalo, Reyes, Alfonso, Pablo, Álvaro, Carlos y Jaime.

Por supuesto, quiero agradecer y dedicar esta tesis doctoral a todas las mujeres, víctimas y supervivientes de violencia sexual que a lo largo de la Historia de la humanidad han tenido que soportar en silencio como su dignidad era atropellada sin escrúpulos, bajo la impunidad de un sistema cómplice de ella. Especialmente le agradezco a Vera la generosidad de confiar en mí, a la que sólo le deseo que la justicia le llegue algún día y podamos celebrarlo juntas, como parte de esas pequeñas victorias que el feminismo dibuja disimuladamente, pero que termina cambiando la vida de miles de mujeres.

No quiero cerrar este apartado sin olvidar un último agradecimiento. Gracias a todas “las sisters” que me han iluminado el camino: Jane Austen, Emilia Pardo Bazán, Emily Dickinson, Mary Wollstonecraft, Olimpie de Gouges, las Hermanas Brönte, Clara Campoamor, Toni Morrison, Rosa Parks, las sufragistas del East End, Susan Anthony, Angela Davis, Teresa de Jesús, Manolita, las mujeres de la FAI, etc. Si el espiritismo funcionara, os invocada cada día de mi vida ■

## ABSTRACT

---

Making use of a feminist and human rights-based theoretical framework, this doctoral thesis reveals the isolation experienced by women victims of sexual violence over the last 30 years in Spain, despite the positive developments in this realm and the existence of a regulatory framework specifically addressing gender-based violence.

To undertake this analysis of sexual violence committed against women, I provide a much-needed examination of the theoretical and conceptual signification of sexual violence throughout history (from the Middle Ages to the 20th century) and in particular from the time of the Spanish democratic transition to present day.

This research offers a greater understanding of the factors behind the disregard experienced by victims of sexual violence in the 20th century, in a wealthy country like Spain governed by the rule of law. This study was undertaken based on a detailed analysis developed by the theoretical and political feminist framework from the 1960s to present day.

In order to present the conclusions of this research, the numerous variables implicated in the issue are dissected making use of a feminist perspective – in dialogue with a human rights theoretical framework and approach. These are the variables which have permitted the systemic exercise of this form of violence and discrimination against women: the objective of sexual violence as one of the pillars supporting the patriarchal system; its origins, underlying causes and the permanent rape myths surrounding it, the various manifestations of sexual violence, as well as the constant impunity of those responsible.

Using the above analysis as a point of departure, the second part of this doctoral thesis evaluates the responsibility of the Spanish state in the area of sexual violence using the due diligence standard, evidencing the absolute indifference of the State, which has failed to fulfil its obligations in terms of prevention, investigation and sanction, integrated attention and compensation for victims of sexual violence ■

# ÍNDICE

<b>LISTA DE ACRÓNIMOS y SIGLAS .....</b>	<b>13</b>
--	-----------

## **PRIMERA PARTE**

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>17</b>
1.1. Objetivo y justificación de la investigación .....	19
1.2. Notas metodológicas .....	25
1.3. Estructura de la tesis .....	31
<b>2. CAPÍTULO 1: MITO E HISTORIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL. IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES.....</b>	<b>35</b>
2.1. Narrativas de la violencia sexual en la Historia .....	37
2.2. Cambio de paradigma y consolidación del mito en la Edad Contemporánea. ....	50
2.3. La mitología que sostiene la violencia sexual .....	67
2.3.1. Escalas de aceptación de los mitos sobre violencia sexual .....	73
<b>3. CAPÍTULO 2: DEFINIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL.....</b>	<b>77</b>
3.1. Lenguaje y semántica entorno a la violencia sexual .....	79
3.2. Aproximaciones teóricas al término y significado de la violencia sexual.....	87
3.2.1. Debates teóricos feministas .....	87
3.2.1.1. De la “política sexual”, al “el no es no”, a “mi cuerpo, mis derechos” .....	88
3.2.1.2. El feminismo latinoamericano frente a la violencia sexual: cuando nadie crea, ellas no dejan de hacerlo .....	97
3.2.1.3. Nuevas miradas y enfoques en la significación feminista de la violencia sexual: los años 90 y el cambio de siglo .....	102
3.2.1.4. El feminismo español frente a la violencia sexual: de la mordaza franquista a las luchas feministas.....	109
3.2.2. La impronta teórica de la normativa internacional, regional y nacional a la violencia sexual .....	116
3.2.2.1. El horror se hace visible: la violencia sexual en los Tribunales Penales Internacionales .....	122
3.2.2.2. Diferentes enfoques y elementos en común desde la normativa regional americana y europea .....	129
3.2.2.3. Una norma ciega al género: la violencia sexual en la normativa española.....	143
<b>4. CAPÍTULO 3: REPUESTAS GLOBALES A LA VIOLENCIA SEXUAL DESDE LOS DERECHOS HUMANOS .....</b>	<b>157</b>
4.1. Las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos: luces que alumbran las sombras de la violencia sexual .....	159

4.1.1. La Relatora especial sobre la violencia contra la mujer: una visión contrastada e independiente de la violencia sexual .....	161
4.1.2. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el Comité de la CEDAW, la Organización Mundial de la Salud y el Secretariado General de las Naciones Unidas: delimitaciones conceptuales y respuestas prácticas frente a la violencia sexual .....	169
4.1.2.1. La Recomendación General N°19: acotando la significación de la violencia sexual .....	172
4.1.2.2. El Protocolo Facultativo de la Convención CEDAW: una herramienta aliada .....	176
4.1.2.3. El Comité de la CEDAW ante la violencia sexual: aportaciones significativas que cambian vidas .....	177
4.1.2.4. La Resolución 1325: un hito histórico .....	185
4.1.2.5. La Organización Mundial de la Salud y el Secretariado General de las Naciones Unidas: escenarios fundamentales en la significación de la violencia sexual .....	186
4.2. Los números incontestables de la violencia sexual .....	192

## **SEGUNDA PARTE**

<b>5. CAPÍTULO 4: ENTRE LA PASIVIDAD Y EL SILENCIO DEL ESTADO ESPAÑOL FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL .....</b>	<b>207</b>
5.1. El deber ineludible de los Estados ante la violencia sexual desde el marco internacional de los derechos humanos .....	209
5.1.1. El estándar consensuado en la lucha contra la violencia sexual: “la norma de la debida diligencia” .....	211
5.2. La falta de respuestas del Estado español ante la violencia sexual .....	218
5.2.1. El Estado español frente a la prevención de la violencia sexual .....	222
5.2.1.1. Leyes invisibles a la especificidad de la violencia sexual ejercida contra los cuerpos de las mujeres .....	223
5.2.1.2. El mutismo de los Planes de Acción Nacionales frente a violencia sexual .....	232
5.2.1.3. Sin estadísticas y sin capacitación de los equipos profesionales .....	246
5.2.2. “El juez me ha vuelto a violar”: impunidad de los agresores y procesos judiciales traumáticos para víctimas de violencia sexual .....	251
5.2.3. La soledad de las víctimas ante la falta de protección y atención .....	258
5.2.3.1. La ausencia de servicios especializados .....	262
5.2.3.2. El tortuoso camino en el acceso a la justicia y a la protección .....	266
5.2.4. La libertad y el derecho a una nueva vida: solas ante la reparación integral. ....	270
<b>6. CONCLUSIONS .....</b>	<b>277</b>
<b>7. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>291</b>



## LISTADO DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS

<b>ACNUR</b>	Agencia de la ONU para los refugiados	<b>ONU</b>	Organización de las Naciones Unidas
<b>ADAVAS</b>	Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales	<b>PCE</b>	Partido Comunista de España
<b>AMMSA</b>	Acceptance of Morden Myths About Sexual Agression	<b>PF</b>	Protocolo Facultativo
<b>CAVAS</b>	Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales	<b>PGE</b>	Prespuestos Generales del Estado
<b>CCAA</b>	Comunidades Autónomas	<b>PIOM</b>	Plan para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer
<b>CEDAW</b>	Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer	<b>RAE</b>	Real Academia de la Leguna Española
<b>CEDCM</b>	Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer	<b>RD</b>	Real Decreto
<b>CERD</b>	Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial	<b>RMAS</b>	The Rape Myth Acceptance Scale
<b>CGPJ</b>	Consejo General del Poder Judicial	<b>TCA</b>	Tratado sobre el Comercio de Armas
<b>CIDH</b>	Corte Interamericana de Derechos Humanos	<b>TEDH</b>	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
<b>CONPES</b>	Consejo Nacional de Política Económica y Social	<b>TPIR</b>	Tribunal Penal Internacional de Ruanda
<b>CP</b>	Código Penal	<b>TPIY</b>	Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
<b>CPI</b>	Corte Penal Internacional	<b>TS</b>	Tribunal Supremo
<b>DESC</b>	Derechos Económicos Sociales y Culturales	<b>UAB</b>	Universidad Autónoma de Barcelona
<b>DEWAV</b>	Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer	<b>UE</b>	Unión Europea
<b>DRAE</b>	Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española	<b>UFAM</b>	Unidad de Familia y Mujer
<b>FRA</b>	Fundamental Rights Agency	<b>WAVE</b>	Women Against Violence Europe
<b>IRMAS</b>	Illinois Rape Myth Acceptance Scale	<b>PSOE</b>	Partido Socialista Obrero Español
<b>LO</b>	Ley Orgánica	<b>CEDH</b>	Convenio Europeo de los Derechos Humanos
<b>MGF</b>	Mutilación Genital Femenina	<b>IU</b>	Izquierda Unida
<b>OACDH</b>	Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos	<b>UDHR</b>	Universal Declaration of Human Righths
<b>OEA</b>	Organización de los Estados Americanoa	<b>ICCPR</b>	International Covenant on Civil and Political Rights

## PRIMERA PARTE

---

## INTRODUCCIÓN

---

## 1 | Objetivo y justificación de la investigación

---

“Suspendida entre lo grosero de la vida y lo mezquino de la muerte, ella no podía interesarse a abandonar la vida o vivirla, y menos aún por el terror de dos chicos que se marchaban sigilosamente. Su pasado había sido como su presente —intolerable—, y dado que sabía que la muerte no significaba olvido, empleaba la poca energía que le quedaba para estudiar los colores”.

Toni Morrison. *Beloved*

Me licencié en Historia en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2000, en pleno cambio de siglo. Acceder a un puesto de trabajo relacionado con la formación adquirida, ya era entonces algo verdaderamente complicado. Antes de entrar en el mercado laboral, decidí seguir formándome a través de mis estudios de doctorado, y tuve la gran suerte de ser seleccionada para varias becas que me permitieron estudiar en referentes académicos y vitales fundamentales para mí: la *Royal Holloway University of London* (Egham, Londres) y la *University of Sussex* (Brighton). Inglaterra, su literatura y su gente me abrieron las puertas a la libertad y al mercado laboral digno. Con 25 años aprendí que esa posibilidad podía y debía ser exigible. Desde entonces—a través de la teoría, pero también de la práctica— comencé a especializarme en lo que siempre ha formado parte de mi vida: el marco teórico feminista y la violencia hacia las mujeres.

Mi primer trabajo en Madrid fue a los 27 años. Me contrató una entidad para evaluar las subvenciones del Ayuntamiento dirigidas a asociaciones de mujeres, organizaciones no gubernamental o fundaciones. Empecé a tener contacto directo con las mujeres y con la estructura que yo había aprendido que debía protegerlas frente a la violencia machista. Desde entonces hasta hoy, mi experiencia laboral —en paralelo con mi activismo incesante— ha tejido un tupido camino cuya culminación teórica es el objetivo de esta tesis doctoral.

Mi contacto con la violencia hacia las mujeres comienza entre los años noventa y principios del s.XXI, en el momento histórico que Ana de Miguel (2007) señala como “la consolidación del nuevo marco interpretativo entorno a la violencia de género”. Y que culmina —en el caso español— con la histórica aprobación de la *Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, no libre de cuestionamiento trece años después, tal y como esta investigación va a tratar de exponer

Después de más 15 años trabajando para diferentes organizaciones no gubernamentales, para instituciones públicas u organismos internacionales —en distintos contextos, países, y con experiencias diversas—, esta investigación concluye, de forma teórica, la realidad de todos estos años de contacto directo con las mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género, con las organizaciones citadas, y con el movimiento feminista.

A través de un minucioso análisis del marco teórico feminista y de derechos humanos, el objetivo de esta tesis doctoral consiste en descubrir y desvelar la tierra baldía a la que se enfrentan las víctimas y supervivientes de violencia sexual de manera global, en comparación a otras formas de violencia de género y, de forma concreta, en relación a las respuestas que se ofrecen en el Estado español —en la segunda parte—, tras años de abandono dentro de la teoría y el movimiento político feminista de este país que, desgraciadamente, pierde de vista las demandas encabezadas en los años 60 por el feminismo radical. Pero, sobre todo, por la absoluta desatención de un Estado deliberadamente mudo, que durante casi 40 años incumple sus responsabilidades como sujeto internacional de derecho, frente a una de las violencias más sistémicas y extremas de todas: la violencia sexual en cualquiera de sus manifestaciones.

De forma paralela, frente a ello, a pesar de la sombría realidad española —y europea—, durante los últimos veinte años las académicas y feministas latinoamericanas (Segato, 2003, 2006, 2011, 2012, 2014; Lagarde, 2000, 2003, 2011; Facio, 1992, 1995, 1999, 2008) —en diálogo constante con la teoría jurídica feminista y el derecho internacional de los derechos humanos— producen sin tregua, dentro del contexto latinoamericano, grandes obras y estudios que suplen el vacío teórico y político con el que conviven las víctimas y supervivientes de violencia sexual en el caso español. Nuevamente, “los laboratorios” y “nudos de redes feministas” (de Miguel, 2007:13) —creadores de los marcos teóricos, encabezados por los movimientos sociales— lideran un camino que se ofrece como faro que debe alumbrar el contexto español, tal y como se desvelará en los posteriores capítulos.

El enfoque por el que transcurre esta investigación —dirigido, en cualquier caso, en la necesidad de “conceptualizar para politizar” (Amorós, 2005) la histórica negación de la violencia sexual ejercida sobre los cuerpos de las mujeres— afronta varios debates dentro del marco teórico feminista, en el afán inexcusable de situar todos y cada uno de los matices que significan la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones. La delimitación nominal es una tarea ineludible dentro del feminismo que —desde los años 60 hasta el presente— constriñe magistralmente las definiciones imbricadas en la histórica desigualdad y discriminación de las mujeres desde tiempos antiguos, fomentada y sostenida por una contextualización sobre el origen y causas de la violencia sexual

Como podrá observarse en los siguientes capítulos, el marco teórico feminista establece acuerdos mínimos en la significación de la violencia sexual. Sin duda, la violencia sexual se circunscribe como una estrategia de explotación y control de las mujeres por el patriarcado, entendido éste como sistema de opresión y reproductor de la discriminación hacia las mujeres (Millet, 1975). Al mismo tiempo, las teóricas feministas entablan un debate interno acerca del cariz de la propia violencia sexual.

La violación se plantea, inicialmente —por teóricas como Katte Millet en su *Política Sexual* (1975)— como una cuestión política de orden sexual. La sexualidad es política. Por lo tanto, la violación adquiere un cariz político, inscrito como parte del uso de la fuerza y el control de la sexualidad hacia las mujeres, característica esencial de las sociedades patriarcales. Por otro lado, hay teóricas, como Susan Bronmiller (1975), Susan Griffin (1986) o Rita Laura Segato (2003), que desexualizan por completo la violación, así como otras formas de violencia sexual que, en cualquier caso, se manifiestan como actos de poder no ligados al sexo.

Sin embargo, este último planteamiento genera algunas dudas sobre las que, hasta hoy, se pronuncian diferentes teóricas: ¿Por qué es utilizada la sexualidad como estrategia de control o masacre en los conflictos armados (Sánchez, 2014)?; ¿Por qué un padre o hermano abusan sexualmente de su hija/hermana, y no buscan dañarla de otra forma?. Es decir, ¿Por qué no se ejerce el control del cuerpo de las mujeres sin hacer uso de la sexualidad?.

En esa línea, teóricas como Liz Kelly (1988) o Katherine Mackinnon (1989) amplían el debate —presente a día de hoy— al reflexionar, como factor fundamental a valorar, la relación entre la histórica consideración patriarcal de la sexualidad heterosexual —legitimadora del uso de la fuerza y la coerción— y la violencia sexual. Como afirmaría Mackinnon, “la violación no es menos sexual por ser violenta” (1995:310). Lo que no quita que el sexo no sea una categoría sexual impregnada de política, como en su día afirmó Katte Millet (1975).

Considero fundamental este último análisis, en el sentido en que entiendo que, del mismo modo que la violencia sexual es una evidente forma de poder —dirigida al control del cuerpo y de la libertad de las mujeres, de las niñas y de los niños—, también es una estrategia del mismo poder, que se revela a través de la sexualidad patriarcal. Por ello, nominar la sexualidad patriarcal como estrategia de poder patriarcal es fundamental para combatir la violencia sexual en todas sus manifestaciones, pues permite, también, enfrentar el tabú histórico que circunscribe la sexualidad a un acto biológico innato, instintivo y, por tanto, fuera de control, e insaciable para los hombres, además de justificador de sus actos.

Al mismo tiempo, se consigue escarbar en la invisible educación sexual, que se enfrenta a otra forma de socialización sexual dominada por deseos patriarcales que pasan, de ser fantasías, a convertirse en dolorosas y extremas violencias. Todo ello, debido a la erotización y sexualización de la violencia de los últimos años y, de forma paralela — como forma de control del cuerpo femenino— a la necesidad de negar el deseo o libertad sexual femenina.

Las diferentes manifestaciones de violencia sexual son, por tanto, política sexual. Hasta el punto de que, de forma normalizada, su ejercicio sistémico es sufrido, aceptado y tolerado por las mujeres, por los hombres y por los Estados que —al menos en contextos occidentales—, desde que se toma conciencia de los significados de ese peligro, previenen a cualquier niña nada más nacer. Sin embargo, no se les advierte de una de sus formas más extremas: la que pueden llegar a ejercer padres, hermanos o parejas. Parece como si el sistema entero fuera a desmoronarse el día en que saliera a la luz la atrocidad que entraña reconocer que un padre es capaz de violar a su hija. Hacerlo, sin duda, sería hurgar en el corazón del orden patriarcal: la familia.

Considerar las distintas manifestaciones de violencia sexual como “política sexual” no resta ni un ápice de importancia a los necesarios análisis sobre las formas —abordadas de forma repetida a lo largo de esta tesis— en que ésta se ejerce de manera extrema en los cuerpos de las mujeres, tanto en contextos de guerra y paz, como en consolidadas democracias. La violación y otros modos de violencias sexuales son evidentes actos de poder, perpetrados a lo largo de la Historia de la humanidad de una u otra forma más o menos atroz —adaptándose a los tiempos— y que, sin duda, podríamos considerar que se caracterizan, como afirma Rita Laura Segato, “por la ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados” (2014: 147).

La “pedagogía de la crueldad” —a la que se refiere Segato (2014) como característica de la violencia sexual desplegada actualmente sobre los cuerpos de las mujeres— no ha dejado de ejercerse en diferentes periodos históricos y adaptada, por supuesto, a cada escenario histórico y social: en la Edad Media, como se verá en el primer capítulo de esta investigación, algunas niñas tuvieron que casarse forzosamente en la Barcelona de finales del siglo XIV, teniendo que “dormir en el mismo lecho que su marido” (Vinyoles, 2011: 365), y sin posibilidad de negarse a ello. En la Francia del siglo XVIII, el historiador Vigarello rescata como normalizada la violencia sexual de los señores sobre sus criadas. Esta información es recogida de los archivos históricos, a través de los altos porcentajes de nacimientos ilegítimos entre las criadas francesas que, además, en el 94% de los casos,

se refieren como derivados de la violencia del señor (1998). En la España de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975) las violaciones masivas y otras formas de agresiones sexuales son ejemplos evidentes de las “características del mal radical” (Sánchez, 2014: 257), en el sentido al que se refiere Hanna Arendt como “mal extremo, masivo, sistémico, basado en una ideología, y por consiguiente, en el que podemos ver una intencionalidad de los perpetradores...” (Sánchez, 2014: 357).

Actualmente —siguiendo el relato de Segato (2014)— en contextos como los latinoamericanos, la violencia sexual se ejerce a través de acciones paraestatales que se significan en agresiones sexuales truculentas, o a través de actos de extrema crueldad sobre el cuerpo de las mujeres. Esa violencia sexual extrema no pasa desapercibida tampoco en Europa: las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual son esclavas sexuales de redes criminales. Sus cuerpos son comprados por tipos aparentemente corrientes a los que se les concede el derecho de poder hacer lo que deseen con ellas, por medio de transacciones económicas.

En todos los casos, lo que se observa a lo largo de los siglos —esbozado en esta investigación— es un despliegue de impunidad, tanto de los responsables agresores sexuales, como de quienes deben encargarse de que no se produzca. De quien tiene la obligación, en el siglo XXI, de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación: el Estado. Elemento central éste de la presente investigación, y que tanta impotencia genera en el movimiento feminista, que exige a los gobiernos y los Estados desplegar todos los medios para que las víctimas y supervivientes de violencia de género tengan, sin fisuras, sus derechos protegidos y garantizados.

De forma paralela, el continuo de impunidad recurrente en la Historia se sostendrá gracias a toda una estructura patriarcal que se distingue, sin duda, a través de la evolución histórica de sus pilares —el sistema judicial, educativo, religioso, cultural...—, todos ellos encargados de apuntalar aún más esa deliberada invisibilización, que no se verá interpelada hasta el nacimiento del movimiento y teoría feminista y del marco jurídico internacional de derechos humanos. Marco éste en el que la teoría feminista jurídica (Mackinnon, 1989; West, 2000; Facio y Fries, 1999; Charlesworth, Chinkin y Wright, 1991; Barlett y Kennedy, 1991; Charlesworth, 1999) juega un papel tan importante que, a partir de los años 90, será capaz de situar en la agenda política internacional la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres como innegociables, a pesar de las grandes dificultades para conseguirlo, presentes hasta hoy.

Los organismos internacionales de derechos humanos —Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Cortes Penales Internacionales, las Conferencias Internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing, o más



recientemente, el Consejo de Europa— y, de forma específica, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos —en diálogo constante con el movimiento político feminista y la teoría feminista, clave en la construcción y significación de la violencia sexual— jugarán un papel fundamental en la conceptualización de la violencia sexual a partir de los años 90, en esa conversación firme con el movimiento político feminista y la teoría feminista, esencial en la construcción y significación de la violencia sexual.

A pesar de ello, no ha estado tampoco exento de críticas de la propia teoría feminista, que sigue evidenciando la invisible consideración de los derechos humanos de las mujeres en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. La crítica al universalismo masculino estará presente hasta hoy, significada —en la práctica— en el incesante trabajo que desde dentro de las propias organizaciones internacionales y las diferentes ONG realizan para que las resoluciones, dictámenes, comunicaciones, o la propia jurisprudencia, no sea ciega al género y a la violencia específica que se ejerce contra las mujeres y niñas. En este sentido, hay que señalar que Naciones Unidas, hasta 1993 —a través de la “Declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer”— no conceptualizará la violencia contra las mujeres:

“A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”.

“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”. Artículo 1. 1993

De forma paralela a lo que se desarrolla en América Latina, y dentro de las propias organizaciones internacionales, la aproximación y detallado análisis que del caso español se realiza a través de esta investigación pretende ejemplificar el paradójico desamparo con el que conviven las víctimas de violencia sexual desde hace casi 30 años. Contradicción que deriva del hecho de que, a diferencia de otros países del entorno Europeo (WAVE, 2009, 2010, 2011, 2012; FRA, 2014), en materia de prevención y lucha contra la violencia de género en el entorno íntimo, el Estado español lidera medidas jurídicas y sociales inusuales y novedosas en el contexto europeo, amparadas por un marco normativo que las impulsa: *Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género* o *Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres*.

Significativamente, la lucha del movimiento feminista y las producciones académicas que durante todos estos años se han realizado, consolidan un marco teórico exquisito en violencia de género en el entorno de la pareja o expareja, pero olvidan a las otras víctimas de violencia machista: las supervivientes y víctimas de violencia sexual. Tal y como se constata en esta investigación, se cimenta un sujeto normativo que será el único que durante todos estos años “recibirá atención, visibilidad y recursos públicos” (López, 2015: 166).

El tratamiento que a lo largo de estos años se desarrolla en el entorno de la violencia de género es aprovechado por el Estado español, conocedor de sus responsabilidades en materia de violencia sexual, derivadas —como sucede con el resto de violencias hacia las mujeres— del consensuado estándar de la “debida diligencia”, cuya respuesta, en materia de violencia sexual, será nula. El Estado se simboliza como máximo exponente de la *Política Sexual* (Millett, 1975) que, de forma negligente, abandona a las víctimas, cebándose con los perfiles más vulnerables. Algunas de las mujeres, como las migrantes en situación de irregularidad, no sólo se verán abandonadas, sino que estarán doblemente castigadas: por la violencia sufrida y por su irregularidad. Como podrá observarse en la segunda parte de esta tesis, las mujeres víctimas y supervivientes de violencia sexual representan el paradigma de aquellas vidas que no se clasifican como “vidas que valgan la pena” (Butler, 2006). Frente a las que sí, que serán dignas de protección.

La responsabilidad jurídica del Estado español —vulnerador de todos los estándares internacionales de derechos humanos en el contexto de la violencia sexual— exhibe un escenario de connivencia y violencia estatal —representante extremo de la “vulnerabilidad maximizada” (Butler, 2006) a la que se ven sometidas las mujeres víctimas de violencia sexual— que se evidencia a través de la ausencia, en los últimos 40 años, de políticas públicas, planes de acción estatales o marcos legislativos específicos.

Por todo ello, esta investigación —fusión de reflexión teórica feminista y práctica política feminista— pretende que el rumbo de los acontecimientos se reemplace, para que ni el pasado ni el presente sean intolerables, tal y como escribía la premio nobel de literatura Toni Morrison, citada al inicio de esta introducción, al referirse a las vidas de las esclavas negras.

## 2 | Notas metodológicas

---

Para la elaboración de esta investigación es importante, previamente, destacar algunas variables que han condicionado la metodología de trabajo y el procedimiento utilizado para dar forma a esta tesis doctoral.

Esta investigación no podría haberse realizado nunca sin los resultados obtenidos a través de mi experiencia laboral de los últimos 15 años. Como profesional de la investigación y la incidencia política en materia de violencia hacia las mujeres y derechos humanos, las metodologías de trabajo que utilizamos en las Organizaciones no Gubernamentales, en empresas de gestión social, o en Organizaciones Internacionales han guiado mi ejercicio profesional con importantes y decisivas consecuencias en los derechos humanos de las mujeres con las que he trabajado y, por supuesto, en los míos propios.

Más allá de los métodos académicos incorporados en cada disciplina, creo necesario reseñar los contextos laborables que —sin duda— tanto han marcado el hilo conductor y las conclusiones de esta tesis doctoral. Los procesos de trabajo que cada organización incorpora en su día a día me han aportado un conocimiento teórico y práctico, sin el cual, ni podría haber construido esta investigación, ni habría sido tampoco capaz de analizar la magnitud de la temática que aquí expongo<sup>1</sup>. La metodología de cada organización, el contacto directo con las víctimas y supervivientes de violencia machista, la comunicación con otras y otros profesionales y activistas —de países y ciudades como Colombia, Austria, Inglaterra, Georgia, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Nueva York o Berlín, o de comunidades autónomas como Catalunya, Canarias, Euskadi, Galicia...— hace que me sienta privilegiada por la oportunidad que me ha brindado formar parte directa de tan variadas realidades, trabajando con personas tan profesionales, que sin ellas habría sido imposible concluir esta investigación.

Por ello, convencida de que, efectivamente, existe una metodología de investigación feminista (Harding, 1988), me he valido de las herramientas que aporta el marco teórico de análisis feminista, pero en comunicación directa con el marco teórico de derechos humanos. Ambos marcos suman métodos y técnicas de investigación, cuyos resultados —en el contexto de la violencia hacia las mujeres y, específicamente, de la violencia sexual— amplían la visión global e interdisciplinar, sin la cual es imposible combatir la violencia machista.

El enfoque teórico feminista, así como el análisis de género como herramienta de identificación de las relaciones jerárquicas de poder (Scott, 1986)—transversalizado por el enfoque interseccional— son los únicos métodos de análisis que aportan las claves teóricas para estudiar el origen y desarrollo de las violencias que, desde tiempos inmemorables y de manera sistémica, vienen ejerciéndose contra todas las mujeres en sus diferentes formas, y en todos los espacios y contextos políticos.

---

<sup>1</sup> Metodologías de trabajo como el “Enfoque de Marco Lógico” (EML) para la identificación y planificación de proyectos, la “Metodología de documentación de casos” para la investigación de violaciones de derechos humanos, el enfoque de “Investigación para la Acción” en el marco de los derechos humanos, entre otras, han formado parte de algunas de las metodologías que trabajo con las que he tenido que trabajar a lo largo de mi carrera profesional.

Si entendemos, además, que la violencia machista es una vulneración de derechos humanos —expresión máxima de la discriminación hacia las mujeres, que se manifiesta en un bucle, a veces incesante, de vulneración del resto de los derechos humanos—, el marco metodológico, no sólo se refiere a los derechos de las mujeres como derechos humanos (Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena de 1993, Conferencia de Beijing de 1995, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, Convención Belém do Pará de 1995, Convenio de Estambul de 2011) , sino que, al mismo tiempo:

- Permite identificar a los responsables directos e indirectos de estas vulneraciones: agentes estatales, agentes no estatales, Estados, u organizaciones internacionales.
- Aporta herramientas metodológicas para evaluar si los estándares internacionales de derechos humanos en materia de violencia de género están siendo cumplidos.
- Ofrece alternativas y herramientas para paliar, enfrentar y combatir la violencia hacia las mujeres, como son los instrumentos internacionales de derechos humanos: Convenciones, Tratados Internacionales, Resoluciones, Dictámenes, Recomendaciones, Jurisprudencia...

En esta línea, para poder extraer las conclusiones que se ofrecen a lo largo de esta tesis doctoral, he revisado y analizado detalladamente las fuentes primarias y secundarias que ambos enfoques metodológicos —el feminista y el de derechos humanos— emplean habitualmente en sus investigaciones y producciones científicas.

Las fuentes secundarias utilizadas para este trabajo de investigación comprenden una extensa literatura científica feminista y de derechos humanos — entre las que se incluyen obras referentes del pensamiento político feminista en castellano y en inglés—, fundamental para entender el origen de la violencia sexual y de los mecanismos a través de los cuales opera el sistema patriarcal. He revisado también obras y artículos de historiadoras e historiadores que, aunque no todos ellos contengan un enfoque feminista, me han aportado información fundamental, extraída del análisis de las fuentes historiográficas que los propios autores y autoras han utilizado para dar forma a sus publicaciones.

En la elaboración de este trabajo, asimismo, ha sido imprescindible el análisis y utilización de una amplia variedad de otras fuentes secundarias:

- Informes, resoluciones, dictámenes o comunicaciones de referentes organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales: Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Corporación Sisma Mujer, Humanas, Plataforma Cedaw Sombra-España, Women's Link Worldwide...

- Trabajos elaborados por organizaciones internacionales: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Relatora especial sobre la violencia contra la mujer con inclusión de sus causas y consecuencias, la Organización Mundial de la Salud, la *European Agency for Fundamental Rights*...

- Estudios e informes emitidos por las propias instituciones estatales españolas —Ministerio del Interior, Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad...—, cuyo examen y análisis de sus propias fuentes primarias incorporan información clave en esta tesis doctoral. Información ésta utilizada también para configurar las conclusiones que se extraen a lo largo de toda la investigación.

Entre las fuentes primarias revisadas, es necesario destacar que, no siendo ésta una tesis doctoral jurídica, sin embargo, dicha disciplina ha sido central en la construcción y reflexión de la temática analizada. De forma general, se ha revisado la literatura jurídica en torno a los derechos humanos, pero en concreto, y de manera específica, a lo largo de toda la investigación ha sido esencialmente utilizada aquella que enfoca la mirada sobre los derechos humanos de las mujeres, según lo dispuesto en los tratados y estándares internacionales vigentes en materia de violencia hacia las mujeres y no discriminación —la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; el Convenio del Consejo Europeo sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 2011; la Convención de Belem do Pará de 1990, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 o el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998—, complementados con normas nacionales —*Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, *Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres*, *Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 1/2015*, *Ley Orgánica 2/2009, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*, *Real Decreto Ley 16/2012 de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud*, *Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima de delito* o el Código Penal, entre otros— e internacionales, con la doctrina jurídica nacional e internacional —Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y para la antigua Yugoslavia, Tribunal Supremo Español, entre otros—, con políticas públicas, así como prácticas profesionales existentes en

el Estado español. Cabe destacar que, en este sentido, el estándar de la “debida diligencia” ha sido una de las normas centrales a toda la investigación, utilizada como herramienta metodológica para evaluar la respuesta del Estado español en el marco de la violencia sexual, en la segunda parte de la investigación.

Acerca de la elección del tema y del escenario por el que transcurre el presente trabajo, me gustaría realizar algunas aclaraciones que deberían tenerse en cuenta para poder establecer los límites necesarios que una investigación de estas características necesita:

A lo largo de las siguientes líneas, he preferido utilizar el sustantivo “víctima”, siempre que se hace mención de las mujeres, jóvenes o adolescentes que han sufrido o sufren violencia de género en sus múltiples manifestaciones. La elección de la palabra “víctima” no corresponde tanto a su significación desde el ámbito jurídico, sino que es un ejercicio político intencionado, dirigido a visibilizar a la “víctima” como un sujeto real que no ha conseguido convertirse aún en “superviviente”.

En los últimos años, se está desarrollando una tendencia dentro de varias disciplinas —principalmente dentro de la psicología, el trabajo social y la educación social—, encaminada a nombrar a las víctimas como supervivientes y no como lo que son: víctimas. Aunque comparto el uso de la palabra “superviviente” o “sobreviviente” en determinados contextos, su uso frecuente —como si fuera un estado estanco e irrevocable— está generando una despolitización del término “víctima”, e invalidando la situación real por la que pasan muchas mujeres en el mundo, que siempre serán víctimas por el contexto social, económico y personal, que les imposibilita salir de esa situación. Otras mujeres terminarán siendo asesinadas, no pudiendo ser nunca “supervivientes”.

A pesar de ello, no deseo invalidar el término “superviviente” que, como se verá, será nombrado también en este trabajo en repetidas ocasiones. En cualquier caso, las mujeres son libres de decidir si son “víctimas” o “supervivientes”.

En relación al escenario seleccionado para fundamentar y exponer los resultados de esta investigación —el Estado español—, he de señalar que las causas de esta elección se deben, en primer lugar, a mi experiencia laboral cotidiana, que me ha permitido observar y experimentar los obstáculos que sufren, tanto las víctimas como los equipos profesionales de atención especializada a mujeres. Pero también, a partir de la reflexión realizada con compañeras expertas ante la desolación que encuentran las víctimas y supervivientes de violencia sexual frente a otras víctimas y supervivientes de otras formas de violencia de género en este país.

El hilo conductor y objetivo de esta investigación se ha ido forjando tras analizar, de forma paralela, tanto el vacío académico en el marco de la violencia sexual, como el transcurrir por el cual el movimiento feminista español se ha significado en los últimos 20 años, en su incesante lucha contra la violencia machista, principalmente en el entorno íntimo. De modo que, el presente trabajo de investigación está encaminado, en cualquier caso, a aportar nuevas ideas desde el marco, tanto de los derechos humanos, como el teórico feminista, en un momento histórico en el que la lucha contra la violencia sexual tendrá que ser innegociablemente incorporada en las futuras políticas públicas españolas, tal y como establece el *Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica* (2011), firmado y ratificado por el Estado español en 2014.

De manera sorprendente, la experiencia laboral a la que me remito me ha brindado la oportunidad de conocer —de primera mano— la respuesta que ofrecen otros estados frente a la violencia sexual, tanto en América Latina, como en Europa. A pesar de que esta tesis utiliza en su segunda parte el caso español como paradigma de la desatención de la violencia sexual de los últimos años en contextos occidentales, es necesario señalar que el marco teórico que ofrece toda la literatura científica en materia de violencia sexual en conflictos armados, posconflictos o países en procesos transicionales, ha sido citado y esgrimido a lo largo de toda la tesis doctoral, al considerar que aporta un amplísimo conocimiento sobre las numerosas variables que originan y justifican la violencia sexual, que la significan, la conceptualizan, y la perpetúan. Al mismo tiempo —como se verá en el capítulo 3—, ofrece respuestas para combatirla: la *Resolución 1325* del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o las resoluciones judiciales de los Tribunales Penales Internacionales de Ruanda o la antigua Yugoslavia —entre muchas otras— que, aun siendo adaptables en escenarios de conflicto o posconflicto armado, han abierto, sin lugar a dudas, variables de interpretación sobre la violencia sexual y sobre las obligaciones y respuestas —aplicables a consolidadas democracias— que deben ofrecer los estados. Porque, siguiendo la tesis de Susan Bronwmler, aunque la violencia sexual acompaña de forma innata a todas las guerras, el patriarcado que va a la guerra es el mismo que el que está en casa en tiempos de paz<sup>2</sup> (1975).

---

<sup>2</sup> Llama la atención el hecho de que a diferencia de las víctimas y supervivientes de otras formas de violencia sexual, las víctimas de trata con fines de explotación sexual, a pesar de la oscuridad y violación de derechos humanos constante con la que conviven, disponen de recursos de atención especializados residenciales en todas las comunidades autónomas, mientras existe también numerosas ONG nacionales e internacionales que trabajan por combatirla y de forma paralela acompañan a las mujeres. Tanto la Trata con Fines de Explotación Sexual como la Prostitución han sido dos ámbitos de intervención y estudio que no han sido invisibilizados en los últimos años, a pesar de que la respuesta del Estado español también sigue siendo deficiente en este ámbito. Para más información, véanse los informes de ONG como “Proyecto Esperanza” o “Sicar cat”.



Me gustaría señalar el hecho de que, aunque esta tesis doctoral se refiera a la violencia sexual en todas sus múltiples manifestaciones, el análisis y reflexión por el que discurre este trabajo se ciñe, principalmente, a las siguientes formas de violencia sexual: la violación, el acoso sexual, las agresiones sexuales y el abuso sexual. Entendiendo que son también manifestaciones de violencias sexuales tanto la mutilación genital femenina, la trata de mujeres con fines de explotación sexual o los matrimonios forzados, entre otras —cuya finalidad es el control del cuerpo y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres—, he acotado las violencias sexuales a las anteriormente citadas, por ser las más cercanas a mi experiencia laboral, por el contexto social y cultural en el que se enmarca esta investigación y, sorprendentemente, porque son las violencias sexuales con mayor prevalencia en el caso español, además de las más invisibilizadas de todas .

Para finalizar, quiero destacar también que —a pesar del debate que existe en torno a la expresión adecuada—, de forma intencionada, al referirme a la “violencia hacia las mujeres”, indistintamente, combino dos expresiones de manera paralela como sinónimo de ésta: “violencia de género” y/o “violencia machista”. Entendidos ambos términos dentro del marco teórico feminista y de los derechos humanos, como cualquier forma de violencia —física, psicológica, económica y sexual; de expresión de discriminación; o de violación de derechos humanos— ejercida históricamente contra las mujeres, las niñas y los cuerpos feminizados, en cualquier contexto social, político y económico, y a través de toda una estructura e ideología justificadora: el sistema patriarcal.

### 3 | Estructura de la tesis

---

Esta investigación ha sido estructurada en dos partes:

**Primera parte:** en la que se incluye la “Introducción”, el “Capítulo 1”, el “Capítulo 2” y el “Capítulo 3”, se realiza un recorrido histórico, teórico y conceptual sobre la violencia sexual desde la Edad Media hasta el presente. Con la finalidad de analizar desde un enfoque global e interdisciplinar la violencia sexual desde el marco teórico feminista y de los derechos humanos, se ha establecido el siguiente orden:

#### **1) Capítulo 1:** “Mito e Historia de la Violencia Sexual. Imaginarios y Representaciones”.

A lo largo de este título se realiza una aproximación a la evolución y significación de la violencia sexual desde la Edad Media hasta el presente, a través de los vínculos



ideológicos que el patriarcado, de forma significativa, ha mantenido hasta hoy. Las redes ideológicas patriarcales se han caracterizado por el control del cuerpo de las mujeres, la negación científica y jurídica de éste, y una inquebrantable duda sobre las víctimas de violencia sexual, amparada por la construcción de un entramado mitológico dirigido a exhortar al/a los agresor/es sexual/es y culpabilizar a las mujeres frente a las múltiples agresiones sexuales con las que han convivido desde Edad Antigua.

## **2) Capítulo 2: “Definiendo la Violencia Sexual”.**

En este apartado se realiza un amplio análisis entorno a las variables de significación de la violencia sexual desde un punto de vista semántico, jurídico y político. Para ello, se aborda la impronta que el marco teórico feminista desde los años 60 y 70 hasta hoy ha supuesto para la construcción teórica de la violencia sexual y su traslación como problema político. Significativamente, se analiza el parón conceptual y político que, en el marco de la lucha contra la violencia sexual, se produce a partir de los años 90 en Europa y España, suplido a través de otros “nudos de redes feministas” (de Miguel, 2005) que seguirán ampliando los márgenes conceptuales y políticos en América Latina, o también, gracias a los organismos internacionales de derechos humanos, a la normativa internacional y regional de derechos humanos y a la teoría jurista feminista.

## **3) Capítulo 3: “Respuestas globales a la violencia sexual desde los derechos humanos”.**

Este capítulo ofrece una fotografía sobre las oportunidades que, a la lucha contra la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones, brinda el Sistema Universal de Derechos Humanos —la Relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de la CEDAW o la Organización Mundial de la Salud—, en comunicación con el marco teórico feminista, desde un punto de vista conceptual y político. Se realiza, igualmente, una necesaria aproximación a las cifras sobre violencia sexual a nivel internacional, regional y nacional, que aproximan la magnitud de esta forma de violencia hacia las mujeres, y su incuestionable consideración como crimen de género.

**Segunda parte:** el “Capítulo 4” examina la realidad que enfrentan las víctimas de violencia sexual, a partir del estudio del caso del Estado español.

#### **4) Capítulo 4: “Entre la pasividad y el silencio del Estado español frente a la violencia sexual”.**

A lo largo de este capítulo se realiza un detallado análisis de los cuatro grados de obligación que establece la norma frente a la violencia sexual —la prevención, la investigación y sanción, la protección y atención a las víctimas y la reparación integral de las víctimas—, utilizando para ello el estándar de la “debida diligencia”, como herramienta de evaluación sobre la respuesta del Estado español frente a la violencia sexual. Los resultados extraídos revelan un escenario desolador para las víctimas y supervivientes de violencia sexual en este país.

A través de los distintos capítulos que configuran esta investigación, se pretende contribuir a aportar luz en la lucha contra una realidad incompatible con un Estado de derecho y un país rico, como el español ■



---

## **CAPÍTULO 1**

# MITO E HISTORIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES



“(Cargo) relativo al hecho de que despojó a Iyem de sus vestidos,  
la tumbó sobre el remate de un muro, y la violó”

*Papiro Salt*<sup>3</sup> 124, rº 1, 19

## 1 | Narrativas de la violencia sexual en la Historia

---

A finales del siglo XVIII (1799), en el Concejo de Udías<sup>4</sup>, Antonia Isabel Sánchez fue asesinada por su marido, Domingo García, tras sufrir durante años numerosos episodios de violencia en sus distintas manifestaciones. El caso, documentado de forma detallada por el historiador Tomás A. Mantecón (1998, 2013), nos traslada a un contexto en el que el relato minucioso de los hechos permite visibilizar la existencia de la violencia hacia las mujeres como parte de las relaciones sociales de la época. El detalle de los hechos nos aproxima también a la percepción social, ética y cultural que sobre esta forma de violencia se tenía en una comunidad rural de estas características.

“...Nunca se podrán graduar bastantes al indemnizar el imperio que despóticamente tiránico ejercía (Don Domingo García) sobre aquella víctima de sus enconos [...] todo marido debe considerarse compañero de su mujer, no señor, su autoridad tiene por límites la prudencia y moderación. Las obligaciones de su conducta deben conformarse con el precepto del apóstol a los de Efeso (amar a la esposa como Cristo a su Iglesia, a la que se entregó a sí mismo) ...”

Fiscal de la causa. 28 de junio de 1802.  
Archivo Histórico Provincial de Cantabria,  
Alfoz de Lloredo, leg.92, nº 1, ff.735 vº-736<sup>5</sup>

La descripción del proceso judicial a través de la lectura de extractos de los autos criminales, así como la de los testimonios documentados de las y los testigos, aportan información crucial en relación a los parámetros ideológicos sobre la violencia ejercida hacia las mujeres, de su tolerancia, así como del rol que el sistema judicial jugaba en la regulación de los comportamientos violentos.

---

<sup>3</sup> El papiro Salt 124, también conocido con el nombre de BM 10055, documenta las historias de Paneb, un criminal egipcio que nació en la dinastía de Ramsés II (Dinastía XIX, 1295-1186 a.C., aproximadamente) en la ciudad de Deir el-Medina. Este papiro es considerado una fuente fundamental para comprender los mecanismos de la administración de justicia del Nuevo Imperio Egipcio.

<sup>4</sup> Udías es actualmente un municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

<sup>5</sup> Cit. por Mantecón, 1998:69.

El estudio ocupa 143 páginas, entre la cuales, la violencia sexual sólo se identifica en una ocasión y no es precisamente en relación al asesino, sino al describir al cuñado de la víctima (reconocido cacique de la zona) como parte de la descripción que de alguno de los hechos se efectúa durante el juicio, lo cual ya nos aproxima someramente a interpretar el significado que la violencia sexual tenía para la comunidad en ese contexto. Es probable que, como tal, tampoco aparezca en los autos criminales, pero aun así, Mantecón, al referirse al comportamiento sexual del cacique, interpreta la conducta del agresor —en palabras del siglo XX— en los siguientes términos: “tenía una fuerte tendencia hacia la lascivia”, “afloraron lascivas y violentas inclinaciones sexuales” y “convulsivas e insaciabiles pasiones” (Mantecón, 1998: 105, 106). Al recurrir al extracto del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, que el autor incorpora y que él mismo disecciona, las palabras adquieren connotaciones similares.

En ambos casos, la fuente historiográfica y el historiador describen tanto al agresor como a sus acciones desde una perspectiva biologicista, que entiende la opción de la agresión sexual como si fuera inherente a la conducta humana:

“...don Antonio Bajuelo, vecino de Udías, es cierto ha sido dominado de el torpe vicio de la lujuria, porque en una ocasión engañó a la testigo y la cogió en el Monte Corona, en donde, a fuerza, destraviándola de el camino y tapándola la boca, pudo conseguir su torpe deseo [...]. [...] en el citado lance de su torpeza, sacó una navaja y dixo a la testigo que si no se rendía a sus deseos la había de quitar la vida, pues aunque supiera condenarse, había de saciar sus deseos ...”.

Archivo Histórico Provincial de Cantabria.  
Alfoz de Lloredo, leg.92, nº 1, ff.705-709<sup>6</sup>

El caso de Antonia Isabel Sánchez analizado por Tomás A. Mantecón, desde la perspectiva de “los ámbitos y esferas de sociabilidad en que impacta la violencia marital en las sociedades tradicionales” (2013: 84), abre las líneas del primer capítulo de esta investigación, como ejemplo de lo que a lo largo del presente trabajo se expondrá en relación a la persistente invisibilización de la violencia sexual en sus múltiples manifestaciones, oculta siglos y siglos por la práctica, la ideología y el discurso patriarcal<sup>7</sup> (Amorós, 1985). Un discurso que, como se comprobará, se encarga de significar la realidad a su antojo, a través de las definiciones o del relato de los hechos abstractos, a la dominación física y moral (Segato, 2013) que entraña el abuso, la agresión, el acoso o la tortura sexual.

---

<sup>6</sup> Cit. por Mantecón, 1998:105.

<sup>7</sup> Entendiendo la “ideología patriarcal” como la fuente de legitimación de la estructura y el sistema patriarcal.

La consideración de la violencia sexual, tal y como la entendemos hoy día, no ha estado linealmente acompañada del soporte sobre el cual otras violencias han sido meticulosamente examinadas por las disciplinas que han indagado acerca de las causas y orígenes de las violencias de género. Sin embargo, la historiografía y la arqueología desde la visión de género, así como el análisis crítico del discurso desde la perspectiva feminista, han sido cruciales en la conceptualización de la violencia sexual en todas sus formas, para establecer, sin tapujos, que la violencia sexual no es, ni mucho menos, un fenómeno “ahistórico” (Osborne, 2009; Vigarello, 1998; Bourke, 2009; Maillard, 2012; Dunn, 2013; Córdoba de la Llave, 2008; Gil Ambrona, 2008).

Las fuentes historiográficas demuestran que la violencia sexual ha existido de forma constante como parte de ese “continuum de violencia” (Kelly, 1988) ejercido sobre los cuerpos femeninos o feminizados (Segato, 2014), aunque su significación, definición y visibilización haya variado a lo largo de la Historia occidental. Estas mismas fuentes expresan la existencia de la violencia sexual documentada en las obras clásicas de la literatura, del arte, de la filosofía, del derecho, del pensamiento occidental, o en los numerosos vestigios arqueológicos que, desde época antigua, permiten una aproximación cercana a sus manifestaciones. Tal y como, por ejemplo, evidencian los papiros egipcios<sup>8</sup>, las cerámicas áticas<sup>9</sup>, las cartas de los perdones de estupro castellanos de los siglos XVI y XVII<sup>10</sup> o los testimonios de mujeres como María San Juan en el s. XV, que, ante el acoso sexual reiterado de sus agresores, decide acudir a las autoridades judiciales para intentar poner fin a la situación con la que convivían (Bazán, 2011):

“...Con propósito malo de deshorrar a ella e al dicho su marido e de cometer con ella adulterio e de la conocer carnalmente a placer suyo si pudiese e sy non por fuerza e contra su voluntad”.

Auto de acusación de María San Juan  
contra su agresor Lopez de Albiz (s. SXV)<sup>11</sup>

El primer capítulo de esta investigación esboza un breve recorrido sobre la conceptualización de la violencia sexual a lo largo de los siglos XV-XX de la Historia en los que aparece mejor documentada, gracias a las fuentes primarias y secundarias de las que

---

<sup>8</sup> Véase el papiro Salt 124, rº 2, 2-4 o el papiro de Turín 1887, vº 3, 4-5.

<sup>9</sup> Véase cíclica ática de figuras rojas. Pieza de decoración datada en el año 480 a.C., en el que se observa como un hombre sujeta por los brazos a una mujer mientras practica sexo anal, acompañando la pintura la frase “¡Estate quieta!” Véase en (Huntingford, 2007: 123).

<sup>10</sup> Las cartas de perdón fueron unos documentos comunes en Castilla que aparece en los Protocolos Notariales, utilizados para zanjar cualquier tipo de querrela entre particulares (insultos, muertes...). Entre las cartas de perdón se han documentado también los perdones de estupro, que se refieren entre otros delitos por ejemplo a “la desfloración ilícita de una doncella” (Maillard Álvarez, 2012:149-164).

<sup>11</sup> Cit. por Bazan, 2011: 283.



disponemos. Se persigue así indagar en el origen de la ideología que alimenta la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones, mientras, de forma paralela, inaugura un relato de los hechos esencial para comprender las causas —violencia estructural, simbólica y cultural<sup>12</sup>— que han sostenido y justificado la violencia sexual, con el fin de identificar a los responsables directos e indirectos y ofrecer, en el presente, alternativas reales ante tanto dolor.

Las fuentes nos revelan que, desde época romana hasta nuestros días, pocas mujeres de todas las clases sociales han escapado de una forma u otra a la violencia sexual en sus diferentes grados. Los parámetros ideológicos de cada época, que a veces sirven como justificadores de discursos sobre prácticas extremas de violencia, no excusan el dolor que éstas han supuesto en sus víctimas. Las supervivientes y víctimas de violencia sexual han experimentado emociones, sufrimiento y daño sobre sus cuerpos, independientemente del contexto histórico en el que se hayan producido los hechos. El propio mandato patriarcal del contrato del matrimonio y de la noche de bodas, que implicaban para una niña, adolescente o una mujer casarse con un hombre impuesto sin consentimiento y sin atracción alguna, permite hacernos una idea sobre el miedo y el sufrimiento que una relación sexual obligada de estas características supuso para sus víctimas.

En este sentido, el debate en torno a la historia de las emociones se enfoca por algunos historiadores e historiadoras desde un análisis que apuesta por entenderlas desde la perspectiva de la construcción cultural y como parte de un sistema normativo que regulaba tanto las expresiones como las conductas emocionales (Bourke, 2009; Stearns, 2003; Mosoco, 2015). A pesar del debate abierto, que no es motivo de esta investigación, sí que es fundamental —más allá de interpretar y entender las emociones en cada periodo histórico: el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el rechazo...— no perder de vista que el dolor y el daño, expresado de una forma u otra en las diferentes culturas y periodos históricos, siempre ha existido, lo que no implica que se configure una construcción social del daño. En el marco de la violencia sexual, y de otras formas de violencia extremas, puede ser peligroso entrar en la relatividad de las emociones, pues al hacerlo, la agresión se funde en el tiempo como si se tratara de cualquier otro tipo de brutalidad. El agresor sexual se desenfoca y las secuelas de las víctimas se relativizan, tal y como viene pasando de forma concreta cuando hablamos de violencia sexual.

Las mismas fuentes historiográficas sí que sirven para entender las emociones de las víctimas, aunque la interpretación se haga desde los parámetros culturales del siglo XXI. Ejemplos como los documentados por Vinyoles Vidal (2011), en relación a los matrimonios

---

<sup>12</sup> Sobre la teoría del “Triángulo de la violencia” (violencia estructural, cultural y directa) de Johan Galtung (1989) se hablará en el último apartado de este capítulo.

forzados en Barcelona a finales del siglo XIV, nos aproximan a esa realidad. El proceso de Françoia Riera (11 años) nos permite intuir, a través de los testimonios de diferentes testigos, el miedo que para esta niña supuso el “dormir en el mismo lecho que su marido” (Vinyoles, 2011: 365) tras la obligación que le impusieron sus padres de contraer matrimonio con un hombre que no deseaba. Uno de los testigos relata el rechazo de la pequeña al acuerdo:

“... había oído decir a la propia madre de la joven que la noche de bodas su hija no permitió que su marido la conociese carnalmente”, por lo que la madre terminó pegándola por “no querer yacer con Bernat en la misma cama.” (Vinyoles, 2011: 365)

Al indagar de manera más profunda en las obras y artículos de historiadoras e historiadores, tanto españoles como del resto de Europa, en relación a la significación de la violencia sexual hasta el siglo XX, se pueden extraer conclusiones recurrentes en los contextos analizados. Por un lado, se comprueba cómo la nominación de la violencia sexual apenas evoluciona a lo largo de los siglos, identificando la violencia sexual, hasta el siglo XIX, siempre en relación al uso de la fuerza y al no consentimiento (éste último sólo reconocido si cuando se está efectuando la agresión la víctima refiere verbalmente el no consentimiento). Y por otro lado, se observa una evolución de las prácticas lingüísticas y de la semántica que significan el hecho: hasta el siglo XX el acto, el delito, la agresión sexual se denotan en torno a los otros, y nunca en la individualidad de la víctima. El daño que se efectúa sobre el cuerpo de las mujeres se deslegitima en pro de otras categorías morales, consideradas las verdaderas víctimas de este tipo de delitos —el bien último a proteger—, como serán la honestidad o la honra.

Tal y como apunta la historiadora Joanna Bourke (2009), si entendemos que el cuerpo se construye como sexuado a través de una gran cantidad de discursos legales, penales, médicos, psicológicos y filosóficos —encargados de que “ciertas partes o prácticas corporales se hagan sexuales por medio de la clasificación y la regulación” (Bourke, 2009: 17)—, resulta determinante la interrupción del discurso feminista en el siglo XVIII y en la construcción de la significación de la violencia sexual en siglos posteriores. Crucial a la hora de otorgar legitimidad al cuerpo de las mujeres y a su libertad sexual, así como fundamental a la hora de deslegitimar otras categorías morales responsables de la invisibilización del daño y de los responsables del acto.

En la línea argumental de Bourke, el historiador Tomas Laqueur nos aproxima a esta misma deslegitimación del cuerpo de las mujeres y, aunque la finalidad de su obra no es demostrar tal tesis, su análisis, al respaldar la relación entre el sexo, el contexto y el medio discursivo, ejemplifica el significado que adquiere el cuerpo

femenino desde Grecia hasta el siglo XIX: “el cuerpo privado, cerrado y estable, que parece subyacer en la base de las nociones modernas de la diferencia sexual, es también producto de momentos culturales e históricos concretos” (Laqueur, 1994: 42).

Según Laqueur, el sexo, como el género<sup>13</sup>, son ambas construcciones culturales que se enlazan e influyen entre sí, tal y como documenta a través de la representación que la ciencia y la filosofía realizaron del sexo en dos etapas bien diferenciadas. Una primera etapa, desde Grecia hasta el siglo XVII, caracterizada por la representación del cuerpo de “sexo único” masculino, negador del cuerpo y del sexo de las mujeres: “dos géneros corresponden a un solo sexo” (Laqueur, 1994: 55). Y una segunda etapa, a finales del siglo XVIII, caracterizada por un modelo de “diformismo radical”, en la cual se reconocen nuevas formas naturalistas de representación, que diferencian los cuerpos y órganos de las mujeres y de los hombres —lo que para Laqueur será la invención de los sexos como fundamento para el género—, creando nomenclaturas específicas (ovario, vagina, útero,...) que cimentaron la justificación de la jerarquización de los cuerpos: “una anatomía y una fisiología de lo inconmesurable substituyó a una metafísica de la jerarquía en la representación de la mujer en relación al hombre” (Laqueur, 1994: 24).

Tal y como recoge, el cuerpo de la mujer —según el discurso misógino y/o patriarcal de científicos, teólogos y filósofo— se expresa en función del hombre. El ovario, por ejemplo, es nombrado por Galeno con el mismo sustantivo que cuando se habla de los testículos masculinos, orcheis, y no será hasta el siglo XIX cuando adquiriera un nombre propio. Hasta 1700 tampoco se registra un término técnico en griego o en latín, ni en lenguas vernáculas europeas, que designe a la “vagina” como “el tubo o vaina en el cual su opuesto, el pene, se introduce y a través del cual nace el niño o la niña” (Laqueur, 1994: 22). La rocambolesca ciencia patriarcal vuelve a manipular el discurso en su beneficio en el siglo XIX, cuando consideró que la diferencia transcendía los cuerpos visibles frente a los elementos microscópicos que los constituían. Según Patrick Geddes —profesor de Biología de la época—, la fisiología celular explicaba el hecho de que las mujeres fueran “más pasivas, conservadoras, perezosas y estables”<sup>14</sup>.

El breve recorrido al que apunta Laqueur sobre la construcción del sexo, ejemplifica perfectamente la recurrente negación del cuerpo y del sexo de las mujeres desde época antigua

---

<sup>13</sup> Laqueur no abandona la concepción de la categoría género tal y como la concibe Joan Scott (1986), como categoría analítica y “elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos [...], el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder” (2008:66).

<sup>14</sup> Cit. por Laqueur, 1994: 24

en la Historia. De esta forma, al consolidarse la significación del cuerpo de las mujeres sólo en función del masculino, lo que se consiguió fue negar también sus especificidades. El resultado consiguió así ocultar también el daño y las secuelas (físicas, psicológicas, emocionales o sexuales) que se ejercía sobre ellos.

Las disciplinas científicas contribuyeron con su discurso a hacer invisible la violencia sexual, como manifestación concreta de una forma de violencia específica que se ejerce sobre el cuerpo y el sexo de las mujeres. Los pensadores de cada época son así responsables de dar forma a la violencia simbólica<sup>15</sup> (Bordieu, 2000) sustentadora del ejercicio de la violencia directa. El “Triángulo perverso de la Violencia” (Galtung, 1989) —analizado más adelante—, que apunta a la existencia de una violencia directa (violencia sexual) derivada de las violencias simbólicas, culturales y estructurales, queda perfectamente confirmado en este caso.

En cuanto a la significación, designación y nominación de la violencia sexual en la Historia occidental, la obra de George Vigarello (1998) aporta una amplia información sobre la concepción y significación social de ésta entre los siglos XVI-XX en Francia. Comparando su análisis y documentación con las publicaciones españolas que examinan su origen, tipificación y pluralidad de sus manifestaciones, se pueden extraer conclusiones cercanas entre regiones.

En general, las fuentes de naturaleza jurídica, tanto en la Edad Media como Moderna, refieren una percepción hacia la víctima y hacia el agresor un tanto contradictoria, acorde con la doble moral del pensamiento patriarcal: es un acto terrible, incluso castigado con la muerte, pero al mismo tiempo invisible y dudoso, y en el que la víctima, de entrada, siempre es sospechosa (Vigarello, 1998). La violencia sexual se asocia casi en exclusividad a la “violación” (término no utilizado hasta el siglo XIX), en el sentido del uso de la fuerza y penetración. Aunque la terminología no la designe como tal, la nomenclatura utilizada —tanto en época medieval como moderna— asocia la violencia sexual en los siguientes términos: “conocer carnalmente”, “dormir con una mujer”, “echarse carnalmente”, “rapto”, “forzamientos” o “estupro”, entre otros, acompañados, todos ellos y siempre, por las expresiones “por fuera” o “contra su voluntad” (Córdoba, 2008).

En todos los casos, se observa cómo la concepción de la víctima mujer/niña (como ser autónomo) no existe, lo que conlleva la propia invisibilización del acto, “la ausencia del sujeto, oculta la violencia” (Vigarello, 1998: 62). La mujer/niña agredida sexualmente

---

<sup>15</sup> Según Bordieu (2000), la violencia simbólica es una violencia suave, insensible, invisible a sus propias víctimas, que se ejerce por las vías puramente simbólicas, a través de la cual la dominación masculina encuentra todas las condiciones para ejercer su dominación.

sólo será alguien en función del otro. Por eso, no es la única víctima, se podría decir que apenas se la reconoce como tal. Sí lo será el padre, el marido, el hermano, la familia o, incluso, la comunidad, que ven cómo el “acto sexual por la fuerza” implica la pérdida de la honra y del honor familiar. Lo que les convierte en los auténticos dañados, en las verdaderas víctimas.

En cualquier caso, cabe destacar que el acto sólo podrá ser denunciado por determinadas mujeres, las que el canon patriarcal considera que pueden ser merecedoras de resarcimiento. Las otras mujeres, las de “dudosa fama pública” o de “escasa consideración social” —como las prostitutas, mancebas o mujeres pobres que no entran en los cánones de aceptabilidad moral— no merecerán ser consideradas como víctimas por el patriarcado judicial del Antiguo Régimen. Proclama presente, hasta no hace demasiado, tal y como muestra las Sentencias del Tribunal Supremo (29 de marzo de 1994 o 23 de enero de 1997) que establecen que “la mayor o menor honestidad, promiscuidad, o costumbre sexual de la víctima, resulta irrelevante” (De Vicente, 2001:87).

El patriarcado dibuja desde época antigua la delgada línea entre las mujeres que sí que pueden ser aceptadas como víctimas y las que no. Las que sí que entran en el canon de víctima, identificadas recurrentemente como “niñas o muchachas impúbers”, “mujeres de buena reputación”, “de buena fama pública”..., y las que no se corresponden con tales descripciones. Esta realidad, presente en la vida cotidiana, queda documenta en el caso español a través de las fuentes judiciales que apuntan, por ejemplo, en la Alta Edad Media, a una estratificación de las penas sobre los infractores en función del estado civil de la mujer agredida. El estatus de la mujer casada se impondrá frente al de las solteras, hasta el punto de que, en las mujeres solteras consideradas deshonestas “se justifica la violación, la injuria o la herida impune” (Morán, 2011: 159) o, incluso, la pena impuesta será menor si la agredida no es una mujer casada. Tal y como apunta el *Fuero de Plasencia* (s. XII)<sup>16</sup>: “Si puta sabida metiere so sí, denostare o firiere, non peche calonna” o incluso el de Soria:

“...Si algún omne levare mujer soltera por fuerça et yoguiere con ella, peche CC maravedies et sea enemigo de sus parientes d’ella. Et si nono yoguiere con ella, peche C maravedies, Et si uno fuere el forçador et otros fueren con él en levarla o en forçarla, maguer non yoguieren con ella, cada uno de’ello peche L maravedies ...”

Fuero de Soria (s. XIII). Capítulo de las fuerças de las mugieres<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Cit. por Morán Martín, 2011: 159.

<sup>17</sup> *Ibid*, p.168.

En cualquier caso, la mujer/niña víctima no existe, lo que consta es su honra, su reputación, su fama pública, citada de forma reiterada en los procesos judiciales desde la Edad Media. Hasta el siglo XX será la honra, no la libertad sexual, lo único que dignifique tímidamente a la víctima.

“...e hera muger buena e onesa e casta e leal al dicho su marido e en tal reputación era tenida comúnmente e siempre se oviera de él defendido de dicho reo agresor e insultador en sus medianeros e alcagüetas, maltratándolas e deshonorándolas commo buena e leal mujer”.

Testimonio de María San Juan (Guernica, 1489-1490), ante la querella presentada por ella por el acoso reiterado e intento de violación de Lopez Albiz<sup>18</sup>.

La paradoja patriarcal, caracterizada por una la doble moral de los actos contra los cuerpos y las vidas de las mujeres, sí que condenará la violación y, al igual que sucede con otras violencias, será tipificada como delito aparentemente serio (Dunn, 2013; Vigarello, 1998; Bourke, 2009; Córdoba, 2008; Rodriguez, 1997), con condenas que, incluso, subrayan la pena de muerte, tanto en época medieval como moderna. Las fuentes de naturaleza jurídica muestran, sin embargo, cómo en la realidad, al menos en el caso español, los castigos tan extremos no se impusieron a los violadores, existiendo una “distancia que separa la legislación teórica de la resolución judicial, tanto en la época medieval como en la moderna” (Córdoba, 2008).

Las sanciones, en época medieval, corresponden a destierros, penas corporales, penas económicas o compensaciones económicas entre las partes. La equidistancia entre la crueldad del delito y el castigo se traduce en una connivencia pactada, en la que es prácticamente imposible saber, por la ausencia de testimonios, qué piensa la víctima ante tales resoluciones.

En este sentido, los autores y autoras, refieren también una línea de tolerancia social y jurídica sobre la “brutalidad sexual” (Vigarello, 1998: 20), lo que equivale a condenas escasas, pero al mismo tiempo ejemplares y violentas, especialmente aquellas que atentan contra el orden patriarcal definido, como son el incesto o la violación que se comete contra una virgen. Aún así, destacan la escasez de denuncias y de condenas en todo el Antiguo Régimen (Córdoba, 2008; Vigarello, 1998), en una realidad en la que, incluso, frente las decisiones judiciales, pueden mediar acuerdos privados que resuelvan el conflicto. Las cartas de perdón y, de forma específica, los “perdones de estupro” (siglos XVI y XVII) aproximan muy adecuadamente la indulgencia que sobre la violencia sexual se tenía.

---

<sup>18</sup> Cit. por Bazán, 2011: 288.

Maillar Álvarez (2012) analiza los perdones de estupro castellanos en los siglos XVI y XVII, en los que se caracterizan como motivos de perdón, ante probadas agresiones sexuales, la “piedad cristiana” o la compensación económica. Como la mayoría de las víctimas son mujeres solas, doncellas o jóvenes<sup>19</sup> de clases sociales bajas —criadas, doncellas o mozas—, que en algunos casos prestan sus servicios domésticos en residencias de otros familiares o en familias (Córdoba de la Llave, 2008) de la oligarquía, las dificultades económicas a las que deben hacer frente en su día a día fomentan que se acepte el dinero como medida de reparación, “antes que seguir un pleito cuyo fin, en los mismos documentos, se reconoce con frecuencia como incierto” (Maillar, 2012). Así se posiciona el padre de una víctima de estupro. Beatriz Toledo<sup>20</sup>: “...el fin de los pleitos es dudoso [...] y por escusar la (s) cotas e gastos que amba partes auemos de facer en prose(Cu)cción del dicho pleito...”

A lo largo de estos siglos, otro elemento común a destacar en relación a la violencia sexual es su invisibilidad, casi perpetua hasta nuestros días, en el matrimonio, tanto en los textos de ficción, como en las fuentes primarias y secundarias de las que se dispone.

El control ideológico que sobre el matrimonio realiza la Iglesia católica en los países católicos, desde la Alta Edad Media hasta la instauración sacramental de éste por el Concilio de Trento en 1563, apuntala uno de los mitos más inamovibles en la mitología que sobre la violencia sexual se construye desde época antigua: la voluntad del acto sexual en el matrimonio. El contrato sagrado es más que nunca la obligación marital de la mujer, en una sociedad en la que, por encima de todo, prima el deber superior de la familia. En esos términos, la falta de consentimiento —requisito imprescindible para condenar a un agresor sexual en la Edad Media y Moderna— queda diluida con el matrimonio.

El discurso patriarcal y misógino —presente a lo largo de la Historia de la humanidad y considerado por autoras como Esperanza Bosch (2008) como uno de los principales exponentes de la justificación de la violencia contra las mujeres— naturaliza la incondicional e incuestionable disposición de la mujer casada, dispuesta a someterse a su marido y a asumir la reproducción como parte de un deber, dibujando así la difusa línea entre lo que es la reproducción, el acto sexual o la agresión sexual.

La Contrarreforma de finales del siglo XVI en los países católicos reafirma así imaginarios sobre el rol que les corresponde a las mujeres como procreadoras y cuidadoras de su descendencia. En este sentido, la Iglesia católica y los eclesiásticos afianzan su papel

---

<sup>19</sup> Hasta el Código Penal de 1948 el “estupro” sólo se entiende como la agresión sexual que implica una pérdida de la virginidad fuera de la esfera conyugal.

<sup>20</sup> Cit. por Maillard Álvarez, 2012: 163.



como jueces sobre el cuerpo de las mujeres, bajo la mirada siempre incierta del casamiento como un acto sucio y moralmente sospechoso (Accati, 2005).

Paulatinamente, a lo largo de los siguientes siglos se va construyendo una cárcel de aislamiento, ideológicamente justificada por la sagrada institución del matrimonio, que implicará que las mujeres casadas sean, hasta hoy, invisibles a la violencia sexual. Los moralistas de la época serán cómplices de tal aislamiento, al reforzar obsesivamente el discurso, en torno al control de las mujeres casadas, en todas las etapas vitales:

“...Larga cosa sería y muy difícil si me pusiese a particularizar todas as cosas que la mujeres es obligada a guardar con su marido. El Señor lo dio a entender una palabra, y es lo que antes dijimos, que se acuerde que ella y él son un hombre solo [...] Porque aunque de dos se han tomado uno, la mujer es hija de su marido, que salió de su costado”.

Vives, Juan Luis. *Instrucción de la Mujer Cristiana*. 1523.  
Capítulo IV. “De cómo se a de haber con su marido”

La justificación de la exclusión de las mujeres casadas de cualquier espacio de sociabilidad en la Edad Moderna se disfraza perversamente de virtud, bajo una mirada que convierte la soledad, la obediencia, el silencio, el retraimiento o el enclaustramiento en algo positivo, mientras señala como ideal “modelo de mujer” a la doncella honesta y recatada que enamora con su recogimiento (Martín: 2005). Frente a las “buenas mujeres” enclaustradas en sus hogares, los testimonios extraídos de fuentes como los archivos de la Santa Inquisición, se refieren a las malas mujeres, como “mujeres públicas”<sup>21</sup> (las prostitutas). Incluso Miguel de Cervantes, en *El celoso extremeño* (1640) dice de ellas: “... dejándoles vistas al cielo, sin que pudieran ver otra cosa”<sup>22</sup>

Lo público, en constante pugna con lo privado, se erigirá como sinónimo de peligro para las mujeres, lugar propicio para las agresiones sexuales. El mito sobre las agresiones sexuales en los espacios públicos —excusa recurrente para el control de los cuerpos de las mujeres al ámbito privado— se apuntala de forma convincente.

A lo largo de la Edad Moderna, en los países católicos, la doctrina del sacramento del matrimonio establece sin dilaciones su perpetuabilidad e indisolubilidad, determinando el control y potestad de la Iglesia católica en los asuntos sucedidos dentro de éste. Frente a la consideración del matrimonio como contrato civil, se fortifica el contrato sacramental y la insistencia de la indisolubilidad. El castigo más temido, la excomunión, queda reflejada en

---

<sup>21</sup> Cit. por Martín, 2005: 367.

<sup>22</sup> *Ibid*, p. 256.



los los siguientes términos en el Concilio de Trento. 1563. (*Cánones del Sacramento del Matrimonio*): “CAN. XII. Si alguno dijere, que las causas matrimoniales no pertenecen a los jueces eclesiásticos; sea excomulgado”.

Los teóricos religiosos no conciben la violencia sexual en el matrimonio, pero a pesar de esto, algunos, empeñados en controlar todo lo que pueda suceder dentro de él, prefieren escribir sobre ello, ante cualquier duda que puedan suscitar algunos comportamientos. Gil Ambrona (2008) documenta las palabras del jesuita Tomás Sánchez cuando se refieren a las conductas de maridos dispuestos al “débito conyugal por la fuerza”, en donde consideraba además, entre otros, que las mujeres muchas veces eran culpables de ello, “pues en sus manos estaba evitar las tensiones concediendo voluntariamente lo que se le pedía” (Gil Ambrona, 2008: 204).

El religioso Martín de Azpicuelta va incluso más allá, al declarar, a través de su obra, “*Manual de confesores y penitentes*” o *Enchirión* o<sup>23</sup> (1556), la negación del “débito conyugal” como un pecado mortal:

“...Si mas el marido a la mujer, o la mujer al marido, sin causa legítima, negó el débito pedido en tiempo y lugar oportunos, (pecado) mortal, según todos, si con ruegos no lo desvía de su propósito, lo cual no se debe hacer con mucha importunación”<sup>24</sup>.

El paso del tiempo inaugura el siglo XVIII, conocido como el siglo de la Ilustración o el Siglo de las Luces, abriendo una etapa decisiva en el pensamiento occidental, caracterizada por la búsqueda de la razón humana, del conocimiento y la defensa de los derechos naturales del “hombre”, frente a la ignorancia y las creencias religiosas. Las mujeres, sin embargo, escapan a tales preceptos para el pensamiento masculino occidental. Filósofos como Kant, Rousseau o Hume, al contrario de lo que pudiera parecer, consolidan la ideología patriarcal misógina, que fundamenta la violencia de género y sus múltiples manifestaciones.

Las “barbaridades teóricas” de este siglo —a las que la filósofa Luisa Posada se refiere como “desenmascar las ideas preconizadas de Kant”— simbolizan lo que esta autora considera en identificar como la “misoginia de la diferencia” (Posada, 1992), consecuencia, entre otras, de que el filósofo considere que ambos sexos se hallan tajantemente separados a partir de una justificación esencialista de tal división. Si el sentido de la Ilustración para

---

<sup>23</sup> La palabra latina *Enchiridion*, significa ‘manual’, y forma parte del título de muchas obras notables en la historia de la literatura académica o teológica.

<sup>24</sup> Cit. por Gil Ambrona, 2008: 204.

Kant es la “emancipación de la razón humana de todo sometimiento, yugo o sumisión a cualquier otro tutor heterónimo a la razón misma” (Posada, 1992: 21), esta emancipación sólo es comprensible en lo que para el filósofo es el ámbito de los seres racionales del mismo sexo. Es decir, los hombres. Frente a ello, las mujeres nunca podrán aspirar a los mismos propósitos, al seguir necesitando a los tutores —los maridos— para que las guíen en su minoría de edad. El propio Kant, en su obra *Antropología en sentido pragmático* (1798), afirma que “la mujer es un animal doméstico. El hombre camina por delante con las armas de la mano, y la mujer le sigue con la carga de los enseres de la casa”<sup>25</sup>.

Los grandes ilustrados se convierten así en colaboradores racionales del patriarcado judicial en los asuntos relacionados con la violencia sexual. Voltaire o Rousseau son sólo algunos de los máximos exponentes de la racionalización de los numerosos mitos, afianzados por un discurso de la feminidad, que servirá de base para vetar el acceso al espacio público de las mujeres y a sus derechos hasta el SXX. Tal y como subraya George Virandello, el apoyo a los juristas por parte de la opinión ilustrada consigue que “el argumento del consentimiento adquiera carta de naturaleza, la anatomía intuitiva se transforma en criterio de verdad” (1998: 70):

“A las muchachas y a las mujeres que se quejen de haber sido violadas, simplemente habría que contarles cómo una reina evitó en otros tiempos la acusación de una denunciante. Tomó la vaina de una espada y, sin dejar de moverla, demostró a la mujer que no era posible meter la espada en la vaina. Con la violación pasa como con la impotencia: hay algunos casos que nunca debería llegar a los tribunales”<sup>26</sup>. Voltaire (s. XVIII)

En mitad de este escenario, a finales del siglo XVIII —en el caso francés— sí que se reconoce una incipiente transformación en torno a la actitud que, tanto la sociedad, como los poderes públicos expresan en relación a la violación (Virandello, 1998). La incipiente compasión que detalla se podría traducir en las emociones que genera el delito entre fiscales y jueces. El “sufrimiento” individual que causa la agresión, casi inexistente en las fuentes jurídicas hasta el momento, se vislumbra a través de algunas apreciaciones pronunciadas por los mismos jueces y fiscales:

“...semejantes crímenes no pueden ni deben quedar impunes, es deber del fiscal de rey no descuidar de ningún medio para buscar la venganza y hacer que Capel sea castigado con el rigor y la severidad prescritos por las ordenanzas”.

Fiscal del Rey de Francia, Testard Delys (s. XVIII) <sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Cit. por Posada, 1992: 18.

<sup>26</sup> Cit. por Virandello, 1998: 70.

<sup>27</sup> *Ibid*, p. 127.

Virandello observa cómo el agresor sexual seguirá estando excusado, pero la víctima recibirá una mayor compasión respecto a siglos anteriores. Muy tímidamente —principalmente en la teoría, y mucho menos en la práctica—, la víctima agredida sexualmente se va convirtiendo en sujeto de una “violación” y no de un rapto, en lo que implica un viraje importante en cuanto a su concepción como “individua”. La violación se “inclina cada vez más hacia el daño físico y menos a hacia la apropiación indebida” (1998: 136), en un contexto en el que el principio de “libre disposición de uno mismo” queda inaugurado en la Declaración de los Derechos del Hombre (*Constitución*. 20 de julio de 1789): “Cada hombre es el único dueño de su persona y esta propiedad es inalienable”<sup>28</sup>

A finales de siglo, y a pesar de los cambios radicales políticos y culturales que se suceden, ni en Francia ni en España la realidad cotidiana de las víctimas de violencia sexual parece que cambiara mucho con el comienzo de una nueva era Contemporánea. Las revoluciones liberales burguesas se resisten sin reparo a aceptar dejar de controlar los cuerpos de las mujeres, mientras la violencia sexual en sus múltiples manifestaciones evoluciona tímidamente en su conceptualización, pero las víctimas seguirán siendo invisibles y los agresores prácticamente intocables.

## 2 | Cambio de paradigma y consolidación del mito en la Edad Contemporánea

“Ya sabe usted que mi boda [...] parecía reunir todas las condiciones y garantías de felicidad[...] Lo único que sentía era no poder estudiar su carácter, algunas personas lo juzgaban violento; pero yo le vía siempre cortés, deferente, blando como un guante [...] cuando eché a andar hacia el salón, en cuya puerta me esperaba mi novio [...] el encaje de mi velo se enganchó en un hierro de la puerta[...] la cara de Bernardo, contraída y desfigurada por el enojo más vivo; sus pupilas chispeantes, su boca entreabierta ya para proferir la reconvención y la injuria...[...] no podía, la de que no quería entregarme a tal hombre, ni entonces, ni jamás...Y, sin embargo, fui acercándome al altar, me arrodillé, escuché las exhortaciones del obispo...Pero cuando me preguntaron, la verdad me saltó a los labios, impetuosa, terrible...Aquél “no” brotaba sin proponérmelo; me lo decía a mí propia...¡para que lo oyesen todos!”

Pardo Bazán, Emilia. “El encaje roto” (1878)

---

<sup>28</sup> *Ibid*, p.136.

Las diferentes tendencias historiográficas —en relación con los estudios de género y feministas— han producido una amplísima e inconmensurable investigación sobre la Historia de las Mujeres en todas las etapas históricas, que nos acercan, de forma clara, a las causas y orígenes del sistema patriarcal, a su evolución y al lugar que las mujeres han ocupado en él.

Susan Bronwmler, a través de su obra de referencia “Contra nuestra voluntad. Un estudio sobre la forma más brutal de agresión a la mujer: la violación” (1975) —sobre la cual se disertará de forma detallada en el siguiente capítulo—, inicia un camino decisivo en la documentación histórica de la violencia sexual hacia las mujeres mediante diferentes hitos históricos de los siglos XIX y XX (Revolución Americana, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam...).

Tras la aproximación histórica contemporánea que realiza Bronwmler, la producción historiográfica en torno a la violencia sexual se mantuvo en los decenios siguientes a través de obras como las de Judith R. Wlaskowitz (1980), James. A Brundage (1985), Stephen P. Pistono (1989), Carter, J.M (1985), George Virandello (1998), Thomas Laqueur (1990), Joanna Bourke (2007), entre otras. En el caso español, sin embargo, la producción historiográfica específica sobre violencia sexual sigue siendo hasta el día de hoy muy escasa, en la tendencia a la que apunta esta investigación, en torno a la invisibilidad dominante en todos los ámbitos académicos. A pesar de ello, caben destacar los estudios realizados por Rodríguez Ortiz (1997), Vázquez García y Moreno Mengíbar (1997), Mantecón Novellán (2003), Dolors Molas Font (2006), o las referencias aisladas en obras conjuntas, como la producción historiográfica de Ortiz Gómez (2002) o Isabel Morant (2005), entre otras.

En este sentido, la mayoría de los estudios realizados sobre historia de la violencia sexual adolecen de un análisis crítico feminista —a excepción de los dirigidos por eminentes historiadoras feministas—, centrándose, principalmente, en la contextualización histórica del delito o en la percepción social que sobre éste se tenía. A pesar de ello, hay que destacar que aportan información detallada y de gran calidad sobre el tema. Se une también el hecho de que la producción historiográfica hallada se focaliza, básicamente, en la Edades Antigua, Medieval y Moderna, con una ausencia casi completa de su análisis en el siglo XIX y comienzos del XX.

Para poder indagar sobre la significación y el lugar que ocupa la violencia sexual en los contextos políticos, sociales y culturales durante estos siglos, tanto el análisis comparado de producciones historiográficas en distintos entornos académicos, como la revisión de otras fuentes historiográficas, además de las más cercanas publicaciones específicas sobre ello,

permiten realizar una somera aproximación a la significación de la violencia sexual en el siglo XIX y el siglo XX español, así como en el pensamiento occidental.

El siglo XIX inaugura, de esta forma, un espacio de reflexión sobre el lugar que deben ocupar las mujeres en la sociedad, tal y como queda reflejado en los discursos de género de este siglo, en los cuales se refleja el cambio de ideal que se produce en torno a la definición de las mujeres, y a lo que de ellas se espera y desea con el cambio de siglo.

Desde todas las disciplinas —especialmente a partir de 1840—, el concepto de “mujer” estará presente, e incluso “obsesivamente discutido” (Jagoe, 1998: 23), en tratados, artículos, monografías, antologías, discursos académicos, o manuales de medicina legal. El discurso misógino de siglos anteriores transita hacia una nueva conceptualización de “la mujer”, como un ser moralmente superior por su abnegación y su capacidad de amar, perdonar o consolar, desde un esencialismo patriarcal que reseña las dotes especiales de las mujeres como perfectas madres, cuidadoras o esposas.

El determinismo biológico de este siglo encubre patriarcado en todas sus vertientes, consagrado a través de su múltiple simbología. El ideal burgués del “ángel de hogar” —tanto en España como en otros países occidentales protestantes—, en afinidad con el incipiente capitalismo, es el modelo en el que deben reflejarse todas las mujeres. Según apuntan historiadoras como Catherine Jagoe (1998: 27), “la preocupación con la moralidad, la virtud y el deber favoreció el desarrollo del capitalismo, porque reemplazaba las normas de conducta impuestas por fuerzas externas, por unas normas internalizadas, necesarias para una mano de obra dócil y automotivada”.

El nuevo orden moral burgués desplaza la realidad cotidiana de un país como el español, con una mayoría de mujeres de clases bajas trabajadoras (servicio doméstico, costureras, artesanas,...)<sup>29</sup>, frente a “la mascota del nuevo orden moral burgués” (Jagoe, 1998: 27): “la mujer” virtuosa y doméstica como alma de la clase media, su centro moral. Las mujeres trabajadoras se perciben, de esta forma, como enemigas de la nueva moralidad, problemáticas y visibles frente a la feminidad proclamada. Su visibilidad se concibe como un problema social, en el sentido de que la feminidad es incompatible con el trabajo asalariado, al considerar que “una mujer que se convierte en trabajadora, ya no es mujer” (Jules Simón, 1870)<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> “A principios del s. XIX la sociedad española está compuesta en sus tres cuartas partes por población que vivía en el campo y sustentada por una economías fundamentalmente agraria” (Gil Ambrona, 2008: 363).

<sup>30</sup> Cit. por W. Scott, 1993: 428.

Aquellas mujeres que ya de por sí han permanecido en los márgenes de la exclusión serán más estigmatizadas que nunca, al simbolizar la antítesis extrema de lo que de las mujeres se espera: las trabajadoras y las mujeres en situación de prostitución, expuestas en ambas situaciones a graves agresiones sexuales.

Las primeras que en la Edad Media y Moderna aparecen, al menos, identificadas en las fuentes jurídicas como principales víctimas (criadas, doncellas o mozas), tras prestar sus servicios domésticos en las residencias de otras familias o en familias de la oligarquía (Córdona de la Llave, 2008), son ahora estigmatizadas por ello. Las segundas, las mujeres en situación de prostitución —“mujeres de dudosa fama pública”—, sobre las que el legislador y la sociedad no ha considerado posible que pudieran ser víctimas de este tipo de violencia<sup>31</sup>, quedan desamparadas de cualquier protección penal. Hay que tener presente que el sistema judicial español no reconocerá la agresión sexual de las prostitutas hasta los años 80 del pasado siglo XX, y que el mito aún se mantiene en el siglo XXI.

Las prostitutas verán cómo el siglo XIX se ceba especialmente con ellas a través de esa doble moral burguesa que, por ejemplo, documentó, en el caso londinense, la historiadora Judith. R. Walkowitz (1992). En España, las mujeres de “dudosa fama pública” pasarán a ser consideradas como las “caídas”, “las miserables” o las “degeneradas” (Rivière, 1994).

El popular caso de Jack el Destripador simboliza el sentido que se construye en torno a la moral sexual en el siglo XIX, que cataloga a las prostitutas, a través de la complicidad de los grandes y nacientes masivos medios de comunicación (*The Times*, *Morning Post*), como “mujeres desesperadas que violaban su feminidad por el precio de una cama para la noche” (Walkowitz, 1995: 389) y en donde “el precio del pecado” se paga con la muerte. Walkowitz refleja el impacto de los medios de comunicación en la construcción moral de la sexualidad de la época. Cinco asesinatos, todos ellos de prostitutas, se convirtieron en un escándalo nacional, alimentado diariamente por los principales periódicos de la época que, de forma deliberada, se unieron para “producir una oscura fantasía periódica sobre los crímenes del destripador” (Walkowitz, 1995: 389). Algo presente incluso hoy día, a través de todo un mercado y parafernalia atrayente para el turismo londinense.

El detallado análisis que realiza en su obra Walkowitz, apunta nuevamente a un objetivo instrumental dirigido al control de los cuerpos de las mujeres a espacios privados:

---

<sup>31</sup> Córdoba de la Llave (2008), documenta como en el siglo XVI, por ejemplo, la legislación de la época (Ordenanzas de las Villas Vizcaínas. 1479) no consideraba objeto de castigo la violación de una prostituta. Tampoco fue considerado motivo suficiente para condenar a muerte al violador, como si podía suceder si la víctima era de buena condición social o demostraba su buena conducta moral.

“se daba por supuesto que, al encontrarse en público, las mujeres estaban en peligro y, al mismo tiempo, eran una fuente de peligro para los hombres que se congregaban en las calles” (1995: 55).

La moral burguesa nutre y sostiene una cultura de contradicciones perjudicial, en cualquier sentido, para todas las víctimas de violencia de género y, específicamente, de violencia sexual, generando un marco de impunidad intocable. El pensamiento patriarcal de la época considera que el espacio público, un espacio ocupado también de forma presente por mujeres —trabajadoras, vendedoras, compradoras...— las sitúa en una posición de peligro y vulnerabilidad. Hasta el punto, que su presencia en dicho espacio implica entrar en un terreno de inmoralidad “en el que podría perder la virtud, verse ensuciada, verse arrastrada en un torbellino turbulento y embriagador” (Richard Sennett, 1973)<sup>32</sup>.

De forma paralela, la moral burguesa patriarcal preconizará el modelo ideal a seguir: el matrimonio, también exento en este siglo de dudas sobre cualquier posibilidad de agresiones sexuales en su seno. Con lo cual, en el contexto decimonónico —bajo la persistente y dudosa credibilidad— la víctima, siempre y en cualquier circunstancia, será invisible como tal: si se produce la agresión fuera del entorno privado es porque ha roto con las normas acepadas, y si ésta se produce en el entorno íntimo, ni si quiera se plantea la posibilidad de que así sea, porque su mandato consiste en deberse a su marido en cuerpo y alma. El escenario expone un panorama, en el cual, pocas mujeres podrán ser significadas como víctimas de las diferentes formas de violencia sexual.

Tal y como se muestra, el matrimonio consagrado a través del “ángel del hogar” refuerza la cárcel que el ámbito privado implica para las mujeres en el contexto de las múltiples violencias que se ejercen sobre ellas. Así lo establece el Código Civil español de 1889 al recalcar en su artículo 57 que “el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido”<sup>33</sup>, influyendo de manera determinante en la consagración de la oscura significación de la violencia sexual.

El discurso dominante influirá en la visión que sobre la violencia sexual hacia las mujeres se desarrolla a lo largo del siglo XIX y principios del XX, en constante relación con la moral sexual patriarcal de la época, aún lejos de considerar cualquier agresión sexual como un atentado contra la libertad sexual de la víctima. El control del cuerpo de las mujeres desde estancias de poder como la Iglesia, el sistema judicial de la época o la

---

<sup>32</sup> Cit. por Walkowitz, 1995: 102.

<sup>33</sup> Cit. por Gómez Bravo, 2005: 295.



ciencia forense, conviven con la escasa preocupación que este tipo de delitos pudieran implicar. En el caso francés, por ejemplo, “los atentados contra los bienes parecen la transgresión más temida en las primeras décadas de siglo” (Virandello, 1998: 164), mientras en España, Lorente Carpena (2010) señala llamativas y escasas denuncias por violación en mujeres adultas.

A pesar de la transición entre el Antiguo Régimen al Estado Liberal, se mantienen unos parámetros ideológicos en los que el estatus de la mujer sigue definiéndose en función de categorías tales como “esposa”, “virginidad” u “honestidad”, y con pequeños reconocimientos a la individualidad femenina (Vigarello, 1998). En la práctica, todo ello implicará que la medida de estimación de la agresión sexual no se establezca en función del daño individual, sino en base a otras categorías morales de las que siguen siendo dependientes las mujeres.

A pesar de ello, se observa un “leve” cambio de paradigma en cuanto a la forma de designar los hechos y de tipificarlos, lo que posiblemente condicionaría, así mismo, la reparación de las víctimas, aunque no se puede precisar si estos cambios fueron verdaderamente significativos en la salud física y psicológica de las mujeres. La tentativa, en el caso francés, por ejemplo, será por primera vez objeto de normativa específica y de una definición. Ya no sólo se castiga el hecho en sí. La sombra que siempre representa el acoso previo a la agresión sexual, documentada de forma continua hasta nuestros días en casos de violencia sexual, comienza a ser motivo de justicia. En el caso español, la ampliación de los delitos conocidos como “delitos contra la honestidad” o “delitos de incontingencias” da poco margen de libertad a las víctimas —como su propia designación establece—, pero por primera vez, respecto a siglos pasados, se diferencia el “estupro” de la “violación” (ésta última, determina por el uso de la fuerza), tal y como queda documentado en la ley y en la práctica forense (Lorente Carpena, 2010).

Sin embargo, la tímida evolución vuelve a jugar a favor del patriarcado, y aunque cambia la significación sobre lo que está dañado, el daño sigue sin ser el cuerpo de las mujeres, ni su dignidad, ni su libertad. Ahora la obsesión será determinar la “honestidad” de la víctima, frente a la “honra” de siglos anteriores, evaluada en función de otro de los grandes estimadores ideológicos patriarcales: la verificación de la virginidad como sinónimo indiscutible de honestidad. Los “delitos contra la honestidad” —presentes en el ordenamiento jurídico español hasta 1989— fueron codificados en ese mismo lenguaje, dirigidos a detectar las transgresiones que se producían en el ámbito sexual.



La virginidad será evaluada por una medicina legal, cuya visión se presenta “a diferencia de la filosófica o la teológica [...], con pretensiones de cientifidad” (Lorente Carpena, 2010: 178), ejercida en exclusividad por hombres, y considerada como el saber científico-objetivo del momento. Todo ello implicará una nueva vuelta de tuerca en la significación de la violencia sexual y consolidación de los mitos que encarnarán la “cultura de la violación”<sup>34</sup> en los siglos siguientes. Las mujeres, jóvenes y niñas agredidas sexualmente, serán juzgadas por el sistema judicial, pero será ahora la ciencia la que determine si es mentira o no lo que se denuncia. La consolidación sin fracturas del ideal de familia implicará la verificación de la virginidad “como signo necesario para la creación del orden familiar legítimo” (Carpena, 2010: 178).

De esta forma, “el discurso médico se va a dirigir, no tanto a despejar dudas sobre la imputación del agresor, como a desenmascarar el posible fraude” (Lorente Carpena, 2010: 178) de la mujer. La violación será considerada un delito cuyos signos tienen que ser descifrados de forma científica, de tal manera, que la medicina se convierte en un nuevo dispositivo de control dirigido a identificar aquellos signos, como referiría Foucault (1975), que revelan la transgresión<sup>35</sup>.

Tal y como se ha comentado, en este siglo se producirán significativos cambios en relación a otros aspectos claves sobre la violencia sexual, hasta entonces inexistentes, que a largo plazo impactarán también sobre las vidas de las víctimas. Se consolidan nuevas categorías como “violador” o “consentimiento”. El violador es nombrado por primera vez como responsable de la agresión sexual a finales del siglo XIX (Bourke, 2009; Vigarello: 1995). La individualización del violador, su construcción como sujeto humano, implicará dotarle de un significado más allá del propio hecho. Comienzan a cuestionarse otras variables sobre la agresión sexual, relacionadas, todas ellas, con la voluntad y las responsabilidades individuales.

A pesar de ello, el académico determinismo biológico y patriarcal —sustentado por un sector de la Psicología Evolutiva o por la Biología—, clasista y racista, seguirá enarbolando el “instinto sexual” masculino como causa original de la agresión sexual hasta bien entrado el siglo XX.

---

<sup>34</sup> La expresión “Cultura de la Violación”, acuñada por el discurso y práctica política feminista, hace referencia a toda la estructura que justifica, alimenta, acepta y normaliza la existencia de la violencia sexual. Es una forma de violencia simbólica (Bourdieu: 2000), que tiene un efecto sedante, porque, al estar tan aceptada, pasa desapercibida por la inmensa mayoría. Sin embargo, es la que permite que la violencia directa se produzca (las violaciones, los acosos, los abusos, la tortura sexual...). La cultura de la violación la conforman un conjunto de creencias, pensamientos, actitudes y respuestas basadas en prejuicios y estereotipos de género relacionados con la violencia sexual.

<sup>35</sup> Cit. por Lorente Carpena, 2010: 178.

“La Naturaleza [...] ha implantado el ansia sexual muy profundamente en la constitución del hombre. El hecho de que sea necesaria para la conservación de la vida, y de que siempre esté eliminando a aquellos cuya ansia sexual no es lo suficientemente fuerte como para conservar la raza, ha hecho que en el hombre, y quizá en toda la vida animal, este ansia pese más que cualquier otra consideración”.

Seward Darrow, Clarence. 1920<sup>36</sup>

La idea del consentimiento, en perenne controversia hasta hoy, como parte de la mitología cimentada sobre la violencia sexual y cuya construcción social —tal y como la identificamos actualmente en las sociedades occidentales— asoma tímidamente bajo la concepción liberal<sup>37</sup> que incide sobre el hecho de que sólo es posible medir el consentimiento si existe un hombre que actúa, y una mujer que reacciona conscientemente con un “sí” o con un “no” (Bourke, 2008). El problema que genera tal construcción liberal del consentimiento, heredada hasta el día de hoy, es que desvirtúa la agresión y, con ello, el daño que ésta acarrea.

El consentimiento, que nace del pensamiento liberal, resta responsabilidad al agresor sexual y focaliza aún más la responsabilidad sobre la víctima. Ni en el siglo XIX, ni hasta la fecha, el consentimiento, en términos explícitos pronunciados o gesticulados como tal — a través de un “sí” o un “no” —, es un indicador claro sobre la existencia o no de una agresión sexual. Las víctimas, como sabemos, no siempre pueden decir “no”, pues en violencia sexual median otros aspectos como la coacción, la manipulación, el chantaje, el contexto social, político, cultural, la edad de las víctimas, la raza, la situación administrativa, etc. En este sentido, tal y como queda documentado en la literatura que sobre abuso sexual se ha escrito al respecto, los niños y niñas nunca han podido decir “no” cuando han sido abusados o agredidos sexualmente. Valga como ejemplo el testimonio de un jornalero francés (1881): “Creo tener derecho a hacer estas tonterías con mi hija”<sup>38</sup>

El consentimiento será, hasta día de hoy, una de las principales falacias sobre las cuales la ideología patriarcal se apoyará para exhortar de responsabilidad al agresor y conseguir que la duda sobre la víctima venza en su beneficio. Pamela Hagg (1999) se refiere

---

<sup>36</sup> Abogado socialista norteamericano.

<sup>37</sup> Actualmente, el debate sobre el consentimiento y la libertad individual, cuyas raíces ideológicas beben del liberalismo burgués, derivadas posteriormente en la concepción que sobre la libertad individual enarbola el neoliberalismo, actualmente mantiene una disputa abierta dentro del movimiento feminista en relación a dos asuntos sobre los cuales median aspectos económicos entorno a la venta de los cuerpos de las mujeres: la prostitución y la gestación subrogada (“vientres de alquiler”). Véase, de Miguel, A (2016). *Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección*. Madrid: Cátedra.Feminismos

<sup>38</sup> Cit. por Vigarello, 1998: 265.

sobre ello en los siguientes términos: “es necesario desplazar la crítica sobre el poder y la justicia social de la metafísica del consentimiento, o del acto del consentimiento, donde actualmente parece centrada y absorbida”<sup>39</sup>.

En el siglo XIX, a pesar de la nueva construcción cultural que opera sobre el consentimiento, éste sigue guiándose principalmente por el uso de la fuerza —como en siglos pasados—, teniendo las mujeres que demostrar si ha existido resistencia durante la violación. La herencia de los siglos anteriores incide además negativamente sobre la credibilidad de la víctima. Si la mujer no es virgen, tendrá que demostrar los signos propios del “no”: contusiones, hematomas... Incluso, en el caso de que estos signos se presentaran, la sospecha sigue atravesando a la víctima. Las palabras pronunciadas por un médico forense en 1832 podrían, metafóricamente, regresar al futuro del siglo XXI:

“...También pueden existir señales de violencia sin que la desfloración haya sido forzada; pocas mujeres hay que se entreguen sin resistencia á los deseos de un amante; las mas veces no parece que quieren ceder sino á la fuerza, aun en el caso que hubiesen preparado su desdicha; y ¿una mujer no puede en estos combates amoroso haber experimentado algunas contusiones, concluyendo por entregarse en los brazos de un hombre á quien fingía rechazar”<sup>40</sup>

Peiró, Miguel de y Rodrigo, José. *Elementos de medicina y cirugía legal* (1832)

A pesar de la oscuridad que acompaña al siglo XIX en relación a las invisibles formas de violencia hacia las mujeres, a mediados de éste y principios del XX, se produce un giro esencial en cuanto a las ideas que hasta el momento desentrañaban el lugar que las mujeres debían ocupar en la sociedad. Comienzan a surgir categóricas voces que se enfrentarán al pensamiento patriarcal consentidor de las múltiples violencias, desmontando, para empezar, la ideología que enarbolaba el matrimonio, como el estado ideal para las mujeres, mientras se visibiliza claramente las desgracias que escondía para ellas. El Feminismo emprende el cambio radical en la vida de las mujeres.

El movimiento feminista de la Primera Ola —considerado por algunos historiadores e historiadoras como “feminismo liberal” y formado, principalmente, por mujeres de clase media— centrará sus demandas en la lucha por los derechos liberales de su clase. En este sentido, es interesante observar, sin embargo, cómo la revisión de sus argumentos anticipa algunas cuestiones que serán debatidas por el “feminismo radical” de los años 60 y 70, lo que para algunas autoras lleva a cuestionar la utilización del propio término “liberal” o “moderado” (Sánchez, 2001). Las feministas estadounidenses, por ejemplo, reivindicarán y denunciarán una amplia gama de derechos, así como la vulneración de otros: el derecho

---

<sup>39</sup> Cit. por Bourke, 2009: 20.

<sup>40</sup> Cit. por Lorente Carpena, 2010: 200.

al sufragio femenino, el derecho a la propiedad de las mujeres casadas, la lucha contra la prostitución, el derecho a la sexualidad libre o la dominación económica, sexual y laboral (Sánchez, 2001).

El discurso feminista cuestiona, por primera vez, el intocable espacio privado, sacando a la luz la cárcel a la que se enfrentan las mujeres como consecuencia del pacto matrimonial. Aunque la expresión “violencia sexual” o “violación” no se nombran como tales, del significado de algunas de las acusaciones que se realizan se extrae que de lo que se habla es, sin lugar a dudas, de violencia sexual.

John Stuart Mill, a través de su obra *El sometimiento de la mujer* (1859) —prologada la edición española por Emilia Pardo Bazán— denuncia la coacción que implica el matrimonio para las mujeres, describiendo como las esposas se convertían en el instrumento de una función animal, la de sus maridos. Llega incluso, como hicieron otras feministas, a establecer comparación con las mujeres esclavas.

“La mujer esclava goza (en los países cristianos) del derecho reconocido y tiene hasta la obligación moral de rehusar los últimos favores a su amo. No sucede lo mismo con la esposa; por brutal y tiránico que sea el hombre a quien esté encadenada; aunque ella comprenda que es objeto de su odio [...], el dueño podrá exigir de ella que se someta a la más innoble degradación a que es capaz de descender un ser humano, obligándola a ser, a pesar suyo, instrumento de una función animal (1859: 61)”.

Stuart Mill, John . *El sometimiento de la mujer*.

Feministas norteamericanas, como Elizabeth Cady Stanton, reivindicarán el derecho natural a la igualdad y a los derechos individuales, como demandas intrínsecas del discurso feminista del momento. La aceptación incuestionable de esta incipiente individualidad femenina será fundamental en la conquista futura de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, por consiguiente, en la significación contemporánea que las violencias sexuales adoptan, ya sea en el plano jurídico o en el cultural.

“La cuestión que quiero plantearos en esta ocasión es la individualidad de cada alma humana —nuestra idea protestante—, el derecho a la conciencia y juicio individual —y nuestra idea republicana— la ciudadanía individual. Al discutir los derechos de la mujer debemos considerar primero lo que le es suyo como individuo, en su propio mundo [...]. Sus derechos bajo tales circunstancias son usar todas sus facultades para su propia seguridad y felicidad”

Cady Stanton, Elisabeth. *Solitude of Self*. 1892<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Cit. por Sánchez, 2001: 40.

Las diferentes vertientes del movimiento sufragista, tanto en los EEUU como en Europa, denunciarán las estructuras de dominación a las que se veían sometidas las mujeres de forma reiterada, también la violencia que sufrían e, incluso, de forma específica, la violencia sexual en el matrimonio o la trata de mujeres. Sus gritos y demandas estarán presentes a través de voces provenientes de distintas corrientes que comparten elementos en común, pero muchas de ellas ideológicamente muy diferentes en cuanto a los objetivos que persiguen.

Por ejemplo, los “movimientos a favor de la templanza” basados en las concepciones esencialistas de las mujeres y en su excelencia moral (Sánchez: 2001) abogarán por las campañas de pureza social y por la abstinencia del alcohol, según las cuales, se consideraba que la contingencia masculina supondría el fin de cualquier tipo de violencia. Ellas considerarán que la violencia sexual se debería combatir mediante la intervención social en las estructuras sociales (Bourke, 2009), para lo cual el voto de las mujeres será una demanda de primer orden, de cara entre otras, a influir así en los políticos encargados de modificar el ordenamiento jurídico. En el fondo de sus demandas, las mujeres pro templanza lo que intentaban era llevar a cabo:

“...una moralización de la vida pública, impregnándola de virtudes femeninas propias de la esfera privada [...], el sufragio aparece como un medio para conseguir el propósito de reforma moral”. (Sánchez, 2001: 49).

No hay que olvidar, en este momento de la Historia, el papel que jugaron destacadas socialistas en Europa en relación a la causa de emancipación femenina en las clases trabajadoras, denunciando, no sólo las condiciones laborales que enfrentan estas mujeres, también las consecuencias que su condición social implicará en múltiples aspectos de sus vidas.

Mujeres como Flora Tristán o Alexandra Kolontai analizarán los fundamentos de la opresión de las mujeres, avanzando alternativas a los problemas que las mujeres encaran en el entorno socialista y que, tanto en la obra de Marx como de Engels o August Bebel, se plantean como problemas menores asociados a la lucha por la emancipación del proletariado.

Marx (*El Capital*.1867) y Engels (*El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*.1885) se referirán a la opresión de las mujeres desde la perspectiva de la explotación económica, en relación a los cambios que este siglo incorpora en la familia victoriana, como consecuencia de las transformaciones del sistema productivo (Sánchez, 2001). Frente a tesis como las de Pierre-Joseph Proudhon, que abiertamente abogaba por recluir a las mujeres ante los peligros de la industria capitalista —“Lejos de aplaudir lo

que hoy en día se llama emancipación de la mujer, me inclinaría más bien, si me viera obligado a tal extremo, a recluir a la mujer—<sup>42</sup>, solamente Bebel (*Mujer y Socialismo*. 1885), a diferencia de Marx o Engels, plantea reivindicaciones concretas en relación a la emancipación de las mujeres:

“Por mucha similitud que haya entre la posición de la mujer y la del obrero, hay una cosa en que la mujer ha precedido al obrero: ella es el primer ser humano que fue esclavizado. La mujer fue esclava antes de que existiera el esclavo”<sup>43</sup>.

Bebel, August. *La mujer y el socialismo*. 1885

El planteamiento que desde las filas socialistas se realizó en relación a la dominación de las mujeres se trazó, únicamente, en términos relativos a la opresión del sistema capitalista, sin privilegiar, en ningún caso, la opresión que sufrían en sus vertientes relativas a la violencia física, sexual o psicológica en todos los espacios. Fue Alexandra Kollontai la abanderada en aportar nuevos planteamientos a este respecto, adelantando argumentos claves en el feminismo radical de los años 60 (Sánchez, 2001).

Más allá de su tesis central sobre el “amor libre”, reivindicó la igualdad salarial, la legalización del aborto, así como la socialización del trabajo doméstico y del cuidado de los niños y niñas. Incluyó en la agenda socialista los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, integrando el tema de la sexualidad como eje central de la vida de las mujeres. Tal y como refiere Sánchez, “al igual que las feministas radicales de los años 60, pone en un primer plano del debate político el análisis de la sexualidad, de la esfera íntima, proponiendo cambios que repercutirán en la esfera pública” (2001: 63).

Otras feministas, como la anarquista Emma Goldman, abordarán también planteamientos cercanos a los continuos reclamos que, incluso a día de hoy, se siguen produciendo en relación a la emancipación de la mujer y a la libertad sexual. Eje éste fundamental sobre el que pivotará el análisis de los derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, sobre las significación de las causas y consecuencias de la violencia sexual. Criticará abiertamente la concepción del amor y la idea de “emancipación de la mujer” que desde las filas sufragistas de clases medias se habían producido hasta entonces. Y, sin tapujos, hablará en los siguientes términos sobre la “verdadera emancipación de la mujer”, situando la libertad individual de las mujeres en un plano superior a la conquista de los derechos civiles:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, p. 60.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

“El derecho al voto, de la igualdad, de los derechos civiles, pueden ser conquistas valiosas; pero la verdadera emancipación no empieza en los parlamentos, ni en las urnas. Empieza en el alma de la mujer [...]. Es más importante que comience con su regeneración interna, cortando el lazo del peso de los prejuicios, tradiciones o costumbres rutinarias”.

Goldman, Emma. *La tragedia de la emancipación de la mujer*. 1906

Durante el siglo XX —hasta los años 60— los cambios políticos, culturales y sociales que operan suponen un cambio radical en la percepción que hacia la violencia sexual se produce. Por primera vez en la Historia, en el transcurso del siglo XX la violencia sexual comienza a entenderse como un ataque a la identidad sexual de la mujer. La violación, por ejemplo, experimenta un cambio de concepción profundamente moderno, lo que implica un “novedoso” reconocimiento de “una herida psíquica”, de “una violación del yo” (Bourke, 2009: 520). La violencia sexual trasciende a las agresiones corporales, frente a la agresión específica que infiere en la integridad individual.

A partir de los años 60, gracias al feminismo radical, la cuestión de la violencia sexual abanderará las denuncias del feminismo de los años 70 y 80, denunciando su instrumentalidad como herramienta para el control de los cuerpos y vidas de las mujeres. El feminismo de la Segunda Ola —sobre el que se disertará en el segundo capítulo de esta investigación— comienza a teorizar sobre violencia sexual, aportando, como nunca antes nadie lo había hecho, un nuevo y decisivo marco teórico sobre el origen y consecuencias de la violencia sexual en las vidas de las mujeres.

Las incipientes demandas y denuncias abiertas, que el feminismo realiza sobre las formas de violencia que sufren las mujeres en el transcurrir de la Historia en países occidentales hasta los años 70, se torna en otra dirección muy distinta en el caso español.

A pesar de los visos de progreso que supuso para las mujeres la proclamación de la República Española en 1931 y la aprobación, ese mismo año, de su Constitución —en la que, por primera en la Historia de este país, se reconocía la igualdad jurídica entre mujeres y hombres—, en el ámbito de la violencia sexual, la ideología patriarcal de la época mantiene su intocabilidad, imprimiéndose en su Código Penal, sin significarse aún el delito como una agresión a la libertad individual:

“No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. El estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”

*Constitución de la República Española*. Artículo 25. 1931



El Código Penal de 1932 permite reconocer la evolución ideológica y la consideración que en torno a los delitos asociados con la violencia sexual —aún con tintes claramente patriarcales que continúan dividiendo las diferentes manifestaciones de violencia sexual— en los siguientes términos: estupro<sup>44</sup> y corrupción de menores<sup>45</sup> (capítulo III), rapto<sup>46</sup> (capítulo IV) y violación y abusos deshonestos<sup>47</sup>, entendidos éstos últimos como delitos contra la honestidad (capítulo I)<sup>48</sup>. Llama enormemente la atención cómo el matrimonio sigue invalidando, como categoría intocable, delitos tan graves como el estupro, la violación o el rapto, hasta el punto de que el propio Código Penal apunta en el Capítulo V (Disposiciones Comunes) a la posibilidad de resarcir al agresor sexual si existe perdón, o si se produce matrimonio, a pesar del daño que entraña la violencia sufrida por la víctima:

“En todos los casos de este artículo el perdón expreso o presunto de la parte ofendida extinguirá la acción penal o la pena si ya se hubiere impuesto al culpable. El perdón no se presume sino por el matrimonio de la ofendida con el ofensor”.

Código Penal. Artículo 443. 5 de noviembre de 1932

Años más tarde, la Guerra Civil española (1936-1939) experimentó la vertiente más cruel de la violencia sexual hacia las mujeres, tal y como algunas fuentes y obras relatan<sup>49</sup> (Cases, 2013; Joly, 2008; Sánchez, 2009; González Duro, 2012; Preston, 2011; Bejenlloum, 1988. ). En ambos bandos, el patriarcado se significó a través del ejercicio de diferentes formas de violencia sexual como forma de control ideológico, control territorial y debilitamiento de las redes sociales. Pero cabe

---

<sup>44</sup> “Acceso carnal fraudulento con una mujer menor [...]. Habrá estupro cuando intervenga engaño grave”.

<sup>45</sup> “Artículo 437. El estupro de una doncella mayor de doce años y menor de veintitrés, cometido por Autoridad pública, Sacerdote, criado, doméstico, tutor, Maestro o encargado por cualquier título de la educación o guardia de la estuprada, se castigará con la pena de prisión menor en sus grados mínimos y medio. Artículo 438. En la misma pena señalada en el artículo anterior incurrirá el que cometiere estupro con su hermana o descendiente, aunque sea mayor de veintitrés años. Artículo 439. El estupro cometido por cualquier otra persona con una mujer mayor de doce años y menor de veintitrés, interviniendo engaño grave, se castigará con la pena de multa de 500 a 5.000 pesetas”.

<sup>46</sup> Artículo 441. El rapto de una mujer, ejecutado contra su voluntad y con miradas deshonestas, será castigado con la pena de prisión mayor o reclusión menor, a no ser que a la violencia carnal corresponda mayor pena. Si la raptada tuviese menos de doce años se impondrá la misma pena, aunque el rapto fuere con su anuencia, pero interviniendo engaño grave, será castigado con la pena de arresto mayor.

<sup>47</sup> Artículo 431. La violación de una mujer será castigada con la pena de reclusión menor. Se comete violación yaciendo con una mujer en cualquiera de los casos siguientes: 1º. Cuando usare de fuerza o intimidación. 2º. Cuando la mujer se hallare privada de razón o de sentido por cualquier causa. 3º. Cuando fuere menor de doce años cumplidos ...

<sup>48</sup> Artículo 432. El que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo cualquiera de las circunstancias expresadas en el artículo anterior; será castigado, según la gravedad del hecho, con la pena de prisión menor en sus grados medio y máximo.

<sup>49</sup> Como se apunta en esta investigación, a pesar de la amplísima literatura escrita sobre la Guerra Civil Española, se complica la tarea de encontrar obras específicas que analicen en detalle las características de la violencia sexual ejercida contra las mujeres como arma de guerra entre 1936 y 1939. En los últimos años cada vez son más los artículos periodísticos que dan cabida a este tema como estrategia de control durante la Guerra. Véase por ejemplo: Rodríguez Álvarez (16 de marzo de 2016). *Las víctimas olvidadas de Franco: violencia sexual, tortura y humillación contra las mujeres*. Infolibre.es. Recuperado el 22 de febrero de 2017, de [http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/16/las\\_mujeres\\_victimas\\_del\\_franquismo\\_piden\\_justicia\\_argentina\\_46475\\_1012.html](http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/16/las_mujeres_victimas_del_franquismo_piden_justicia_argentina_46475_1012.html).



destacar que, mientras que en el bando republicano las fuentes señalan que ésta se desarrolló como estrategia de limpieza política puntual —sobre mujeres católicas, conservadoras y falangistas—, por los comités y al margen del poder político republicano legítimo (Cases: 2013), en el bando fascista, los golpistas y los mercenarios marroquíes la ejercieron de forma sistemática durante todo el conflicto. Al final de la guerra, la revancha feroz que el bando nacional ejerció sobre las mujeres afines a la república se cebó, especialmente, durante los 40 años de dictadura franquista.

La violencia sexual quedó claramente significada como un arma de guerra, lo que no implica que el hecho documentado en relación a las prácticas de control del cuerpo de las mujeres en la guerra civil española no se hubieran producido, con anterioridad, en todos y cada uno de los conflictos y guerras correlativos a la Historia occidental. En el caso puntual del bando republicano, Cases Sola (2014) apunta, a partir del estudio documentado de Piedad Suárez de Figueroa Moya —asesinada y violada por algunos miembros de los Comités de Defensa de la República en Cuenca y Toledo<sup>50</sup>— a este episodio como propio de las prácticas de violencia anticlerical revolucionaria al inicio de la guerra, significada, al mismo tiempo, como “parte de una afirmación y mantenimiento del sistema patriarcal” (2014: 70). Las mujeres fascistas, las conservadoras y las falangistas también rompieron, para la ideología revolucionaria, con sus parámetros ideológicos patriarcales, al salir de sus hogares y defender la causa fascista, aunque en el extremo opuesto a las demandas de las mujeres socialistas, anarquistas o comunistas:

“El coche se detuvo en las proximidades de Casas de Luján, a unos 17 kilómetros al norte de Villamayor. Allí, como ya hemos descrito anteriormente, se sometió a Piedad a una violación en grupo y después fueron asesinadas las dos mujeres”<sup>51</sup>.

*Solidaridad Obrera*. Órgano de la Confederación Regional del Trabajo  
de Cataluña, 12 de Junio de 1937

El franquismo, en sintonía ideológica con otras dictaduras, buscará también deshumanizar a través de la violencia sexual a las enemigas de la “gran cruzada”, de la “anti-España”, tal y como queda documentado por el tratamiento violento y vejatorio que sufrieron, durante y después de la guerra. En la retaguardia fueron violadas como símbolo de poder sobre “las rojas”, pero también desde la variable asociada a todas las guerras, referida a la limpieza étnica: “puede que muramos, pero vuestras mujeres darán a luz a hijos fascistas”<sup>52</sup>. Durante la dictadura, en las cárceles españolas y en otros espacios públicos,

---

<sup>50</sup> Sus asesinos fueron juzgados por el Tribunal Popular de Cuenca y finalmente condenados. Varios diarios anarquistas reprobaron, a través del relato de los hechos, el comportamiento de los componentes de los Comités (Cases Sola, 2014).

<sup>51</sup> Cit. por Cases Sola, 2014: 76.

<sup>52</sup> *Ibid*, p. 72.

fueron violadas y agredidas sexualmente, siendo expuestas como triunfo sobre el enemigo, encarnando así el cuerpo femenino el espacio simbólico de conquista y dominación al que Brownmiller se refirió en 1975.

En el año 2016, por primera vez en la Historia reciente de nuestro país, se interpuso una querella<sup>53</sup> desde España para solicitar al Estado Argentino la investigación sobre los múltiples crímenes de género cometidos durante el franquismo. Según las propias palabras del perito de la querella, la represión que se ejerció contra las mujeres durante la dictadura se manifestó en “otra modalidad represiva mucho más brutal”, destacando la violencia sexual cometida habitualmente por los funcionarios de prisiones o falangistas. De forma paralela, las mujeres sospechosas fueron detenidas y violadas, siendo más grave aún el hecho que recoge la querella en relación a que algunas de las mujeres, no sólo fueron violadas por ello, también por cometer el “delito consorte”, es decir, por ser familiares de hombres, hermanas, madres o antifranquistas contrarios al régimen. Las formas de violencias sexuales que se ejercieron sobre ellas se tradujeron en violaciones, descargas genitales y golpes en el bajo vientre, para impedir que pudieran quedarse embarazadas (Sabela, 2016).

La exacerbación de la violencia que se cebó contra las mujeres en la dictadura franquista, y su falta de consideración como tal durante el régimen —normalizada como práctica—, simboliza la concepción del “mal contemporáneo” desde un análisis feminista (Sánchez, 2014: 346) —en la línea del pensamiento sobre el que Hanna Arendt disertó acerca del mal (genocidios, crímenes contra la humanidad, masacres) y sobre el cual se hablará en próximos capítulos—. Habría que esperar a los grandes conflictos armados de los siglos XX y XXI para identificar la tipificación jurídica que la comunidad internacional adoptó, posteriormente, en relación a la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto armado —crimen de lesa humanidad, genocidio, crimen de guerra—. Durante la Guerra Civil española, y en su oscura dictadura, las violaciones masivas o las agresiones sexuales constantes se personifican, tal y como apunta Sánchez, en relación a las violencias sexuales en las guerras, como ejemplo de “las características del mal radical” (2014: 257), al que Arendt se refiere como:

“...un tipo de mal extremo, masivo y sistemático, basado en una ideología y, por consiguiente, en el que podemos ver una intencionalidad de los perpetradores, conectado a un sistema político de dominación, y en el que el que concurre el establecimiento de campos de exterminio como resultado político de esta dominación” (Sánchez, 2014: 357)

---

<sup>53</sup> La querella fue interpuesta el 16 de marzo de 2016 por la organización no gubernamental *Women's Link Worldwide*, como parte de la macro querella iniciada el 14 de abril de 2010 en Buenos Aires contra la dictadura franquista.

El régimen franquista, no sólo se cebó con las mujeres consideradas disidentes y enemigas, supuso un profundo retroceso en el camino iniciado hacia la igualdad durante la 2ª República, que estaba comenzando a fraguarse en el resto de países occidentales. El control sobre los cuerpos de las mujeres se encarnó en la exaltación ideológica patriarcal del rol tradicional de las mujeres como esposas y madres, desde un plano social, pero también jurídico, con la aprobación de numerosas leyes que justificaban la invalidez de la mujer como ser autónomo dependiente, igual que en siglos pasados, de la tutorización de un varón.

En materia de violencia sexual, el Código Penal de 1944 traslada perfectamente la conceptualización que la dictadura, en connivencia con la Iglesia católica, nuevamente impuso en relación a las múltiples manifestaciones de violencia sexual que sufría las mujeres, en lo que se puede considerar como una forma de control, no sólo de sus cuerpos, sino también de su comportamiento sexual. Sólo las mujeres consideradas “honestas” merecieron protección (Moraga, 2008). De nuevo, como en la Edad Media, Moderna y principios de la Contemporánea, la violencia sexual gira en torno al honor y a la honra, en relación con el padre o el marido, y no en relación con la individualidad de las mujeres.

El patriarcado judicial exagera su control, hasta el punto de que el Código Penal (1944) establece entre los tipos penales el “uxorcidio por causa de honor”, en relación al privilegio que se le otorga al marido para matar a la mujer si ésta era sorprendida con otro hombre. Paralelamente, se tipifican los delitos contra la honestidad, en los que quedan incluidos los delitos de violación, abusos deshonestos, escándalo público, estupro, corrupción de menores, rapto y delitos relativos a la prostitución. En ningún caso, lo que se proteja será la libertad sexual de las mujeres. El bien jurídico protegido será el honor, personal y familiar (Moraga, 2008). De nuevo, la existencia del perdón de la víctima de violencia sexual resarce el castigo. La perversidad jurídica se manifiesta, tal y como ha quedado reflejado en las páginas precedentes, en el hecho de que, si la víctima se casa con el agresor sexual, la responsabilidad penal desaparece.

El matrimonio, hasta la democracia —y desde un plano metafórico— seguirá siendo cómplice directo de la violencia sexual. Mientras el daño que entraña la violación u otras formas de violencias sexuales recibirá sanciones, tan insignificantes, que sus penas evidenciarán el desprecio hacia el dolor de las víctimas durante toda la dictadura franquista<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> TÍTULO IX. De los delitos contra la honestidad. CAPÍTULO PRIMERO. De la violación y de los abusos deshonestos.429. La violación de una mujer será castigada con la pena de reclusión menor. Se comete violación yaciendo con una mujer en cualquiera de los casos siguientes: 1º Cuando usare fuerza o intimidación. 2º Cuando la mujer se hallase privada de razón o de sentido por cualquier causa. 3º Cuando fuere menor de doce años cumplidos, aunque no concurriere ninguna de las circunstancias expresadas en el artículo anterior, será castigado con la pena de prisión menor”. Código Penal. 1973.

### 3 | La mitología que sostiene la violencia sexual

---

El ejercicio y objetivo de la violencia sexual —como se desarrollará en el siguiente capítulo de forma más detallada— ha contado con el amparo y mano ejecutora principal del sistema que lo sostiene y justifica: el patriarcado. En este sentido, el control de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres se ha consumado a través de diversas formas, siendo la violencia sexual una de las más significativas y, al mismo tiempo, la más sutilmente invisibilizada, gracias a los numerosos mecanismos que a lo largo de la Historia han conseguido que así sea. En el epicentro de estos mecanismos, la mitología construida alrededor de la violencia sexual ha jugado un papel crucial, como fundamento de su ejercicio, así como de la recurrente impunidad de sus responsables.

La influencia de los mitos en torno a la violencia sexual —nombrados por primera vez como “Rape Myths” (“Los mitos de la violación”) por el movimiento y teoría feminista de los años 70 (Brownmiller, 1975)— se ha desarrollado de forma significativa en diferentes contextos culturales y sociales, adaptados a la mentalidad de cada contexto social. A pesar de la indiscutible variedad, todos ellos presentan conexiones en común que, sorprendentemente, no entienden de relativismos culturales, pero parece que sí responden a lo que Roland Barthes —en su obra *Mitologías* (1972)— describió como “un discurso despolitizado que abole la complejidad y la sustituye por la simplicidad de las esencias<sup>55</sup>”. Y que, en el caso de la violencia sexual y su poderoso entramado, terminan convirtiendo suposiciones o falsedades en verdades absolutas. A este respecto, Joana Bourke (2009) describe así los mitos: “conjunto de creencias o imágenes que los individuos asimilan mediante la imaginación o visceralmente [...] permiten a la gente crear un mundo de jerarquías y distinciones.” (2009: 34).

Numerosos mitos —significados en su simplicidad como “forma de citas cortas” (Bourke, 2009)—, de manera casi innata, se extienden en relación a todas las manifestaciones en que se ejecuta la violencia sexual. Además —como apunta Bourke—, permiten “crear un mundo de jerarquías y distinciones” (2009: 34) cuyas imágenes son asimiladas “por la imaginación o visceralmente” por los individuos (2009: 34). Por tanto, de manera poderosa, los mitos en torno a la violencia sexual consiguen sembrar “la duda patriarcal” en relación a la víctima y a la gravedad de los actos que comete el agresor, siempre en beneficio del segundo. En violencia sexual —como en ningún otro crimen tan extremo— la duda patriarcal planeará irremediabilmente sobre la víctima, y su huella es tal que —como afirma Durán (2015)— consigue convertir en más culpable a la víctima que al propio delito.

---

<sup>55</sup> Cit. por Bourke. 2009: 34.

Una de las mejores alianzas de la que se ha valido el patriarcado ha consistido en construir, desde tiempos antiguos, toda una ideología cuyo mensaje traslada el mandato indiscutible de que el ejercicio de la libertad de las mujeres es incompatible con lo que el sistema patriarcal exige de ellas, de acuerdo al jerárquico, y sin fisuras, orden masculino. Cualquier atisbo de insubordinación se paga con contundencia. Los mitos sobre violencia sexual son respuestas a esa insubordinación, hasta el punto de conseguir justificar, a través de un listado de motivos inventados, una agresión sexual: “Ella quería ligárselo desde el primer momento”, “Le provocó”; luego que no diga que no...”, “Ella estaba disfrutando”.

Las expresiones que amparan los mitos, no sólo las piensan y pronuncian individuos concretos, sino que se formulan en las instituciones; se incluyen en las políticas públicas y en las leyes...;se expresan a través de los medios de comunicación o en las escuelas... Y, en la mayoría de los casos, se hace de forma que pasa inadvertida. Quizá por eso —como refiere Whisnant (2013)—, en las definiciones elaboradas por la gente corriente en torno al concepto “violación”, la influencia del “mito de la violación” explica por qué la mayoría de los hombres que han sido acusados de alguna forma de violencia sexual no definen sus propios comportamientos como violación.

“Ella insistía en que fuese yo quien la penetrara. Me lo pidió dos o tres veces, porque yo, realmente, no quería penetrarla. Yo no soy un violador. Odio a los violadores. Los odios”.

Declaración ante el juez de uno de los agresores sexuales de la violación grupal cometida en la Fiestas de San Fermín del verano de 2016.

Lo que es obvio es que los mitos —presentes desde la Edad Antigua hasta nuestros días, tal y como la historiografía documenta— han sido utilizados también como instrumentos de subordinación hacia las mujeres junto con otros mecanismos que la posibilitan. Incluso, los llamados “mitos clásicos” han transmitido, en forma de fábulas, los mismos mensajes que la mitología moderna sobre la violencia sexual incorpora en sus supuestos.

El mensaje de muchos de los mitos clásicos se corresponde con la idea de considerar que “el apetito sexual” y “la sexualidad son patrimonio exclusivo del sexo masculino” (Dolors, 20006), incontrolables e innatos a los hombres. Por ejemplo, los raptos presentes en la literatura clásica —sean cometidos por mujeres o ejercidos sobre ellas— se justifican desde la seducción, el deseo y el engaño femenino en exclusividad, como sucede en el caso de las Sirenas o la Esfinge (Zaragoza, 2006). La seducción y el deseo se significan como los causantes del peor de los males que, en su versión moderna, podría identificarse con el mito que justifica la agresión sexual en base al atractivo físico de la víctima. Es decir, a la capacidad de seducción que se le otorga través de su forma de ir vestida: “Ella se lo estaba buscando”.

En relación a estos mitos clásicos, recuerda Dolors (2006) que muchas de las historias narradas transmiten mensajes asociados al control del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres, mientras, de forma paralela, “asoma el anhelo masculino de procrear sin elemento femenino” (2006:50). Como también puntualiza Dolors, los propios mitos griegos sobre el origen de los héroes trasladan el mismo mensaje que los mitos modernos entorno a la violencia sexual, en el sentido de que “el cuerpo femenino es un cuerpo agradecible y colonizable, y su producto, los hijos y las hijas, un bien enajenable, pues la madre es un medio para un fin paterno” (2006: 52):

“...le soltó el cinturón virginal tras dejarla dormida  
acabado que fuera por el dios el quehacer amoroso,  
apretó con la suya la mano de Tiro y le dijo:  
queda alegre ¡oh mujer!, de este amo. En el curso del año  
parirás unos hijos hermosos, que nunca infecundos  
son los lechos de un dios.  
A ti toca su cuidado y crianza.  
Vuelve en tanto a tu hogar, pero guarda en secreto mi nombre  
Para ti, que soy Poseidón el que bate la tierra”

Homero, *Odisea*, X<sup>56</sup>

Al acudir a la mitología contemporánea, el listado de mitos en violencia sexual están perfectamente identificados, adaptándose a los tiempos, pero manteniendo ramificaciones en común con otros mitos expuestos en el primer apartado de este capítulo:

- Los agresores son unos desconocidos.
- Los agresores son personas de clase social baja.
- Si te resistes no te pueden violar.
- Sólo si consta uso de la fuerza ha existido una agresión sexual.
- Las mujeres de clases sociales más bajas, o en riesgo de exclusión, establecen relaciones sexuales menos pudorosas, que se confunden con violencia sexual.
- Las mujeres denuncian en falso para sacar créditos personales.
- Si no ha denunciado es porque está mintiendo.
- Sólo los hombres más jóvenes se excitan, por lo tanto son los únicos que agreden sexualmente.
- Las mujeres mayores no son agredidas sexualmente, porque no son atractivas para un agresor sexual.
- “No” significa “Sí”.

---

<sup>56</sup> Cit. Por Dolors, 2006: 52-53.

- Los amigos, compañeros de trabajo, hermanos y padres no agreden sexualmente.
- Las agresiones sexuales se cometen, en la mayoría de las circunstancias, bajo los efectos del alcohol.
- Y un largo etcétera que podría ampliarse en varias hojas.

En cualquier caso, si se analizan con detalle cada uno de estos mitos, lo que se observa es que todos ellos tienen tres objetivos: desacreditar a la víctima, quitar responsabilidad al agresor, así como deslegitimar la propia agresión sexual sembrando siempre la duda. La “duda patriarcal”.

“La chica de la violación de San Fermín llamó a otro hombre que había conocido esa misma noche en Pamplona para quedar con él”.

Titular Navarra.com (El Español) 28 de diciembre de 2016

“A veces cuando las mujeres dicen “no”, solo quieren ver de lo que serías capaz de hacer por ellas”

Mensaje de Twitter de la cantante Amaia Montero. 2/10/2012

“¿Cerró usted bien las piernas para evitar la violación?”

Interrogatorio de la jueza Carmen Molina Mansilla a una mujer víctima de violencia sexual. Marzo de 2016<sup>57</sup>

En las historias cotidianas actuales, los mitos se cueban diariamente, expandiéndose hasta aceptarse en la sociedad como indiscutiblemente ciertos. Cabe recordar cuando, en agosto de 2014, los principales medios de comunicación de este país abrían sus ediciones relatando la violación de una joven en la feria de Málaga a manos de unos chicos entre 17 y 23 años. La noticia se hizo viral. Los comentarios en las redes sociales, las columnas de opinión, así como la valoración del hecho hicieron que, en menos de una semana, la chica pasara de ser una víctima a ser clasificada como una mentirosa sin escrúpulos. Al parecer —según relataban los medios— se inventó la violación, lo que la llevó a ser imputada por falsa denuncia. La justicia volvía a determinar quién tenía el privilegio de ser víctima, y quién no. De forma paralela, la opinión pública hizo lo mismo.

“La denunciante de una falsa violación en Málaga acepta 10 meses de cárcel”  
El País. 22 de septiembre de 2014

Lo sorprendente sobre el relato de este hecho no fue la posible falsa denuncia. Lo más

---

<sup>57</sup> [http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Clara-Campoamor-CGPJ-dignidad-maltratada\\_O\\_491001272.html](http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Clara-Campoamor-CGPJ-dignidad-maltratada_O_491001272.html)



asombroso fue la crueldad con la que se llegó a diseccionar lo sucedido. En el instante en el que la duda volvió a proyectarse en la relación de los hechos, la chica se convirtió en el diablo. Mientras tanto, los “supuestos” violadores fueron entronizados como terribles víctimas de la maldad extrema de ella. El clásico mito patriarcal sobre la intrínseca maldad femenina acampó a sus anchas en la opinión pública, en los principales medios de comunicación y —lo que es más grave— entre “supuestos expertos” en la materia. En este sentido, la letrada Isabel Elbal publicaba en el *Diario.es* un sorprendente artículo de opinión en el que todos los mitos y prejuicios se reproducían intactos. Vomitó párrafo tras párrafo contra la chica y, cómo no, contra las feministas:

“Ahora ya sabemos —porque ella misma así lo ha reconocido— que la denunciante presentó denuncia falsa para evitar que uno de los chicos difundiera una grabación en la que aparecía practicando sexo libre y voluntario con ellos [...]. Hasta constatar la falsedad de la denuncia han pasado varias semanas durante las cuales hemos escuchado y leído voces, opiniones y propuestas muy variopintas de quienes se definen como “feministas” y “progresistas”.

*Diario.es* 21 de septiembre de 2014

En marzo de 2013, Olga<sup>58</sup>, una mujer rusa en situación administrativa irregular, era agredida sexualmente por dos desconocidos en una zona boscosa de Ourense. Siguiendo los pasos que establecen los protocolos<sup>59</sup> en casos de agresiones sexuales, fue trasladada al hospital pero, tras ser dada de alta, el Servicio de Urgencias le facturó 893,83 euros por la asistencia sanitaria prestada. A pesar de las secuelas físicas y psicológicas derivadas de una agresión sexual de estas características —y con los partes de lesiones que describían los daños físicos y psíquicos tras la debida exploración médica y forense—, el procedimiento judicial abierto desde el hospital fue, de forma paralela, archivado a los pocos días de la investigación. Sorprendentemente, esa misma semana la Guardia Civil acudió a su domicilio y se la llevaron a comisaría en calidad de detenida. El juez la interrogó por “simular” una agresión sexual, y en diez horas los medios de comunicación locales se referían a Olga en estos términos:

“Acusada de fingir una violación introduciendo piñas en la vagina”

*La Región*. 17 de abril de 2013

---

<sup>58</sup> Caso documentado en diferentes informes e investigaciones (Amnistía Internacional, 2015 (b); Fundación para la Convivencia Aspacia, 2014; Plataforma CEDAW Sombra España, 2015; Médicos del Mundo, 2016) durante mi ejercicio profesional. Actualmente el caso ha sido inadmitido por el Tribunal Constitucional y se presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre de 2017.

<sup>59</sup> Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. 2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



La imputación penal por simulación de delito fue archivada el 11 de abril de 2015. Mientras —aún en 2017— Olga sigue esperando que se investigue la agresión sexual. El caso ha sido documentado por Amnistía Internacional (2015. b), por la Plataforma CEDAW Sobra (2015), por la Fundación para la Convivencia Aspacia (2013) o por la Organización Internacional Womens Against Violence Europe (2013), entre otras. Paralelamente, ha sido llevado ante instancias internacionales a través del “Informe Sombra” al Comité CEDAW de Naciones Unidas —tanto por Amnistía Internacional, como por la Plataforma CEDAW Sombra—, a fin de denunciar la violencia institucional y la falta de diligencia del Estado español —sobre la que se hablará de forma detallada en la segunda parte de esta investigación— ante la grave vulneración de derechos humanos vivida por Olga.

Los mitos y prejuicios en torno a la violencia sexual no son baladíes. Se amparan y sostienen gracias a toda una estructura que, de forma reiterada, permite que el sistema patriarcal justifique y ejerza la discriminación y violencia hacia las mujeres en sus múltiples manifestaciones.

Aunque en los siguientes capítulos se profundizará sobre la relación directa entre el sistema patriarcal y el ejercicio de la violencia sexual, merece la pena recordar —siguiendo la “teoría de los conflictos” del sociólogo Johan Galtung (2003), en relación al “triángulo de la violencia”, adaptada al marco teórico feminista— que el ejercicio de la “violencia directa” (violaciones, agresiones sexuales, acosos sexuales, abusos sexuales, feminicidios) sólo es posible si existe toda una base que alimenta esa violencia. La base del triángulo la conforma lo que Galtung nombra como “violencia cultural” y/o “violencia simbólica” —sistema patriarcal, ideología patriarcal, mitos, prejuicios<sup>60</sup>—, mientras que la punta del iceberg se haya configurada por la “violencia directa”.

La violencia cultural y la estructural son dos tipos de violencias menos visibles, pero ambas son las causantes directas de que se viole, agreda, acose o asesine a las mujeres. Es precisamente en esa base en la que los mitos se hacen poderosos, consolidando toda una “cultura de la violación” asentada por una ideología patriarcal que se encarga de justificar, alimentar y aceptar, de forma normalizada, la violencia sexual a nivel planetario.

---

<sup>60</sup> La “violencia cultural”, según la teoría de Galtung, son “aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra experiencia (religión e ideología, lengua, arte, ciencias empíricas y ciencias formales, símbolos) que pueden usarse para justificar o legitimar la violencia estructural” (2003: 7). Mientras la “violencia estructural” sería la violencia derivada de las estructuras sociales, políticas y económicas que impiden el desarrollo de los derechos humanos: división sexual del trabajo, el hambre, el acceso a la sanidad o a la educación...



**Figura 1:** elaboración propia adaptada según el esquema que representa el “Triángulo de la Violencia” de Galtung (2003)

### 3.1 Escalas de aceptación de los mitos sobre violencia sexual

El impacto en el imaginario social de la aceptación —normalizada e indiscutible— de los mitos en torno a la violencia sexual ha sido evaluado por diferentes ramas de las ciencias sociales, a través de las conocidas como “escalas de aceptación”. Durante años, en exclusividad, la evaluación que aplicaban las escalas se adaptaba a la violación en lo que se conocía en el ámbito anglosajón como “The Rape Myth Acceptance Scale” (RMAS. 1980) o la “Illinois Rape Myth Acceptance Scale” (IRMAS. 1994). Progresivamente, se han ido aplicando a otras formas de violencia sexual, hasta completarse en escalas adaptadas en cada país a partir de la “Escala de Aceptación de Mitos Modernos sobre las agresiones sexuales (AMMSA)” —“Acceptance of Mordern Myhths About Sexual Agression (AMMSA) scale”— elaborada en 2007 por Gerger, Bohner y Siebler.

Las escalas RMAS e IRMAS aportan definiciones interesantes en torno a los mitos en el contexto de la violación, que podrían ser extrapolables a otras formas de violencia sexual. De esta manera, la RMAS apunta que “los mitos son creencias perjudiciales, estereotipadas y falsas sobre la violación, las víctimas de violación y los violadores<sup>61</sup>” (1980)<sup>62</sup>. En 1994, Lonsway y Fitzgerald matizaron mejor el concepto de “mitos”, definiéndolos como “actitudes y creencias generalmente falsas, pero que son sostenidas de forma extensa y persistente, y

<sup>61</sup> Traducción propia.

<sup>62</sup> Cit. por, Edwards, Turchi, Dardis, et al., 2011: 762.

que sirven para negar y justificar la agresión sexual de un hombre contra una mujer<sup>63</sup>". Es interesante analizar cómo esta definición dio paso al IRMAS, al elaborar una escala más concreta que no diera pie —usando el RMAS— a sostener otros mitos como, por ejemplo, el recurrente de “muchas mujeres realmente desean que las violen” (Edwards, Turchi, Dardis, et al. 2011).

En relación a los resultados que aportaban las escalas, los estudios anglosajones consultados coinciden en que, aproximadamente, entre el 25% y el 35% de las respuestas —de preguntas formuladas tanto a mujeres, como a hombres— están de acuerdo con las informaciones que aportan los mitos, destacando, además, que son más creíbles por los hombres que por las mujeres (Edwards, Turchi, Dardis, et al. 2011).

En el caso español, no se ha encontrado un muestra significativa de estudios oficiales que ofrezca una escala de evaluación de los mitos en violencia sexual, a excepción de algunas investigaciones académicas (Durán, 2012; Romero 2012), que han utilizado la “Escala de Aceptación de Mitos Modernos sobre las agresiones sexuales (AMMSA)” (Gerder, Kley Bohner y Siebler, 2007), adaptada al caso español (Megías, Durán, Mota, et al., 2011)<sup>64</sup> y que, por sus hallazgos, ha sido considerada como “un instrumento útil para estudiar las percepción social de las agresiones sexuales” (Romero, 2012: 126) en el contexto español.

Como refiere Durán (2012), los resultados de algunos estudios —que daban lugar a puntuaciones medias (entre 2.5 y 2.7, en escalas con rangos del 1 al 7), condicionadas por la deseabilidad social de las personas entrevistadas, determinante en el desarrollo de las respuestas— significaron una nueva adaptación a través de la escala AMMSA, dirigida a “medir de manera más sensible, menos obvia y más sutil los mitos sobre las violaciones y sobre otras agresiones sexuales de menor severidad” (Durán, 2012: 3).

Utilizando la escala AMMSA, el artículo de Durán —realizado en base a su estudio elaborado en la Universidad de Granada— llama significativamente la atención sobre algunos resultados, que confirman las hipótesis sobre la relación entre la aceptación social de los mitos patriarcales en violencia sexual, y una mayor culpabilización de la víctima, o inculpación del agresor. A continuación, se extraen, de forma literal, tres de los resultados (Durán, 2012: 4-5):

---

<sup>63</sup> Ibidem.

<sup>64</sup> Véase de Durán “Valoración social de la Violencia Sexual: el rol de los Mitos sobre las Agresiones Sexuales”, sobre la aceptación sobre las agresiones sexuales y del género en relaciones matrimoniales. Para su realización se utilizó la escala de Aceptación de Mitos Modernos sobre Agresión Sexual (AMMSA). Véase así mismo la tesis doctoral de Mónica Romero Sánchez “Percepción Social de las agresiones sexuales hacia las mujeres: el papel del alcohol y los mitos sobre la Violación” (2012) de la Universidad de Granada.

- Los participantes que tenían mayor puntuación en aceptación de los mitos sobre violación, culpaban en mayor medida a la víctima.
- Los participantes que confiaban los mitos sobre la violación, son los que consideraron que la violación revestía menor gravedad.
- Las personas que presentaban una alta aceptación de los mitos sobre violación, consideraban que el agresor tenía menor responsabilidad por la agresión<sup>65</sup>.

Las escalas sobre evaluación de los mitos aportan una información fundamental, no sólo para conocer los factores que influyen sobre la percepción social de la violencia sexual, también son cruciales para la elaboración de políticas públicas y otras medidas preventivas dirigidas a combatir la violencia sexual en todas sus manifestaciones. Como se verá en capítulos sucesivos, dichos estudios se vienen realizando en numerosas universidades norteamericanas o en otras organizaciones del mundo anglosajón<sup>66</sup>, pero no ha tenido su equivalente en el caso español ■

---

<sup>65</sup> Para profundizar más, véase de Otero & Durán (2014), “Percepción de Violencia Sexual hacia la mujer a través de entornos físicos y virtuales”. Recuperado el 15 de mayo de 2017, desde: [https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/41159/Pages%20from%20Investigacion\\_Genero\\_14-2-20.pdf?sequence=1](https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/41159/Pages%20from%20Investigacion_Genero_14-2-20.pdf?sequence=1).

<sup>66</sup> Véase el listado de mitos que elaboran algunas universidades norteamericanas para combatirlos como:

- University of Minnesota Duluth: <http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/3925/myths.html>
- West Virginia University: [http://well.wvu.edu/articles/rape\\_myths\\_and\\_facts](http://well.wvu.edu/articles/rape_myths_and_facts)
- Georgetown University: <https://www.law.georgetown.edu/campus-life/advising-counseling/personal-counseling/sarvl/general-information.cfm>
- Elon University: <http://www.elon.edu/e-web/students/saa/myths.xhtml>
- University of Florida: <http://www.police.ufl.edu/community-services/myths-and-facts-about-date-rape/>.



---

## **CAPÍTULO 2**

### DEFINIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL



“Ahora sabemos lo poco que hay de certero en las palabras, pero sí sabemos esto: las palabras nunca hacen nada que sea útil, y las palabras son las únicas cosas que dicen la verdad y nada más que la verdad [...]. Las palabras no viven en los diccionarios, viven en la mente”

Woolf, Virginia. “Destreza”<sup>67</sup>

## 1 | Lenguaje y semántica entorno a la violencia sexual

---

“¿Cuál es el uso adecuado de las palabras?”, se preguntaba Virginia Woolf en su relato “Destreza”. ¿Viven en la mente y no en los diccionarios? Las preguntas que la obra de ficción de Woolf planteaba a comienzos del siglo XX siguen estando presentes, de manera reiterada, en el discurso y la práctica política feminista que justifica la necesidad de construir un lenguaje cuyos significados visibilicen la realidad de la experiencia vivida de las mujeres. Al conceptualizar, tal y como Amorós sostiene, politizamos (Amorós, 2005), convirtiendo la anécdota en un hecho, en una circunstancia visible y relevante, sobre la cual tomamos conciencia.

El lenguaje y las palabras son el reflejo de una realidad a la que nos acercamos cuando, de forma consciente, la nombramos. Según Nicholson (1995), los conceptos que utilizamos en nuestro lenguaje, lejos de ser meros actos descriptivos, recogen una serie de sentidos atribuidos, que están cargados de claras implicaciones políticas. De ahí que, tal y como afirma Amorós, sea “importante que se describan los fenómenos de agresión a las mujeres en el mismo nivel conceptual en que se describen otros fenómenos análogos” (2005: 296).

En el caso de la lengua española, la RAE, la institución encargada de fijar la norma sobre el uso de nuestro lenguaje, parece como si al “reflejar la realidad” (Bosque, 2012), sin embargo, llevara años declarándole la guerra a la experiencia de las mujeres. Como refiere la lingüista Emilia Lledó, “el feminismo y la gramática española no se llevan bien” (Lledó, 2004). En este sentido, a pesar de que los académicos de la RAE reiteradamente insistan en convertir los significados en absolutos neutrales, el pensamiento y la subjetividad (Lledó, 2004) de quienes redactan la norma, se filtran en los libros y manuales que ellos mismos dirigen. Y aunque insistan en que “el lenguaje se crea todos los días” (Bosque, 2012), incluso cuando hablan de “sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer” (Bosque, 2012), la ideología

---

<sup>67</sup> La única grabación que se conserva de la voz de Virginia Woolf es parte de una emisión de radio de la BBC, del 29 de abril de 1937, de la serie “Words Fail Me” (“Me fallan las palabras”); la disertación se titula “Craftsmanship”, y posteriormente fue publicada como un ensayo en el libro *The Death of the Moth and Other Essays* (Editorial Capitán Swing lo editó en español, traducido por Luisa Moreno Llorca, como *La muerte de la polilla y otros escritos*. El ensayo “Craftsmanship”, incluido en el libro, lo titularon “Destreza”).



se imprime en sus hojas, utilizando, de forma repetida, foros oficiales para justificar la negativa de no aceptar expresiones o palabras que, sin embargo, llevan años siendo reconocidas y utilizadas por la sociedad. Muchas de ellas forman parte y están relacionadas con el discurso político feminista y la violencia hacia las mujeres.

En 2004, antes de presentarse el *Proyecto de Ley integral contra la violencia de género*, la RAE, alarmada por la expresión “violencia de género”, alertó a través de un informe sobre su utilización, alegando para ello que “en español no existe tradición de uso de la palabra *género* como sinónimo de *sexo*” (RAE, 2004). Paradójicamente, de forma contraria a la extensa producción académica científica e interdisciplinar —sociología, historia, filosofía, derecho o psicología, entre otros— abalada por organismos internacionales como Naciones Unidas, se apostó por la expresión “violencia doméstica”, justificando que tal expresión estaba enraizada en el uso por su claridad de referencia, “al tener la ventaja de aludir, entre otras cosas, a los trastornos y consecuencias que esa violencia causa no sólo en la persona de la mujer sino del hogar en su conjunto, aspecto este último al que esa ley específica quiere atender y subvenir con criterios de transversalidad” (RAE, 2004). La RAE no pareció entender que la finalidad era, precisamente, la contraria a lo que su informe justificaba: modificar los límites de la expresión “violencia doméstica”, que lejos de referirse al componente estructural de la violencia contra las mujeres arraigada en la histórica desigualdad, la violencia doméstica sólo constreñía la realidad a una “neutralidad” de género dentro del contexto familiar.

Doce años más tarde, desde la aprobación de la *Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, el debate lingüístico sigue hoy presente. El uso normalizado de tal expresión, que de forma cotidiana convive con la sociedad a través de medios de comunicación y otros espacios de socialización y relacionales —la escuela, la familia, las instituciones públicas, los órganos de gobierno...—, sigue sin ser admitida y, a pesar de que sí que se acepten otras palabras y expresiones tales como “asín” o “manda uebos” (RAE), la resistencia se sigue produciendo con “violencia de género”. Parece ciertamente, como afirma Emilia Lledó (2004), que los diccionarios y sus palabras tuvieran propiedad, la de quienes los elaboran, aquellos que terminan representando una determinada idea del mundo que, inevitablemente, se transmite a través de sus definiciones y de sus ejemplos, repletos de un imaginario colectivo de mitos e hitos compartidos “que están en el trasfondo de los que se sabe de lo que piensa, de lo que siente, claro está por las opciones tomadas por quien escribe” (Lledó, 2004: 24).

A día de hoy, la RAE, a través de su diccionario, moderniza su semántica a los tiempos, pero sigue sin atreverse a nominar el sexismo en todas sus manifestaciones. Las consecuencias derivadas de ello, como mínimo, ayudan a perpetuar determinadas ideologías, como las propias definiciones, apuntalando la violencia simbólica (Bodieu, 2000) sobre la que se sostiene la violencia directa que sufren las mujeres —a cerca de lo cual se profundizará a lo largo de esta investigación—. De esta forma, si se comparte la premisa de que idea y acción se conforman mutuamente (Edelman, 1977), el lenguaje se impregnará en el relato político, creando categorías y significados fundamentales en los discursos políticos que condicionarán la norma y las políticas públicas, sobre las cuales se consolidarán unos cursos u otros de acción, en el marco de la protección de los derechos humanos de las mujeres (López Rodríguez, 2015).

Al profundizar aún más en la semántica asociada a las diferentes manifestaciones de la violencia hacia las mujeres, en el caso de la violencia sexual —entendida desde el marco teórico feminista y del derecho internacional de los derechos humanos, como una manifestación extrema de la violencia de género, y definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales, no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS, 2002: 149) — la expresión, el significado y el contenido de las definiciones mantendrá implicaciones evidentes sobre la protección de las víctimas y supervivientes, tal y como sucede con la expresión “violencia de género”. Si se comparte la premisa de Nicholson —sobre la que se apuntaba al inicio de este apartado—, que afirma que los conceptos que utilizamos en nuestro lenguaje, lejos de ser meros actos descriptivos, “recogen una serie de sentidos atribuidos, cargados de claras implicaciones políticas” (Nicholson, 1995: 62), la lengua española y la violencia sexual ejemplifican al detalle tal afirmación.

La evolución, por ejemplo, en las definiciones incorporadas en el DRAE sobre violencia sexual desde el siglo XIX, trasluce, del mismo modo, otras palabras y expresiones, la ideología del pensamiento, el contexto histórico e, incluso, se podría afirmar que “hasta los sentimientos de una determinada comunidad hablante” (Lledó, 2004: 11). De esta forma, siguiendo la lógica relacional entre el lenguaje, el discurso político, la norma y las políticas públicas (López, 2015), el DRAE es un ejemplo paradigmático de la “ideología patriarcal” (Amorós, 1985) en relación a lo que se entiende por violencia sexual. El DRAE, por supuesto, no es el único medio a través del cual se nombra la realidad, pero sí que es un instrumento más para comprender esa realidad que refleja las múltiples dimensiones sobre la categoría de la violencia sexual, así como del alcance que la definición tendrá para las víctimas.

La expresión “violencia sexual” no está en el DRAE, pero sí que encontramos definiciones detalladas sobre las manifestaciones de violencia sexual, que nos aproximan a cómo la RAE entiende su significado. La última edición (23ª. Edición) del año 2014, incorpora “agresión sexual”, “acoso sexual”, “abuso sexual”, “violación” y “violar” (DRAE, 2014). Hasta 2014 la RAE no define, sin embargo, la “violación” como un delito, omitiendo tal acción incluso en las ediciones de 1992 y 2001. Tampoco será hasta 2014 cuando la RAE incluya en la definición de “violación” el hecho que se comete “en contra de la voluntad” de la persona. Entre la edición de 1884 y la de 2001, la definición de violación se remite al verbo “violar”, “1. Acción y efecto de violar” (DRAE, 1884, 1925, 1992 y 2001), optando por hacer invisible el peso del delito y una de las características principales que identifican la violencia sexual desde la dimensión de vulneración de derechos humanos, frente al libre ejercicio de la sexualidad: el consentimiento.

En relación al verbo “violar”, se observa también un cambio de paradigma clave entre la definición de 1884 y la de 1925, con una impronta ideológica que contextualiza históricamente la idea patriarcal sobre lo que debe ser protegido. “Violar”, en 1884, es “Gozar por fuerza á una mujer, especialmente doncella” (DRAE, 1884). Se filtra así, a través de una definición, la jerarquía que la ideología y la estructura patriarcal establece entre mujeres y su bien máspreciado, la virginidad, condición implícita para el acceso al matrimonio. Se podría, incluso, hacer un paralelismo con resoluciones judiciales de la época, quizá por ello se refiere la definición a “especialmente doncella”, pues el daño se agrava si se considera que “la virginidad marca la frontera entre las mujeres que cuentan y las que no cuentan”, tal y como señala el historiador Geroge Vigarello (1998: 51) para el caso francés, pero también aplicable al caso español, como se ha descrito en el primer capítulo.

En relación al verbo “violar”, el juicio de valor sigue presente incluso en la descripción que se adjunta a la definición de 1992, en donde la “honestidad” mantiene su huella: “3. Por ext, cometer abusos deshonestos o tener acceso carnal con una persona en contra de su voluntad”. (DRAE, 1992)

Esta última definición desaparece de las ediciones de 2001 y 2014. Sin embargo, en ambas ediciones la descripción de “violar” conserva la expresión “acceso carnal” en el sentido de “tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se halla privado de sentido o discernimiento” (DRAE, 2001, 2014). La acepción de “acceso carnal”, en la cosmovisión sobre la violación, sigue manteniendo a día de hoy una noción de genitalidad, asociada a la penetración a través de la entrada genital del varón (falocentrismo). De esta manera, se obvia la introducción de otros objetos o partes del cuerpo, categorías claves para

entender la dimensión de la violación y desmontar la mitología en torno a ella, cuya realidad no comprende únicamente la penetración del órgano sexual masculino en el sentido clásico. La noción tradicional sí que se ha modificado, en parte, en la jurisprudencia española, al incluir en el artículo 179 del Código Penal<sup>68</sup> la introducción de otros miembros corporales u objetos, aunque manteniendo la expresión “acceso carnal”:

Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años.

*Código Penal. Artículo 179. 2015*

Llama la atención, sin embargo, que en las definiciones aportadas por Naciones Unidas —traducidas al castellano— no se hable, en ningún caso, de “acceso carnal” (OMS, 2002, 2005, 2011):

La violencia sexual comprende una gran diversidad de actos, como las relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de extraños, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, el acoso sexual (incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones escolares), los abusos sexuales de menores, la prostitución forzada y la trata de personas, los matrimonios precoces y los actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad.

*Organización Mundial de la Salud (2002: 21).*

Tampoco sucede con las definiciones ofrecidas por los tribunales internacionales al referirse a los actos constitutivos de delito de violación, refiriéndose en los términos de “invasión física de naturaleza sexual, por mínima que sea, utilizando cualquier parte del cuerpo u objeto, en cualquier orificio corporal, incluyendo aquellos no considerados como intrínsecamente sexuales” (Women’s Link Worldwide, 2011: 5).

La violación es una invasión física de naturaleza sexual, cometida sobre una persona bajo circunstancias que son coactivas [...] La violación sexual no está limitada a la invasión física del cuerpo humano y puede incluir actos que no suponen penetración o siquiera contacto físico.

*Caso Akaseyu. Tribunal Internacional para Ruanda (TPIR).1998*

Cabe entender que la RAE sigue considerando la penetración en la violación en el sentido clásico de la expresión, al omitir en la descripción aquello con lo que se puede

---

<sup>68</sup> La última modificación del Código Penal se produjo en abril de 2015.

producir el “acceso”, quizá bajo influencia inicialmente de la propia norma española y a día de hoy, de la concepción, aún estereotipada, de la violación desde la genitalidad.

Para finalizar con las aportaciones de la RAE a las definiciones sobre violencia sexual, habría que hablar de la tardía consideración de la institución en relación a las manifestaciones de violencia sexual más allá de la violación: la no incorporación de las definiciones de “agresión sexual”, “acoso sexual” y “abuso sexual” hasta la edición 22.<sup>a</sup> del año 2001. Hasta esa fecha, todas las violencias sexuales se significaban como violación, lejos, por tanto, de las múltiples violencias sexuales que existen, tipificadas incluso con anterioridad al año 2001 por el Código Penal español desde 1995.

Las descripciones sobre las que se ha indagado en relación a la violencia sexual, así como la ausencia o presencia de los distintos matices asociados a ellas, exponen un escenario, cuanto menos, significativo sobre cómo se expresa la violencia sexual desde la semántica española. Las deficiencias y ausencias justifican, en este momento de nuestra Historia, la necesidad de “conceptualizar para politizar” (Amorós, 2005). Un período en el que la expresión “violencia sexual” ni forma parte de los debates lingüísticos, ni las propias definiciones jurídicas que engloban la violencia sexual —acoso, abuso y agresión sexual— son capaces de ser diferenciadas por la sociedad (es probable que sólo la palabra “violación” pudiera ser distinguida del resto). En este sentido, al entender el feminismo como una teoría crítica (Amorós, 2008; Phillips, 2002), en los términos en los que expresa Amorós, a día de hoy, se presenta necesario “conceptualizar” la violencia sexual teórica y políticamente. Especialmente, si como apunta María Xosé Agra, “lo que está en juego es la vida humana” (2010: 19) y la dignidad de las víctimas visibles e invisibles.

Decimos por ello que conceptualizar es politizar. La teoría feminista, de este modo, hace honor al sentido etimológico de la palabra teoría, hacer “ver” en **g r u p o** , visibilizando lo que antes era “privado”, privado, entre otras cosas, de ser visto, de luz pública. (Amorós, 2008: 116).

La argumentación que realiza Amorós (2005) en relación a la necesidad nominativa del feminismo, para la cual utiliza como ejemplo las implicaciones políticas y sociales que supusieron dejar de nombrar “crimen pasional”, frente a la expresión “violencia de género” —originada esta última desde el propio movimiento y teoría feminista—, cambió el paradigma sobre el entendimiento de un tipo específico de violencia hacia las mujeres, frente a una expresión, que concebía la violencia de forma parcial, como asesinatos no importantes, aislados, diversos, o discontinuos. Tal definición, según Amorós (2005), fue

fundamental para que los casos de violencia hacia las mujeres fueran homologados y, por consiguiente, se contaran, tanto en términos numéricos como en forma de categoría. Llegando así al vocabulario público, al debate y al discurso político.

Siguiendo este argumento, si volvemos a la importancia y al valor de la proposición “conceptualizar es politizar”, incluso, como diría Agra Romero, como un “hacer ver, un hacer ver crítico, que interpele” (2010: 16), la teoría crítica feminista necesita nombrar la “violencia sexual”, engullida por la expresión “violencia de género”, tanto desde un punto de vista semántico, como político.

La violencia sexual —como en los años 70 y 80— tiene que ser urgentemente renombrada, ubicarla en el relato semántico y político, visibilizando la dimensión del daño físico y psicológico de esta gravísima vulneración de derechos humanos supone para la víctima y para la sociedad en su conjunto. Nombrar es la única forma de visibilizar al sujeto como víctima y superviviente, como sujeto cuyo objeto de protección será su dignidad humana.

**Evolución de las definiciones de “violación”, “violar”, “agresión sexual”, “acoso sexual” y “abuso sexual”  
en las cinco últimas ediciones de la DRAE**

	<b>12ª edición 1884</b>	<b>15ª edición 1925</b>	<b>21ª edición 1992</b>	<b>22ª edición 2001</b>	<b>23ª edición 2014</b>
<b>VIOLACIÓN</b>	f. Acción y efecto de violar.	f. Acción y efecto de violar	1. f. Acción y efecto de violar.	1. f. Acción y efecto de violar.	1.f. Acción o efecto de violar. 2.f. <i>Der.</i> Delito consistente en violar (l tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad).
<b>VIOLAR 2</b>	Gozar por fuerza á una mujer, especialmente doncella.	2. Tener acceso por fuerza con mujer.	2. Tener acceso carnal con una mujer por fuerza, o hallándose privada de sentido, o cuando es menor de doce años. 3. Por ext, cometer abusos deshonestos o tener acceso carnal con una persona en contra de su voluntad.	2.tr. Tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se halla privado de sentido o discernimiento	2.tr. Tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se halla privado de sentido o discernimiento.
<b>AGRESIÓN SEXUAL</b>			No se contempla la definición.	1. f. <i>Der.</i> La que por atentar contra la libertad sexual de las personas y realizarse con violencia o intimidación es constitutiva de delito.	1.d. Delito consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona empleando violencia o intimidación.
<b>ACOSO SEXUAL</b>			No se contempla la definición.	1. m. <i>Der.</i> El que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una persona cuando quien lo realiza se halla en posición de superioridad respecto de quien lo sufre	1.m.acoso que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una persona cuando quien lo realiza abusa de su posición de superioridad sobre quien lo sufre.
<b>ABUSO SEXUAL</b>			No se contempla la definición.	1. m. pl. <i>Der.</i> Delito consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin violencia sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento	1.m. <i>Der.</i> Delito consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin violencia o intimidación.

**Tabla 1:** elaboración propia a partir de las definiciones aportadas por la DRAE en la versión digital y de papel



## 2 | Aproximaciones teóricas al término y significado de la violencia sexual

---

### 2.1 Debates teóricos feministas

---

Desde la diversidad de disciplinas que han abordado de forma profunda la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones —psicología, sociología, historia, filosofía, derecho o ciencias políticas—, todas coinciden en considerar, como se viene insistiendo, que la violencia sexual no es un fenómeno “ahistórico”. Tal y como se ha constatado en el capítulo I de esta investigación, las fuentes historiográficas permiten situarla en distintos periodos de la Historia de la humanidad como parte del *continuum* de violencia (Kelly, 1988) que siempre se ha ejercido hacia las mujeres. No así, las definiciones y el debate teórico —más allá de los aspectos lingüísticos sobre los que ya se ha incidido—, que giran en torno al término, al significado y a sus características, han variado a lo largo de los siglos y de los últimos años, entre disciplinas, profesiones e incluso, dentro la propia crítica feminista.

Ana de Miguel describe (2007) tres momentos fundamentales en la construcción del marco feminista de interpretación sobre la violencia contra las mujeres: el siglo XIX, el feminismo radical de los años 60 y, aproximadamente, hacia los años noventa y principios del siglo XXI, cuando se produce la consolidación de un nuevo marco interpretativo en torno a la “violencia de género” (que en el caso español podemos situar a comienzos del año 2000). Siguiendo su evolución, la redefinición de “violencia de género” en esta tercera etapa sitúa la violencia hacia las mujeres como un grave problema social y político, que acompaña, durante todos estos años, la aplicación de nuevos marcos normativos y políticas específicas dirigidas a luchar contra la violencia de género desde distintos niveles: preventivo, punitivo y reparatorio.

Sin embargo, se podría concluir que la evolución es incompleta y no se corresponde con la realidad. En la última etapa, el feminismo se olvida de traducir correctamente lo que acaba de interpretarse: la violencia de género. Mientras que los laboratorios y nudos de redes feministas (2007: 131) —creadores de los nuevos marcos a los que hace referencia de Miguel, encabezados por los movimientos sociales, como claves para “las condiciones de la creación e innovación en el conocimiento” (2007:13)— dan paso a una histórica posición frente a la violencia hacia las mujeres, el nuevo marco conceptual —en el caso español y en el pensamiento occidental feminista, a excepción de América Latina— pierde de vista las demandas alcanzadas en los años 60 por el feminismo radical. La violencia sexual en todas sus manifestaciones desaparece del discurso y de la práctica política feminista, engullida por



la “violencia de género” y por una realidad legal y política que no se corresponde con lo que se espera de tal evolución. El avance deseado no se produce en los términos esperados, las víctimas y supervivientes de violencia sexual serán, hasta el verano de 2016 <sup>69</sup>, fantasmas invisibles del feminismo y del movimiento feminista.

La realidad de tal evolución no termina de ser auténtica, porque no podremos nunca hablar de violencia de género si se desatiende a la casi totalidad de sus víctimas, frente a una forma de violencia sistémica: las mujeres y niñas que, en espacios públicos, en entornos íntimos, en relaciones afectivas, en situaciones de máxima exclusión social, en las guerras, en las redes sociales o en internet, sufren acosos sexuales, abusos sexuales, violaciones grupales o torturas sexuales —de forma reiterada—, como parte del continuum de la violencia sexual que las mujeres soportan en todos los contextos sociales, políticos y culturales.

En este sentido, el marco interpretativo de esta tercera etapa tendrá, a pesar de no desearlo, consecuencias devastadoras para muchas de las vidas de las mujeres y de las niñas, cuyos responsables directos serán los agresores sexuales y el Estado patriarcal, incapaz en el siglo XXI —en el caso español— de hacer frente a uno de los grandes paradigmas de la violencia de género: la violencia sexual.

Un estudio acerca del debate político feminista desde diversas disciplinas —del discurso político<sup>70</sup>, así como del lenguaje jurídico que describe la violencia sexual desde el marco teórico feminista, como se apuntaba al inicio de este capítulo— será fundamental para examinar en la segunda parte de esta investigación la responsabilidad directa del Estado español, frente a la impunidad cotidiana que, a lo largo de todos estos años, enfrentan las víctimas de violencia sexual.

### 2.1.1 De la *Política sexual*, al “No es No”, a “mi cuerpo, mis derechos”.

La violencia sexual, como manifestación de la violencia hacia las mujeres, comenzó a ser examinada y considerada de forma relevante por la teoría crítica feminista, así como por el movimiento feminista a partir de los años 70 en los EEUU, de la mano de teóricas

---

<sup>69</sup> En verano de 2016 durante la celebración de las fiestas de San Fermín, una chica fue violada por un grupo de chicos con los que se encontró durante la noche. De forma inmediata, los agresores fueron puestos a disposición judicial (en febrero de 2017 siguen estando en prisión preventiva por los graves indicios identificados por el juez instructor del caso, a la espera de juicio). La noticia trascendió mediáticamente, mientras la respuesta del movimiento feminista y de la sociedad civil durante las fiestas se trasladó en una masiva concentración contra la violencia sexual y en apoyo a la joven. Desde el verano de 2016 hasta la fecha, la lucha contra la violencia sexual ha vuelto a estar dentro de las demandas del movimiento feminista en España. Véase imagen 2.

<sup>70</sup> Al hablar “discurso político” me refiero a las políticas públicas presentes en un estado o administración pública en un contexto determinado. Siguiendo a López Rodríguez, “El entendimiento de la política como discurso permite analizar cuál es el sujeto normativo de las políticas públicas” (López Rodríguez, 2015).

que establecieron en su análisis la evidente correspondencia entre su existencia y el sistema de opresión estructural que la permitía: el patriarcado. Durante los años 70 y 80 y hasta hoy día, la teoría feminista ha guiado su estudio como forma de violencia hacia las mujeres o violencia de género, a través de referentes obras clásicas de autoras feministas radicales como Katte Millett o Susan Brownmiller, consideradas sus obras por algunas autoras como hitos significativos en la consideración de la violencia contra las mujeres, como un problema social y estructural, y no como un problema individual (de Miguel, 2005). Ambas autoras desarrollaron conceptos y análisis que, a día de hoy, siguen presentes en los debates sobre la descripción de lo que se entiende por violencia sexual, fundamentales también en el discurso de los movimientos feministas anti-violación (anti-rape) de los años 70 y 80<sup>71</sup>, en la actualidad prácticamente olvidados<sup>72</sup> en la genealogía del movimiento feminista, que desde hace veinte años ha imbuido sus demandas en la generalización de la neutralidad que aporta la lucha contra la “violencia de género”:

“Observamos la violación, no sólo como un acto individual, también como una institución cuyo objetivo es contribuir a la dominación física y política de las mujeres”.

Carta de invitación para formar parte de la *Feminist Alliance Against Rape and Aegis* (30 de julio de 1974).

Las observaciones, en los años 70 y principios de los 80, se registran en un momento de la Historia en donde de forma casi exclusiva “la violación” se visibiliza principalmente como manifestación de la violencia sexual. No sin ello restarle la importancia crucial que tales obras implicaron frente a la histórica invisibilización de la violación, además del debate que nació a partir de aquí en torno a la violencia sexual y que guiará, de forma determinante, las leyes y políticas públicas futuras en este terreno, así como el actual sistema de asistencia y protección de las víctimas.

El análisis crítico, que el feminismo de los años 70 y principios de los 80 elabora en torno a la violación como manifestación de la violencia sexual, se enmarca en el contexto del exploración del patriarcado como sistema de opresión y reproductor de la discriminación

---

<sup>71</sup> *New York Radical Feminist* (NYRF), fundada en los años 70 por Shulamith Firestone y Anne Koedt fue una de las organizaciones que inauguraron en los años 70 el movimiento anti-violación (*anti-rape movement*). Otras organizaciones destacadas en los Estados Unidos durante esos años fueron *Bay Area Women Against Rape* (BAWAR) en Berkeley, California o el *Rape Crisis Center* en Washington D.C.

<sup>72</sup> En los EEUU, un país en el que el debate en torno a la violación ha tomado fuerza en los últimos cinco años, gracias a las voces del movimiento feminista estudiantil, como consecuencia de la alta prevalencia de la violencia sexual en los campus universitarios, la reflexión en torno al olvido del movimiento feminista anti-violación de los años 70, va calando en algunos entornos y medios de comunicación. Ver por ejemplo, Johnson, T (25 de noviembre de 2014). *College Rape and Radical feminism: the forgotten feminist roots of today's anti-rape activism*. *The Huffington Post*. Recuperado el 29 de junio de 2016, de <http://huffintontpost.com>.

hacia las mujeres. En *Política Sexual* (1975), Kate Millet conceptualizó el patriarcado<sup>73</sup> para describirlo como un sistema social y político en el cual los hombres ejercen el control y el poder sobre las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Apuntó, además, a un elemento esencial sobre el que pivotaría en el futuro el análisis de la violencia sexual, al referirse al cariz político, generalmente inadvertido, que el sexo revestía en las relaciones entre hombres y mujeres. La clásica y reconocida proclama de “lo personal es político” (Millet, 1975), sobre la que se construye la tesis central de este libro, se manifiesta en la violencia sexual a través de una de sus expresiones, la violación, apuntando en la dirección de que “en la violación por ejemplo, la agresividad, el desprecio y el deseo de ultrajar o destruir la personalidad ajena adopta un cariz ilustrativo de lo que es la política sexual” (Millet, 1995:102). Millet no realiza en *Política Sexual* (1975) ninguna descripción sobre la violencia sexual, pero sí que favorece, de forma determinante, el análisis sobre sus causas y objetivos. De esta forma, al definir las relaciones patriarcales como una cuestión política, el uso de la fuerza y el control de la sexualidad hacia las mujeres es una característica esencial de las sociedades patriarcales, una cuestión política de orden sexual (Kelly, 1988).

En 1975, Susan Bronwmler, en su obra de referencia *Contra nuestra voluntad: un estudio sobre la forma más brutal de agresión a la mujer*, bajo la firmeza de “establecer la historia de la violación” para “negarle un futuro” (1981: 389), realiza un análisis de la genealogía de la violación, a través de un meticuloso recorrido sobre la violación en los siglos XIX y XX, desde una óptica crítica hacia el pensamiento y las instituciones que lo sostienen, desmontando, entre otros, los mitos que la arropan. De forma categórica, inicia su recorrido en un primer capítulo señalando la paradoja recurrente y simbólica de la izquierda, al recordar como Marx, Engels, “sus colegas y discípulos que desarrollaron la teoría de la opresión de clases y pusieron palabras como *explotación* en el vocabulario cotidiano, permanecieron curiosamente mudos acerca de la violación” (1981: 11). La obra, a pesar de haber sido escrita en 1975, se reviste de una actualidad asombrosa en el análisis que realiza sobre todos los elementos estructurales que sostienen la violación en situaciones de guerra y paz. Entre otras de las muchas consideraciones de las que se ocupa: la violación, como arma de guerra y “como acto de guerra habitual” (1981: 30); el “matrimonio”, como institución mantenedora de la violación y domesticación de las mujeres al considerar que “la violación entró por la puerta trasera como un crimen de propiedad cometido por el hombre contra la mujer” (1981: 17); el pensamiento creador y sostenedor de los falsos mitos en torno a la violación, utilizado como dogma por referentes como Sigmund Freud y sus seguidores que avalaron “el principio de que las mujeres son masoquista por naturaleza y adoran la lujuria del dolor”.

---

<sup>73</sup> Para profundizar sobre el análisis que realiza Millet entorno al patriarcado como sistema básico de dominación sobre el que se construyen otros tipos de dominación, como la clase o la raza véase *Política Sexual* (1995), páginas 35-118.

En el análisis global de este trabajo, Brownmiller mantiene que la violación es el principal mecanismo por el que se perpetúa el dominio de las mujeres. El dispositivo a través del cual, haciendo un uso de la fuerza, se genera un clima de miedo que, aunque sólo les ocurre a algunas mujeres, permite que todos los hombres se beneficien del hecho de que algunos hombres violen.

La perspectiva que aplica Brownmiller de la violación se enmarca en la definición que ella misma aporta, en la que se incluye la propia finalidad a la que se apuntaba en el párrafo anterior:

“...desde los tiempos prehistóricos hasta hoy, la violación ha desempeñado una función fundamental. Se trata ni más ni menos que de un proceso consciente de intimidación, mediante el cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en situación de miedo” (1981: 14).

Amplía su definición en los últimos capítulos al referirse a la violación como “un ejercicio de poder” (1981: 245) que se mantiene, gracias a una estructura reconocida por ella, como el “marco institucionalizado” que opera del lado del violador, y en donde la víctima sale perdiendo, al “tener poca posibilidad de reparar el daño que se le ha hecho” (1981: 245).

En las concepciones que realizan algunas autoras como Brownmiller, la violación se “desexualiza” (Osborne, 2009: 57). Brownmiller la define sólo como un acto ligado únicamente al poder, y no al sexo. Una especie de acto no individual, sino colectivo, que afectaría a las mujeres como grupo (Sánchez, 2014). Desde el análisis contemporáneo actual, su enfoque podría plantear dudas. ¿Por qué entonces en las guerras, conflictos armados y situaciones de posconflicto, la violencia sexual se sigue utilizando como un instrumento de aniquilación? Si efectivamente no existiera una sexualización de la violencia, podría utilizarse simplemente la masacre como objetivo para eliminar al enemigo (Sánchez: 2014: 351).

En la misma línea que Brownmiller, apuntaron otras autoras como Susan Griffin que, además de considerar diez años más tarde que la violación no era un crimen sexual, sino un acto político violento, una forma de control que afecta a todas las mujeres, se atrevió a afirmar que la violación se hallaba incluida en todas las relaciones heterosexuales:

“...que los elementos de la violación están involucrados en todas las relaciones heterosexuales puede que explique porque los hombres a menudo sean identificados como el infractor de este tipo de delitos [...]. En nuestra cultura heterosexual el amor encuentra su expresión erótica a través de la dominación del hombre y de la sumisión femenina. Un hombre que obtiene placer a través de la violación de una mujer obviamente disfruta ejerciendo el poder tanto como de los simples placeres de la carne. El coito no se puede experimentar en solitario ” (1986: 8)<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Traducción propia.

En los años 80 la lucha contra la violación siguió manteniendo su espacio, tanto en los entornos académicos como en la calle. El análisis en torno a la violencia sexual amplió su campo de estudio y comenzaron, por primera vez, a incluirse otras manifestaciones de violencia sexual, como el acoso sexual o el abuso sexual infantil. En este escenario, la profesora Liz Kelly publica su estudio *Surviving violence* (1988), defendiendo la necesidad de una definición feminista de la violencia sexual a partir de su experiencia activista, que se apartará de los debates pasados liderados por las ciencias políticas y la sociología, centrados principalmente en el poder:

“Me di cuenta de cuantas mujeres habían experimentado más de una sola forma de violencia sexual a pesar de que cada una de estas formas esté aislada de la otra en los servicios de atención feministas, en las campañas y en las investigaciones” (1988: posición 126)<sup>75</sup>.

Su análisis no se libera del vínculo entre violencia sexual y poder, al considerar la evidencia de que la violencia sexual es uno de los múltiples factores en el mantenimiento de la opresión hacia las mujeres. Pero su definición se sitúa también desde un plano que incorpora el necesario análisis de la categoría sexual:

“Hay dos aspectos interrelacionados de la teoría feminista que conectan con el análisis de la sexualidad y la violencia masculina: el primero, la propuesta que establece que el control masculino sobre la sexualidad de las mujeres es un factor clave para la opresión de las mujeres; y el segundo, que la sexualidad, tal y como actualmente ha sido construida está basada en la experiencia y definiciones de los hombres, lo cual legitima el uso de la fuerza y la coerción en las relaciones heterosexuales” (1988: Posición 126)<sup>76</sup>

El estudio realizado por Kelly, le lleva a demostrar la existencia de conexiones particulares entre todas las formas de violencia sexual, concluyendo sobre la determinación de que ésta es un *continuum* y no necesariamente un episodio aislado. La violencia sexual es normativa y funcional, yendo más allá de las manifestaciones que incorrectamente se analizan de manera aislada. La violación, por ejemplo, como refiere Kelly, se encuentra en el extremo final de todo un espectro de acoso sexual e intrusiones íntimas. Ella misma se muestra crítica con la jerarquía establecida desde el análisis feminista en torno a las diferentes formas de violencia sexual, que lejos de ser entendida como un *continuum*, fácilmente discriminan otros tipos: “Mi punto de vista es que todas las formas de violencia sexual son serias, por lo que es inapropiado crear una jerarquía del abuso dentro del análisis feminista” (1988: Posición 1480)<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> Traducción propia.

<sup>76</sup> Traducción propia.

<sup>77</sup> Traducción propia.

La definición final que aporta Liz Kelly al debate feminista a cerca de la violencia sexual subraya ese *continuum* de violencia, al plantearla también a partir de las percepciones y visión de las mujeres en los siguientes términos:

“La violencia sexual incluye cualquier tipo de acto físico, visual, verbal o sexual que experimentado por la mujer o la niña, durante un momento específico o posteriormente, como una amenaza, invasión o agresión, que tiene el efecto de hierirla o degradarla y/o le quita la capacidad de controlar las situaciones de contacto íntimas”. (1988: Posición 828)<sup>78</sup>.

A finales de los años 80, Catherine MacKinnon, que ya desde los 70 había trabajado sobre el acoso sexual como una forma de discriminación por sexo<sup>79</sup>, escribió *Hacia una Teoría Feminista del Estado* (1989). Una obra que planteaba novedosas reflexiones alrededor de otros marcos conceptuales sobre la violencia sexual, contrarios a planteamientos de antecesoras como Bronw Miller.

MacKinnon sí que consideró desde el inicio que la sexualidad debía ser analizada como elemento clave en la violación. La violación, para ella, no se circunscribe en exclusividad a un ejercicio de poder en el que el acto sexual es insignificante. En la violación el significado del acto se enmarca en la relación que entraña el sexo y la dominación: “la violación no es menos sexual por ser violenta” (MacKinnon, 1995: 310). Le otorga a la sexualidad, de esta forma, una categoría política en la misma línea a la que apuntaba Katte Millet en su *política sexual*: “el sexo es una categoría sexual impregnada de política”.

La reflexión y la aportación conceptual que realiza en torno a la violencia sexual amplía matices significativos al marco conceptual, al realizar un análisis de la violación, del incesto, el acoso sexual, la prostitución o de la pornografía, entre otros. En todos los casos, la cuestión fundamental no era sólo hablar del uso de la fuerza o del consentimiento, cuando se produce, hay que señalar que todos ellos “son abuso de la mujer [...], son abusos del sexo” (MacKinnon, 1995: 199). La sexualidad es, por tanto, una forma de poder.

---

<sup>78</sup> Traducción propia.

<sup>79</sup> Catherine MacKinnon abogada, académica y teórica feminista, ha ejercido como letrada durante su carrera defendiendo a numerosas víctimas de violencia sexual. Sus primeras investigaciones en materia de violencia sexual, giraron en torno al acoso laboral (*sexual harassment*) como forma de discriminación hacia las mujeres. En los años 80 representó a dos estudiantes de la Universidad de Yale en el caso *Alexandre v. Yale*, conocido como el primer caso en los EEUU en el cual un alto tribunal reconoció que el acoso sexual ejercido contra dos mujeres estudiantes debería ser considerado como una forma de discriminación por sexo y por tanto ilegal. El caso abrió así la puerta, a través de un litigio estratégico de estas características, a que se comenzara a hablar de acoso sexual, lo que supuso que universidades como Yale tuvieran que protocolizar actuaciones contra el acoso sexual por razón de sexo. Catherine durante su defensa aplicó la teoría sobre el acoso sexual, disertada en el libro *Sexual Harassment of Working Women* (1979).

La relación entre sexualidad y poder se concreta en su teoría, al establecer la dominación sexual como base de la dominación masculina: “El dominio masculino es sexual. Un hombre en concreto, por no decir los hombres solos, sexualizan la jerarquía, y el género es una de esas jerarquías” (MacKinnon, 1995: 222). La erotización y sexualización de la violencia —lo que para MacKinnon son actos de dominio que se expresan como sexualmente excitantes (“como sexo propiamente dicho”)— se presentan de forma cotidiana en las relaciones sociales. Lo que hoy día se podría trasladar a la cotidianidad presente en la cultura de la violación, que asevera sin pudor la “fantasía de la violación” como una realidad presente en la fantasía sexual de algunas mujeres, defendida, incluso, desde filas de izquierdas, o titular en foros de relevantes medios de comunicación<sup>80</sup>.

Para MacKinnon, la teoría feminista debe incluir en su análisis la realidad sexual, adaptándola a sus propios términos, creando, de esta manera, una “teoría feminista de la sexualidad” que permita analizar el dominio masculino, para cambiar así el escenario al que se enfrentan las mujeres en todos los países del mundo. El feminismo como teoría crítica debe interpretar la sexualidad:

“...capturarla del mundo, en sus significados sociales situados [...], en su experiencia empírica experimentada, no sólo en los textos de la Historia, en la psique social [...]. El significado sexual no está formado sólo, ni siquiera básicamente, por palabras y textos”. (MacKinnon, 1995: 228).

El análisis de MacKinnon presenta nuevos matices sobre los que poder razonar acerca del significado de la violencia sexual dentro del sistema patriarcal, en todos los contextos sociales, políticos y culturales. Sus aportaciones derivan en incógnitas fundamentales sobre las cuales las feministas debemos reflexionar: ¿Debería ser la sexualidad central al análisis de la violencia de género y, por tanto, de una de sus manifestaciones, la violencia sexual? ¿Es la violencia sexual un instrumento de dominación clave dentro del patriarcado? ¿Es otra variable más de dominación y control del cuerpo de las mujeres intrínseco al patriarcado? o ¿Es, quizá, el elemento central por el que se sostiene el sistema patriarcal?

---

<sup>80</sup> “Violación, una fantasía muy femenina”. Titular foro 20 minutos. 2006

En este mismo sentido, son acertadas también las críticas palabras de Octavio Salazar Benítez dirigidas a la última película del director de cine neerlandés, Paul Verhoeven:

“...la historia del cine está llena de películas en las que se nos muestran agresiones y violaciones sexuales en las que las mujeres acaban reducidas a objetos silenciosos e incluso cómplices de la actuación degradante sobre sus cuerpos y su sexualidad [...]. Al contrario de lo que cabría esperar, *Elle* (*Ella*) entra en un círculo vicioso – libremente elegido, claro – en el que parece incluso disfrutar de los golpes, la violencia y el desprecio. Todo aparece además situado en el marco de un mundo burgués decadente y superficial en el que parece un valor romper determinadas reglas y dejarse llevar por las pulsiones... “*Tribuna feminista*”. “Elle” de Verhoeven, o la violada cómplice. 7 oct. 2106



Si efectivamente consideramos que el patriarcado sostiene la violencia sexual, el debate teórico feminista —y el movimiento feminista— conviene que urgentemente redefiniera uno de sus principales objetos de estudio y de denuncia de los últimos tiempos, y virase la dirección de una de las principales demandas en la agenda política feminista en relación a las alternativas que se plantean, para poner fin a la violencia hacia las mujeres.

La evidencia de los pocos casos que salen a la luz en relación a las violaciones grupales, abusos sexuales infantiles, agresiones sexuales a manos de miembros de la Iglesia, detenciones de pedófilos protagonizadas casi en exclusividad por varones o, las invisibles agresiones sexuales cometidas *offline* y *online*, de amigos, padres, maridos, novios, compañeros de trabajo o desconocidos, nos enfrentan ante un crimen de género indiscutiblemente intrínseco al patriarcado, transversal como estrategia de control, poder y dominación de los cuerpos de las mujeres, niñas y niños.

Aun así, la sexualidad sigue siendo tangencial al debate teórico feminista en su vertiente como forma de control y violencia. La sexología se presenta ciega al género y a la violencia sexual, obviando la sexualidad patriarcal justificadora de la violencia sexual representada cada día en medios de comunicación, redes sociales e internet. Una sexualidad disfrazada de erotismo, pero que esconde y traslada violencia sexual en sus distintas ramificaciones. Por eso, como refiere Beatriz Gimeno, la violación de San Fermín “describe una escena que es absolutamente corriente en la pornografía mainstream, violaciones grupales anales, vaginales y bucales a un tiempo en que la mujer viva y parece desearlo” (Mayo, 2017).

La clave sobre la que se construye el postulado de MacKinnon retoma veinte años después la *política sexual* (Katte Millet), como teoría política feminista centrada en la sexualidad que dé explicación a la desigualdad de los géneros, en el sentido de “postular no solo una teoría política de lo sexual que define el género, sino también una teoría sexual de lo político en el que el género es fundamental” (1995: 230). Al bucear en algunos aspectos de la sexualidad, tal y como hizo ella, como fue la necesidad de cuestionar el modelo de sexualidad aceptado como innato —“sui géneris”, “primaria”, “natural”, “prepolítica”, “no condicionado”, “heterosexual”—, se penetra así en las raíces de la violencia sexual y en todos esos elementos que, uno tras otro, conforman la estructura que justifica la violencia estructural y simbólica (Galtung, 2003).

En este sentido, la pornografía será para MacKinnon uno de esos medios que confecciona socialmente la sexualidad para transformarla en violencia sexual, al “construir a las mujeres como cosas para uso sexual y construye a los consumidores para que deseen desesperadamente a mujeres que desean desesperadamente la posesión y la crueldad y la deshumanización” (1995:245). El cariz político que le otorga a la sexualidad es tal que, en una entrevista realizada en 1992 para diario *EL PAÍS*, al referirse a la pornografía, la identificó



como “el fascismo diario de las democracias”. Un debate presente hoy más que nunca, en un momento de la historia en el que el consumo masivo de pornografía entre jóvenes a partir de los 8 años —derivado de la producción masiva de pornografía gratuita través de internet y diferentes plataformas digitales— plantea preocupantes incógnitas sobre la sexualidad y la violencia sexual, que ya adelantó el feminismo radical desde los años 60.

En la década de los 90 hasta hoy día, el debate feminista en torno a la violencia sexual pierde fuelle, desaparece de la academia y del movimiento feminista. Como ya se ha indicado, la lucha feminista específica contra la violencia sexual comienza a ser residualmente aislada del discurso político feminista, al ser absorbida por un gran número de estudios y demandas políticas encabezadas por la necesidad de luchar contra la violencia de género —*domestic violence*, como sorprendentemente aún se sigue nombrando en el contexto anglosajón— como categoría que engloba todas las violencias específicas que sufren las mujeres. La proclama feminista por excelencia en relación a los derechos sexuales y reproductivos, “mi cuerpo, mis derechos”, se centrará en exclusividad en aquellos derechos sexuales y reproductivos asociados a la interrupción voluntaria del embarazo o el uso de los métodos anticonceptivos, bajo proclamas históricas como: “¡Aborto libre y gratuito!”, “Las mujeres decidimos!”, “¡Decidir no es un delito!”, “¡Fuera el aborto del código penal!”, “¡Abortament luire y gratuit!”, “¡Safe legal abortions all women!”, entre muchas otras.

La propia Liz Kelly escribía sobre ello en marzo de 2008 en un medio inglés (*New Statesman*), denunciando el vacío en los siguientes términos: “La violación es virtualmente invisible en el feminismo, en la política y en las agendas públicas desde los años 90”<sup>81</sup>.

Ella misma se preguntaba por los motivos por los cuales esto estaba produciéndose, recordando que la violación había sido uno de los asuntos centrales del feminismo, “rape was a key feminist issue in the 1970”. Sorprendida en su artículo, aludía también a cómo el movimiento feminista —lo que De Miguel identifica claramente como la influencia de los movimientos en el cambio social, “el sentido común alternativo” (2008: 136)— consiguió grandes conquistas en esta materia a través de la creación de centros de atención especializados, líneas de telefónicas de atención o grupos de autoconciencia y defensa personal. Kelly hila muy bien sus palabras al señalar de qué manera el proceso permitió, desde la propia autoconciencia, descubrir que “el miedo y las amenazas a la violación afectaba las vidas de todas las mujeres”<sup>82</sup>. Al mismo tiempo, se conseguía también visibilizar los múltiples perfiles del agresor sexual, lejos de los mitos contruidos en torno a su figura: “destapamos

---

<sup>81</sup> Traducción propia.

<sup>82</sup> Traducción propia.

también las distintas caras de los violadores, en donde la mayoría eran angustiosamente familiares. Rostros con los que nos encontrábamos cada día de nuestras vidas”(2008)<sup>83</sup>.

¿Por qué había sucedido esto?, ¿por qué la violencia sexual desaparece del radar político mientras se convierte más aceptable invertir en *violencia doméstica*<sup>84</sup>?, se preguntó Kelly. Y, sobre todo, ¿qué consecuencias han supuesto estas negligencias?<sup>85</sup>. Las respuestas que aporta en su breve análisis corresponden a una realidad que podría trasladarse al caso español —sobre la que se trabajará en la segunda parte de esta investigación— durante los últimos 20 años. Siguiendo su explicación, las secuelas de esta inaceptable irresponsabilidad han desembocado en un rearme cada vez más evidente de una “cultura de la violación”. Todo ello se refleja, por ejemplo —entre otras formas, a través de una cultura heterosexual que reproduce, de forma reiterada, las condiciones en las que se genera el sexo coercitivo en cualquier lugar, y en donde las chicas jóvenes aspiran a ser objetos sexuales, incapaces de identificar la coerción sexual en sus prácticas sexuales, y dentro de un contexto que se continúa identificando a través del poder y de la noción esencialista de los deseos y necesidades sexuales masculinas (Kelly, 2008). En el terreno institucional, las consecuencias apuntan, a un abandono desde todos los sectores —político, social, médico, policial, jurídico— que, de forma metafórica, se identifica en los siguientes términos:

“La actitud de la sociedad hacia la violación, hacia los violadores o hacia las víctimas se pueden medir no tanto por los solidarios discursos de los responsables públicos, pero sí por la calidad de los servicios que no están disponibles...” (Liz Kelly. 2008)

## 2.1.2 El feminismo latinoamericano frente a la violencia sexual: Cuando nadie crea, ellas no dejan de hacerlo

Paralelamente a lo que sucedía en Europa, el movimiento y la política feminista en América Latina dirige —en un camino distinto, abanderando durante todos estos años— corrientes teóricas y marcos conceptuales sobre la violencia sexual. De la mano de su fuerte

---

<sup>83</sup> Traducción propia.

<sup>84</sup> Caber recordar que la expresión *domestic violence* es el término que se utiliza en el ámbito anglosajón para referirse a la violencia de género, incluso dentro de organizaciones feministas o expertas en la lucha contra la violencia de género. En los últimos años se está produciendo algunos avances en este sentido incorporando otras expresiones como “violence against women” (violencia contra las mujeres) o “gender based violence” (violencia de género), sobre las que organizaciones como Naciones Unidas o el Consejo de Europa ya se han pronunciado claramente a través de sus convenios, tratados internacionales y resoluciones especiales como la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer” (CEDAW) o el “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica” (Convenio de Estambul), así como a través de informes especializados de las relatoras especializadas, entre muchos otros documentos.

<sup>85</sup> Traducción propia.

movimiento feminista, insisten en no dejar de hacer hincapié en significar la violencia sexual como un acto político instrumental. Intrínseco al contexto social y político con el que conviven los países latinoamericanos durante sus cruentas dictaduras, procesos de transición democráticos o, a día de hoy, en algunos de sus fallidos estados, como es México.

A diferencia de las académicas y activistas europeas y anglosajonas <sup>86</sup>, las académicas y activistas latinoamericanas — como Rita Laura Segato (2003, 2006, 2011, 2012, 2014), Marcela Lagarde (2000, 2003, 2011) o Alda Facio (1992, 1995, 1999, 2008), entre muchas otras—, así como las organizaciones feministas latinoamericanas, serán las que durante estos años sigan produciendo materiales y artículos sobre el impacto de la violencia sexual en las vidas de las mujeres y niñas, disertando profundamente sobre el significado de la violencia sexual como apéndice de todas las violencia. Estas mismas activistas y académicas denunciarán en instancias internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comité CEDAW, Comité DESC, etc.) a los responsables directos de la instrumentalización de la violencia sexual en las dictaduras de los años 80, 90 y desde 2000 hasta hoy, en América Latina, así como en las situaciones de conflicto o posconflicto armado.

En este sentido, a pesar de algunos recientes retrocesos en esta materia significativos y preocupantes (El Salvador, Honduras, Brasil, México o Argentina), la respuesta del feminismo latinoamericano en los años 90 y 2000 ha permitido, en la última década, que se haya desarrollado, en muchos países, una mejora de los marcos normativos en materia de violencia hacia las mujeres y, de forma específica, en violencia sexual, ofreciendo una respuesta holística e interdisciplinar, frente a las diversas formas de violencia de género. Una tendencia que comenzó a fraguarse hacia 2007 en México, Venezuela, seguida por Colombia, Guatemala en 2009, por Argentina y Costa Rica en 2010, El Salvador en 2010, Nicaragua en 2012 y por Bolivia y la República Dominicana en 2013, frente al enfoque familista patriarcal que se impuso en la década de los 90 (Mugarik, 2017).

Recientemente, por ejemplo, el caso colombiano muestra grandes esperanzas, derivadas de las demandas del movimiento feminista, al incluir en su marco normativo y en sus políticas públicas, de forma específica, medidas dirigidas a la protección, atención y reparación para mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, acompañando, incluso, el enfoque interseccional de forma específica, prácticamente inexistente en el contexto español, hoy día.

---

<sup>86</sup> Algunas académicas norteamericanas e italianas como Claudia Card o Adriana Cavarero, producirán importantes obras dentro del escenario teórico de la teoría del mal disertando sobre violencia sexual, como las obra de Card, *The Atrocity Paradigm. A theory of Evil* (2002), *Confronting Evils* (2010), o la obra de Adriana Cavarero *Horrorism. Naming contemporary violence* (2001). Para profundizar en los debates contemporáneos sobre la “teoría del mal”, véase Sánchez, C. (2011). Sobre el mal y las violaciones masivas contra las mujeres. Aproximaciones desde filósofos contemporáneos. En Quesada, F. (Ed.). *Mujeres y guerra. Cuerpos, territorios y anexiones* (345-371). Buenos Aires, Argentina: Biblioteca Nueva.

“El principio de enfoque diferencial reconoce que hay población es con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque”.

Artículo 13. “Enfoque diferencial”. Ley 1448 de 2011 , por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y se dictan otras disposiciones.

“La presente ley tiene por objeto la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno. Estas medidas buscan atender de manera prioritaria las necesidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas”.

Artículo 1º. “Objeto de la Ley”. Ley 1719 de 2014

“Contribuir a la garantía, protección y el ejercicio pleno de los derechos a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas”

Objetivo General de la CONPES. 2013. Política Pública para la prevención de riesgos, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

A pesar de ello, bien es cierto que la existencia de la norma no garantiza su cumplimiento. En la mayoría de los países latinoamericanos, a día de hoy, subyacen numerosos factores estructurales, sociales, culturales y políticos, que indican que no se han producido las transformaciones deseadas. La violencia patriarcal en América Latina persiste, en mayor o menor escala, en cada país, representada por altos índices de feminicidios<sup>87</sup> y de impunidad en torno la violencia sexual. Incluso, como apunta Segato (2014), la violencia sexual está mutando a través de nuevas formas de guerra sobre el cuerpo de las mujeres —de “bajo nivel de formalización” (2014: 151)— caracterizadas por “la ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados” (2014: 147).

En relación al análisis conceptual y significativo que la antropóloga Rita Laura Segato aporta a lo largo del siglo XXI, su análisis sobre la violencia sexual, y de forma concreta sobre la violación, desnaturaliza y desexualiza cualquier atisbo que desde otras disciplinas

---

<sup>87</sup> La expresión “feminicidio”, que aparecerá a lo largo de esta investigación, utilizada en los términos en los que se refiere la antropóloga y teórica feminista Marcela Lagarde, en relación al “fenómeno global y particular del asesinato de mujeres como parte de una *política sexual*” (Atencio, 2015: 18): “en castellano feminicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa homicidio de mujeres. Por eso, para diferenciarlo, preferí la voz feminicidio y denominar así al conjunto de violaciones de los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que, estos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad” (Lagarde, 2009: 215).

El *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*, lo incluyó en la 23.ª edición de 2014, acotando su descripción en los siguientes términos “1.m. Asesinato de una mujer por razón de su sexo”.

e interpretaciones se haya podido realizar en torno ella. La violación es un “dispositivo”<sup>88</sup>, ni mucho menos es consecuencia de patologías individuales, ni siquiera “es el resultado autónomo de la dominación masculina ejercida por los hombres” (Segato, 2003: 13). En esta línea, plantea la violación como instrumental, en el sentido de jugar un papel inevitable en la reproducción de la “economía simbólica del poder”, “un acto necesario en los ciclos regulares de restauración de ese poder” (2003: 13). La violación es un “mandato” propio de la dominación masculina a la que ella misma se refiere: “el sujeto no viola porque tiene poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe tenerlo” (2013: 40).

Resulta muy interesante la definición y división conceptual que establece al referirse a la violación. La violación la identifica en los siguientes términos: “uso o abuso del cuerpo del otro, sin que participe con intención o voluntad comparables” (2003: 22). Lo que se traduce en una ausencia de la categoría “consentimiento”, que se diluye en “intención o voluntad comparables”, mientras la categoría “sexualidad” a diferencia de MacKinnon, ni aparece. Segato deja claro que “aunque la sexualidad proporcione el arma o instrumento para perpetrar la agresión, el ataque no es propiamente del orden sexual” (2003: 41).

Insistirá, años más tarde, sobre ello desde el análisis que realiza en relación a la violencia sexual en los contextos políticos y sociales actuales, en un momento en el que, según ella, se están desarrollando nuevas formas de guerra sobre el cuerpo de las mujeres, designadas como guerras de “bajo nivel de formalización” (Segato, 2014: 151). La forma en cómo éstas se cometen será mediante acciones paraestatales dirigidas por grupos o corporaciones armadas —facciones, bandos, maras, *gangs*, mafias, grupos tribales o estatales—, entre las que incluye los agentes de seguridad pública, que usan a las mujeres a través de diferentes formas sexualizadas de agresión, caracterizadas por la truculencia o por actos de extrema crueldad sobre el cuerpo de las mujeres. La “pedagogía de la crueldad” (2014: 151), tal y como ella misma la designa, será, por tanto, la estrategia utilizada para reproducir el sistema.

Recuerda claramente que este tipo de agresiones no son crímenes de motivación sexual, son “crímenes de guerra” (2014: 152). Para Segato la designación de “crímenes sexuales” forma parte de una estrategia clara del Estado, dirigida a banalizar este tipo

---

<sup>88</sup> Para Foulcault (1977) un dispositivo es una red, “un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a los no- dicho. El dispositivo es la red que pueden establecerse entre estos elementos” (García Fanlo, 2011: 1).

de violencia. Realmente lo que se están produciendo son “crímenes de guerra” en un contexto de nuevas formas de conflictividad “propios de un continente de paraestatalidad en expansión, ya que son formas de violencia inherentes e indisolubles de la dimensión represiva del Estado contra los disidentes y los excluidos pobres y no-blancos” (Segato, 1024: 152).

Ante las dificultades que entraña trasladar la experiencia sobre la que diserta Segato al contexto europeo, incluso español. A pesar de las diferencias políticas, culturales y sociales entre continentes —teniendo en cuenta la complejidad y evolución de determinados países de América Latina, en los que el capitalismo mafioso antidemocrático y militar ha propiciado el desarrollo de la paraestatalidad y de formas extremas de crueldad sexual sobre el cuerpo de las mujeres, manifestadas de forma diferente al caso europeo, sin embargo—, sí que podemos decir que en Europa, y en España, a día de hoy, se producen ejemplos y formas de acción paraestatal adaptados a contextos democráticos, dirigidos a utilizar los cuerpos de las mujeres a través de diferentes formas de “agresión sexualizada” (Segato, 2014), como medio e instrumento de control patriarcal.

Así, la trata de mujeres con fines de explotación sexual acompaña la realidad de forma normalizada en nuestra cotidianidad, dirigida, en la mayoría de las ocasiones, por grupos u organizaciones en constante guerra por el control de los cuerpos de las mujeres, del tráfico de armas y de estupefacientes. La trata con fines de explotación sexual<sup>89</sup> y la prostitución forzada, como manifestaciones extremas de la violencia sexual —y, por tanto, vulneración de derechos humanos—, acampan en nuestras calles y barrios, en polígonos industriales o en grandes eventos, bajo la connivencia de Estados incapaces de hacer frente al crimen organizado, que controla este próspero mercado mundial cuyos réditos, según estimaciones, alcanzan beneficios mundiales de 100.000 millones anuales, y de 18.000 millones, en el caso español (Fundación Scelles, 2012). Desde 2014 la “prostitución” (sin distinciones entre la que se corresponde con trata o prostitución forzada y la que se ejerce sin coacción) ha sido incorporada al PIB (indicador relativo al tamaño y evolución económica de un país) en el Estado español, junto con el tráfico de drogas.

---

<sup>89</sup> No existen datos oficiales realizados sobre el número de personas víctimas de trata con fines de explotación sexual en el Estado español. Los únicos datos son los que proporcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad, derivadas de operativos de dismantelación de redes criminales. Las Organizaciones No Gubernamentales estiman la existencia en nuestro país de más de 45.000 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. En 2015, según datos del Ministerio del Interior, a través de la Guardia Civil, se realizaron 42 operaciones relacionadas con la explotación sexual, en las que fueron detenidas 72 personas y se encontraron 209 personas explotadas sexualmente (el 98% mujeres). Sólo el 1% de las mujeres eran españolas (Guardia Civil, 2015).

### 2.1.3 Nuevos paradigmas en la significación feminista de la violencia sexual: los años 90 y el cambio de siglo.

Desde los años 90 en adelante, de forma paralela al trabajo que realizan organizaciones internacionales de derechos humanos —Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o las Cortes Penales Internacionales de Derechos Humanos—, el feminismo académico anglosajón y latinoamericano producirá literatura significativa en relación a la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones, principalmente desde su consideración en las situaciones de conflicto armado y posconflicto, coincidiendo con el desarrollo que en esta materia realiza el derecho penal internacional, el derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones feministas abanderarán también una lucha encaminada a visibilizar la magnitud e instrumentalidad de la violencia sexual en los conflictos armados o dictaduras como Yugoslavia, Ruanda o Guatemala —entre otras—, en el intento persistente por evitar significar la violencia de forma neutral, identificar la especificidad de género que adquiere, además de denunciar la violencia sexual como estrategia y táctica en todas las guerras.

La necesidad de determinar y sacar a la luz —de forma reiterada hasta nuestros días— las diferentes manifestaciones que adquiere la violencia en situaciones de conflicto armado o posconflicto, se produce como resultado de las demandas efectuadas por el feminismo teórico y político, dirigidas a desmontar el discurso patriarcal que apuesta por una neutralidad deliberada de la violencia, incluso ante situaciones de violencia incuestionables, como son las guerras. En este sentido, resulta paradigmático —tal y como señala Sánchez (2014), siguiendo a Seyla Benhabib (1990)<sup>90</sup>— cómo el “universalismo sustitutorio” se ha colado, incluso, en los propios estudios del “mal contemporáneo”, en los que han prevalecido las experiencias y narrativas masculinas de hombres como Primo Levi o Víctor Frankl, frente a las experiencias femeninas —tal y como se señaló en el primer capítulo también para el caso español—, convirtiendo el daño masculino en universal y, arrinconando las experiencias o violencias específicas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres y por tanto, “oscureciendo la vulnerabilidad sexual de éstas” (Sánchez, 2014: 347) en las guerras, conflictos armados y situaciones de posconflicto.

---

<sup>90</sup> Cit. por Sánchez. 2014: 347



A través del análisis de género, sobre los estudios relativos “al mal” —referidos a la violencia sexual masiva en los conflictos armados—, los estudios sobre violencia política— de forma concreta, los análisis que sobre violencia de género se han realizado desde distintas disciplinas: Filosofía, Ciencias Políticas, Antropología, Psicología o Sociología—, así como gracias a las investigaciones *in situ* que realizan las ONG —en un escenario que abarca desde los años 90 hasta nuestros días—, se ha dotado de especificidad la violencia frente a la falacia de su neutralidad. Ello ha permitido “reconceptualizar” (Sánchez, 2014: 349) la violencia extrema para proporcionar significados acordes con lo que la descripción de los hechos denota cuando son narrados. La violencia extrema sexual adquiere así nuevas connotaciones cuando se la nombra en base a términos como “mal radical”, “atrocidad”, “horror”<sup>91</sup>, o “crueldad”. (Sánchez, 2014).

La propia literatura específica sobre ello ha ampliado a lo largo de los años su marco conceptual, hasta llegar a comprender que la violencia sexual, tanto en las guerras formales como en las “nuevas formas de guerras” (Segato, 2014: 147), no se corresponde únicamente con la violación de los cuerpos de las mujeres como arma de guerra. La violencia sexual trasciende la violación: el “paradigma del mal” (Card, 1990) se torna en otras formas de violencias sexuales, como son la planificación reproductiva forzada, la esclavitud y la explotación sexuales, la prostitución forzada, el abuso sexual, el embarazo forzado, el aborto forzado, el contagio de infecciones de transmisión sexual, el acoso sexual, las mutilaciones sexuales o la desnudez pública forzosa o humillación sexual (tal y como han identificado las organizaciones feministas (Corporación Sisma Mujer, 2013) o las propias resoluciones judiciales en países como Colombia, a través de su Corte Constitucional<sup>92</sup>. La conceptualización bien definida de las categorías indicadas como parte del actual desarrollo normativo, tanto a nivel nacional como internacional, avanza la politización del problema, situando así en la agenda pública de numerosos países las demandas del movimiento feminista.

A pesar de que durante este periodo muchas teóricas centran su análisis en los matices de la violación en los contextos de guerra, el feminismo seguirá reflexionando sobre la significación de la violación como parte de la trama y estructura patriarcal en la que se desarrolla. Se insta así a identificar la violación como una “institución” que afecta, no sólo a sus víctimas de manera individual, sino a todas las mujeres como conjunto, como clase, como colectividad. El daño se produce en las todas las mujeres como grupo (Whisnant, 2013).

---

<sup>91</sup> La filósofa Adriana Cavarero en su análisis sobre la violencia actual, defiende nuevas concepciones terminológicas, como “horrorismo” para referir las formas de violencia contemporáneas deshumanizantes, descarnadas, crueles o caracterizadas por un horror desmedido. Su análisis es muy apropiado porque lejos de centrar la reflexión desde la perspectiva de quien infringe la violencia, lo hace a través del dolor de la víctima, de su despersonalización, deshumanización y vulnerabilidad. (Cavarero, 2011)

<sup>92</sup> Auto 092 de 2008.



El objetivo de la violación queda cada vez más constreñido como práctica política dirigida—tanto en la paz como en la guerra— a reforzar la subordinación de las mujeres en los múltiples contextos. Se podría retomar así uno de los argumentos centrales de Bronwmliller, según el cual no hay motivos para establecer diferencias entre la violación cometida en situaciones de conflicto o en consolidadas democracias:

“En guerra no se viola para otras razones diferentes a las que se viola en época de paz, simplemente se viola sin más. No se viola entonces para ofender a los varones enemigos, sino para ofender a las mujeres que son siempre, desde la óptica patriarcal, el enemigo de los hombres” (González Suárez, 2014: 57).

Una tesis que, sin embargo, no termina de dar explicación a la instrumentalidad que persigue el abuso sexual infantil cuando se comete contra niños en contextos de paz, u otros elementos claves que son distintos a cuando se viola en la guerra. Tengamos presente el concepto de “obligatoriedad” (2014: 58) a la que se refiere González Suarez, que sí que establece una diferencia importante. En las guerras violar es un mandato, una obligación, mientras en contextos de paz, aunque la violación tenga el mismo objetivo que cuando se comete en un conflicto armado, no es una obligación a la que deben de responder el conjunto de los hombres que conforman una comunidad.

Al reforzarse la idea de la violación como práctica política ilustrativa del patriarcado —a través de la cual las ideas sobre el género y la sexualidad son expresadas, inscritas y consolidadas gracias a la “violación” y al control de los cuerpos de sus víctimas—, al mismo tiempo se introducen en el debate nuevas consideraciones en torno a su significación, lo que nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de pensar la violación como una institución terrorista. En esos términos se pronuncia Card (1991, 2010) y otras autoras como Burgess-Jackson (1996).

Según Burgess-Jackson (1996) la violación confirma que “las mujeres son para los hombres: para ser usadas, dominadas, tratadas como objetos”<sup>93</sup>, lo que enfatiza el rol que la violación entraña: controlar los cuerpos de las mujeres y, a través del miedo que infunde, controlar su conducta, al mismo tiempo. Para algunas feministas como la propia Burgess-Jackson, se puede llegar incluso a establecer una analogía entre la violación y el linchamiento como formas de control dirigidas a aterrorizar a un grupo social determinado<sup>94</sup> (2000). De esta forma, Card refiere la violación como una “institución terrorista” y, aunque admite sus diferencias en relación a los actos formalmente etiquetados como terroristas, considera que su objetivo final es, como en el terrorismo, mantener a las mujeres en una situación de subordinación, con el objetivo de aterrorizar a un grupo determinado de población.

---

<sup>93</sup> Cit. Por Whisnant, 2013. Traducción propia.

<sup>94</sup> *Ibid.*

Así como sucede en todos los terrorismos, la violación tiene dos objetivos: las víctimas directas y la población en general, que será manipulada a través del miedo, obedeciendo por tanto a las demandas que la institución terrorista espera y que, de otra forma, rechazarían. En términos de violencia sexual, la amenaza que infunde el miedo se traslada al control y escrutinio de la libertad de las mujeres: qué llevan, dónde van, con quién van, qué beben, con quién beben.... Mensajes que, de forma indirecta, se envían a la sociedad en general y a los hombres en concreto, garantizando así que sigan correctamente las normas no escritas que deben gobernar el comportamiento femenino. De esta manera, se incita a distinguir “las malas chicas”, que pueden ser violadas, de “las buenas chicas”, a las que hay que respetar. En este contexto, añade Card, “incluso las mujeres que se conforman con estas reglas y no sienten miedo de ser violadas, han sido aterrorizadas con ello” (Card, 1991)<sup>95</sup>.

La perversidad de la ecuación de la institución terrorista de la violación establece, además, otras categorías de inclusión y exclusión dirigidas a mantener el control al que obedece. Otra característica fundamental de este sistema es que desarrolla un “chantaje de protección” (Card, 1991) en el que se ven involucrados directamente los hombres, también categorizados en los términos de “buenos hombres” o “malos hombres”. Los primeros serán los que protejan de los segundos a las mujeres que merecen esa protección, que a su vez, serán las que estén conformes con las reglas de la feminidad patriarcal. En caso contrario, las mujeres a las que no se les ofrece tal protección o la declinan cuando se proporciona, de manera recurrente, son culpabilizadas de ser violadas. De forma paralela, como indica Card, las reglas de la institución conceden a los “protectores” —maridos, novios o “puteros”— acceso sexual a las mujeres que protegen. Por lo tanto, nada de lo que suceda dentro de esta protección es considerado violación (Card, 1991)<sup>96</sup>.

Aun así, la visibilización de la violencia sexual como “núcleo” central, y no como parte de los alrededores de la guerra (González, 2014), sigue siendo un tema residual en el presente, tal y como se puede comprobar en el caso español, en un momento en el que la información mediática que nos llega sobre la Guerra de Siria es muda a la violencia sexual que las mujeres, las niñas y los niños están sufriendo, no sólo en el propio país, también en su travesía como refugiadas —en origen, en tránsito y en llegada— hacia otros lugares. El “universalismo sustitutorio” se manifiesta nuevamente representado, tanto en las medidas que la comunidad internacional adquiere para proteger los derechos humanos de las víctimas, como en la posición que las organizaciones no gubernamentales afrontan a la hora de denunciar y documentar lo que está sucediendo en Siria. Llama la atención, por ejemplo,

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

que desde que comenzara la guerra (2011), sólo dos organizaciones de derechos humanos en España —*Amnistía Internacional* y *Alianza por la Solidaridad*<sup>97</sup>— hayan denunciado la violencia sexual que están sufriendo las mujeres y las niñas —a través de informes e investigaciones rigurosas—, no sólo en el país, también durante las travesías hacia otros países o en los campos de refugiados habilitados.

Es todavía aún más llamativo cómo ACNUR, de forma muy puntual, ha denunciado a través de comunicados su preocupación por “los testimonios creíbles que han recibido sobre abusos a mujeres y menores refugiados e inmigrantes en su desplazamiento a Europa”, cometidos por traficantes durante las esperas nocturnas en las fronteras, en los caminos, en las estaciones de tren o en los centros de internamiento de los países de tránsito (ACNUR, 2015)<sup>98</sup>. La portavoz de ACNUR en España se refería en los siguientes términos a estas evidencias en una entrevista realizada al diario EL MUNDO (2015): “Es un tema muy sensible que puede provocar rechazo de las familias y culpabilización de las víctimas”<sup>99</sup>. Una afirmación de estas características —así como la ausencia de estudios específicos sobre el trauma e impacto de la violencia sexual en la Guerra de Siria— demuestra cómo ésta sigue siendo ciega y no prioritaria a los ojos de la comunidad internacional, que al final deposita la responsabilidad en la denuncia de las familias o de las víctimas, y no en su deber de prevenirla, actuar y denunciarla en cualquier contexto. Como sucedió en otros conflictos armados, de forma permanente, la violencia sexual en la guerra —y de forma específica cuando es cometida contra población civil— se sigue entendiendo como un delito privado, a pesar de que desde 1995 fuera considerada por la comunidad internacional como una forma de tortura, incluso cuando ésta es cometida por particulares.

En los estudios que se proyectan durante estos años, una parte de la crítica feminista incluye otro de los temas fundamentales a la hora de entender —tanto en la guerra como en la paz— las dinámicas sobre las que opera la violencia sexual: el racismo. Según la crítica feminista interseccional, una categoría invisible al enfoque realizado por algunos

---

<sup>97</sup> AMNISTÍA INTERNACIONAL (2016). *Quiero un lugar seguro. Mujeres refugiadas de Siria desarraigadas y desprotegidas en Líbano*. Índice: MDE 18/3210/2016; Spencer, R. A., J. Usta, A. Essaid, S. Shukri, Y. El-Gharaibeh, H. Abu-Taleb, N. Awwad, H. Nsour, Alianza por la Solidaridad, United Nations Population Fund-Lebanon and C. J. Clark (2015). *Gender Based Violence Against Women and Girls Displaced by the Syrian Conflict in South Lebanon and North Jordan: Scope of Violence and Health Correlates*, Alianza por la Solidaridad.

<sup>98</sup> Los agresores son también de forma reiterada invisibilizados en las investigaciones sobre violencia sexual en la Guerra de Siria. Aunque se insiste en indicar como agresores sexuales a los traficantes, algunas las organizaciones documentan agresiones sexuales a manos de otros refugiados o de policía de frontera.

<sup>99</sup> Para más información sobre esta noticia véase: ACNUR (2015). Preocupación en ACNUR por los testimonios de abusos y violencia sexual contra mujeres y niños refugiados en Europa. Recuperado el 6 de marzo de 2017, desde: <http://www.acnur.org/noticias/noticia/preocupacion-de-acnur-por-testimonios-de-abusos-y-violencia-sexual-contra-mujeres-y-ninos-refugiados-en-europa/>

feminismos, consecuencia de la tendencia a abordar la raza y el género como categorías de análisis mutuamente excluyentes (Crenshaw, 1989). En el caso español —supuesto que se ejemplificará en la segunda parte de esta investigación—, la práctica plasma una ausencia de políticas interseccionales en materia de igualdad, violencia de género y violencia sexual. Todo ello convergerá en un abanico de medidas prohibitivas, por ejemplo, para las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual, que serán castigadas como consecuencia de su estatus administrativo, en caso de querer denunciar algún tipo de violencia sexual<sup>100</sup>.

Aunque el enfoque interseccional comenzó a ser introducido a finales de los años 80 como un “término heurístico, dirigido a centrar la atención en las dinámicas vehementes de la diferencia y en las solidaridades de las semejanzas en el contexto de la antidiscriminación y de los movimientos sociales políticos<sup>101</sup>” (Cho, Crenshaw & McCall, 2013), el enfoque interseccional ha ido lentamente ocupando un lugar fundamental en la inevitable obligación de ampliar el campo de visión feminista, identificando los distintos tipos de discriminación que cruzan al género y producen formas específicas de privación de derechos, como se comprueba a través del análisis de las distintas manifestaciones de violencia hacia las mujeres (Naredo & Tardón, 2017).

El enfoque interseccional y el marco teórico feminista que lo sustenta (Crenshaw, 1989; Marion Young, 1990; Collins, 1990; Curiel, 2005) —aún poco conocido en la práctica política de las ONG españolas y organizaciones que trabajan en violencia de género—, establece la premisa de concebir la realidad ineludible de entender que el género no puede estar separado de otros ejes de opresión, como la raza, la étnia, la clase social, la identidad y orientación sexual, la edad o la diversidad funcional. Las palabras de la feminista brasileña Sueli Carneiro en 2001, ejemplifican la profundidad del análisis que desde finales de los años 80 comienzan a desarrollarse en este campo:

---

<sup>100</sup> La *Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género* equipara la violencia de género únicamente a la violencia que se comete en el entorno de la pareja o expareja, de esta forma las mujeres en situación administrativa irregular víctimas de cualquier otra forma de violencia sexual fuera del entorno de la pareja o expareja quedan desamparadas e incluso sancionadas, al no existir ninguna figura de protección específica sobre ellas, como sí sucede en el caso de las víctimas de trata con fines de explotación sexual o las migrantes víctimas de violencia de género en el entorno de la pareja (*Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009*). Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular que decidan acudir a una comisaría a denunciar se encontrarán con la posibilidad de que se le incoe un expediente de expulsión o se la sancione por la situación administrativa en la que se encuentran.

<sup>101</sup> Traducción propia.

“Si el feminismo debe liberar a las mujeres, debe enfrentar virtualmente todas las formas de opresión. Desde este punto de vista se podría decir que un feminismo negro, construido en el contexto de sociedades multirraciales, pluriculturales y racistas-como son las sociedades latinoamericanas- tiene como principal eje articulador al racismo y su impacto sobre las relaciones de género dado que él determina la propia jerarquía de género de nuestras sociedades (...)”<sup>102</sup>.

Otras feministas como Iris Marion Young (1990), desde su enfoque teórico, plantea entender la diferencia como una categoría política y social, no limitándose, como nos recuerda Silvina Álvarez (2001), a la diferencia sexual ni de género. Young apunta al hecho de que “todo proyecto político tenga en cuenta las diferencias en todas sus formas: racista, étnica, religiosa, de clase, etc.”. En este sentido, “propone una teoría que, sin renunciar a la idea de las mujeres como grupo, incorpore la pluralidad y la diferencia dentro de ese grupo (Álvarez, 2001: 271). El género, para Young marcará la vida de todas las mujeres, sin que ello implique renunciar a la identidad, en el sentido de que “los rasgos de conjunto no necesariamente deben asumirse como rasgos de identidad” (Young, 1995)<sup>103</sup>, como la misma autora indica, “la identidad de ninguna mujer individualmente considerada (...) estará libre de las marcas del género, pero el modo en que el género marque su vida es personal” (Young, 1995)<sup>104</sup>.

Teóricas feministas, como la propia Liz Kelly (1988) analizaron también a finales de los años 80 la violencia sexual bajo el prisma de la “violencia sexual racista” (“sexual racist violence”), incorporando la crítica realizada por el feminismo negro y de color al feminismo blanco, que consideraba el significado de sexualidad desde un prisma diferente al de las feministas blancas, de clase media y de países occidentales, recordando que “la sexualidad no tiene el mismo significado para las mujeres en todas las culturas, o para todas las mujeres en una cultura particular”(Kelly, 1988: posición 600). Esta crítica, según Kelly, no interpela en ningún caso la importancia de la sexualidad en las relaciones de género, pero reivindica el hecho de que otras formas de discriminación sean el principal foco a analizar en determinados grupos de mujeres.

Retomando las palabras de Ruth Hall, Kelly recordaba que otras formas de opresión son experimentadas por las mujeres negras, en donde múltiples niveles de opresión se instauran en una totalidad compleja, “para las mujeres negras, las agresiones de hombres blancos se funden en violencia racial y sexual” (Ruth Hall, 1984)<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> Cit.por Ochy, 2005: 7.

<sup>103</sup> Cit.por Álvarez, 2001: 272.

<sup>104</sup> Ibidem.

<sup>105</sup> Cit.por Kelly, 1988: posición 600.

Durante los siguientes decenios, el análisis interseccional será incorporado desde los diversos organismos de derechos humanos, central a las observaciones que desde estos instrumentos se realicen en relación a las diversas dinámicas que operan en el ejercicio de la violencia sexual. En 2001 la “Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación, Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” incorporaba así, la interconexión de las discriminaciones en los siguientes términos:

“Estamos convencidos de que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las mujeres y las niñas, y pueden ser factores que llevan al deterioro de sus condiciones de vida, a la pobreza, a la violencia, las formas múltiples de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos humanos (...).”

Durban (Sudáfrica). 2001

#### **2.1.4 El feminismo español frente a la violencia sexual: de la mordaza franquista a las luchas feministas**

Las aportaciones teóricas del movimiento y práctica política feminista que se realizan desde España, se enmarcaron, durante los primeros años de la transición democrática, dentro del contexto político y cultural específico de nuestro país. Todo ello implicó que las reivindicaciones feministas en materia de violencia sexual se pospusieran a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Con anterioridad a 1975, las feministas españolas no existían como movimiento estructurado organizado, independientemente de algunas actuaciones individuales que se emprendieron en la peligrosa sombra de la dictadura.

Durante los primeros años de transición democrática, el movimiento feminista centró su lucha en demandas políticas concretas encaminadas a posibilitar reformas adaptadas a la democracia. Encauzó su lucha en conseguir la amnistía de las mujeres presas, la despenalización del aborto, la sexualidad libre o el derecho a un aborto libre y gratuito.

A lo largo de estos años, tras la lectura de algunas entrevistas realizadas a destacadas activistas del momento, se observa que la violencia sexual es uno de los temas necesariamente abordados. Dentro del resto de reivindicaciones por las que pasa la reflexión y actuación feministas, la violencia sexual se trata de forma paralela a otros temas como son: “la mujer y la educación”, “la mujer y el trabajo”, “la situación jurídica de la mujer” o la “sexualidad”,

sobre la que se enmarca el debate alrededor de la violación como forma de dominación masculina (González, 1979). La reflexión en torno a la violencia hacia las mujeres se encuadra así únicamente desde el plano de la violación, el resto de violencias apenas son consideradas. Se advierte también, al igual que sucede en otros países, un análisis de la violencia sexual de manera acotada a la cuestión de la “violación” en términos clásicos. Otras formas de violencia sexual no se nombran, ni se planean dentro de la cuestión de la discriminación, dominación masculina y relaciones patriarcales.

Las respuestas que durante esos años ofrecen destacadas activistas —Carlota Bustelo, Carmen Alcalde, Noemí Juantonrena o Empar Pineda— se engloban en una percepción de la violación en la que fluyen desde posicionamientos considerablemente revolucionarios: cómo luchar contra ella, junto con reflexiones aún ancladas en imaginarios esencialistas sobre los varones y la violación, o relativas a la responsabilidad de las víctimas (en el matrimonio) a la hora de impedir una violación.

“Creo que se deberían realizar campañas en contra de la violación para que el tema tenga más repercusiones públicas y sea más duramente combatido. Se deberían abrir también centros donde pudiese acudir la mujer violada a buscar ayuda física y psíquica y pudiera recibir una orientación y los medios para llevar su caso judicialmente”.

Testimonio Noemí Juantonrena (González, 1979: 114)

“Pienso que una de las causas de las violaciones es la represión sexual tan fuerte que hemos sufrido en nuestro país, que ha creado verdaderos frustrados y reprimidos sexuales”.

Testimonio Noemí Juantonrena (González, 1979: 117)

“El proceso es largo. Primero, hay que conseguir que quien tenga deseos de realizar el acto sexual lo pueda realizar sin necesidad de violar a nadie, y hay que conseguir que el hombre no se sienta especialmente excitado cuando una mujer se le resiste...”.

Testimonio de Empar Pineda (González, 1979: 112)

El debate se engloba, a diferencia de otros países, en un contexto de post dictadura —“El tema de la violación es un tema complicado [...] porque la derecha lo utiliza constantemente para decir lo mala que es la democracia”. Carlota Bustelo. 1976: 111—, que lo sitúa, precisamente, en un escenario en el que, por primera vez en 40 años, se habla de la violación dentro y fuera del matrimonio. Ello supone incorporar matices profundamente novedosos, en cuanto a las medidas que el movimiento feminista considera que deben de ser implementadas, en la línea sobre la que ya estaban trabajando las norteamericanas: creación de centros específicos de apoyo a las mujeres violadas, incremento



de las penas para los agresores, sensibilización social, realización de campañas... y preocupación por el impacto y relación que la incipiente pornografía podría estar implicando en este terreno:

“Es importante crear lo que se llaman Centros de Mujeres, que ya existen en otros países donde realmente toda mujer que se vea agredida puede ir a pedir ayuda o simplemente a descansar, a recuperarse, donde sepa que además la va a ayudar clínicamente”.

Testimonio Carlota Bustelo (González, 1979: 113)

“Creo que la única lucha que podemos establecer, abierta y clara, es concienciar a los hombres, concienciar a las mujeres de que no se dejen violar en la cama por su marido”.

Testimonio Carlota Bustelo (González, 1979: 113)

“En nuestro país, en este momento, si hay algo que me produce profunda irritación es el aumento de la pornografía [...]. Esto, como mujer, como feminista, me produce una indignación tremenda”

Testimonio Carlota Bustelo (González, 1979: 116)

Las demandas del movimiento feminista a lo largo de los años 80 y 90, en materia de violencia sexual —como parte de su agenda por los derechos sexuales y reproductivos—, no terminan de materializarse ni en políticas públicas, ni en medidas legislativas específicas, más allá de las modificaciones del Código Penal, o las que se producen dentro de la propia jurisprudencia. En el entorno jurídico, paulatinamente se va ampliando la significación de las violencias sexuales en tipificaciones concretas, bajo lo que, por fin, se considerarán “delitos contra la libertad sexual”. Aun así, el patriarcado judicial se resiste a ampliar la significación de la violación, tal y como el feminismo reclama desde sus orígenes. La primera sentencia en España que admite la posibilidad de violación en el matrimonio no se produce hasta 1996:

“1.- La violación entre cónyuges es perfectamente posible; 2.- No puede esgrimirse el ejercicio legítimo de un derecho; 3.- El llamado débito conyugal se opone radicalmente a la dignidad y libertad de la víctima”

Sentencia del Tribunal Supremo, 15 de diciembre de 1996

Del mismo modo sucede con otros escenarios y víctimas históricamente invisibilizados como posibles a la agresión sexual. Durante los años 80, es tan escasa la jurisprudencia española en contra de que una prostituta pueda ser violada (De Vicente, 2001: 86), que el Tribunal Supremo debe pronunciarse categóricamente sobre ello en 1994:

“Conviene también destacar desde la óptica de la igualdad entre hombre y mujer, la no discriminación por razones profesionales o de la actividad social desempeñada y el valor constitucional de la dignidad humana (art. 10.1 de la Constitución España), la imposición violenta del acto carnal a una



prostituta merece el mismo reproche que el que imponga por igual medio a cualquier otra persona, por lo que dicha condición de la mujer no impide la existencia del delito de violación, ya que aquella conserva su autonomía de voluntad en disponer libremente de la sexualidad”.

Sentencia de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de marzo de 1994

La resistencia ideológica patriarcal no establecerá hasta 1989 —*Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal*— la sustitución del término “honestidad” por “libertad sexual” (De Vicente, 2001):

“Respetar la idea de que las rúbricas han de tener a expresar el bien jurídico protegido en los diferentes preceptos, lo que supone sustituir la expresión “honestidad” por “libertad sexual”, ya que ésta es el auténtico bien jurídico atacado.

Preámbulo

“Se sustituye la palabra “honestidad” por “libertad sexual”.

Artículo 338 bis, párrafo primero.

De forma paralela a los cambios que se van sucediendo en el terreno normativo, en los años 80 y 90, la preocupación por la violación como instrumento de control de los cuerpos de las mujeres sigue en la agenda del movimiento feminista español, tomando las riendas de cara a la asistencia y protección a las víctimas. Por fin, en 1986 se fundará en Madrid la primera asociación de asistencia a víctimas de violación: “Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas”, por entonces presidida por Carmen Roney, diputada del PCE en la Asamblea de Madrid. Durante su primer año de funcionamiento, la asociación tuvo constancia de forma directa e indirecta, de 214 casos de violación en la Comunidad de Madrid (*El País*, 1986): “Cualquier mujer es susceptible de ser violada [...] la violación produce secuelas que van a perdurar en el tiempo”. Roney, Carmen. *EL PAÍS* (14 de noviembre de 1986).

Los equipos responsables de la asistencia inmediata a las víctimas —jueces/as, juzgados o policía— comienzan a tomar conciencia de la especialización necesaria requerida en este tipo de delitos. Tal y como queda documentado a través de la prensa de la época —apostando por “una inmediata atención policial, jurídica, médica y psicológica a las mujeres que sufren agresiones sexuales” (*El País*, 1987) —, se proponen las primeras experiencias piloto de coordinación entre operadores jurídicos y la propia Asociación. A pesar de los avances que parece que se están produciendo, la visión cercana a la agresión sexual sigue encasillando la violación en términos tradicionales: uso de la fuerza y penetración.

Las palabras que se recogen de algunas entrevistas realizadas a profesionales ajenos al feminismo imprimen una ideología patriarcal cargada de categorías morales:

“...no sólo para examinar la posible desfloración sino también las señales de lucha o ansiedad. García Andrade aconseja a las violadas que aguanten el asco y eviten lavarse antes de ser examinadas por el forense, como medida necesaria para la recogida del semen, vello o pelo del violador, esenciales para indagar su identidad”.

“Experiencia piloto para atención inmediata a las víctimas de agresiones sexuales”.

*El País*. 1987

En otras partes del territorio español, la prensa de la época documenta la constitución de asociaciones dirigidas a prestar asistencia a las víctimas de “agresiones sexuales”<sup>106</sup>, sin apenas apoyo económico por parte de las administraciones públicas del momento, y que en el futuro verán cómo su continuidad dependerá, casi en exclusividad, de las subvenciones estatales<sup>107</sup>. Algunas asociaciones, incluso en sus inicios, ponen a disposición de las víctimas teléfonos privados o el uso de domicilios privados para atender las mujeres (ADAVAS, 2010).

La respuesta inmediata ante la violencia sexual sigue manteniéndose abanderada por el movimiento feminista. Los “nudos de redes feministas” (De Miguel, 2007: 131), invocando al patriarcado socializador como causa principal de la violencia, se pronuncian en este sentido, conscientes de la necesidad de “modificar los contenidos de la sociedad patriarcal que las mujeres sufrimos y que conlleva, imprescindiblemente, la reeducación de los hombres para que aprenda a relacionarse de otro modo con las mujeres” (María Prieto, presidenta de *la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de León*, 1991).

Las asociaciones de mujeres en los años 80 y 90 quedarán aglutinadas en la *Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Violadas* (1992), presentándose como las únicas alternativas ante el miedo que infunden violadores mediáticos como Andrés Mayo (“El violador del chándal”) o Arlindo Luis (“El violador de Pirámides”), conscientes, al mismo tiempo, de que las agresiones sexuales, en su gran mayoría, no se producen precisamente a manos de desconocidos. A pesar de

---

<sup>106</sup> En el año 1986 se crea el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) de Madrid; en 1987 en Cantabria se funda el Centro de Atención de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato Infantil en Cantabria (CAVAS-Cantabria); en 1991 en León se pone en marcha la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Castilla y León (La Crónica, 1991) que cambia su nombre a ADAVAS (Asociación a Víctimas de Agresiones Sexuales) en 1997; en 1991 se crea la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente /Associació d'Assistència Dones Agredides Sexualment (A.A.D.A.S) de Cataluña; en 1994 se funda AMUVI en Andalucía; en 1994 se funda la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género (ADAVAS) de Salamanca; en 1994 se constituye el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) de la Comunidad Valenciana y en 1994 se constituye la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (ADAVASYMT) de Valladolid.

<sup>107</sup> Según la memoria de actividad de la Asociación ADAVAS, entre 1991 y 2010 el 60% de los 81% de los recursos económicos provienen de administraciones públicas (59%, de la Administración del Estado y 22% de la Administración Económica). El resto de asociaciones, no tienen actualizadas sus cuentas y relación de fondos, en las memorias anuales públicas disponibles en el sitio web de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. Como aparece reflejado en su web, la financiación depende de subvenciones de entidades públicas como el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a cargo del IRPF y algunas donaciones particulares.

ello, el debate se sigue focalizando en la violación en mujeres adultas, sin concederse atención a la agresión o al abuso sexual infantil y al acoso sexual laboral o la explotación sexual, a pesar de ser categorías ya tipificadas en el ordenamiento jurídico español desde el Código Penal de 1995<sup>108</sup>.

De la asistencia necesaria y crucial que prestan las asociaciones feministas no emanan, sin embargo, investigaciones concretas y científicas de las propias organizaciones, que son las principales conocedoras de la globalidad del problema y de las secuelas que la violencia sexual entraña para las víctimas. El día a día de la asistencia integral se prevé como el principal obstáculo en la elaboración de artículos científicos o publicaciones rigurosas sobre la práctica diaria del trabajo que realizan. La producción se traduce en alguna publicación residual<sup>109</sup>, colaboraciones dentro de informes o, publicaciones específicas sobre estudios relativos a la violencia de género, guías de atención o folletos informativos<sup>110</sup>.

De manera paralela, en el ámbito académico la producción científica en materia de violencia sexual es muy escasa<sup>111</sup>. Algo a significar, teniendo en cuenta el análisis que referentes feministas hacen de la totalidad del sistema patriarcal, de las relaciones de poder que se desarrollan en él y, de forma específica, de la violencia hacia las mujeres como parte de un sistema que legitima ideológicamente la subordinación de las mujeres a manos de los hombres, (Amorós, 1990, 1992, 1998; Valcarcel, 1997; Bosch, 1999, 2000, 2002, 2006; Ferrer, 1999, 2002, 2006). A diferencia de otros entornos académicos como los EEUU, América Latina o Inglaterra, no existe ninguna obra referente que, de forma específica, aborde la violencia sexual desde un marco teórico feminista en nuestro país.

Los estudios más relevantes en estos años —hasta el presente— se circunscribirán a la Psicología, Medicina y Ciencia Forense o Derecho, teniendo en cuenta que los primeros estarán liderados desde la academia con perspectiva meramente clínica. En este sentido, hay que destacar las obras del catedrático de psicología clínica Enrique Echeburúa —también enmarcadas en el contexto “violencia familiar” o de los “abusos sexuales a la infancia” (1996, 1998, 2001, 2002, 2004, 2005)—, o los trabajos de Jorge Corsi (1987, 1994, 1995, 1996, 2003)<sup>112</sup>, citado de forma

---

<sup>108</sup> Capítulo II. De los abusos sexuales (artículo 181, artículo 182 y artículo 183); Capítulo III. Del acoso sexual (artículo 184). Capítulo V (artículo 185, artículo 186). Capítulo V. De los delitos relativos a la prostitución (artículo 187, artículo 188, artículo 189 y artículo 190).

<sup>109</sup> La asociación AMUVI publica en 2001 el trabajo “La violencia sexual, un problema cercano, una solución posible”, ganadora del Premio de Investigación para la Mujer de la Diputación de Sevilla.

<sup>110</sup> “Guía a la seguridad de las mujeres que viven y viajan en Europa” (AMUVI, 2000).

<sup>111</sup> Caben destacar en los últimos años, las publicaciones de la Profesora de Filosofía del Derecho, Encarna Bodelón (Universidad Autónoma de Barcelona) y del *Grup de recerca Antígona* de la UAB.

<sup>112</sup> Se da la terrible paradoja de que Corsi fue detenido en 2008 por formar parte de una red de pedofilia. Inmediatamente fue suspendido de su cargo de Director del Departamento de Violencia Sexual de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y acusado de “*corrupción de menores y abuso deshonesto y estupro*” en 2009. Hasta el año 2012 no reconoció su culpa, lo que supuso que fuera condenado a tres años de prisión. Ver, por ejemplo, Lipcovich, P (24 de julio de 2008). “El detenido que nadie pudo imaginar”. *Página12*. Recuperado el 10 de marzo de 2017, desde: <https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-108374-2008-07-24.html>.

repetida por ser en Argentina y en España, durante muchos años, un claro referente para los equipos psicosociales de atención a las víctimas de violencia de género y sexual, en el estudio de la raíz de la violencia y los abusos sexuales.

En España, desde finales de los años 90, la lucha encarnecida del movimiento feminista por la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género focalizó el debate de la violencia de género, exclusivamente, en el entorno íntimo. La violencia sexual se fue lentamente diluyendo como demanda específica, como categoría política y como lucha concreta. Finalmente, el 28 de diciembre de 2004 —hito histórico dentro de la historia del movimiento feminista español— el Congreso español aprobó, por unanimidad, la *Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, lo que supuso enterrar de la agenda pública, mediática, social y feminista la lucha contra la violencia sexual.

Desde entonces hasta hoy, la violencia sexual se ha ceñido tímidamente a acciones y medidas concretas que se han implementado desde las propias asociaciones de mujeres feministas, o de derechos humanos de atención a víctimas de violencia sexual<sup>113</sup>, cada vez más precarizadas por la escasa financiación que focaliza los presupuestos en la atención e intervención en la violencia machista en el entorno íntimo. Consecuencia, asimismo, de la crisis económico-financiera mundial del año 2008 que, de forma determinante, asola España hasta el presente.

En la última década, la violencia sexual se significa, principalmente, en el terreno de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sin prestar atención a otras formas de violencia sexual acometidas fuera del entorno de la explotación sexual: la agresión sexual o el abuso sexual en espacios de ocio, espacios públicos, a manos de familiares, en el entorno íntimo o en el ámbito laboral. Tímidamente, las secretarías de la mujer de los sindicatos liderarán algunas medidas concretas de prevención, sensibilización o acompañamiento frente al acoso sexual laboral, destacando las publicaciones de estudios, guías, protocolos sectoriales, o la defensa de casos ante instancias judiciales en el marco de la aprobación de la *Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres*<sup>114</sup>.

---

<sup>113</sup> Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Violadas, la Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid (trabaja abuso sexual e incesto) o Creación Positiva en Cataluña.

<sup>114</sup> Comisiones Obreras. (2001). *Guía de acción sindical frente al acoso sexual*; Comisiones Obreras. *Tríptico sobre acoso laboral, sexual y por razón de sexo u orientación sexual*; Comisiones Obreras (2008). *Guía sindical frente al acoso por razón de género*; Comisiones Obreras (2016). *Guía para la elaboración de un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral*; Unión General de Trabajadores. *Tríptico sobre el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo*. Unión General de Trabajadores. (2006). *Guía sobre el acoso sexual en el trabajo*. Unión General de Trabajadores. (2007) *Guía Práctica. Identificación de casos de acoso sexual y por razón de sexo*.

Paralelamente a la academia, al Estado y a los marcos teóricos en los que se engloba el nuevo marco interpretativo en torno a la “violencia de género” (de Miguel, 2007), sólo algunas organizaciones de derechos humanos internacionales —como *Amnistía Internacional*, *Save the Children* o *ACSUR Las Segovias*<sup>115</sup>— increparán la tendencia generalizada con publicaciones muy puntuales específicas, dirigidas a denunciar, en el marco de sus misiones, la ausencia de medidas estatales encaminadas a proteger a las víctimas de violencia sexual, frente a la vulneración de derechos humanos que esta forma de violencia supone.

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 guiará al movimiento feminista, y a diferentes grupos políticos representados en el Congreso, en el propósito de conseguir la implementación adecuada de la ley, condicionando el “sujeto normativo de las políticas públicas”, único sujeto que durante todos estos años “recibirá atención, visibilidad y recursos públicos” (López, 2015: 166): las mujeres víctimas de violencia de género con exclusividad al entorno de la pareja o expareja. La hoja de ruta quedará así definida por el Artículo 1 de la ley.

“1.- La presente Ley tiene por objetivo actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligado a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”

Artículo 1. Objeto de la Ley. 2004

## **2.2. La impronta teórica de la normativa internacional, regional y nacional a la violencia sexual**

Las aportaciones teóricas, que la normativa internacional, regional y nacional han realizado en el marco de la violencia sexual, han supuesto en los últimos decenios un punto de inflexión determinante en la interpretación, no sólo de los tipos penales dirigidos a perseguir la violencia sexual, sino, de forma paralela, en la significación de la gravedad de estos delitos, en su consideración como crímenes de género, así como en relación al daño individual y colectivo que infieren a sus víctimas.

Desde un plano teórico, a partir de los años 90, el derecho internacional humanitario, el

---

<sup>115</sup> *Amnistía Internacional*. (2009). España. “Una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de violencia de género: violencia sexual y trata de personas”; *Save the Children*. (2012). “La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar. Un análisis de casos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos”; *ACSUR Las Segovias*. (2011). “Tras el espejo del capitalismo global. Violencia sexual al otro lado: el cuerpo visible. Jaque a la reina”.

derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos han jugado un papel crucial en la conceptualización específica de los delitos de violencia sexual, gracias al desarrollo del marco normativo concreto, así como a su evolución jurisprudencial, evidenciando la magnitud de los hechos y de las múltiples raíces en las que se manifiesta en todas sus formas y contextos. A pesar de ello, la consideración jurídica específica de los delitos de violencia sexual no se corresponde aún con una responsabilidad real, y toma de conciencia en los términos que las normas imprimen. La atrocidad que encarna, en cada una de sus formas (Card, 2002), sigue pasando desapercibida para la comunidad internacional, para los Estados y para sus responsables<sup>116</sup>.

Tales consideraciones vienen precedidas de una larga crítica feminista sobre la desatención que el patriarcado ha otorgado a los derechos humanos de las mujeres en el propio y paradójico marco conceptual de los derechos humanos. La tipificación de los derechos humanos de las mujeres y, con ello, la necesaria especificidad de la vulneración de éstos en el marco del derecho internacional, han merecido, desde el feminismo, un análisis minucioso a partir de distintas disciplinas. De forma reiterada, se ha identificado la maniquea influencia que la aparente neutralidad de los principios y normas del derecho internacional (Charlesworth, 1999) han implicado en la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres, y en la visibilización concreta de sus vulneraciones específicas.

Teóricas jurídicas feministas (Mackinnon, 1989; West, 2000; Facio y Fries 1999; Charlesworth, Chinkin y Wright, 1991; Barlett y Kennedy, 1991; Charlesworth, 1999; Bodelón, 2010; Edwards, 2011) han destacado la privación de los derechos humanos desde que, en su concepción inicial, fueran pensados como un particular del universo masculino. Así lo ilustran, por ejemplo, las diferentes teorías de la justicia liberales basadas en los derechos de los individuos, que han venido construyéndose a partir de la noción del individuo-hombre como agente moral y relacional, desprovisto de las características que le dotan de singularidad.

---

<sup>116</sup> En 2009, *Amnistía Internacional* a través de su Informe “*Whose justice? The women of Bosnia and Herzegovina are still waiting*” (Index: EUR 63/06/2009) denunciaba que tras catorce años desde el final de la guerra en Bosnia y Herzegovina (1992-1995), en la que se cometieron violaciones y crímenes de violencia sexual en escala masiva, aún a las mujeres violadas durante la guerra se las seguía negando sus derechos. En 2012, nuevamente *Amnistía Internacional* publicaba el Informe “*Old Crimes Same Suffering. No justice for survivors of wartime rape in north-east Bosnia and Herzegovina*” (Index: EUR 63/002/2012), haciéndose eco de los escasos avances que se habían realizado para garantizar los derechos a la justicia, verdad y reparación de las mujeres y niñas víctimas de las violaciones masivas que se produjeron en los años de la guerra. En el veinte aniversario del fin de la guerra, en 2015, las organizaciones de mujeres de Bosnia y Herzegovina y otras organizaciones internacionales, denunciaban como entre 2005 y 2014, habían llegado a los tribunales menos de un centenar de casos, frente a los aproximadamente 20.000 y 50.000 casos documentados (Informe 2014/2015. *Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo*. 2015).

Otros ejemplos y situaciones más actuales en los que la violencia sexual sigue siendo un delito olvidado por la comunidad internacional serían Nigeria, en donde el secuestro y violación sistemática de niñas y mujeres a manos de Boko Haram sigue siendo una práctica persistente evidenciada por organizaciones como *Human Rights Watch* (ver informe “*Those Terrible weeks in their Camp. Boko Haram Violence against Women and Girls in North Nigeria*”. 2004); la situación de las mujeres en Afganistán, donde las víctimas de violencia sexual pueden ser juzgadas penalmente por “delitos contra la moral” pudiendo ser ejecutadas en los conocidos como “crímenes de honor” (ver documento, “*Afghanistan: Surge in Women for “Moral Crimes”*”. *Human Rights Watch*. 2013), o la actual y sangrienta Guerra de Siria, en donde se ha documentado como las mujeres refugiadas de forma sistemática sufren agresiones físicas y explotación sexual en durante el camino que las lleva a llegar a Europa a manos de agentes estatales y no estatales, tal y como denunció *Amnistía Internacional* en su reciente informe “*Quiero un lugar seguro. Mujeres refugiadas de Siria desarraigadas y Desprotegidas en Líbano*”. 2016 (Index: MDE 18/3210/2016).



En este sentido, la ética feminista ha interpelado las éticas universalistas que descansan en la consideración del individuo como un ser racional y abstracto, que no es, ni mucho menos, un modelo de individuo sexualmente neutro, sino asociado al varón en su globalidad.

Frente al “otro generalizado”, —ejemplificado en el mismo transcurso de la normativa y jurisprudencia específica en materia de violencia sexual en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, y que representa la perspectiva adoptada por las éticas universalistas— Seyla Benhabib apuesta por el “otro concreto” (Benhabib, 1990), aquel que considera a todos los individuos como seres racionales dotados de una identidad individual, de una historia, una sexualidad y una constitución afectivo-emocional específica (Sánchez, 2009).

La crítica al universalismo masculino en el marco de los derechos humanos, se configura y consolida desde la propia de teoría jurídica feminista, que desde los años 70, a través de sus distintas tendencias jurídicas -el feminismo jurídico liberal, el feminismo jurídico radical, el feminismo jurídico cultural, el feminismo jurídico socialista y el feminismo jurídico posmoderno (Bodelón 2010)- ha ido conformando toda una base teórica dirigida a diseccionar la teoría del derecho, que desde sus orígenes, como recuerda Facio y Fries, convirtió la diferencia sexual en una desigualdad legal, en perjuicio de la mujer (1999: 21).

Juristas feministas como Robin West, a finales de los años 80, se refería a la teoría del derecho (la teoría liberal y teoría crítica) como “esencial e irreparablemente masculina” (2000: 71), en el sentido de que “ni los valores”, “ni los peligros” que caracterizan la vida de las mujeres están reflejados “ni en los contratos, ni el derecho de daños, ni en el derecho constitucional, así como en ningún otro campo de la doctrina legal” (West, 2000: 155). Un teoría del derecho, cuyos beneficiarios y autores son para West, exclusivamente masculinos, obviando por tanto las experiencias, necesidades y especificidades de las mujeres, mientras se da respuesta a través de la norma a los intereses y necesidades de los hombres “como universales al ser humano y no como propias de la mitad de los sujetos de derecho (Facio y Fries, 1999: 27)”.

Las juristas teóricas feministas han expuesto las consecuencias que el derecho patriarcal ha supuesto para las vidas y cuerpos de las mujeres, desplegando los matices que acompañan lo que algunas han considerado en llamar, “la teoría masculina del derecho” (West, 2000: 158). Al hacerlo, han tocado el corazón de una de las instituciones patriarcales más consolidadas de todas en el mantenimiento y reproducción del sistema patriarcal. Algunas juristas como Alda Facio y Lorena Fries, consideran incluso, que el poder del derecho en cuanto al “disciplinamiento de género”, es mayor que el de otros sistemas normativos satélites al sistema patriarcal, como el social y el moral (1999).

La crítica feminista a la “teoría masculina del derecho”, a la “teoría patriarcal del derecho” (West, 2000), al “derecho masculinista” (Facio y Fries, 1999), o al “derecho y la justicia androcéntricas” (Bodelón, 2010), ha marcado un hito fundamental dentro de la propia teoría feminista, al desenmascarar el patriarcado oculto detrás del derecho, perpetuador a lo largo de la Historia, a través del sistema normativo, de las relaciones de poder y de forma específica, reproductor de las relaciones de poder sobre las mujeres (Facio y Fries, 1999).

La aportaciones de las teorías jurídicas feministas han acompañado cambios fundamentales, al ofrecer opciones encaminadas a garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, siendo las artífices, gracias al diálogo con otras disciplinas feministas, de alternativas normativas dirigidas a hacer frente al derecho patriarcal, legitimador del control y uso de la fuerza sobre los cuerpos de las mujeres. Aquel que por ejemplo ha castigado y castiga la violencia sexual a manos de extraños, pero que incluso en democracias consolidadas como la española, se resiste a penalizar la violencia sexual en el entorno íntimo (agresiones y abusos sexuales de maridos, padres, amigos y/o hermanos), como se presentará en esta misma investigación.

En el marco de los derechos humanos, la crítica ha evidenciado la invisible consideración de los derechos humanos de las mujeres en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, materializada en diferentes aspectos que, de forma evidente, han determinado y siguen determinando la protección de los derechos humanos de las mujeres y, por tanto, la identificación concreta de las vulneraciones de derechos que históricamente enfrentan. En este sentido, el feminismo destaca amplios vacíos significados en las múltiples ramificaciones que desarrolla el marco internacional de los derechos humanos, que ocupan, desde la ausencia de las mujeres y sus voces en la mayoría de los procesos de toma de decisiones e instituciones en el derecho internacional, la omisión de los derechos de las mujeres en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como la materialización concreta de forma privilegiada en las normas del derecho internacional de los derechos humanos, de la realidad y vidas de los hombres. De esta manera, se ignoran o marginan las experiencias y “voces femeninas” concretas, y la vulneración de derechos específicos de las mujeres. A todo ello se une otra crítica fundamental, aquella que interpela cómo el sistema internacional de los derechos humanos ha tenido la histórica tendencia de tratar a las mujeres como un grupo colectivo, independientemente de la singularidad de género que cada mujer posee. Todo ello, con el efecto de “reducir a las mujeres a una esencia solitaria o a una naturaleza unidimensional” (Edwards, 2011: 37)<sup>117</sup>.

---

<sup>117</sup> Traducción propia.



En líneas generales, el sistema internacional refleja una realidad que, aún a día de hoy, ignora los derechos, necesidades, intereses y deseos de las mujeres, materializado en una fotografía histórica significativa de ello. No sería hasta 1993 cuando el sistema internacional de los derechos humanos introdujera en su agenda política la violencia contra las mujeres a través de su conceptualización, por medio de la “*Declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer*” aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1993, en donde, por primera vez, quedaría definida la violencia hacia las mujeres en los términos concretos:

“A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”.

“*Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*”. Artículo 1. 1993

La violencia sexual como manifestación de la violencia que la misma Declaración identifica, hasta el establecimiento de jurisdicciones penales internacionales y, de forma específica, de la jurisprudencia que emana del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y del Tribunal Penal Internacional de Ruanda (TPIR), ha sido especialmente silenciada en todos los contextos<sup>118</sup>, incluso en referentes instrumentos como los Convenios de Ginebra de 1949, considerado uno de los tratados más importantes en la regulación de los conflictos armados que, a día de hoy, sigue sin incluir explícitamente la violación y otras formas de violencia sexual entre “las infracciones graves” de sus disposiciones<sup>119</sup>. En la práctica, esta invisibilización normativa se trasladó, incluso, a los escenarios más crueles en los que la violencia sexual se utilizó de forma sistemática como instrumento de control ideológico, tal y como sucedería en destacadas dictaduras, guerras, o en los procesos transicionales en países como Argentina, Colombia o España (Sánchez, 2014).

Tras la dictadura argentina, tres tipos de delitos quedaron fuera de las normas de impunidad:

---

<sup>118</sup> Ni el Tribunal militar de Nuremberg, ni el Tribunal militar de Tokyo condenaron los crímenes de naturaleza sexual cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que se produjeron numerosas formas de violencia sexual por las tropas de ambos bandos, que a día de hoy serían consideradas como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. *Amnistía Internacional*, por ejemplo, calcula que desde 1931 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 200.000 mujeres (conocidas como las “comfort women” o mujeres de solaz) de los países ocupados por Japón (coreanas, filipinas, birmanas, chinas o indonesias) fueron sometidas a esclavitud sexual por parte del ejército imperial japonés. Las mujeres fueron víctimas de diversas formas extremas de violencia sexual, como violaciones múltiples o abortos forzados (*Amnistía Internacional*, 2010). Índice AI: ASA 22/001/2010.

<sup>119</sup> La violación y otras formas de violencia sexual cometidas en el contexto del conflicto armado de índole internacional pueden perseguirse como infracciones graves de los Convenios de Ginebra, tales como la tortura, los tratos inhumanos e infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud (*Amnistía Internacional*. 2005. Index: AI: IOR 40/007/2005).

la violación, la apropiación de niños y el robo de bienes de las víctimas, a pesar de que la violencia sexual era una práctica sistemática utilizada por los militares como forma de tortura. Hasta la declaración de inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad” en 2005, con la reapertura de procesos penales por los crímenes cometidos durante la dictadura, las mujeres supervivientes no comenzaron a denunciar esta práctica de tortura sistémica del entramado de represión y terror del Estado argentino durante la dictadura (Bartolomei, 2015).

En el caso de Colombia, la lucha incesante de organizaciones de mujeres como “La Ruta Pacífica de las Mujeres Colombiana”<sup>120</sup>, ha sido decisiva en la denuncia, visibilización y en las todavía escasas penas a los responsables de cometer actos de violencia sexual como estrategia de control y terror por parte de grupos paramilitares, cárteles del narcotráfico, o grupos guerrilleros, durante los más de 40 años de conflicto armado interno<sup>121</sup>.

Aun siendo conscientes de las deficiencias significativas, el derecho de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho humanitario han guiado una serie de hitos fundamentales frente a la tradicional y patriarcal concepción de la violencia sexual. Sobre todo, en aspectos esenciales como su dimensión instrumental, sus características, la personalización y responsabilidad de los culpables o la ineludible humanización de las víctimas, frente a la deshumanización de los hechos que relatan sus víctimas:

“Estuvimos en el calabozo como 15 días, entre la sangre de la gente que ya habían matado [...] A mi hija la violaron cuatro, mientras agarraban a mi hijo”.

“Los soldados me violaron, me quitaron la vergüenza, me dejaron desnuda. Fueron unos 20. Regresé a mi casa y estaba todo quemado. Quemaron mi casa con mi hijo adentro, murió aún sin nombre”.

Testimonio de dos mujeres guatemaltecas durante el juicio contra el general y expresidente guatemalteco José Efraín Ríos Montt, por los crímenes cometidos entre 1982 y 1983 durante la dictadura militar. 2013<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Para más información sobre Colombia ver los informes actualizados de organizaciones como “Sisma Mujer” o “Humanas” sobre la realidad de la violencia sexual en Colombia en el marco del conflicto armado

<sup>121</sup> En el caso español, el “pacto de silencio” o “amnesia constituyente” como han querido denominarlo algunos autores (Clavero, 2014) que se produjo tras la Ley de Amnistía de 1977, así como la falta de disposición del Estado español en la investigación sobre los crímenes de género sucedidos durante la guerra civil española (1933-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), a pesar de la aprobación en el año 2007 de la conocida como Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura), ha implicado que sólo la producción académica y militante haya reconocido la violencia sexual como otra de las prácticas sistemáticas de terror de la dictadura franquista. Recientemente, la organización Women’s Link Worldwide ha interpuesto la primera querrela en la historia de España, dirigida a solicitar la investigación de los crímenes de género cometidos durante el franquismo, como paso para exigir la impunidad de los asesinatos perpetrados durante la dictadura franquista (Women’s Link Worldwide, 2016).

<sup>122</sup> El testimonio ha sido extraído del informe realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos. (2013). *Genocidio en Guatemala*. Ríos Montt culpable. Nº 613e. Guatemala: [https://www.fidh.org/IMG/pdf/informe\\_guatemala613esp2013.pdf](https://www.fidh.org/IMG/pdf/informe_guatemala613esp2013.pdf). Recuperado el 5 de Julio de 2016

En este sentido, el TPIY<sup>123</sup> y el TPIR<sup>124</sup> han aproximado la realidad de la violencia sexual en sus múltiples dimensiones, tanto desde un plano conceptual, como penal o simbólico, frente a la histórica impunidad de la que se han visto beneficiados los responsables. Aunque los estatutos de ambos tribunales incorporaron de forma limitada la violencia sexual (*Amnistía Internacional*, 2005) —al incluir la violación, únicamente, como crimen de lesa humanidad, y no como crimen de guerra, y enumerar la violación como única manifestación de violencia sexual—, la jurisprudencia que emana de ambos tribunales ampliaron definiciones determinantes, en torno a la conceptualización de la violencia sexual en relación a las categorías de “violación”, “coerción”, así como en la consideración de los crímenes de violencia sexual como crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio o tortura. Del mismo modo, la jurisprudencia de ambos tribunales determinó que el futuro Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998) tipificase, con carácter autónomo, diversos crímenes de naturaleza sexual, hasta entonces plasmados, únicamente, como atentados contra la dignidad personal, tratos humillantes y degradantes o como ataques contra el honor de la mujer (Bou Franc, 2012).

### 2.2.2.1 El horror se hace visible: la violencia sexual en los Tribunales Penales Internacionales

En los casos del TPIY como el TPIR, son varios los aspectos sobre los que merece la pena reseñar el cambio de paradigma que supuso la jurisprudencia que emanó de ambos. En el plano de la definición —relativa a lo que hasta entonces la jurisprudencia penal internacional entendía por “violación”— se produjo una fractura sobre el tradicional enfoque patriarcal, que considera la violación en términos de penetración vaginal, sin consentimiento, a través del pene del agresor/es. Tanto el TPIY como el TPIR completaron el concepto de “penetración”, así como los márgenes del “consentimiento”.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, por medio del caso *Akayesu* (1998,) amplió la definición, de forma “novedosa” (*Women’s Link Worldwide*, 2010: 6), en los siguientes términos:

---

<sup>123</sup> Según la Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se estableció el Tribunal Internacional “con la finalidad exclusiva de enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia entre el 1º de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad determinará una vez restaurada la paz y, con este fin, aprobar el Estatuto del Tribunal Internacional [...]”. Doc. ONU. S/RES/827 (1993) de 25 de mayo de 1993, párr. 2.

<sup>124</sup> Según la Resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se decidió “establecer un tribunal internacional con el propósito exclusivo de enjuiciar a los responsables de genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, y con este fin, aprobar el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda [...]”. Doc. ONU. S/RES/955 (1994) de 8 de noviembre de 1994, párr. 2.

extender la violación a cualquier tipo de penetración corporal y a cualquier tipo de invasión corporal no consentida con cualquier tipo de objeto (*Women's Link Worldwide*, 2013):

“La violación es una invasión física de naturaleza sexual, cometida sobre una persona bajo circunstancias que son coactivas [...]. La violación sexual no está limitada a la invasión física del cuerpo humano y puede incluir actos que no suponen penetración o siquiera contacto físico”.

Caso *Akayesu*. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 1998 (párrafo: 688)<sup>125</sup>

El caso *Akayesu* supuso, igualmente, otro cambio de paradigma histórico en la significación del daño individual de la víctima. Hasta entonces, el bien jurídico protegido —en crímenes sexuales en el contexto del derecho internacional—, se situaba en un histórico plano patriarcal que consideraba el pudor o la honra como los bienes jurídicos a proteger, y no la mujer, su libertad sexual o su dignidad. La resolución en el caso *Akayesu* expuso la doble dimensión de la violación: individual y colectiva. Como un atentando contra la dignidad y la integridad física, así como por su instrumentalidad, al ser utilizada sistemáticamente “para provocar un impacto devastador”, más allá de las víctimas individuales, incluyendo a la familia y a la población en general (Martín & Lirola, 2013:42).

La evolución jurisprudencial incorpora nuevos matices al significado de la violación. Valga como ejemplo el caso *Furundzija* —Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia—, en el que se aplica una nueva definición, con nuevos elementos objetivos del crimen, al referirse en los siguientes términos:

“i. Penetración sexual, incluso leve: a) de la vagina o ano de la víctima por el pene del perpetrador u otro objeto utilizado por el perpetrador; o b) de la boca de la víctima por el pene del perpetrador; ii. Bajo coerción o fuerza o amenaza contra la víctima o una tercera persona”.

Caso *Furundzija*. Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. 1998<sup>126</sup>

El TPIY incorporó otros aspectos claves al debate en torno a la interpretación del consentimiento en el marco de la violación, tal y como queda subrayado en el caso de *Kunarac et al.* a través del cual el tribunal se pronunció en los siguientes términos:

“Consentimiento debe ser dado voluntariamente, como resultado de la libre voluntad de la víctima evaluada en el contexto de las circunstancias existentes. El *mens rea* es

---

<sup>125</sup> Cit. por Womens Link Worldwide, 2013

<sup>126</sup> Párr. 185.

la intención de efectuar la penetración sexual, y el conocimiento de ello ocurre sin el consentimiento de la víctima”.

Caso *Kunarac*.

Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. 2001 (párrafo: 460)

Posteriormente, la propia definición fue aún más matizada gracias a la Sala de Apelación que estudió el recurso interpuesto en el caso *Kunarac* (*Womens Link Worldwide*, 2013) puliendo el ya clásico debate sobre el uso de la fuerza en situaciones de violencia sexual:

“Hay factores que van “más allá de la fuerza” que podrían dar lugar a un acto de penetración sexual no consensual o no voluntario por parte de la víctima. Un enfoque reducido sobre la fuerza o la amenaza de fuerza podría permitir a los perpetradores eludir responsabilidad por la actividad sexual a la que la otra parte no ha consentido por tomar ventaja de las circunstancias coercitivas sin depender de la fuerza física”.

Caso *Kunarac*. Sala de Apelación. 2002<sup>127</sup>

Ambos tribunales internacionales, dieron pasos significativos al reconocer, igualmente, la agresión sexual y la violación como formas de tortura<sup>128</sup>, consideraciones que posteriormente serían adoptadas por la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el ya citado caso *Akayesu*, se estableció que:

“Como la tortura, la violación es usada con fines como intimidación, degradación, humillación, discriminación, castigo, control o destrucción de una persona. Como la tortura, la violación es una vulneración de la dignidad personal, y la violación constituye tortura cuando es infringida por o bajo la instigación de o con el consentimiento de un funcionario público u otra persona que actúe en calidad de oficial”.

Caso *Akayesu*. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 1998<sup>129</sup>

La magnitud del significado que adquiere la violencia sexual en ambos conflictos, quedó impresa en sus estatutos, a través de los cuales se estableció como crímenes de lesa humanidad las violaciones sexuales. La primera condena en la historia en este sentido se significó en el caso *Akayesu*, en donde se condenó a Jean Paul Akayesu como culpable de violación como lesa humanidad, al considerar que instigó la violación contra mujeres tutsis:

---

<sup>127</sup> Párr. 119.

<sup>128</sup> No existe una definición de tortura en el derecho humanitario, ni en el derecho penal internacional, por ello los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda se guiaron por la definición de la Convención contra la Tortura (CAT) de 1984.

<sup>129</sup> Párrafos: 597-598.

“...como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, por motivos políticos, étnicos o raciales, y por lo tanto ha cometido CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD estipulados en el artículo 3(g) del Estatuto del Tribunal”<sup>130</sup> [...]. La Sala concluye más allá de toda duda razonable que la Víctima A fue violada por uno de los agresores que oyó al al acusado alentar al grupo a que violara mujeres Tutsis (...).”

Caso *Akayesu*. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 1998<sup>131</sup>.

El TPIY marca también un antes y después en la significación e interpretación de la violación como crimen de lesa humanidad así como en el derecho internacional, en lo que algunas autoras como Debra Bergoffen (2003) consideran una resolución judicial de gran transcendencia, al encarnar la inauguración de la política de los “cuerpos vulnerables”, determinante en las variaciones que sobre la comprensión del “mal”, de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, se realizarán en el futuro.

Tal y como titula su artículo Bergoffen<sup>132</sup>, la condena —el 22 de febrero de 2011— de tres soldados bosnios (Kunarac, Kovac y Vukovic) por delitos de violación y esclavitud sexual de mujeres y niñas musulmanas, como crimen de lesa humanidad, convirtió este hecho en un punto de referencia interpretativo y conceptual, por tres factores fundamentales a los que apela Bergoffen:

- 1) La decisión previa de perseguir a los culpables.
- 2) La propia condena.
- 3) La clasificación de la violación como tortura y crimen contra la humanidad.

El análisis detallado de la sentencia indica nuevos parámetros ideológicos interpretativos sobre la tradicional forma de comprender la violación en las guerras, marcada por un orden patriarcal que, de forma naturalizada, había aceptado la violación incuestionablemente intrínseca al conflicto, considerando, además, el cuerpo de las mujeres como un bien material. En los párrafos de la sentencia, se señalan dos principios fundamentales (Bergoffen, 2013) que abordan la responsabilidad, como culpables, de los hombres frente a las mujeres (“Queda oportuno declarar que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, los hombres con principios no abusan de las mujeres”. Jueza Florence Ndepele Mwachande Mumba<sup>133</sup>). Y la dignidad de las mujeres en el epicentro de sus derechos y de su integridad y libertad sexual.

---

<sup>130</sup> Párr. 475.

<sup>131</sup> Párr.477..

<sup>132</sup> “February 22, 2001: “Towards a Politics of the Vulnerable Body”.

<sup>133</sup> Traducción propia.

De esta forma, frente a la ideología patriarcal de considerar a las mujeres como una propiedad material, la sentencia las identifica como cuerpos sexuados, personas que merecen el respeto absoluto como seres humanos. El estándar previo a este fallo identificaba los delitos contra la humanidad desde la normatividad neutral de los cuerpos (Bergoffen, 2003). En este sentido, al usar el cuerpo neutral como medida, la tortura —entendida desde el criterio del daño físico— era la forma de identificar los crímenes contra la humanidad. De acuerdo con este criterio, la violación también podía ser clasificada como un crimen contra la humanidad, teniendo que justificarse de forma obligatoria el uso de la fuerza. Evidenciada y establecida la violencia para la víctima de violación como en el caso de la de tortura, se estableció la violación de su humanidad. Pero este tribunal se posiciona de manera distinta, identificando la violación como un crimen contra la humanidad, independientemente de la evidencia o no de violencia física o de lesiones físicas<sup>134</sup>, “aislando la idea del acceso forzoso de la idea del acceso doloroso” (Bergoffen, 2003:118)<sup>135</sup>, en donde el consentimiento, y lo que es aún más importante, la capacidad de la/s mujer/es para dar su consentimiento determinará cuando hay o no violación, y no el grado de violencia aparentemente infringido contra su cuerpo.

Queda establecido así que la singularidad de las violencias que se comenten contra los cuerpos de los seres humanos no se reproducen del mismo modo cuando la víctima es un hombre que cuando es una mujer, declarando que la humanidad de las mujeres puede ser perversamente agredida, incluso si no hay existencia de violencia física, lesiones o sufrimiento aparente. El tribunal, como apunta Bergoffen, “expone la injusticia de los juicios que claman por los derechos humanos pero ignora la relación de los derechos universales y la especificidad de los cuerpos sexuados a través de los cuales vivimos nuestra humanidad” (Bergoffen, 2003: 117<sup>136</sup>). Al significar así la violación como un crimen contra la humanidad, el tribunal firma una sentencia que declara abiertamente que el cuerpo de las mujeres, no sólo no es una propiedad, tal y como refiere Bergoffen, “es el lugar de la humanidad, de la especie, de lo universal” (2003: 118 <sup>137</sup>).

Al centrarse, además, en el consentimiento como elemento central más que en el criterio de la violencia, para determinar si es un crimen contra la humanidad o no lo es, el tribunal establece una relación entre la humanidad de las mujeres y su integridad sexual. Cuando se produce una penetración en la vulva de la mujer sin su consentimiento,

---

<sup>134</sup> “La penetración sexual constituirá violación si no es verdaderamente voluntaria o consensuada por parte de la víctima” (Párr. 461).

<sup>135</sup> Traducción propia.

<sup>136</sup> Traducción propia

<sup>137</sup> Traducción propia



independientemente de que haya sido dolorosa, si no existe tal consentimiento, se está violando la dignidad personal de ello. La violación es así una “violación” a la humanidad del cuerpo, en donde la integridad sexual es inseparable de su integridad humana (Bergoffen, 2003).

La jurisprudencia posterior, que emanará del propio Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, seguirá guiando el curso de las significaciones y categorías en torno a la violación, a través de sentencias que narran y visibiliza con gran fuerza el profundo daño que una violación sexual implica para sus víctimas, en donde el delito y el dolor metafóricamente irán de la mano, humanizando el daño específico sobre los cuerpos de las víctimas. Sin el segundo, el primero no existiría:

“La Sala de Primera Instancia considera que la violación de cualquier individuo es un acto despreciable que atenta contra el centro mismo de la dignidad humana y la integridad física [...]. La violación ocasiona sufrimiento y dolor graves, tanto de carácter físico como psicológico. El sufrimiento psicológico de los que han sido víctimas de violación puede exacerbarse a causa de condiciones sociales y culturales y puede ser especialmente agudo y duradero [...]. En la opinión de esta Sala de Primera Instancia, esto es inherente a las situaciones de conflictos armados”.

Caso Zejnil Delalić, Zdravko Mucić alias “Pavo”, Hazim Delić, Esad Landzo alias “Zenga” (Ćelebić ). Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 1998

En el desarrollo de la jurisprudencia que pauta la visibilización de las múltiples formas que adopta la violencia sexual, otro de los precedentes más significativos se produce también en el seno del TPIY. En el citado caso *Kunarac*, por primera vez, el tribunal condena el crimen de esclavitud sexual como un crimen contra la humanidad, reafirmandose la Sala de Apelaciones en la no necesaria demostración de la falta de consentimiento de la víctima para probar el delito. Las palabras del tribunal insisten en otras variables coercitivas, independientes al uso de la fuerza, para que se produzca la existencia del crimen de esclavitud (*Womens Link Worldwide: 2011*)<sup>138</sup>:

“En ocasiones, las circunstancias concretas del caso hacen imposible expresar el consentimiento, y la consideración de tales circunstancias puede ser suficiente para presumir la ausencia del mismo”

Sala de Apelaciones.  
Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, 2002: párrafo 120.

---

<sup>138</sup> Cit. por *Womens Link Worldwide*, 2010: 15.



La jurisprudencia de los tribunales penales *ad hoc*, guía otros estatutos y convenios fundamentales en el reconocimiento expreso dentro del derecho internacional de los crímenes sexuales, como comportamientos individuales, con una responsabilidad internacional<sup>139</sup>. En este sentido, el “Estatuto de Roma” de la Corte Penal Internacional (1998) es, para algunas autoras, “un instrumento que representa un avance sin precedentes en el tratamiento de los crímenes de naturaleza sexual en el Derecho Internacional Humanitario” (Martín & Lirola, 2013:18), producto de una larga negociación, en la que, nuevamente, el movimiento feminista<sup>140</sup> luchó escarnecidamente por incluir las demandas políticas feministas frente a estados misóginos y conservadores, como fueron los países islámicos o el Vaticano, que deseaban un Estatuto ciego al género, a la especificidad de las violencias y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (Martín & Lirola, 2013). Finalmente, el “Estatuto de Roma” incorporó la perspectiva de género y de forma específica una categoría de crímenes de naturaleza sexual. Contiene, incluso, lo que para algunas autoras, dentro de las categorías de crímenes contra la humanidad y de los crímenes de guerra, es “la regulación más completa existente de crímenes de esta naturaleza en el Derecho Internacional humanitario” (Martín & Lirola, 2013: 18). De esta manera, se abre también la posibilidad de considerar la violencia sexual como un crimen de genocidio en el marco del conflicto armado.

A pesar de los avances a los que apunta el Estatuto, el “otro generalizado” (Benhabib, 1990) se presenta y se cuela en el documento, al adoptar una falsa perspectiva de género, en donde las víctimas vuelven a significarse en “cuerpos neutrales” (Bergoffen, 2003) y no sexuados, en base a la neutralidad con la que se formulan los crímenes, salvo en el caso de embarazo forzado. Las víctimas de los delitos son hombres, mujeres y menores, obviando así la particularidad que entrañan determinadas violencias. Nuevamente, el universalismo sustitutorio vuelve a considerar que las mujeres no necesitan una protección especial, sino todo lo contrario, “las colocan como parte de la clase humana que requiere protección bajo el Derecho Internacional” (Moreyra, 2007: 92)<sup>141</sup>.

La realidad sobre la que se asienta la crítica feminista a este respecto se constata en la práctica de su implementación, pues han tenido que pasar 14 años para que la Corte Penal Internacional dictara la primera sentencia de condena por violencia sexual. Hasta 2016, la CPI no declara por primera vez a un responsable directo de violación como crimen de guerra

---

<sup>139</sup> Para más información sobre la “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos” véase Resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A/RES/56/83 (28 de enero de 2002).

<sup>140</sup> El movimiento feminista creó el “Women’s Caucus for Gender Justice” como estrategia de incidencia política, estableciendo diferentes líneas de incidencia dirigidas a conseguir la inclusión de la perspectiva de género y la inclusión de diferentes formas de violencia en el Estatuto (Martín & Lirola, 2013).

<sup>141</sup> Cit. por , Martín & Lirola, 2013: 20.

(Caso *Jean-Pierre Bemba Gombo*), el primero en el que se responsabiliza penalmente a un superior militar por los crímenes sexuales cometidos por los hombres que se encontraban bajo su autoridad.

El expresidente congoleño Jean Pierre Bemba, el 21 de marzo de 2016 fue declarado culpable por los delitos de violación y asesinato como crimen contra la humanidad y crimen de guerra perpetrados en la República Centroafricana desde 2002, con una diferencia transcendental respecto a otras sentencias previas de los tribunales penales *ad hoc*, al ser la primera vez que un tribunal penal internacional califica como violación la violencia sexual también contra los hombres:

“... el tribunal considera que hay evidencia suficientes para establecer base suficiente para creer que los soldados MLC cometieron un crimen de violación contra la humanidad, como parte de un ataque generalizado dirigido directamente contra la población civil in la República Centroafricana desde aproximadamente el 26 de octubre de 2002 hasta el 15 de marzo de 2003 (...) Los soldados MLC cometieron violación como crimen de guerra en el contexto y, en relación con el conflicto armado ...”<sup>142</sup>.

Caso *Jean-Pierre Bemba Gombo*. Corte Penal Internacional. 2016 <sup>143</sup>

#### 2.2.2.2 Diferentes enfoques y elementos en común desde la normativa regional americana y europea

En relación al resto de normativa internacional que, de forma específica, aborda la violencia sexual como manifestación de la violencia de género, en el ámbito regional americano, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” —(Convención de Belém do Pará) aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994—, se convierte, hasta 2011<sup>144</sup>, en el único tratado internacional específico que formaliza la definición de la violencia hacia las mujeres como violación de sus derechos humanos y establece, por primera vez, “mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad, física, sexual y psicológica” (OEA, 2017).

---

<sup>142</sup> Traducción propia.

<sup>143</sup> Párr.231.

<sup>144</sup> Se aprueba el “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”.

A diferencia de la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW)”<sup>145</sup> —aprobada por Naciones Unidas en 1979—, que en ninguno de sus apartados nombra la violencia sobre las mujeres, la “Convención Belem do Pará” define la violencia contra las mujeres en su artículo 1 como, “...cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado...”. Reconoce en su artículo 2, tres tipos de violencia: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Y visibiliza tres ámbitos en los que ésta se manifiesta:

- 1) En la vida privada.
- 2) En la vida pública.
- 3) Cuando es perpetrada por el Estado, o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Por último, reconoce los derechos humanos que protege la Convención, desde el artículo 3 al 6. (OEA, 2014) y las obligaciones de los Estados Parte de la Convención en los términos que establece el estándar de la “debida diligencia”, en el sentido de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres” (artículo 7.b), analizado en exclusividad en la segunda parte de esta investigación.

La Convención de Belem do Pará, supuso otro hito en la historia de la construcción de un orden jurídico social internacional dirigido a proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres frente a todas las formas de violencia. Como recuerdan García Ramírez, la Convención constituye “un escudo protector, que refleja las luchas de los movimientos sociales, de activistas de derechos humanos, feministas y juristas, que le imprimen ese carácter de vanguardia ante el sistema universal (2011)<sup>146</sup>.

Por su parte, la jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a la violencia sexual, confluye, significativamente, con las definiciones que incorpora la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales, ya citados, sobre la cual se basa. Cabe destacar el primer caso internacional sobre violencia

---

<sup>145</sup> Hasta 1989 el Comité CEDAW no elabora su primera Recomendación General sobre violencia contra las mujeres (Recomendación No. 12: *Violence Against Women*. 1989), relativa a la obligación de los estados de proteger a las mujeres contra la violencia cometida en la familia, el lugar de trabajo o en otras áreas de la vida social (Edwards, 2011). En 1992 se adopta la Recomendación General N°19: *Violence Against Women*, que pulirá a lo largo de los años la conceptualización de la violencia contra las mujeres en relación a su consideración como forma de discriminación de género, que los Estados partes de la CEDAW estarán obligados a combatir y eliminar.

<sup>146</sup> Cit.por Bustamante & Vásquez, 2011: 16-17.

de género de la CIDH, el caso del penal Miguel Castro Castro<sup>147</sup>, en el cual se refiere a la violencia sexual en los siguientes términos:

“La violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”<sup>148</sup>.

Corte IDH. Caso del “Penal Miguel Castro vs Perú”. 2006

Como recoge Mónica Feria Tinta —letrada que se encargó de representar al grupo mayoritario de las víctimas en el proceso ante la CIDH—, la Corte identificó otras formas de violencia sexual que transcendía la clásica manera de entender los crímenes sexuales. De esta forma, la Corte constató que las heridas de las personas que fueron trasladadas al hospital de la policía fueron sometidas a un prolongado periodo de desnudez forzada, lo que supuso “un trato violatorio de su dignidad personal” (2007:38). Tanto mujeres como hombres fueron víctimas de la desnudez forzada, pero el tribunal se pronunció específicamente, resaltando que, en ellas, “esta desnudez forzada tuvo características especialmente graves”<sup>149</sup> (CIDH, *Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú*. 2006)<sup>150</sup>.

Además, el tribunal agrega un matiz fundamental, al pronunciarse en los siguientes términos sobre por qué la desnudez forzada constituía violencia sexual hacia las mujeres: “lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemente observadas por hombres” (CIDH, *Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú*. Párrafo 306-307). La Corte, asimismo, profundiza en la consideración del “consentimiento”, al recurrir a los casos *Akayesu* o *Furundiza* para matizar y deconstruir, nuevamente, la clásica forma en la que el consentimiento ha sido valorado en los casos de violencia sexual, al recordar que “la inspección vaginal” realizada por personas encapuchadas, con brusquedad y contra la voluntad de la víctima, constituía violación sexual. Al pronunciarse en esos términos, se incide en que, en relación al consentimiento, la relevancia no es sólo la fuerza, amenaza de fuerza o coerción, “también es la ausencia de consentimiento o ausencia de participación voluntaria de la víctima” (Feria Tinta, 2007: 38).

---

<sup>147</sup> Los hechos de este caso se desarrollaron en el marco del conflicto armado en el Perú, entre el 6 y 9 de marzo de 1992, bajo el operativo que ejecutó el Estado peruano en el que supuestamente se iba a trasladar a unas 90 mujeres recluidas en el centro penal, a centros penitenciarios para mujeres. La operación terminó con la muerte de decenas de presos y presas y numerosos heridos, mientras las personas internas que sobrevivieron fueron agredidas de diversas formas. “El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la utilización excesiva e la fuerza que resultó en la muerte de decenas de presos, así como de numerosos heridos en el marco de un operativo en el centro penitenciario Miguel Castro Castro” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2009)

<sup>148</sup> Párr. 306.

<sup>149</sup> Cit. por Feria Tinta, 2007: 38

<sup>150</sup> Párr.308.

Yendo incluso más allá, la Corte reconoce que “la inspección vaginal”, no sólo fue una violación sexual, también una forma de tortura, apelando al artículo 5.2 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Lo que se considera como la primera vez que este tribunal falla a favor de una víctima de violación sexual en más de 25 años, declarando, además, responsable por ello, al Estado peruano (Feria Tinta, 2007: 39).

Cabe destacar también cómo la consideración de tortura se apoya en el hecho fundamental sobre la que se pronuncia la Corte, al destacar la gravedad y secuelas que implicó para la víctima, en términos físicos y psicológicos. Se reconoce que la violación sexual “es una experiencia sumamente traumática que causa gran daño físico y psicológico”, y “que deja a la víctima humillada física y emocionalmente”, circunstancia además “difícilmente superable por el paso del tiempo<sup>151</sup>” (CIDH, *Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú*. 2006).

Resoluciones de este tipo, paulatinamente desmontan las estrategias que el patriarcado y sus responsables utilizan para garantizar su impunidad frente a las violencias que ejercen sobre las mujeres. En un sistema patriarcal en el que la violencia de género se efectúa desde distintos niveles y a través de múltiples maniobras, cuando se ejerce violencia sexual el sistema judicial debe tener en cuenta: la incapacidad temporal —mental, física, de enfermedad, edad o minoría de edad—, la presión psicológica, o el miedo que infunden en las víctimas. Claves para comprender que, en ocasiones, como constata Feria Tinta, “es imposible evitar dichos actos sexuales” (2007: 38).

En el caso europeo, el escenario normativo y jurisprudencial sigue siendo aún bastante desalentador en el marco de la protección de los derechos humanos de las mujeres y, de forma específica, en el terreno de la violencia de género. Así se desprende de su jurisprudencia, marcada por escasas sentencias en este ámbito, y con graves dificultades interpretativas desde la perspectiva de género, ante un tribunal —el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)— que, de forma explícita, ha rechazado, por principio, cualquier enfoque de género, adoptando un tratamiento general y abstracto, “dispuesto a borrar la especificidad femenina de las demandas” (Larralde, 2012: 61).

Algunos casos son llamativamente representativos de esta afirmación, como el de *Emine Yasar v. Turquía* de 9 de febrero de 2010, en donde Turquía fue condenada —Artículo 3 de la Convención— por el uso excesivo de la fuerza durante una manifestación, obviando

---

151 *Ibid*, párr.311.

a las 40 mujeres —origen del caso— como factor clave para la constatación de la violación del artículo 3 (Larralde, 2012).

El caso *Rantsev v. Chipre y Rusia* indigna aún más, dada la obviedad de la situación denunciada: la prostitución forzada de una mujer rusa que terminó muriendo al caer desde un sexto piso. En este caso, el tribunal se pronunció en referencia neutral a la “trata de personas” como “amenaza a la dignidad humana y a las libertades fundamentales de sus víctimas”<sup>152</sup> y no, como amenaza innata a las mujeres y niñas pobres en el mundo.

Víctimas que aparecen en la sentencia neutralmente nombradas, a pesar de que los propios organismos internacionales de derechos humanos, y las Resoluciones y Recomendaciones europeas<sup>153</sup>, denuncian que la trata de personas con fines de explotación sexual es una forma de violencia, de esclavitud y de tortura cuyas protagonistas son casi en su globalidad mujeres<sup>154</sup>.

Hasta la cercana aprobación del Convenio de Estambul (2011), el sistema europeo ha carecido de instrumentos específicos dirigidos a luchar contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. Ante ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una jurisprudencia específica, apoyándose en los principios de no discriminación y de igualdad entre hombres y mujeres, ante la ausencia de una prohibición explícita contra la violencia hacia las mujeres en su marco normativo de referencia: el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 (Convención Europea). Aspecto éste que, como nos recuerda Alice Edwards (2010), se produce igualmente en el conjunto de los tratados internacionales de derechos humanos y otras instituciones internacionales. Según la autora, es una estrategia que refuerza el sistema normativo internacional, entre otros, en clara desventaja para las mujeres —por la subordinación a otro criterio adicional—, indirectamente sólo protegidas contra la violencia (Edwards, 2011).

La jurisprudencia que emana del TEDH aporta algunos matices, en la línea de otros tribunales, en cuanto a la significación de la violencia sexual y en su relación con la vulneración de derechos humanos. Aunque, como ya se ha indicado, las sentencias sobre la falta de investigación del estado en relación a la violencia sexual son insignificantes, en el conjunto de toda la jurisprudencia que ha emanado del tribunal, en algunos casos han sido

---

<sup>152</sup> Cit. por Larralde, 2012: 64.

<sup>153</sup> Resolución 1137 (2003), Recomendación 1610 (2003).

<sup>154</sup> *Ibid.*

relevantes a este respecto. Cabe destacar el caso *M.C. v. Bulgaria* (4 de diciembre de 2003)<sup>155</sup> que, en su interpretación del consentimiento, rompe también con la clásica aceptación de la relación sexual como sinónimo de consentimiento,:

“... el desarrollo de la ley y la práctica en esa área (del delito de violación) refleja la evolución de las sociedades hacia una igualdad y un respeto efectivos a la autonomía sexual de cada persona (...). Cualquier enfoque rígido al enjuiciamiento de los delitos sexuales, como exigir una prueba de resistencia física en todas las circunstancias, corre el riesgo de dejar sin castigo ciertos tipos de violación, poniendo así en peligro la protección efectiva de la autonomía sexual de la persona”

Caso *M.C v. Bulgaria*. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 2003.  
Párrafos 165-166 .

Desde la perspectiva jurídica, la consideración de la vulneración del principio de igualdad en los casos de violencia sexual ha sido calificada por algunas organizaciones —*Amnistía Internacional* (2011)— como un avance significativo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, una forma de reconocer la desigualdad entre agresores (hombres) y víctimas (mujeres) es el reconocimiento de la coacción y, al mismo tiempo, un pronunciamiento explicativo sobre las causas en las que se produce ésta, elemento esencial en los delitos de violencia sexual. Así quedó establecido en el propio caso *M.C v Bulgaria*, cuando el tribunal reconoció que los agresores crearon un entorno de coacción, “engañando deliberadamente a la víctima para llevarla a un lugar desierto”<sup>156</sup> aprovechado posteriormente por ellos. Al contrario de otros casos en los que el entorno de coacción es preexistente (*Amnistía Internacional*, 2011).

Realizar un ejercicio detallado de las formas de coacción —temor a la violencia, intimidación, detención, opresión psicológica o abuso de poder— que afrontan las víctimas de violencia sexual es un ejercicio fundamental a considerar en todos los niveles de prevención y lucha contra la violencia sexual. La interpretación de la coacción, en base a la contextualización en la que se producen las diferentes formas de violencia sexual, es una tarea obligatoria a tener en cuenta por todos los operadores jurídicos que se enfrentan a casos de violencia sexual que, además, es intrínseco al marco teórico feminista de interpretación de la propia violencia sexual. En caso contrario, si no se actúa de esta manera —como

---

<sup>155</sup> En este caso la víctima (la demandante) fue violada a los 14 años por dos hombres. Acudió al hospital con su madre donde se constató que el himen había sido rasgado. Como no pudo establecerse que la niña había ofrecido resistencia o pedido ayuda durante la violación, los agresores no fueron perseguidos. El TEDH condenó al Estado búlgaro por la violación del artículo 3 (prohibición de torturas y de penas o tratos inhumanos o degradantes) y del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio.

<sup>156</sup> *M.C v. Bulgaria*, nota al pie 17, supra, párr. 180.



muestran aún recientes sentencias<sup>157</sup>— los agresores seguirán viéndose arrojados por una impunidad patriarcal sobre la que se amparan para poder seguir agrediendo, sin que se les castigue por ello, apuntalando así una de las manifestaciones de poder más consolidadas que tiene el patriarcado para controlar a las mujeres.

La reciente aprobación del Convenio de Estambul (2011)<sup>158</sup> promete un panorama alentador en cuanto a la visibilización de la violencia sexual como manifestación de la violencia de género, pero también desde el plano de la responsabilidad de los estados firmantes, en la obligada adaptación de sus legislaciones, así como en la implementación real de las medidas que el Convenio regula a través de su amplio articulado para luchar contra la violencia sexual. En este sentido, el Convenio ha sido considerado como una “herramienta mundial” para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres —esencial en el fortalecimiento del marco jurídico internacional—, ofreciendo además una amplia definición sobre todas las formas de violencia sexual. Es considerado el tratado internacional de mayor alcance para combatir la violencia contra las mujeres en todas sus formas (OEA & Consejo de Europa, 2014).

El Convenio de Estambul, basado en numerosos antecedentes —Recomendación General nº 19 de la CEDCM (1992), la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres (1993), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar a Violencia contra la Mujer (1994), el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujeres en África (2003)—, amplía el marco jurídico internacional, al establecer una definición jurídicamente vinculante de la violencia contra las mujeres como “una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres”<sup>159</sup>. Además, es el primer tratado internacional que aporta la definición de “género”<sup>160</sup>, desarrollando una pequeña argumentación sobre la categoría de género y, por tanto, reconociendo, más allá del sexo biológico, las implicaciones

---

<sup>157</sup> En marzo de 2017 la Audiencia de Cantabria condenaba a un hombre a tres años y nueve meses de prisión por abusar sexualmente de forma continuada de su vecina (cuando comenzó la agresión sexual la víctima tenía 5 años). A pesar de que la acusación particular y el Ministerio Fiscal solicitaban que el agresor sexual fuera condenado por un delito de agresión sexual, el Tribunal descartó este delito, por no advertir “uso de violencia”. La violencia es interpretada por el tribunal español según la clásica significación de la coacción y de la violencia. Y aunque otorgan “plena credibilidad a la víctima”, la pena es menor, porque “un extremo probatorio no aparece suficientemente claro a juicio de esta Sala: la concurrencia de violencia física o intimidación sobre la niña para la ejecución de tales actos, hechos que convertirían el delito en agresión sexual, en lugar de abusos”. Véase García, L (14 de marzo de 2017). Las justificaciones de los jueces que no ven “uso de la violencia” en el abuso sexual continuado a una niña de cinco años. *Eldiario.es*. Recuperado el 20 de marzo de 2017 desde: [http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Sentencia-agresion-sexual-menor-anos\\_0\\_621888826.html](http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Sentencia-agresion-sexual-menor-anos_0_621888826.html).

<sup>158</sup> A 20 de marzo de 2017, el Convenio de Estambul ha sido ratificado por 22 estados: Albania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Mónaco, Montenegro, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Eslovenia, España, Suiza y Turquía.

<sup>159</sup> Artículo 3. a.

<sup>160</sup> “Por “género” se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente contruidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres”. Artículo 3. c



que el género supone para hombres y mujeres en el contexto de la violencia hacia las mujeres (OEA & Consejo de Europa, 2014), al referirse, explícitamente, a la “naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres basada en el género” (Preámbulo) que mantiene a las mujeres “en una posición de subordinación respecto a los hombres” (Preámbulo).

En cuanto a las aportaciones que realiza el Convenio en el marco de la violencia sexual, establece una distinción clara, en categorías diferenciadas, entre acoso sexual, violencia sexual y violación. E incluye, además, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, no como violencias sexuales, pero sí como violencias específicas hacia las mujeres. El Convenio distingue, de forma reiterada, entre “violencias sexuales” y “violaciones”, pero establece la definición de forma conjunta en el artículo 36 —“Violencia sexual, incluida la violación”—, recalcando los matices del consentimiento, cómo en el resto de jurisprudencia citada:

- “a. La penetración vaginal, anal y oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto.
  - b. Los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona.
  - c. El hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un tercero”.
- “2.- El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona, considerado en el contexto de las condiciones circundantes”.

*Convenio de Estambul. Artículo 36*

Teniendo en cuenta los vacíos legales sobre el acoso sexual, en la mayoría de las legislaciones nacionales (OEA & Consejo de Europa, 2014), el Convenio aporta una definición independiente, visibilizando así esta forma de violencia sexual y aportando, por primera vez en un tratado internacional, medidas concretas dirigidas a que los estados combatan el acoso y apoyen a las víctimas.

“Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo, necesarias para que toda forma de comportamiento no deseado, verbal o no verbal o físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, sea castigado con sanciones penales u otro tipo de sanciones legales.

*Convenio de Estambul. Artículo 40. “Acoso Sexual”.*

La novedosa incorporación de esta categoría, en términos penales y semánticos, rompe también con la histórica tendencia de considerar la violencia sexual en las distinciones clásicas sobre las que se apoyan la mayoría de las normativas nacionales e internacionales, incluida la

española. En este sentido, el Convenio obliga además a los estados a tipificar el acoso como delito penal específico, hecho que, significativamente, no fue aceptado con la unanimidad esperada, lo que fue aprovechado por algunos estados para acogerse a las reservas que establece este tratado —artículo 78, párrafo 3— y, en lugar de incorporarlo como un delito penal, aceptarlo, únicamente, en los términos de previsión de sanciones (OEA & Consejo de Europa, 2014). Debido a la cercana aprobación del Convenio y a las lentas ratificaciones que se están produciendo en el entorno europeo, a día de hoy no hay disponible literatura que permita realizar una comparativa real sobre el impacto que el Convenio de Estambul ha implicado en las vidas de las víctimas de violencia sexual.

A pesar de la transcendencia que para la protección de los derechos humanos de las víctimas de violencia sexual, en teoría, implican convenciones como “Belém do Pará”, el “Estatuto de Roma”, la “Convención de Estambul” o la jurisprudencia que emana de diferentes tribunales internacionales o regionales, en la práctica, sin embargo, sigue aun resintiéndose. Su proyección en las legislaciones nacionales ofrece enormes dificultades —tanto conceptuales, como penales—, invisibilizando el *continuum* (Kelly, 1988) de violencia sexuales con el que convivimos, y jerarquizando la violación como el prototipo de violencia sexual. El acoso sexual o la violencia sexual dentro del matrimonio sólo han podido entreverse gracias a la práctica política feminista, a algunos códigos penales o a las propias leyes integrales o de igualdad aprobadas en algunos países en los últimos años en ambas regiones. A pesar de ello, tipos penales y formas cotidianas de violencia sexual que se ejercen contra las mujeres —como el acoso sexual laboral como forma de discriminación por sexo—, no encuentran espacio en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que siguen sin pronunciarse en sus contenidos o en las medidas para su protección y sanción (OEA & Consejo de Europa, 2014).

La jurisprudencia consultada, la literatura escrita al respecto y los informes específicos en la materia, tal y como afirman Martín & Lirola (2013), sí que parece que expongan en los últimos años la existencia de una “consenso generalizado en el sistema de justicia penal internacional en relación a la violación, en dos claves: el derecho a la autonomía sexual y la importancia del consentimiento” (2013: 59). Pero, a pesar de ello y de los múltiples matices que podríamos extraer de esas dos claves, la violación sigue siendo, tal y como se insiste, el “crimen sexual por autonomasia” (2013:59), la clásica punta del iceberg que impide que asomen a la superficie el resto de múltiples violencias sexuales, reconocidas desde el plano semántico y político feminista, pero sobre las que los estados y los tribunales internacionales se resisten a condenar y matizar, en la medida del profundo daño y violación de derechos humanos que generan para sus víctimas.

A continuación, se expone un cuadro resumen del marco legal internacional en materia de violencia sexual:

**Relación de marcos legales internacionales en materia de violencia sexual**

<b>Estatutos Convenios Tratados Internacionales</b>	<b>Artículos</b>
<b>ESTATUTO DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA. 1993</b>	<p><b>Artículo 5. Crímenes de lesa humanidad</b></p> <p>El tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar los presuntos responsables de los crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos contra la población civil durante un conflicto armado, interno o internacional: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación; e) Encarcelamiento; f) Tortura g) Violación h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos</p>
<b>ESTATUTO DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA. 1994</b>	<p><b>Artículo 3. Crímenes de lesa humanidad</b></p> <p>El Tribunal Internacional para Rwanda tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de los crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas: a) Homicidio intencional; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violación; h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos.</p> <p><b>Artículo 4 Violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional II de los Convenios</b></p> <p>El Tribunal Internacional para Rwanda tendrá competencia para enjuiciar a las personas que cometan u ordenen la comisión de graves violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados y del Protocolo Adicional II de los Convenios, de 8 de junio de 1977.</p> <p>Dichas violaciones comprenderán los actos siguientes, sin que la lista sea exhaustiva: a) Los actos de violencia contra</p>

**ESTATUTO DEL TRIBUNAL  
PENAL INTERNACIONAL  
PARA RUANDA. 1994**

la vida, la salud y el bienestar físico o mental de las personas, especialmente el homicidio y el trato cruel como la tortura, la mutilación o cualquier otra forma de castigo corporal; b) Los castigos colectivos; c) La toma de rehenes; d) Los actos de terrorismo; e) Los ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratos humillantes o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión indecente; f) El saqueo; g) La aprobación de sentencias y la realización de ejecuciones sin un fallo previo pronunciado por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales consideradas indispensables por los pueblos civilizados; h) Las amenazas de perpetración de cualquiera de los actos precedentes.

**ESTATUTO DE ROMA  
DE LA CORTE PENAL  
INTERNACIONAL. 1998**

**Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad**

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

c) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.

**Artículo 6. Genocidio<sup>161</sup>**

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «genocidio» cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

<sup>161</sup> “El Estatuto abre la posibilidad de considerar la violencia sexual desarrollada en el marco de un conflicto armado como un crimen de genocidio, puesto que este crimen también forma parte de la competencia de la Corte” (Martín & Lirola, 2013: 18).

<p><b>ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 1998</b></p>	<p><b>Artículo 8. Crímenes de guerra</b></p> <p>2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por «crímenes de guerra»:</p> <p>xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra.</p>
<p><b>CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCIÓN BELEM DO PARÁ). 1990</b></p>	<p><b>Artículo 1.</b></p> <p>Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.</p> <p><b>Artículo 2</b></p> <p>Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra</p>
<p><b>CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. 1979</b></p>	<p><b>Artículo 6</b></p> <p>Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.</p> <p><b>Recomendación General N°19. La violencia contra la mujer<sup>162</sup>.</b></p>

<sup>162</sup> La Recomendación General N° 19 se desarrolla íntegramente en el III Capítulo.

**CONVENIO DEL CONSEJO  
DE EUROPA SOBRE  
PREVENCIÓN Y LUCHA  
CONTRA LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES  
Y LA VIOLENCIA  
DOMÉSTICA. 2011**

**Artículo 2. Ámbito de aplicación del Convenio**

El presente Convenio se aplicará a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.

**Artículo 3 – Definiciones A los efectos del presente Convenio:**

Por “violencia contra las mujeres” se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada;

**Artículo 25 – Apoyo a las víctimas de violencia sexual**

Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones o de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, un apoyo vinculado al traumatismo y consejos.

**Artículo 36 – Violencia sexual, incluida la violación**

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionadamente: a la penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto; b los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona; c el hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un tercero.
2. El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes.
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las disposiciones del apartado 1 se apliquen también contra los cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, de conformidad con su derecho interno.

**Artículo 40 – Acoso sexual**

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que toda forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, sea castigado con sanciones penales u otro tipo de sanciones legales.

**Tabla 2:** elaboración propia a partir del marco normativo internacional de derechos humanos sobre la materia.

## Violencia sexual contra mujeres en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

<p><b>M.C.v.Bulgaria (n° 39272/98). Sentencia de 4 de diciembre de 2003.</b></p> <p>-Violación del artículo 3 y del artículo 8.</p>
<p><b>Maslova and Nalbandov v. Russia. Sentencia del 24 de enero de 2008.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p> <p>-Violación del artículo 38-1.</p>
<p><b>M. and Others v. Italy and Bulgaria (no. 40020/03). Sentencia del 31 de julio de 2012.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p>
<p><b>I.G. v. the Republic of Moldova (n°. 53519/07). Sentencia del 15 de mayo de 2012.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p>
<p><b>P.M. v. Bulgaria (n°. 49669/07). Sentencia del 24 de enero de 2012.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p>
<p><b>M.A. v. Slovenia (no. 3400/07) . Sentencia del 15 de enero de 2015.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p>
<p><b>W.v.Slovenia (n° 24125/06). Sentencia del 23 de enero de 2014</b></p> <p>-Violación del artículo 3</p>
<p><b>N.D. v. Slovenia (n°. 16605/09). Sentencia del 15 de enero de 2015.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p>
<p><b>Y. v. Slovenia (n° 41107/10). Sentencia del 28 de mayo de 2015.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p> <p>-Violación del artículo 8.</p> <p>-Violación de los artículos 8-1.</p>
<p><b>I.P. v. the Republic of Moldovan (n°. 33708/12). Sentencia del 28 de abril de 2015.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p> <p>-Violación del artículo 13+3.</p>
<p><b>Affaire S.Z. v. Bulgaria (n°. 29263/12). Sentencia del 3 de marzo de 2015.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p> <p>-Violación del artículo 41.</p> <p>-Violación del artículo 46.</p>
<p><b>O’Keeffe v. Ireland (n° 35810/09). Sentencia del 24 de enero de 2014.</b></p> <p>-Violación del artículo 3.</p> <p>-Violación del artículo 13+3.</p>

**Tabla 3:** elaboración propia a partir de la jurisprudencia del TEDH

### 2.2.2.3 Una norma ciega al género: la violencia sexual en la normativa española

Desde el inicio de la democracia, el ordenamiento jurídico español ha ido configurando un marco jurídico específico, en el cual se han tipificado distintas violencias sexuales, en relativa sintonía con las demandas sociales que el movimiento feminista ha ido demandando en relación a la significación normativa de las diversas manifestaciones en las que se produce la violencia sexual.

Nuestro Código Penal sigue sin responder aún, de forma adecuada, al enfoque feminista sobre las violencias sexuales, a pesar de los avances que desde 1989 supuso la modificación del Código Penal, cuando se rompió la tendencia ideológica patriarcal de considerar—desde un plano jurídico y social— las agresiones sexuales como “delitos contra la honestidad”, y ser sustituido por el término “delitos contra la libertad sexual”.

Diversas modificaciones del Código Penal han ampliado el marco jurídico de las violencias sexuales, estableciendo una diferencia clara entre los delitos que son considerados “Delitos contra la libertad e indemnidades sexuales” (Título VIII del Código Penal), y otras formas de violencias—la mutilación genital femenina, la trata de personas con fines de explotación sexual o el matrimonio forzado—calificadas también como violencias sexuales desde el derecho internacional, y que, sin embargo, no entran en el Título VIII del Código Penal.

Conscientes de que la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados son formas extremas de violencia hacia las mujeres y manifestaciones de la violencia sexual, este apartado se centra en exclusividad en los vacíos y aportaciones que el marco jurídico español realiza en relación a las agresiones, a los abusos sexuales y el acoso sexual. Todas ellas, manifestaciones de la violencia sexual sobre las se construyen imaginarios sociales en los que de forma continua la duda patriarcal planea en relación a su existencia y a la veracidad del hecho, frente a otro tipo de manifestaciones de violencia sexual, en las que la emoción que entraña hablar del propio hecho y las pruebas que lo demuestran, como sucede con la mutilación genital femenina, implica un consenso generalizado sin apenas fisuras, al menos, sobre su significación y rechazo.



Elementos más destacados en los “Delitos contra la libertad e indemnidades sexuales”  
en el Código Penal español (2015)

<p><b>AGRESIONES SEXUALES</b></p>	<p><b>Artículo 178</b></p> <p><b>El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años.</b></p> <p><b>Artículo 179</b></p> <p><b>Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años.</b></p> <p><b>*Elementos a destacar:</b> violencia o intimidación; acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal; introducción de miembros corporales u objetos.</p>
<p><b>ABUSOS SEXUALES</b></p>	<p><b>Artículo 181</b></p> <p>1.El que, <b>sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento</b>, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.</p> <p>1.En todos los casos anteriores, cuando el <b>abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías</b>, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años.</p> <p><b>Artículo 182</b></p> <p>1. El que, <b>interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima</b>, realice actos de carácter sexual con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.</p> <p><b>*Elementos a destacar:</b> no violencia o intimidación; no consentimiento; acceso carnal por vía vaginal o bucal; introducción de miembros corporales u objetos; engaño; abuso de posición de confianza autoridad o influencia sobre la víctima.</p>

**ABUSOS Y AGRESIONES  
SEXUALES A MENORES  
DE DIECISÉIS AÑOS**

**Artículo 183**

1. El que realizare **actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años**, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años.
2. Cuando los hechos se cometan empleando **violencia o intimidación**, el responsable será castigado por el **delito de agresión sexual a un menor** con la pena de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán cuando **mediante violencia o intimidación** compeliere a un menor de dieciséis años a **participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo**.
3. Cuando el ataque consista en **acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal**, o **introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías**, el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del apartado 1, y con la pena de doce a quince años, en el caso del apartado 2.

**Artículo 183 ter.**

1. El que a través de **internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación** contacte con un menor de dieciséis años y **proponga concertar un encuentro** con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometido.

**\*Elementos a destacar:** actos de carácter sexual con menor de dieciséis años; empleo de violencia o intimidación; participación en actos de naturaleza sexual con un tercero o realizados sobre sí mismo; acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal; introducción de miembros corporales u objetos.

**ACOSO SEXUAL**

**Artículo 184**

1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil

<p><b>ACOSO SEXUAL</b></p>	<p><b>o humillante</b>, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.</p> <p><b>*Elementos a destacar:</b> favores de naturaleza sexual; ámbito relación laboral, docente o de prestación de servicios; situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.</p>
<p><b>EXHIBICIONISMO Y PROVOCACIÓN SEXUAL</b></p>	<p><b>Artículo 185</b></p> <p>El que <b>ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad</b> necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.</p> <p><b>Artículo 186.</b></p> <p>El que, por cualquier medio directo, <b>vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad</b> necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.</p> <p><b>*Elementos a destacar:</b> ejecutar o hiciese ejecutar actos de exhibición obscena; menores de edad o personas con discapacidad necesitada de especial protección; vender, difundir o exhibir material pornográfico; menores; discapacidad.</p>
<p><b>PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN SEXUAL Y CORRUPCIÓN DE MENORES</b></p>	<p><b>Artículo 187.</b></p> <p>1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.</p> <p><b>Artículo 188.</b></p> <p>1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.</p> <p><b>*Elementos a destacar:</b> violencia; intimidación o engaño; situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima; mayor de edad, menor de edad; persona con discapacidad necesitada de especial protección; ejercer o mantener a una persona en la prostitución; lucrar; explotar.</p>

**Tabla 4:** elaboración propia a partir del Código Penal español. 2015

Desde la teoría feminista, tanto juristas como expertas en la intervención con víctimas y supervivientes de violencia sexual han criticado la estructura de los delitos sexuales en nuestro Código Penal. Todo ello es consecuencia, tal y como establecen, de dos criterios —el uso o no de la violencia y el grado de contacto sexual— que se combinan y que dan lugar a una clasificación de los delitos por orden de gravedad.

Nuestro Código Penal, de esta manera, distingue entre agresiones y abusos sexuales a partir de la existencia o no de violencia o intimidación, y del grado de contacto sexual, en los que considera más grave aquellos casos en los que existe “penetración”, frente a los que no. Y aunque las agresiones sexuales, incluyen, no sólo la penetración por un pene, también otras partes del cuerpo u objetos, el delito es más grave por el elemento de penetración (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016).

<b>Tipos penales</b>	<b>Artículo</b>	<b>Pena</b>
<b>AGRESIONES SEXUALES</b>	- El que atente contra la <b>libertad sexual</b> de otra persona utilizando <b>violencia o intimidación</b> . Artículo 178.	Pena de prisión: <b>uno a cinco años</b>
	- Cuando la agresión sexual consista en <b>acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, introducción de miembros corporales u objetos</b> por alguna de las dos primeras vías (...). Artículo 179.	Pena de prisión: <b>seis a doce años</b>
<b>ABUSOS SEXUALES</b>	-El que, <b>sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento</b> , realice actos que atenten contra la <b>libertad o indemnidad sexual de otra persona</b> , será castigado como responsable de abuso sexual. Artículo 181.	Pena de prisión: <b>uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.</b>
	- (...) Cuando el abuso sexual consista en <b>acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos</b> por alguna de las dos primeras vías (...). Artículo 181.	Pena de prisión: <b>cuatro a diez años</b>
<b>ACOSO SEXUAL</b>	- El que solicitare <b>favores de naturaleza sexual</b> (...) en el ámbito de una <b>relación laboral, docente o de prestación de servicios</b> (...). Artículo 184	Pena de prisión: <b>tres a cinco meses o multa de seis a diez meses.</b>

**Tabla 5:** elaboración propia a partir del Código Penal español. 2015

La proyección social que trasciende de la jerarquización de los delitos se traduce, en la realidad cotidiana, en una jerarquía de las víctimas e, incluso, del propio daño de por vida que algunas violencias sexuales implican para quienes las sufren. El sistema judicial considera que merece más desaprobación la evidencia de penetración, frente a otros casos en los que, por ejemplo, una mujer trabajadora migrante del servicio doméstico, al encontrarse en situación administrativa irregular, es obligada a realizar masturbaciones a su empleador para evitar ser denunciada (Fundación Aspacia, 2014). Escenario éste de las empleadas del servicio doméstico, que no sale a la luz, por la opacidad de las circunstancias de ese sector y la invisibilidad de este tipo de violencias sexuales.

Esta clasificación acompaña, así, la consolidación de los mitos patriarcales sobre las diversas formas de violencia sexual recurrentes en la Historia —tal y como Kelly denunciaba en 1988—, invisibilizando otras formas de violencias sexuales, con altísimas prevalencias, cuyas secuelas de por vida generan un impacto y un trauma<sup>163</sup> en las vidas de las víctimas y supervivientes, en algunos casos, iguales que cuando se produce penetración. El contexto y la manera en que la agresión sexual se desarrolla siempre afectará, de forma significativa, el modo en que la mujer se verá así misma y al mundo que la rodea, por lo que la reparación psicológica dependerá de numerosos factores relacionados, tanto con el contexto en el que se haya producido la agresión, la relación previa o no con el agresor, como otros factores reparatorios como son el adecuado acompañamiento psicosocial, la ausencia de revictimización, el apoyo social, la posibilidad de sentencias ejemplarizantes. Entre muchos otros elementos.

El problema, por tanto, no es jerarquizar las violencias sexuales, pues sería, cuanto menos, una crueldad considerable negar el extremo daño que cualquier tipo de agresión sexual con penetración supone para quien la sufre. Al contrario de la jerarquía que establece el sistema penal, sería imprescindible reconceptualizar las categorías y las penas sobre las que se estructuran los delitos sexuales, frente a la “concepción falocéntrica” (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016) heredada de la ideología patriarcal —sobre los que ya se ha hablado en el primer capítulo de esta investigación— impresa en los ordenamientos jurídicos. Como apuntan diversas juristas feministas, una concepción que se corresponde, aún en el siglo XXI, con otra época en la que el bien jurídico tutelado era la honestidad de la víctima “porque el valor de la mujer se medía en términos de virginidad” (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016: 74). Nuestro sistema jurídico indica que, por encima de la “libertad sexual”, sigue primando “el acceso carnal”, “lo que hace un poco contradictorio el precepto de tutela del bien jurídico penal de libertad sexual” (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016: 74).

---

<sup>163</sup> Trauma: exposición personal directa a un suceso que envuelve amenaza real o potencial de muerte o grave daño u otras amenazas a la integridad física personal.

La jerarquización que desarrolla el ámbito jurídico se traduce en una percepción social en los mismos términos. El mito que ha consolidado la violación como única forma de violencia sexual se traslada así a otros ámbitos sociales, “donde a menudo se piensa que lo único grave que puede sufrir una persona en el ámbito de las violencias sexuales es una agresión, en particular con una violación” (Toledo & Pineda, 2016). Este mismo falocentrismo, no sólo jerarquiza a las víctimas —como ya se ha apuntado—, impide detectar la gravedad de otras formas de violencia sexual que, lentamente, merman la capacidad de la víctima, sin que reciba el apoyo profesional adecuado —por la modalidad en la que se desarrollan—, como es el abuso sexual laboral o el acoso sexual en las redes sociales. En la práctica, todo ello implica que las políticas públicas y los equipos profesionales expertos en violencia de género sigan enfocando también sus intervenciones a las únicas violencias que han recibido mayor atención. Si ya es difícil encontrar equipos expertos en violencia sexual en las 17 comunidades autónomas españolas, la intervención se convierte en una tarea inviable en casos de violencias sexuales, prácticamente invisibles jurídica y socialmente.

Otro de los ejemplos es el exhibicionismo. Tanto la práctica política feminista, como el propio marco feminista conceptual de las violencias sexuales incorporan dicho acto dentro de una forma incuestionable de violencia sexual. El exhibicionismo —masturbaciones públicas, mostrar el pene en espacios públicos y/o privado...— acompaña desde la infancia a todas las mujeres, algo que hemos sufrido desde nuestra propia experiencia. Sin embargo, a pesar de la concepción feminista del exhibicionismo y de la vivencia del hecho desde una perspectiva femenina, en términos penales ni si quiera es considerado un delito contra la libertad sexual en caso en que se produzca con “mujeres adultas”, otorgándole un lugar secundario frente a la experiencia cotidiana de las mujeres y adolescentes. Aunque el exhibicionismo entra en la categoría de delito contra la libertad sexual —regulado en el artículo 185 del Código Penal y definido como “el que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena [...]”— se determina que sólo se consideraría como tal, si estos actos se hicieran ante “menores o incapaces”<sup>164</sup> (Art, 185. CP). De esta manera, se invisibiliza en su totalidad a las principales víctimas de los exhibicionistas: las adolescentes, y las mujeres en todas las etapas de su vida.

Cabe destacar también el acoso sexual, una de las formas de violencia sexual castigada con una de las penas más bajas dentro de los delitos sexuales, lo que simboliza el alcance de su consideración dentro del sistema penal y su traslación a otros entornos sociales.

---

<sup>164</sup> Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Prácticamente invisible y, podríamos decir, que hasta naturalizado en los entornos en los que se desarrolla, es considerado por algunas autoras como un evidente “indicador patriarcal”<sup>165</sup> (Pernas, Tornos, Borràs y Romero, 1999).

Algunas autoras, como Raquel Osborne (2009), remontan su evidente desarrollo en el marco de transformación del patriarcado en su relación con el capitalismo y los cambios en las relaciones de producción. La incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral —desde la Revolución Industrial—, trajo consigo, según Osborne “una consecuencia no deseada: la experimentación del acoso sexual por parte de compañeros y jefes” (2009: 139). A pesar de la evidencia que implica el hecho de que el mercado laboral actual se asiente sobre la desigualdad de género —basada en la división del trabajo por sexos (Osborne, 2009) y de la constatada realidad de que las mujeres han supuesto para el patriarcado capitalista un peligro sobre el control masculino de los medios de producción, tanto en calidad de empleadas o de jefas, lo que ha propiciado el desarrollo de nuevas violencias específicas hacia las mujeres derivadas de ello, no hay que perder de vista que —tal y como se apunta en esta misma investigación— otros entornos en los que históricamente han trabajado las mujeres (como es el servicio doméstico), en los cuales han tenido que sufrir de forma reiterada, y casi innata, diversas formas de acosos sexuales laborales.

Lo que parece evidente es la definición que la propia *Ley de Igualdad 3/2007 de 22 de marzo de la igualdad efectiva de Hombres y Mujeres*<sup>166</sup>, aplica al referirse al acoso sexual:

“Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

*Ley Orgánica 3/2007. Artículo 7*

Y considerando las consecuencias que implica en la víctima —al “repercutir en sus condiciones de trabajo o de estudio, creando un entorno laboral o de aprendizaje hostil, intimidatorio o humillante” (*Instituto de la Mujer*, 2008, p.32)<sup>167</sup>—, resulta indudable que las penas son irrisorias y que la consideración de este tipo de violencia sexual sigue estando oculta en los entornos en los que se produce, bajo lo que se podría considerar una excesiva tolerancia y superficialidad a la hora de abordarlo.

---

<sup>165</sup> Cit. por Osborne, 2009: 137.

<sup>166</sup> La Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres abrió todo un abanico de posibilidades dirigidas a la detección y a la garantía de los procedimientos de tutela. Tal y como reconoce CCOO, “la ley refuerza el papel de complementariedad de la negociación colectiva y posibilita abordar el problema desde una estrategia transversal incorporando las necesarias medidas de sensibilización, preventivas y sancionadoras para avanzar en la erradicación de este grave problema social” (Comisiones Obreras, 2011: 8).

<sup>167</sup> Cit. por Osborne, 2009: 140.



En este sentido, se presenta como fundamental la necesidad de romper con otros mitos que se reproducen dentro del propio acoso sexual —como señala Pernas (2001)<sup>168</sup>— y que se consideran erróneamente asociados: cuando existe acoso sexual, lo que hay es abuso de poder, entendido como “jefatura o como abuso de autoridad” (Osborne, 2009: 150), cuando lo que en realidad sucede es que el acosador considera a su víctima como un objeto sexual. De esta forma, la existencia de una jerarquía —apunta Pernas— no es condición suficiente para que se produzca el acoso sexual. Parece así que, en marcada línea con MacKinnon (1995), la relación de poder podría considerarse que es una relación de orden sexual, en la que lo jerarquizado es la sexualidad, dominada por el hombre. De ahí que el acoso sexual no siempre se produzca de forma vertical, también entre iguales o por aquellos que ocupan rangos inferiores en la escala laboral. En cualquier caso, lo que es evidente es que cuando nos referimos al acoso sexual, de lo que hablamos es de violencia, de discriminación por razón de sexo y, por supuesto, de una forma de subordinación y de control de las mujeres. Como afirma Teresa Pérez del Río, “es mayoritariamente reconocido que aunque el acoso sexual tenga como base una conducta de naturaleza sexual, en el fondo, en esta motivación no existe, o no existe únicamente o predominantemente, un deseo sexual, sino una finalidad de dominio” (Pérez del Río, 2007: 185)<sup>169</sup>.

Nuestra legislación establece esta misma distinción al diferenciar, como apuntan algunas juristas (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016), entre acoso sexual y acoso por razón de género, según la intencionalidad del agresor. En el caso del acoso sexual “la finalidad del agresor sería la de lograr la satisfacción de carácter carnal y libinidoso, mientras que, en el segundo caso, el objetivo del acosador es el desprecio por las mujeres” (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016: 111). Más allá del matiz que señala nuestra legislación, en la práctica real, a pesar de la existencia de dominación masculina sexual cuando se produce acoso sexual, el objetivo es instrumental y entraña también elementos de poder, al perseguir la finalidad de controlar y subordinar a la mujer.

En la última década, la violencia patriarcal ha ido mutándose en diferentes manifestaciones, gracias a su capacidad para ser ejercida en cualquier formato y medio. La conquista —cada vez mayor— de las mujeres, de los espacios públicos y de ocio, así como su presencia en los entornos virtuales, ha adaptado a nuevos contextos las formas de violencia ejercidas tradicionalmente sobre las mujeres. Siguiendo el postulado de Pernas (2001)<sup>170</sup>, las tipificaciones del Código Penal, en relación a las violencias sexuales hacia

---

<sup>168</sup> *Ibid*, p. 151.

<sup>169</sup> Cit. por Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2017: 111.

<sup>170</sup> Cit. por Osborne, 2009: 155.



las mujeres, podría decirse que han permitido romper simbólicamente con la soledad del hogar y del ámbito privado, desde el que se cometen numerosas violencias. Pero aun así, si las medidas penales no se acompañan de acciones concretas, es muy complicado resolver la rapidez con la que patriarcado desarrolla nuevas estrategias de control sobre los cuerpos de las mujeres.

Las recientes modificaciones del Código Penal (2015) han incluido otras formas de violencias, tales como el acoso callejero (“stalking”), el acoso en el ámbito escolar (“bullying”), o el acoso en las nuevas sociedades tecnológicas (“ciberbullying”, “grooming” o “sexting”). En este sentido, la *Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 19/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*, incluye una innovadora tipificación de “stalking” dentro del Título VI, relativo a los “Delitos contra la Libertad”:

1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

1.a La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

2.a Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3.a Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4.a Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

*Código Penal. Artículo 172 ter.*

En relación a la modificación del artículo 172 ter., tal y como indican diversas juristas (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2017), a pesar de la oportunidad que representa en el marco de la lucha contra todas las formas de violencias de género, nuevamente se incluyen como sujetos pasivos a los hombres y a las mujeres, obviando, una vez más, la especificidad y la mayor prevalencia de este tipo de violencia en las mujeres. Llama igualmente la atención, como se establece repetidamente, una jerarquía de víctimas de violencia de género y, por ello, de las propias violencias, pues sólo se considerará agravante en caso de que “el ofendido fuere alguna de las personas a la que se refiere el apartado 2 del artículo 173”. Es decir:

“...el que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia ...”

La innovación que incorpora la penalización del envío o intercambio de fotos y videos de contenido privado sin consentimiento —Artículo 197. CP—, abre otro escenario de posibilidades en la lucha contra la violencia sexual que se ejerce contra niñas, adolescentes y mujeres en las nuevas sociedades tecnológicas. Todo ello en un contexto en el que se sigue sin prestar la atención que merece la manera en que las nuevas tecnologías afectan, de forma diferenciada, a los géneros (Tajahuerce & Mateos, 2016). Las violencias patriarcales en la red han hecho que internet se haya puesto al “servicio de la violencia contra las mujeres” (Burgos, Donoso-Vázquez, Prado, et al. 2014), desde donde se reproducen, de forma extremadamente perversa, nuevas estrategias de control, de miedo y de violencia extrema hacia las mujeres. Las últimas reformas del Código Penal en relación a las técnicas de la información y comunicación no parecen haberse hecho desde la perspectiva de género (García, 2014), que merecen las características y alta prevalencia de este tipo de violencias.

El escenario que rotula la forma en que el marco normativo español enfoca la violencia sexual, sigue sin corresponderse con la realidad social en la que conviven las víctimas y supervivientes de violencia sexual, tampoco con las demandas del movimiento feminista o con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de violencia sexual, como se desarrollará en la segunda parte de esta investigación. Sí que es cierto que las modificaciones legislativas se conciben esperanzadoras, pero también somos conscientes de que las normas no son en exclusividad las que modifican las mentalidades y la ideología patriarcal, en un contexto, el judicial, en el que prevalecen significativos estereotipos de género que se trasladan en la propia jurisprudencia que emana de las decisiones judiciales en este terreno.

“La jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que cuando se dan dos o más penetraciones si el hecho se produce entre las mismas personas y en un mismo ámbito espacio-temporal, por ser todo ello realizado en una misma situación y consecuencia en un mismo dolor, no hay pluralidad de acciones, sino una sola, por lo que no cabe hablar en estos casos, ni de pluralidad de delitos, ni de delito continuado, sino de uno sólo.”

Tribunal Supremo. Recurso de Casación. 2006<sup>171</sup>

---

<sup>171</sup> Recurso: Casación nº 10367/2006 P. Sentencia: nº 1302/2006 de fecha 18/12/2006.

En este sentido, Raquel Osborne se refiere al sistema penal como “la ley del embudo” (2009: 77), lo que se traslada en que, a pesar de la gravedad de los hechos y de la magnitud de las cifras, las dificultades para probar el delito implican que sólo un mínimo número de agresores sexuales sean condenados. Donde el feminismo identifica, sin atisbo de duda, la existencia de violencia sexual, el sistema penal y sus operadores jurídicos siguen resistiéndose en sus respuestas.

Nuestro Código Penal mantiene encumbrados muchos de los mitos que amparan la violencia sexual y a sus agresores, desde el momento en el que la prueba de la violencia o de la intimidación es el elemento clave de las agresiones sexuales, y no tanto la falta de consentimiento; que el uso del alcohol o las drogas para incapacitar a la víctima se considere un delito menor, por ser abuso sexual, y no agresión sexual; o la gravedad del delito es mayor cuando existe penetración en el cuerpo de la víctima (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2017). Por todo ello, el mensaje que se traslada es de una gran suavidad en relación a las secuelas reales que sufren las víctimas de forma individual—físicas, psicológicas o subjetivas—, y el conjunto de la sociedad, de manera global. Pero principalmente, el mensaje que transmite nuestras leyes, nuestra jurisprudencia y nuestro código penal se concreta en la falta de consideración que el poder judicial, uno de los tres poderes fundamentales de los Estados de Derecho, adquiere ante una de las formas más extremas y prevalentes de violencia de género y discriminación.

La completa investigación jurídica elaborada por el *Grup de Recerca de Drets i Societat en Perspectiva de Gènere*-UAB en 2016, concluye en la vía a la que señalan las líneas precedentes. Tras el análisis comparado de diversas sentencias del sistema judicial catalán, la respuesta de los operadores jurídicos ante las víctimas se resume en algunos de los mitos a los que la investigación apunta (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2017: 162-165):

- Las lesiones físicas siguen siendo claves en la denuncia. Sin ellas, las mujeres son cuestionadas.
- Los informes forenses prevalecen, frente a otros informes de otros equipos profesionales especializados en violencia sexual ajenos al circuito judicial.
- El derecho que tienen las mujeres a la reparación se contempla como un elemento que pone en duda la veracidad de los hechos, pudiendo revertirse como una denuncia motivada por motivos espurios.
- Numerosos problemas relacionados con la prueba, cuando se utilizan drogas para agredir sexualmente o la presencia del “trauma”, como requisito necesario para la agresión sexual: “la manera estereotipada como se valora el sufrimiento de la víctima o cuánto tiempo ha tardado en hacer la denuncia” (2016: 163).

- Cuestionamiento cuando las víctimas han “sobrereaccionado” ante los hechos: “la conducta de la víctima ideal sólo coincide con algunas mujeres” (2016: 164).
- Dificultades para identificar los acosos sexuales.

La autoridad teórica y práctica del feminismo, en este terreno —incluso del marco internacional de derechos humanos, en relación al sistema judicial español— indica poca transcendencia al respecto. En el plano social, todo parece mostrar que sucede lo mismo: hasta que un tribunal no se pronuncia sobre un hecho en la línea en la que la teoría feminista ya lo ha hecho históricamente, no se le dota de la categoría moral que merece, tanto cuando las resoluciones son positivas, como negativas<sup>172</sup>.

La jurisprudencia puede cambiar la vida de millones de mujeres, por eso las organizaciones no gubernamentales la utilizan en sus litigios estratégicos. Es sin duda indispensable para que así sea, hasta que la jurisprudencia no se enfoque desde un marco teórico feminista o de género<sup>173</sup>, los cambios seguirán produciéndose de forma lenta y frustrante, de cara a las víctimas, e insuficiente para modificar las raíces de la discriminación que afecta globalmente a toda la humanidad ■

---

<sup>172</sup> Véase por ejemplo sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1996: “la violación entre cónyuges es perfectamente posible”.

<sup>173</sup> El 7 de marzo de 2017, por primera vez en la Historia de este país, la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Canarias (Las Palmas) resolvió refiriendo a la técnica de “juzgar con perspectiva de género”, aplicándolo al caso juzgado: “Por ello, en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos por razón de género, deberá aplicarse la impartición de justicia una metodología de análisis integradora de la perspectiva de género”. Véase la sentencia en el siguiente link del Consejo General del Poder Judicial: <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7969919&links=%221027%2F2016%22&optimize=20170324&publicinterface=true>



---

## **CAPÍTULO 3**

# RESPUESTAS GLOBALES A LA VIOLENCIA SEXUAL DESDE LOS DERECHOS HUMANOS



“La violación [...] es un mensaje de castración y mutilación del enemigo. Es una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres.”

Coomaraswamy, Radhika.

Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer (2006-2012)

### **3.1 Las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos: luces que alumbran las sombras de la violencia sexual**

A partir de los años 90, los organismos internacionales de derechos humanos —Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Cortes Penales Internacionales de Derechos Humanos, y las conferencias internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995<sup>174</sup>— jugaron un papel fundamental en el reconocimiento histórico de la violencia hacia las mujeres, en la significación específica de la violencia sexual como manifestación de la violencia de género, así como en su consideración como vulneración de derechos humanos, íntimamente ligada los derechos sexuales y reproductivos:

“Los derechos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre la cuestiones relativas a su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva y a decidir libremente respecto de estas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”.

Plataforma de Acción de Beijing. 1995<sup>175</sup>.

Durante esos años, en los organismos internacionales de derechos humanos comenzó a consolidarse toda una corriente de cambio dirigida, no sólo a visibilizar la violencia de género en todas sus manifestaciones, sino, de forma paralela, a luchar contra las raíces que la sustentan.

En el seno de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres no se interpretó como una cuestión de derechos humanos hasta 1993; nada menos que cuarenta y cinco años

---

<sup>174</sup> La Cuarta Conferencia de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, marcó un punto de inflexión en la agenda mundial por los derechos humanos de las mujeres. De esta conferencia salió la “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing” que fue adoptada de forma unánime por 189 países, en las cuales se establecieron los objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12 áreas: la mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer, la mujer y la salud, la violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente, la niña. Véase la Declaración de Beijing y programa de Acción de Viena (A/CON. 157/23) en el siguiente enlace: <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf>

<sup>175</sup> Párr. 96.



después de aprobada la Carta de San Francisco o Declaración Internacional de los Derechos Humanos (1948). Tal y como ya se ha indicado, será en este año cuando, a través de la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” —DEWAV— se describa la violencia contra las mujeres y se reafirme su relación como una violación de los derechos humanos en los siguientes términos:

“Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”.

Artículo 1. 1993

A pesar del papel fundamental que juegan todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en la significación y consideración de los derechos humanos de las mujeres —sobre los que se incide a lo largo de esta investigación—, es importante recordar que la ausencia de las voces femeninas y las experiencias de vulneración de derechos humanos que viven las mujeres en el mundo continúan estando residualmente consideradas en las propias estructuras que construyen el edificio sobre el que se conforma el sistema internacional de derechos humanos. Alice Edwards (2011) así lo demuestra a través de determinados ejemplos:

- Las mujeres siguen estando insignificamente representadas en los órganos de toma de decisiones internacionales.
- Escasos tratados internacionales de derechos humanos contienen disposiciones expresas que obligan a los Estados a garantizar la igualdad representativa.
- La ausencia de voces femeninas son consecuencia directa de la hegemonía masculina en las instituciones públicas, lo que, a la larga, ha implicado que también hayan estado excluidas del desarrollo, negociación, articulación, redacción, monitoreo de las normas, actividades y conclusiones adoptadas en el marco de los derechos humanos.

Aún con este escenario, las herramientas que proporciona el sistema internacional de los derechos humanos acompañan, de forma crucial, la labor de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres feministas en su lucha contra todas las formas de violencia de género y, de forma específica, contra la violencia sexual. Como se comprobará en la segunda parte de esta investigación, serán herramientas éstas que se situarán desde el plano conceptual y normativo, incluso por delante de consolidados Estados de derecho. Véase el caso del Estado Español.

### 3.1.1 La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: una visión contrastada e independiente de la violencia sexual

Aprobada la Declaración por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, Naciones Unidas crea un año más tarde el cargo de Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias<sup>176</sup>. Su misión será la de combatir interdisciplinariamente la eliminación de la violencia contra las mujeres a nivel mundial<sup>177</sup>, en coordinación con otros organismos e instrumentos internacionales. La Relatora fue nombrada por la Comisión de Derechos Humanos, tras la aprobación 1994/45 (“La cuestión de la integración de los derechos de la mujer en los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y la eliminación de la violencia contra la mujer”), un título que ya, de por sí, como señala Merino Sancho:

“...manifiesta la intención de Naciones Unidas de integrar los derechos humanos de las mujeres en los mecanismos de derechos humanos, lo que es una prueba más de la exclusión de los derechos humanos de las mujeres en el sistema general de derechos humanos” (2007: 389).

La Relatora se convierte, así, en un instrumento fundamental en el marco interpretativo y significativo a nivel internacional en lucha contra la violencia que sufren las mujeres y, de forma específica, de la violencia sexual, tal y como expone a lo largo de los informes especiales que realizará hasta el presente. Solo la Relatora tiene entre sus funciones la de interpretar el concepto de violencia de género establecido en la Declaración de 1993 (Merino, 2007), a diferencia de otros organismos<sup>178</sup> de Naciones Unidas, que emiten informes en los que se tienen en consideración los propios datos de esta relatoría en relación a la violencia hacia las mujeres.

---

<sup>176</sup> Entre 1994 y 2016 se han sucedido en el cargo las siguientes Relatoras especiales sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: Radhika Coomaraswamy (1994-2003), Yakin Ertürk (2003-2009), Rashida Manjoo (2009-2015) y Dubravka Šimonović (2015-actualmente).

<sup>177</sup> Entre las responsabilidades que adopta su mandato la Relatora debe. a) Recabar y recibir información sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, de los gobiernos, los órganos creados en virtud de tratados, los organismos especializados, otros relatores especiales encargados de diversas cuestiones de derechos humanos, y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, incluidas las organizaciones de mujeres (...); b) Recomendar medidas, vías y medios, en los planos local, nacional, regional, para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y sus causas y para subsanar sus consecuencias; c) Colaborar estrechamente con todos los procedimientos especiales y otros mecanismos de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos y con los órganos creados en virtud de tratados (...); d) Seguir adoptando un enfoque exhaustivo y universal de la eliminación de la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, incluidas las causas de la violencia contra la mujer relacionadas con las esferas civil, cultural, económica, política y social (...). Resolución de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 2003

<sup>178</sup> Algunos de estos organismos serían la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Comité de Derechos Humanos, El Comité de los Derechos del Niño, El Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, El Relator Especial de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

Sus aportaciones confeccionan una interpretación de la violencia hacia las mujeres por encima, incluso, de la definición de la propia Declaración, que ya de por sí había rebasado el “modelo asimilacionista” (Merino, 2007) de tratamiento jurídico de igualdad y diferencia, basado en el “falso universalismo” (Valcarcel, 2008, 2010) sobre el que, reiteradamente, se habla a lo largo de este trabajo. Pero cabe insistir, por otro lado, en que, como apunta Merino, “sus informes no pretenden alterar en lo más mínimo el concepto establecido en la Declaración y tratará únicamente de desarrollar dicho marco” (Merino, 2007: 396).

Teniendo presente que la Declaración (1993) estampa novedosamente en su descripción la subordinación estructural de las mujeres respecto de los hombres como grupo y, de esta manera, contribuye “a reconfigurar el sistema de derechos humanos atendiendo a la especificidad de esta violencia” (Merino, 2007), la Relatora, desde que comienza su mandato en 1994, incide en su Informe Preliminar en este aspecto estructural como base de la discriminación y violencia hacia las mujeres. Sus palabras guían así un camino en consonancia constante con el marco teórico y político feminista :

“...el sistema de dominio masculino tiene raíces históricas y sus funciones y manifestaciones varían con el tiempo [...]. El uso de la fuerza es sólo uno de los aspectos de este fenómeno, que la somete por la intimidación y el miedo”

Informe preliminar de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, 1994.<sup>179</sup>

Entre los más de 70 informes realizados<sup>180</sup> por las diferentes Relatoras sobre la violencia contra la mujer durante los últimos 25 años, el discurso político que éstos impregnan otorga un lugar definido a la violencia sexual, reseñando su especificidad como parte de las numerosas formas de violencia hacia las mujeres que existen. Es llamativo observar también cómo las Relatoras desarrollan todo un marco argumentativo diseminado entre los diferentes documentos, en los que se identifica la violencia sexual en relación a los siguientes aspectos: sus causas, sus consecuencias, los ámbitos en los que se produce, la responsabilidad del Estado en su prevención, y los responsables de su existencia y establecimiento como una grave vulneración de los derechos humanos.

Desde el inicio de sus mandatos, las Relatoras se sitúan ante la violación de manera categórica, al referirse a ella como una forma de violencia sistémica, desmontando además uno de los mitos más universales del discurso patriarcal, que circunscribe la violación a circunstancias

---

<sup>179</sup> Párr.49.

<sup>180</sup> Documentos relacionados con el mandato de la Relatora Especial con inclusión de sus causas y consecuencias entre 1994 y 2017. Recuperado el día 20 de marzo de 2017, desde: [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?m=106](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=106)

anecdóticas: “...la mujer es víctima de algunas formas universales de abuso, como la violación y la violencia en el hogar” (Informe Preliminar, 1994<sup>181</sup>). Su análisis se adelanta, incluso, a históricas resoluciones dictadas años más tarde por los tribunales penales internacionales de Ruanda y Yugoslavia, que consideran la violación como una forma de tortura: “No es raro que se practique la violación como instrumento de tortura” (Informe Preliminar, 1994<sup>182</sup>).

En 1994, la relatora Radhika Coomaraswamy —en el “Informe Preliminar” sobre el que se apuntaba en los párrafos anteriores— se encamina a establecer la relación entre el consumo de pornografía y la violencia sexual, o entre la violación y el sexo femenino, y considera que “las mujeres están expuestas a la violencia por su sexualidad femenina (resultante, entre otras cosas, en la violación y en la mutilación genital femenina)”<sup>183</sup>. Su aportación es muy significativa, porque, de forma paralela, distingue otras formas de violencia sexual fuera del entorno íntimo. Incide en ella como parte de la violencia en la comunidad que se reproduce específicamente en: la violación, el acoso sexual, el hostigamiento sexual o la violencia comercializada, así como el tráfico de mujeres, la prostitución, la pornografía, o aquella cometida por el Estado (mujeres detenidas y violaciones en conflictos armados).

En el análisis sobre las causas estructurales que originan la violencia sexual, la Relatora establece un vínculo entre las relaciones históricas de poder y la cuestión de la sexualidad femenina en el contexto histórico de la regulación de su conducta sexual, como parte del control de los cuerpos de las mujeres. Se podría afirmar que la Relatora inscribe sus aportaciones considerando la cuestión del “orden sexual” —en el sentido del carácter sexuado de determinadas violencias— como elemento fundamental en la significación de la violencia sexual:

“La violencia se utiliza a menudo como instrumento para regular la conducta sexual de la mujer y por esa razón, no es raro que se exprese sexualmente. La violación, el acoso sexual, la trata, la mutilación genital femenina son todas las formas de violencia que representan una agresión a la sexualidad femenina”.

Informe Preliminar, 1994<sup>184</sup>

Esta correspondencia se entabla desde la perspectiva de derechos humanos, precisamente por la relación de la violencia sexual como vulneración de derechos humanos y, por ello también, como una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, considerando que

---

<sup>181</sup> Párr.5.

<sup>182</sup> *Ibid*, párr. 58.

<sup>183</sup> *Ibid*, párr. 48.

<sup>184</sup> Párr. 58.

éstos últimos dimanar de distintos derechos humanos, en virtud de la normativa de derechos humanos y del derecho internacional. De esta forma, la violencia sexual contra las mujeres se expresa, según las diferentes relatoras, como una vulneración al derecho humano a la salud en el sentido de que “anula el derecho de las mujeres y las niñas a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental” (Manjoo, 2014<sup>185</sup>):

“El derecho a la información, sobre cuya base se pueden tomar decisiones fundadas acerca de la sexualidad; los derechos a la dignidad, a la privacidad y a la integridad física, mental y moral para realizar una elección de carácter sexual; y el derecho a las normas más elevadas de salud sexual”.

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy. 1999

A lo largo de los años, el posicionamiento que establecen las Relatoras respecto a la violencia sexual se irá perfilando de forma paralela al análisis en profundidad sobre sus características, consecuencias y responsabilidades. Acompañan sus informes enunciaciones que clarifican los tipos de violencia sexual, introduciendo siempre en sus observaciones elementos que permiten determinar, más allá de una definición, las características definitorias de la violencia sexual:

“... la violación es el acto violento y degradante definitivo de la violencia social y constituye “una invasión de las partes más privadas e íntimas del cuerpo de la mujer, así como un asalto a la esencia de su propio ser. Si bien la violación suele ser una manifestación de la violencia sexual extrema contra mujeres individuales, cada vez más se utiliza como arma de guerra, represión política o limpieza étnica”

Radhika Coomaraswamy, 1999<sup>186</sup>

Los informes identifican de forma reiterada los ámbitos en los que se cometen las diferentes violencias sexuales, como son el matrimonio, los espacios de trabajo o las instituciones educacionales, entre otros:

“... el acoso sexual en la escuela tiene efectos físicos y emocionales negativos y ocasiona una menor productividad, absentismo escolar, dificultades de concentración y un peor rendimiento académico o el abandono de la escuela por parte de las niñas, a menudo raíz de un embarazo”.

Rashida Manjoo, 2014<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> Párr. 30.

<sup>186</sup> *Ibid*, párr. 16.

<sup>187</sup> Párr.31

También en el ámbito deportivo o en situaciones de privación de libertad, ayudando así a desmontar la mitología sostenedora de una parte de la impunidad del acto, al conseguir significar la violencia sexual en entornos tradicionalmente desconsiderados como tales y, por tanto, permitiendo identificar a los responsables:

“... incluso en el contexto del matrimonio o de una relación a largo plazo no es a veces posible evitar todo riesgo en las relaciones sexuales. Dentro del matrimonio, éstas no son siempre consensuales; el marido suele ser quien decide el uso o no de protección y el tipo de ésta”

Yakin Ertük<sup>188</sup>, 2005<sup>189</sup>

A lo largo de los años, a través de sus informes —en sintonía con la normativa y jurisprudencia analizada— las Relatoras profundizarán en cuestiones fundamentales sobre aquellos matices que, urgentemente, necesitan ser nombrados en la significación de la violencia sexual. Tales como son el consentimiento y la coacción más allá del uso de la fuerza:

“Los actos de agresión y coacción “se producen como una serie ininterrumpida que va desde la violación hasta formas no físicas de presión que obligan a las niñas y mujeres a someterse a una relación sexual contra su voluntad. Puede decirse que hay coacción cuando la mujer no tiene la posibilidad de elegir y se expone a graves consecuencias físicas o sociales si opone resistencia a las insinuaciones sexuales”.

Yakin Ertük, 2005<sup>190</sup>

En evidente sintonía con el marco teórico feminista, las Relatoras se referirán a la violencia sexual en conflicto armado como “prolongación de un cuadro de discriminación y violencia que se exagera en tiempos de conflicto” (2016: párrafo 35), y no como algo diferente y excepcional. Planteamiento éste —como ya se ha citado en capítulos anteriores— extendido y proclamado por posturas tradicionales.

Las Relatoras significan la violencia sexual en situación de conflicto armado en relación a actos de una “brutalidad inconcebible”<sup>191</sup> (Coomaraswamy, 2001:20), identificando —también sin tapujos— a la cadena de responsables que se esconden detrás de estas brutalidades: fuerzas gubernamentales y agentes no estatales, policías

---

<sup>188</sup> Relatora Naciones Unidas 2003-2009

<sup>189</sup> Párr.29.

<sup>190</sup> Ibid, párr. 27.

<sup>191</sup> En el informe que la Relatora elaboró en relación a “La violencia contra la mujer perpetrada y/o condonada por el Estado en tiempos de conflicto armado (1997-2000)”, se refiere a la violencia que sufrieron las mujeres y las niñas en los siguientes términos: “las mujeres fueron objeto de una brutalidad inimaginable en diversos conflictos que abarcaron desde Afganistán a Chechenia y desde Sierra Leona a Timor Oriental” (2001: 4).

encargados de proteger a las mujeres y a las niñas, guardas de campamentos de refugiados y de fronteras, vecinos, políticos locales e, incluso, parientes “bajo amenaza de muerte” (Coomaraswamy, 2001:20)<sup>192</sup>.

Desde el inicio de sus mandatos, en sus informes especiales, las Relatoras nunca perderán de vista la histórica invisibilización de la violencia sexual hacia las mujeres en situaciones de conflicto armado y posconflicto, profundizando en los objetivos que se persiguen al cometerse, y puntualizando sobre la necesidad de desligarla de la tradicional interpretación que asocia la violencia sexual como un atentado contra el “honor”, y no como un delito de violencia contra la mujer:

“Quizá más que el honor de la víctima, el blanco de la violencia sexual contra las mujeres es lo que se percibe como el honor del enemigo. La violencia sexual contra la mujer tiene por objetivo enrostrar la victoria a los hombres del otro bando, que no ha sabido proteger a sus mujeres. Es un mensaje de castración y mutilación del enemigo. Es una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres”

Radhika Coomaraswamy, 1998<sup>193</sup>

Incidirán, además, en las consecuencias que el desplazamiento forzoso implicará. Especialmente en las mujeres y niñas en contextos en los que el riesgo de sufrir violencia sexual se acentúa, tanto para las desplazadas internas, como para las mujeres y niñas refugiadas, que tendrán que verse expuestas a situaciones en las que deberán compartir alojamiento o convivir con hombres extraños (Ertürk, 2000). También denunciarán la derivación del desplazamiento forzoso en casos de explotación sexual, como la trata de mujeres o los casamientos concertados, “incompatibles con la igualdad de derechos y con el respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres” (Coomaraswamy, 2000: 14)<sup>194</sup>. Un asunto que —como ya se ha señalado—, incluso en el presente sigue sin mostrarse prioritario en la agenda política de las Organizaciones Internacionales o de las ONG de ayuda al desarrollo o en situaciones de emergencia.

De manera paralela, denuncian la trata de mujeres con fines de explotación sexual y el matrimonio forzoso como prácticas análogas a la esclavitud (Coomaraswamy, 2000: 9)<sup>195</sup>, haciendo hincapié en que las víctimas son invisibilizadas por ser sometidas a diversas y extremas formas de violencia sexual. En el caso de la trata, además, acentúan la manera en que

---

<sup>192</sup> Párr. 44.

<sup>193</sup> Párr.12.

<sup>194</sup> Párr. 29.

<sup>195</sup> *Ibid*, párr. 13.



las mujeres son agredidas por los proxenetas, por agentes de policía o funcionarios de inmigración a través de la violación y de otras formas de violencia sexual con la finalidad de “destrozarlas física, mental y emocionalmente y obligarlas a someterse a trabajos forzosos o prácticas semejantes a la esclavitud” (Coomaraswamy, 2000:16)<sup>196</sup>. Identifican así la instrumentalidad que persigue la violencia sexual sobre el control de los cuerpos de las mujeres, al considerar tales agresiones sexuales “como armas contra las trabajadoras migrantes” (Coomaraswamy, 2000:16), empleadas con persistencia contra las mujeres sometidas a la trata para “condicionarlas a trabajar forzosamente en la industria del sexo” (Coomaraswamy, 2000:16).

La Relatora abanderará también —en marcada consonancia con los estudios feministas interseccionales— un necesario análisis sobre las interconexiones de las múltiples formas de discriminación y la violencia contra las mujeres. En este sentido, el primer informe de la segunda Relatora —Yakin Ertürk— ya hace referencia a “...la universalidad de la violencia contra la mujer, la multiplicidad de sus formas y convergencia de los diversos tipos de discriminación contra la mujer y su vinculación a un sistema de dominación basado en la subordinación y la desigualdad” (2004: 2).

En adelante, este análisis será fundamental como parte del discurso político feminista, en la exigencia a los Estados de la implementación de medidas políticas, leyes y acciones que tengan presente el cruce de sistemas de opresión. Aquellos capaces de llevar a que una mujer pertenezca a diversos grupos oprimidos y, por tanto, que conviva con formas múltiples de opresión (Merino, 2007). Tal y como sucede en el caso español, ante la extrema gravedad con la que conviven las mujeres migrantes en situación administrativa irregular frente a la violencia sexual.

Las Relatorias, hasta el presente, expondrán sin tapujos el desfase entre las normas internacionales de derechos humanos y la aplicación práctica de éstas por los Estados (Informe de la Relatora, 2016), responsables máximos del cumplimiento de los derechos humanos y la prevención de la violencia sexual.

Inspirándose en “los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, los documentos de política y las normas existentes”<sup>197</sup> (Informe de la Relatora, 2016),

---

<sup>196</sup> *Ibid*, párr. 38.

<sup>197</sup> Entre los instrumentos internacionales que refiere señala los siguientes: Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para la Protección de Todas las personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo y su Recomendación general núm.19.



las valiosas aportaciones que las Relatoras realizan en el marco de la significación, interpretación, consecuencias y visibilización de todas las formas de violencias sexuales, favorecerán la incorporación al debate teórico y político feminista del enfoque de derechos humanos, fundamental en la práctica política y social del trabajo de numerosas organizaciones feministas y de mujeres. Organizaciones cuyas orientaciones—frente al trauma o al daño vivido—, en ocasiones se han centrado más en la intervención y acompañamiento asistencialista de las mujeres desde un plano paliativo, y menos en un enfoque de derechos humanos, dirigido a visibilizar la violencia hacia las mujeres y sus manifestaciones como vulneraciones de derechos humanos: el derecho humano a la igualdad, a no ser discriminadas por razones de sexo o de género, a la libertad, a la seguridad de la persona, a no ser sometidas a torturas ni a otros tratos inhumanos o degradantes, a intervenir en la vida política, cultural, social.... Y, al mismo tiempo, exigir a los Estados que cumplan con sus responsabilidades en el marco de la prevención, asistencia, sanción y reparación a las víctimas.

La tendencia sobre la que las Relatoras configuran su trabajo durante todos estos años, materializa un “discurso autónomo” (Merino, 2007), con una impronta propia respecto a otros instrumentos, que trasciende la interpretación neutral de la violencia en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, e incide —de forma significativa— en asuntos cruciales tales como: la delimitación conceptual que se realiza de la violencia contra la mujer, el desarrollo de la especificidad de ésta y de sus diferentes manifestaciones, las reflexiones desarrolladas en cuanto a la instrumentalidad de la violencia sexual y su relación con el control de las mujeres y el mantenimiento del sistema sexo/género, o las consideraciones novedosas de forjar tipos de violencia como la violencia sexual, como actos de tortura (Merino, 2007).

Pero, además, sirve de sustento fundamental al movimiento feminista internacional en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y, de forma específica, en la lucha contra la violencia sexual hacia las mujeres.

### **3.1.2 La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité CEDAW, la Organización Mundial de la Salud y el Secretariado General de la Naciones Unidas: delimitaciones conceptuales y respuestas prácticas frente a la violencia sexual**

Diferentes instrumentos de derechos humanos han contribuido, en varios aspectos, a la construcción de un marco teórico sobre la violencia sexual, sus causas y sus consecuencias. En profunda sintonía con el marco teórico feminista, sus aportaciones —como se ha señalado— son herramientas fundamentales para la sociedad civil y para los propios Estados, de cara a la adaptación de sus leyes y políticas públicas para, estructuralmente, combatir la violencia sexual en sus distintas manifestaciones.

En este sentido, uno de los instrumentos más importantes en la defensa de los derechos humanos de las mujeres es la “Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) —adoptada el 18 de diciembre de 1979 mediante la Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada a día de hoy por 189 países<sup>198</sup>—, así como su Comité de expertas y expertos independientes (Comité CEDAW), para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y encargado de monitorear la implementación de la CEDAW.

Aunque ya se ha hablado sobre la CEDAW en el capítulo anterior, conviene retomar algunos aspectos significativos en cuanto a su relación con el Comité CEDAW. La transcendencia que un tratado de estas características tendrá sobre las vidas de las mujeres en el mundo— y, de forma específica, en la violencia de género y sexual— es lo que algunas autoras han considerado en calificar como “la Carta Magna de todas las Mujeres” (Facio: 2014).

La CEDAW será el primer instrumento internacional que incluya todos los derechos humanos de las mujeres “explícita o implícitamente, al prohibir todas las formas de discriminación por razones de sexo” (Facio, 2010: 55). Elemento éste que, a pesar de ser señalado en la mayoría de las ocasiones como algo positivo, algunas juristas feministas consideran importante recalcar, sin embargo, como otro ejemplo más de la debilidad del sistema internacional de derechos humanos, al considerar que las mujeres sólo están protegidas indirectamente contra la violencia de género (Edwards: 2011).

---

<sup>198</sup> Véase el estado de la ratificación de la CEDAW, a través del mapa interactivo de las Naciones Unidas: <http://indicators.ohchr.org/>.

Por su parte, Alda Facio (1992) sí que otorga un valor especial a la propia definición que establece la Convención en su artículo 1º, al calificarla triplemente importante desde su perspectiva jurídica:

“A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Convención para la Eliminación de todas las formas de  
Discriminación contra la Mujer. Art.1.

Para empezar, según Facio, la propia definición que se establece sobre “discriminación contra la mujer” trasciende el hecho fundamental de poder considerar una ley discriminatoria, si tiene por resultado la discriminación de la mujer, aunque esa ley no se haya promulgado con la intención o con el objeto de discriminarla. De esta forma, según Facio, “para decidir si una ley es discriminatoria, hay que analizar sus efectos, no sólo su redacción” (Facio, 1992:58).

La CEDAW se podría decir, por tanto, que “complejiza el concepto” (Chiarotti, 2015: 13), incorporando la discriminación por objeto —de forma directa— y discriminación por resultado —de manera indirecta—, lo que permite aún más profundizar en la definición, en sus consecuencias y, por ello, avanzar en la precisión de cada una de las circunstancias que implican discriminación para las mujeres. En este sentido, el propio Comité de la CEDAW —sobre el que se hablará en los próximos párrafos— en su Recomendación General 25 establece un marco conceptual muy bien delimitado, al definir la discriminación indirecta en los siguientes términos:

“Puede haber discriminación indirecta contra la mujer cuando las leyes, políticas y programas se basan en criterios que aparentemente son neutros desde el punto de vista del género que, de hecho, repercuten negativamente en la mujer. Las leyes, las políticas y los programas que son neutros desde el punto de vista del género pueden, sin proponérselo, perpetuar las consecuencias de la discriminación pasada ...”

Recomendación General 25. Comité CEDAW

Como ejemplo cercano, es revelador hacer referencia al caso español: el *Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones* —conocido por las ONG

defensoras de derechos humanos como el “Real Decreto de Exclusión Sanitaria”<sup>199</sup> — representa, claramente, una ley que discrimina a un grupo de mujeres en el sentido al que se refiere Facio. Según el RD 16/2012, las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual que se hallan en situación administrativa irregular, y que tengan que ser atendidas fuera de urgencias, serán excluidas de la prestación sanitaria con fondos públicos. Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, víctimas de violencia sexual, no podrán seguir un tratamiento desde el Sistema Público de Salud, a pesar de las graves secuelas para su salud que implica ser víctima de una agresión sexual.

En segundo lugar, Facio (1992) destaca también el hecho de que la ratificación de la Convención por un país convierte en legal lo que se entiende por discriminación en ese mismo país, lo que significa que otras descripciones más restrictivas no podrán ser legalmente aceptables.

Y en tercer lugar, por último, el alcance de la definición rompe con la tradicional dicotomía entre lo público y lo privado, que presupone la interferencia del Estado en los asuntos privados. La CEDAW prohibirá la discriminación en todas los ámbitos de la vida —“las esferas política, económica, social cultural y civil o cualquier otra esfera” (Artículo 1)—, ampliando la necesidad de legislar y establecer garantías jurídicas sobre espacios intocables por el sistema patriarcal—como son el ámbito laboral o el entorno familiar, entre otros—, en los que tradicionalmente se ejercen distintas formas de violencia hacia las mujeres.

La CEDAW, al igual que otros instrumentos internacionales de derechos humanos —pero con la importante especificidad de hacer referencia a los derechos humanos de las mujeres—, al estar dotada de perspectiva de género (Facio: 2014) se podría considerar que es el primer instrumento internacional que amplía la responsabilidad del Estado, en relación a la discriminación contra las mujeres, a aquellos actos que cometen personas privadas, empresas o instituciones no estatales u organizaciones no gubernamentales (Facio: 2014). De esta manera, obliga a los Estados a que tomen medidas concretas para eliminar la discriminación basada en el género:

---

<sup>199</sup> Véanse los informes de Médicos del Mundo, “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo” (2014); de Amnistía Internacional “Combatir la crisis con dignidad y derechos” (2013), “Mi vida. Mi salud, Mi educación, Mi decisión. Mi futuro. Mi cuerpo. Mis derechos” (2014) y “Sin tarjeta no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla-La Mancha y en la Comunitat Valenciana (2015); Foessa-Cáritas, “VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España” (2014); Oxfam Intermon, “El verdadero coste de la austeridad y la desigualdad. Estudio de caso: España” (2013); Red Acoge, “Los efectos de la Exclusión Sanitaria en las personas inmigrantes más vulnerables” (2014).

“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer ...”

Convención para la Eliminación de todas las formas de  
Discriminación contra la Mujer. Artículo 2.

Como sucede con otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en su Artículo 17<sup>200</sup>, la Convención establece la creación de un Comité integrado por 23 personas expertas, cuya misión será monitorear la implementación de la Convención a aquellos estados que la hayan ratificado<sup>201</sup>. Cada cuatro años, los Estados deberán informar al Comité, a través de los “Informes Periódicos”, sobre las medidas y acciones que se han desarrollado en el marco de la Convención. Por último, el Comité emitirá una serie de “Observaciones Finales” —parte de ellas dirigidas al Estado—, en las que se expondrán, de forma detallada, los avances o principales vacíos que se han encontrado según la aplicación de la Convención<sup>202</sup>.

Veamos a continuación otras de las herramientas que facilitan la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluida la violencia sexual:

### 3.1.2.1 La Recomendación General N°19: acotando la significación de la violencia sexual

Varias decisiones fundamentales en el seno del Comité han tenido gran transcendencia en el marco de la violencia hacia las mujeres. La primera de ellas fue el hecho de que en 1992, por primera vez, abordara el tema de la violencia contra la mujer —en el 11º periodo de sesiones—, a través de su Recomendación General N°19. El Comité consideró necesaria esta recomendación al observar como

“...los Estados Partes no siempre reflejan de manera apropiada la estrecha relación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra ellas, y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Recomendación General N°19, 1992: párrafo 4.

---

<sup>200</sup> “1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Denominado en adelante Comité)”. Artículo 17

<sup>201</sup> Actualmente el Comité está formado por 22 expertas y un experto. Véase información detallada del Comité en el sitio web de Naciones Unidas habilitado para ello: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Membership.aspx>.

<sup>202</sup> Para un mayor conocimiento del funcionamiento del Comité, véase Reglamento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, disponible en castellano en: [http://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=65](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=65)

Por otro lado, definió la violencia contra la mujer como una forma de discriminación basada en el sexo, y exigió a los Estados Partes la adopción de medidas positivas dirigidas eliminar todas las formas de violencia contra la mujer.

En varios sentidos, la Recomendación marca un antes y un después para la Convención. No sólo se refiere al carácter estructural de la violencia hacia la mujer (Art.2), apunta también a las consecuencias que para la salud física y psicológica suponen para las víctimas: “infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad” (1992: párrafo 6).

Tal y como define el artículo 1 de la Convención, establece la relación entre las diferentes formas de violencia contra la mujer como una manera de discriminación, y entabla la correspondencia como “violación de los derechos humanos y libertades fundamentales hacia las mujeres”, en relación a:

- a) El derecho a la vida.
- b) El derecho a no ser sometido a torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno.
- d) El derecho a la libertad y seguridad personales.
- e) El derecho a la igualdad ante la ley.
- f) El derecho a la igualdad en la familia.
- g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental.
- h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.

La Recomendación incide también en romper esa dicotomía público-privado, al considerar que la aplicación de la Convención será en relación a aquella violencia “perpetrada por las autoridades públicas” (1992: párrafo 8) o, en su nombre, los gobiernos. Asimismo, ahonda también en la responsabilidad de los Estados en “adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas” (1992: párrafo 9), responsables de los actos privados, si “no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la vulneración de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas” (1992: párrafo 9).

En cuanto a la manera en que la Recomendación se refiere a la violencia sexual, se incorpora, de manera indirecta, como manifestación de la violencia ejercida sobre las mujeres. Y, de manera directa, se refiere a ella de distintas formas:

En primer lugar, se añaden “Observaciones” en el Artículo 2, al nombrar como “actitudes tradicionales” que perpetúan prácticas que entrañan violencia o coacción, tanto los matrimonios forzados, como la Mutilación Genital Femenina, mencionada de forma errónea —“circuncisión femenina”— en la propia Recomendación.

En segundo lugar, a través del Artículo 6, se incide en la obligación del Estado de adoptar medidas para “suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. Se incluyen en este artículo otras nuevas formas de explotación sexual —como también refiere la Relatora—, en relación al turismo sexual o los casamientos concertados. Cabe destacar cómo el Comité insta a los Estados a que rompan con la tradicional desprotección patriarcal que enfrentan las mujeres en situación de prostitución en relación con la falta de consideración por el sistema judicial de protegerlas frente a la violación. En este sentido, el Comité se pronuncia en el párrafo 15 del Artículo 6 en los siguientes términos: “... necesitan la protección de la ley contra la violación y la violencia, de la misma manera que otras mujeres”. En el mismo Artículo 6, se nombran la guerra, los conflictos armados y la ocupación de territorios, como contextos propicios para la trata de mujeres y los actos de agresión sexual.

En tercer lugar —en relación a los Artículos 5 y 17—, identifica la violencia en la familia como un lugar propicio para todo tipo de violencias, incluida la violación “y otras formas de ataque sexual” (párrafo 23). Y, por último, da un paso fundamental al indicar la existencia de violencia sexual en el lugar de trabajo —“hostigamiento sexual”—, aportando una definición clara sobre los elementos que se producen cuando se desarrolla, algo que sin embargo, la Recomendación no hace con la descripción de otras formas de violencia sexual:

“El hostigamiento sexual incluye conductas de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho”

#### Artículo 11. Recomendación General N°19

Se puede afirmar que la Recomendación N°19 aporta importantes connotaciones sobre la violencia sexual que hacen que ésta no pase desapercibida en el contexto de otras formas de violencia. En este sentido, la Recomendación define los ámbitos en los que se produce —en la comunidad, en el hogar, en el trabajo, en la guerra, en las zonas rurales—, señala las formas en las que ésta se desarrolla —trata, prostitución, agresión sexual, acoso sexual o violación—, identifica a algunas de sus víctimas —empleadas, esposas, prostitutas, víctimas de trata y niñas—, y apunta a los Estados Partes como responsables de los actos de todo



tipo de violencia basada en el sexo que se cometa —tanto en el ámbito público como en el privado—, aportando una serie de recomendaciones concretas (párrafo 24) para combatir todas las formas de violencia hacia las mujeres, incluida la violencia sexual<sup>203</sup>.

A pesar de la transcendencia de la Recomendación General N° 19— herramienta también fundamental para la formulación de políticas públicas dirigidas a la prevención, protección y asistencia a todas las víctimas de violencia sexual—, la Recomendación debería ampliar y desarrollar elementos y conceptos tales como la protección y garantía de eliminar la violencia; la identificación, por ejemplo, de los actores claves en la atención a las víctimas —personal sanitario, policial, operadores jurídicos, servicios especializados, u operadores jurídicos—; o el desarrollo detallado de elementos concretos en materia de prevención, protección, asistencia y garantías de no repetición. Asimismo, sería necesario que se nombrara la “debida diligencia” —sobre la que se hablará detalladamente en la segunda parte de esta investigación— como una obligación de los Estados, estándar ineludible en todos los casos de violencia hacia las mujeres, incluida la violencia sexual, tal y como ya se ha aplicado en casos de violencia bajo la Convención CEDAW, y su Protocolo Facultativo.

En cuanto a la violencia sexual, teniendo en cuenta la alta prevalencia de ésta tanto en todos los entornos sociales, como en los contextos políticos y culturales, la Recomendación debería definir con mayor detalle la necesidad de que los Estados:

- 1.- Adecúen sus legislaciones sobre la violencia sexual.
- 2.- Capaciten a todos los equipos profesionales que de forma directa o indirecta intervienen con las víctimas.
- 3.- Adapten el sistema jurídico a las características especiales que entraña el delito de violencia sexual.
- 4.- Promuevan políticas públicas para su prevención en todos los ámbitos en los que se produce vacíos conceptuales y significativos que se verán tímidamente paliados a través de las interpretaciones que el propio Comité aporta a través las “Observaciones Finales”, Recomendaciones a los Estados Partes, o de los informes anuales, sobre los que también se pronuncia en relación a todos los temas que aborda la Convención, y diferentes recomendaciones.

---

<sup>203</sup> Otras Recomendaciones Generales han venido desarrollándose desde entonces. Recomendaciones que de forma indirecta también afectan aspectos relacionados con la violencia hacia las mujeres y la violencia sexual. Destacan algunas recomendaciones como la Recomendación General n° 21 sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares (1994), la Recomendación General n° 23 sobre la vida política y pública (1997), la Recomendación General N°24 sobre la mujer y la salud, la Recomendación General N°26 sobre las trabajadoras migratorias o la Recomendación N° 28 sobre las obligaciones básicas de los Estados para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer. A día de hoy la Recomendación General N° se encuentra en fase de revisión a la espera de ser actualizada, tal y como la sociedad civil lleva a años reclamando.



### 3.1.2.2 El Protocolo Facultativo de la Convención CEDAW y la violencia sexual: una herramienta aliada

Otras de las decisiones más importantes que se produjo en el seno del Comité fue la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención CEDAW en 1999<sup>204</sup> (PF-CEDAW), convirtiéndose en una nueva herramienta estratégica fundamental en la lucha por los derechos humanos de las mujeres para la sociedad civil, y para las propias víctimas. Alice Edwards (2009) recuerda que hasta la aprobación del PF-CEDAW la CEDAW fue muy cuestionada por la débil implementación de sus mecanismos.

En cualquier caso, el Protocolo —considerado como un “mini tratado” (Facio, 2010: 59) dentro de la propia Convención— constituye un tratado autónomo que debe ser ratificado de manera independiente por los gobiernos que son Estados Parte de la CEDAW. Nos recuerda Alda Facio que el hecho de que los estados no ratifiquen este tratado simboliza un mensaje hacia su ciudadanía, “en el sentido de que el Estado no toma en serio sus obligaciones con respecto a los derechos humanos de las mujeres” (2010: 60).

El PF-CEDAW es novedoso y crucial, en tanto que establece dos procedimientos<sup>205</sup> adicionales a los establecidos dentro de la propia Convención (Facio, 2010):

- 1) Procedimiento de Comunicaciones: el Comité puede recibir quejas individuales relativas a la Convención y si considera que, efectivamente, el Estado ha violado la Convención, posteriormente realizará recomendaciones específicas<sup>206</sup>.
- 2) Procedimiento de Investigación: gracias a éste, el Comité puede emprender una investigación sobre las violaciones graves o sistemáticas que se estén produciendo en un Estado que haya ratificado el PF-CEDAW.

---

<sup>204</sup> Firmado por España en el 2000 y ratificado en el año 2001.

<sup>205</sup> Cabe recordar que los procedimientos no son derechos, sino mecanismos para proteger y garantizar los derechos (Facio, 2010).

<sup>206</sup> Uno de los casos más importantes que se han llevado ante el Comité CEDAW mediante el procedimiento de comunicaciones individuales, fue el caso español de Ángela González Carreño. Una mujer que, tras escapar de su pareja maltratadora, buscó protección para su hija Andrea y para ella. A pesar de numerosas denuncias (más de 30), las autoridades españolas y el sistema judicial español consideró que la gravedad de la situación denunciada por Ángela no era tal y como ella la relataba. Finalmente, un juez terminó otorgándole a su expareja el derecho de visitas sobre Andrea. Durante una de esas visitas el padre asesinó a su hija, suicidándose posteriormente. En 2012, la ONG *Womens Lin 'k Worldwide* presentó el caso de Ángela ante el Comité CEDAW, que emitió un Dictamen (Comunicación N° 47/2012) histórico en agosto de 2014, de manera unánime, dando la razón a Ángela y solicitando que el Estado español llevara a cabo acciones inmediatas dirigidas a la prevención de la violencia de género, incluyendo la formación de los y las operadores jurídicos. A día de hoy el Estado español sigue sin cumplir las observaciones emitidas por el Comité CEDAW en 2014. Para conocer al completo el Dictamen véase Doc. ONU CEDAW/C/58/D/47/2012.

En ambas circunstancias, si los casos han sido admitidos, el Comité emitirá opiniones y recomendaciones en relación a aquellas violaciones de derechos humanos de las mujeres que se hayan producido por el Estado Parte.

### 3.1.2.3 El Comité de la CEDAW ante la violencia sexual: aportaciones significativas que cambian vidas

En el marco de la violencia sexual, el Comité ha aportado, a través de todas las vías que establece el Convenio, importantes aclaraciones, observaciones y recomendaciones sobre las cuales merece la pena realizar un pequeño análisis de los últimos 15 años. A través de los informes anuales que desde 1983 elabora y publica, de los Exámenes Periódicos que realiza a los Estados Partes, y de las Comunicaciones con arreglo al Protocolo Facultativo, el Comité desarrolla distintos temas relacionados con la violencia sexual:

**A)** Violencia sexual en situación de conflicto armado y desplazamiento forzado: el Comité se pronuncia respecto a la estrecha relación entre el comercio de armas y las consecuencias que para las mujeres pues implicar en este terreno. En un interesantísimo y generalmente desapercibido análisis, apunta al hecho de que “la proliferación de armas y municiones perpetúa y facilita estas atrocidades” (Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2013: 18). Se refiere a las mujeres como “blanco deliberado de diferentes formas de violencia y abuso” en situaciones de conflicto armado, a través de asesinatos arbitrarios, torturas, mutilaciones, violencia sexual y la trata de persona con fines de explotación sexual.

Durante la etapa previa a las negociaciones para la firma del Tratado sobre el Comercio de Armas<sup>207</sup> (TCA, 2014), una de las razones que el Comité persiguió fue en relación a que en las tres partes del Tratado se empleara un lenguaje dirigido a prevenir la violencia contra la mujer por razón de sexo, “incluidas la violación y otras formas de violencia sexual, mediante el control de armas y mediante restricciones a las transferencias internacionales” (Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2013: 19).

---

<sup>207</sup> El Tratado Sobre el Comercio de Armas es el encargado de regular el comercio de armas convencionales, desde las armas pequeñas hasta carros de combate, aeronaves de combate y buques de guerra. Entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. Actualmente lo han firmado 130 Estados y lo han ratificado 83 Estados. Para profundizar sobre el Tratado véase el sitio web de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA): <https://www.un.org/disarmament/es/armas-convencionales/el-tratado-sobre-el-comercio-de-armas/>

En su Decisión 42/I, el Comité hizo hincapié en la relación, casi innata, entre las situaciones de conflictos o posteriores a los conflictos, las armas convencionales —especialmente las armas pequeñas—, y la violencia sexual. Asimismo, se incidió también en otras víctimas frecuentemente invisibilizadas, como son manifestantes o activistas en movimientos de resistencia (Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2013).

En la misma línea que otros organismos, en 2010 el Comité ya advertía sobre el aumento en la escala y la brutalidad de la violencia sexual en los conflictos armados —a pesar de la resolución 1325 (2000)—, al señalar la utilización frecuente de la violación como instrumento de guerra (Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2011).

El Comité, en 2011, en la misma línea que las Relatoras, insistió en recalcar el hecho de identificar que el desplazamiento forzado y la apatridia derivan en formas de discriminación por motivos de género y desigualdad para las mujeres y las niñas: “a menudo, las situaciones de desplazamiento forzado y apatridia afectan de modo particular a las mujeres y a las niñas, las cuales son objeto de violencia sexual y sexista y de discriminación” (Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2012: 57).

Igualmente, el Comité exhortó en 2011 a que los Estados aplicaran medidas de salvaguardia contra los actos de violencia sexual y sexista perpetrados contra las mujeres y las niñas en contextos de refugiados (Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2012: 57).

**B)** Medidas específicas que deben tomar los Estados en materia de violencia sexual: en 2010, en el caso 18/2010, Karen Tayag Vertido (Filipinas)<sup>208</sup>, el Comité se pronunció a favor de la demandante, en cuanto a algunas medidas fundamentales que los Estados deben tomar, en relación a la protección de las víctimas de violencias sexual —en asuntos como la definición de violación en el ordenamiento jurídico—, la cuestión de incluir los matices sobre la coacción sobre la que llevaban pronunciando otros organismos internacionales, o la necesaria ...

“...capacitación a magistrados, abogados agentes encargados de cumplir la ley y profesionales de la salud, para que comprendan la violación y otros delitos de sexuales teniendo en cuenta las cuestiones de género”.

Dictamen CEDAW. Comunicación núm.18/2008 (Párrafo 8.9)

---

<sup>208</sup> Para conocer al completo el Dictamen véase Doc. ONU CEDAW/C/46/D/18/2008.

Recordó así la obligación de los Estados de “proporcionar una indemnización adecuada acorde con la gravedad de la violación de sus derechos” (CEDAW. Comunicación núm.18/2008. Párrafo 8.9.a)) en los siguientes términos:

“Velar para que las actuaciones judiciales en los casos relacionados con delitos de violación y otros tipos de violencias sexual sean imparciales y justas y no se van afectadas por prejuicios o estereotipos de género [...] i) Revisar la definición de violación para que se centre en la falta de consentimiento [...], ii) Eliminar de la legislación cualquier disposición que exija que la agresión sexual deba ser cometida por la fuerza o con violencia y que se demuestre la exigencia de penetración, y reducir al mínimo que la posibilidad de que el denunciante o superviviente sea victimizado de nuevo en las actuaciones mediante la adopción de una definición de agresión sexual que:

- a. Exija la existencia de un “acuerdo inequívoco y voluntario” para excluir la calificación de agresión [...].
- b. Exija que el acto tenga lugar en circunstancias coercitivas e incluya una amplia gama de supuesto de coacción [...]

Dictamen CEDAW. Comunicación núm.18/2008<sup>209</sup>

Cabe indicar una vez más, cómo organismos internacionales de derechos humanos —como el Comité— amplían las miras en el marco de la violencia sexual en relación a temas que están prácticamente abandonados en las políticas públicas que dedican los Estados en materia de violencia sexual. Incluso —como viene repitiéndose en esta investigación— dentro del propio movimiento teórico y político feminista en los últimos años. En este sentido el tema de la violencia sexual que enfrentan las niñas o las mujeres en contextos educativos o rurales, también son atendidos desde el Comité:

“La distancia de las escuelas, el miedo a ser víctimas de agresión sexual, los embarazos precoces, junto con las responsabilidades domésticas, a menudo pesadas, desalientan o impiden el aprovechamiento por parte de las niñas de oportunidades educativas”.

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2013: 60

El Comité aborda también asuntos esenciales sobre los cuales el Estado debe actuar en relación a la prevención, asistencia y atención integral a las víctimas de violencia sexual, más allá de aspectos relacionados con el ámbito jurídico o asistencial especializado. En este sentido, el Comité se pronunció en 2011, también categóricamente (Comunicación N°31/2011), en el caso S.V.O, una menor búlgara de 7 años con “un grave retraso mental” violada por un vecino en 2004, condenado finalmente a una pena menor por abuso sexual.

---

<sup>209</sup> Párr. 8.9.b.

En esta ocasión, el Comité recuerda a los Estados que la violencia de género —y así la agresión sexual sufrida por la hija de S.V.O— es también “un problema de salud crítico”, ante el cual, los Estados tienen la obligación de promulgar leyes y políticas públicas eficaces, “incluidos los protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios [...] y capacitación de los trabajadores de la salud” (CEDAW. Comunicación núm. N°3º/2011: Párrafo 8.9.a). De esta forma visibiliza así un vínculo necesario y obligatorio entre los equipos profesionales sanitarios y la asistencia a las víctimas de violencias sexual, delimitando su rol, no sólo como parte en los procesos judiciales —gracias a las pruebas que aportan los partes de lesiones o informes médicos que puedan emitirse—, también en la obligación de garantizar el derecho humano a la salud a todas las víctimas, a través de una prestación sanitaria adecuada.

**C)** Estereotipos de género, sistema judicial y violencia sexual: varios casos relacionados con los estereotipos de género <sup>210</sup>que perviven en los procesos judiciales por violencia de género han sido llevados ante el Comité CEDAW. En este sentido, uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual en su difícil camino hacia la obtención de justicia, se debe a los numerosos estereotipos de género que, de forma reiterada, se siguen produciendo dentro del sistema judicial. Un asunto que, como nos recuerda la letrada Gema Fernández Rodríguez de Liévana<sup>211</sup>, afecta, de forma perjudicial a los derechos de las mujeres (2015).

Si, como sucede con los mitos, tenemos en cuenta que los estereotipos de género se aferran al sistema —en el sentido de que “son resilientes, son dominantes sociablemente cuando se articulan a través de los sectores sociales y las culturas y son socialmente persistentes en la medida en que se articulan a los largo del tiempo” (Fernández, 2015: 503)—, se presenta especialmente complicado desinhibirles en casos de violencia sexual. Todo ello, consecuencia de tantos siglos que, cultural y socialmente, los han consolidado, como se ha visto en el capítulo 1 de esta investigación.

En el caso R.P.V (Comunicación N°34/2011), el Comité insiste en el daño que la aplicación de estereotipos puede suponer para las mujeres víctimas de violencia sexual, y recuerda, además, cómo el estereotipo refuerza el falso mito en torno a la violación —en asuntos como la falta de resistencia y el consentimiento de la víctima— en los siguientes términos (párrafo, 8.10):

---

<sup>210</sup> Véase nuevamente el caso de Ángela González Carreño (Comunicación N° 47/2012) .

<sup>211</sup> Gema Fernández Rodríguez de Liévana es una de las letradas representó a Ángela Gonzales Careño ante el Comité CEDAW, en representación de la organización no gubernamental *Women’s Link Worldwide*.

“La aplicación de estereotipos afecta al derecho de la mujer a un juicio imparcial y justo [...], las autoridades judiciales deben actuar con cautela para no crear normas inflexibles sobre lo que las mujeres y las niñas deberían ser o lo que deberían haber hecho al encontrarse en una situación de violación basándose únicamente en nociones preconcebidas sobre lo que define a una víctima de violación”

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Comunicación N°34/20011

**D)** Violencia sexual y derecho a una interrupción voluntaria del embarazo: en el año 2009, L.C (Comunicación N°22/2009) —representada a través del Centro de Derechos Reproductivos y del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Perú— llevó su caso ante Comité CEDAW, después de que, a pesar de haberse quedado embarazada a los 13 años como consecuencia de los repetidos abusos sexuales, el centro hospitalario al que acudió a realizarse un aborto voluntario se lo negara, teniendo que seguir adelante con el embarazo.

En este sentido —más allá de otros matices sobre los que se desarrolla el caso, por otra serie de imprudencias médicas en las que incurrió el centro hospitalario y que desembocaron en la paralización desde el cuello para abajo del cuerpo de la niña—, cabe rescatar el posicionamiento del Comité en uno de los temas más controvertidos en el marco de los derechos humanos de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos: el acceso al aborto libre y gratuito<sup>212</sup> en su interrelación con la violencia sexual. Un derecho humano que debe ser garantizado y reconocido por los Estados, pero que aún a día de hoy, sigue estando prohibido en numerosos países. Incluso prohibido en su totalidad cuando ha existido una violación, lo que supone una barrera fiel al sistema patriarcal, imposibilitando conseguir alcanzar la igualdad de género.

En el caso de L.C, en línea con otros organismos internacionales de derechos humanos y otros Comités —Comité para los Derechos del Niño, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Comité de Derechos Humanos, entre otros— el Comité recuerda las obligaciones que tienen los Estados (artículo 12 de la Convención)...

---

<sup>212</sup> En este tema, la Conferencia Internacional de El Cairo sobre Población y Desarrollo (1994) marcaría un hito histórico a través de su Programa de Acción, al establecer que los gobiernos “deberían obrar de modo que resultara más fácil para las parejas y las personas asumir la responsabilidad de su propia salud reproductiva eliminando las barreras legales, médicas, clínicas y reglamentarias innecesarias a la información y el acceso a los servicios y métodos de planificación de la familia”. División de Población de las Naciones Unidas, Programa de Acción. (párrafo.7.20).

“...para adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, el acceso en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  
Comunicación N°22/2009 (párrafo. 8.11).

De forma categórica, se pronuncia igualmente invocando la Recomendación N° 24, en el sentido de recordar la obligación de los Estados a garantizar el más alto nivel de salud posible reconocido en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos<sup>213</sup>, y en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos:

“...la negativa de un Estado parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria [...], que el deber de los Estados partes de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, la información y la educación, entraña la obligación de respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica y velar por su ejercicio. Los Estados partes han de garantizar el cumplimiento de esas tres obligaciones en su legislación, sus medidas ejecutivas y sus políticas ...”

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  
Comunicación N°22/2009<sup>214</sup>.

Recuerda el Comité, claramente, la responsabilidad del Estado a lo largo de toda la Comunicación. Pero es significativamente llamativo cómo se pronuncia directamente, además, contra la gravedad de las medidas que el centro hospitalario —representado a través de la Junta Médica— tomó en contra de garantizar la asistencia sanitaria adecuada a la gravedad de un caso de estas características: “resulta tanto más grave si se tiene en cuenta que se trataba de una menor víctima de abusos sexuales” (Comunicación N°22/2009: párrafo 8.15), en donde los médicos del hospital rechazaron la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que su continuación podría tener graves consecuencias para la salud física y mental de la niña.

Por último, caben destacar algunos de los matices que el propio Comité realiza en relación a un caso de estas características, en el que confluyen temas centrales de la teoría feminista sobre los que se sostiene el orden patriarcal: la violación y la

---

<sup>213</sup> Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) o la Observación General N° 14(2000) sobre el derecho a la salud aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

<sup>214</sup> Párr. 8.11



prohibición del aborto. En este caso, se observa una marcada sintonía con las demandas del movimiento feminista y del marco teórico feminista en relación a la interrupción voluntaria del embarazo tras una agresión sexual. Pero, a pesar de ello, aún el Comité se muestra renqueante a posicionarse abiertamente en el contexto de la despenalización del aborto en todos los casos. Se puede observar cómo aún sigue estando la argumentación condicionada a la salud física y mental de la mujer/niña, y no tanto a un análisis que se fundamente en el derecho humano a libertad de decisión de las mujeres y de las niñas sobre sus cuerpos.

“El Comité considera que, debido a su condición de mujer embarazada, L.C. no tuvo acceso a un procedimiento eficaz y accesible que le permitiese establecer su derecho a los servicios de atención médica que su estado de salud física y mental requería. Estos servicios comprendían tanto la operación de columna como el aborto terapéutico [...], la decisión de aplazar la intervención quirúrgica debido al embarazo estuvo influenciada por el estereotipo de que la protección del feto debe prevalece sobre la salud de la madre...”.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Comunicación N°22/2009.<sup>215</sup>

**E)** Trabajadoras migratorias y violencia sexual: el enfoque que realiza el Comité en relación a las trabajadoras migrantes presenta importantes elementos que — al menos en el caso español, como veremos en la segunda parte de esta investigación—para el Estado pasan completamente inadvertidos. Insiste así el Comité en señalar las distintas formas de discriminación que enfrentan las mujeres migrantes en los países de destino, condicionantes también de otras violaciones de derechos humanos: remuneraciones inferiores a los hombres, ausencia de derechos laborales o libertades fundamentales, discriminaciones por raza y etnia, explotación laboral que a veces se traduce incluso en hechos en los que no reciben ningún tipo de salario por su trabajo, prohibición de acceso a los sistemas públicos de salud, acceso limitado a la justicia...

En cuanto a la violencia sexual, señala el hecho de que las trabajadoras migratorias están más expuestas a los abusos sexuales, al acoso sexual y a la violencia física que otras mujeres, llamando la atención, por ejemplo, sobre el acoso sexual que en determinados entornos laborales deben sufrir las mujeres migrantes trabajadoras (Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2009).

---

<sup>215</sup> Párr. 8.15.



El Comité insta a los Estados a que se proteja especialmente a las mujeres migrantes indocumentadas, en su obligación de proteger los derechos básicos de estas mujeres, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren. De forma específica, señala la obligación del Estado de proporcionar a las mujeres migrantes indocumentadas mecanismos de acceso a la justicia y recursos jurídicos “cuando su vida peligra o existe riesgo de que sufran un trato cruel o degradante [...] o si padecen abusos físicos o sexuales por parte de empleadores o de terceros” (Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2009: 27).

También cabe destacar la identificación que realiza el Comité en relación a uno de los temas que, se podría decir, sigue siendo silenciado —de forma pactada— a nivel internacional: aquel que se refiere a las agresiones sexuales que se producen al amparo de la inmunidad diplomática. El Comité se pronuncia en los siguientes términos:

“En ciertos casos, el personal diplomático ha perpetrado abusos sexuales, actos violentos y otras formas de discriminación contra las empleadas domésticas migrantes ...”.

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2009.

Tal y como se ha podido observar, el camino que lentamente traza la CEDAW y su Comité, a día de hoy, convierte esta herramienta en un instrumento simbólico y práctico de una gran transcendencia para la vida de las mujeres. Se le podría considerar un cómplice fundamental de las demandas del movimiento y práctica política feminista, que nace físicamente en 1979 en el seno de las Naciones Unidas, pero cuyas fuentes emanan, sin duda, del marco teórico y político feminista.

A pesar de algunas de las deficiencias sobre las que aún hay que seguir trabajando, si entendemos que el sistema patriarcal se sostiene desde la consideración y práctica constante de la discriminación hacia las mujeres bajo el amparo de un sistema judicial que las sostiene —tal y como refiere Alda Facio—, si utilizamos en la práctica política la definición de la Convención, podríamos derrocarlo: “...a la hora de litigar o de luchar por los cambios de cualquier esfera, podríamos derrocar el sistema patriarcal al desarticular totalmente su sistema legal ...” (1992: 18).

De esta forma, y siguiendo así el planteamiento de Facio, el cuestionamiento feminista de históricas estructuras patriarcales —como el derecho— es una tarea obligatoria a la hora de combatir la discriminación que sustenta la violencia en sus diferentes manifestaciones, que debe encaminarse también a tocar sus fundamentos en lo más profundo, para desmontar el discurso jurídico que impide alcanzar la igualdad de género, sostenido por leyes discriminatorias, o por las propias leyes de igualdad formal. Utilizar el propio derecho con

el objetivo de derrocar el sistema de dominación patriarcal, auspiciado desde sus propios mecanismos jurídicos de dominación, se convierte en una estrategia fundamental que cuenta con importante jurisprudencia con enfoque de género, emanada desde instrumentos aliados, como es la CEDAW y su Comité y disertada por la propia teoría jurídica feminista.

A pesar de ello, si los logros jurídicos no sirven de referencia para adoptar políticas públicas, planes o leyes, acompañadas de un presupuesto acorde a la magnitud de las consecuencias que la violencia implica en la vida de las mujeres y de la humanidad en su conjunto, tales logros no valdrán —como reconoce el propio Comité de la CEDAW— para la lograr la igualdad sustantiva.

#### 3.1.2.4 La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: un hito histórico

La promulgación de la “Resolución 1325” por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000 ha sido considerada desde diversos ámbitos dentro del derecho internacional de los derechos humanos, de las ONG y desde la propia academia, como una resolución “histórica” (Abad, 2014) —a pesar de las lagunas que aún presenta en cuanto a su aplicación y algunos elementos conceptuales—, por ser el primer instrumento internacional que trata específicamente la cuestión el impacto que los conflictos armados tienen en las mujeres y en las niñas. Es la primera Resolución que no sólo insta a que se atiendan las necesidades especiales y derechos humanos de las mujeres en los conflictos armados, también “reconoce por primera vez el papel preponderante de las mujeres en las salidas negociadas a los conflictos (...) promoviendo que se las apoye e incorpore en los distintos momentos de los procesos de paz y de consolidación de la paz” (Corporación Humanas & Fokus, 2011).

En el marco de la violencia sexual, como sucede con el resto de instrumentos internacionales ya citados, precisa la significación de ésta como parte de las atrocidades de género que en situaciones de conflictos armados se exacerban (Barrow, 2010). Visibiliza la violencia sexual de manera seria como intrínseca a los conflictos armados, instando de forma específica a que “se adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales...” (Párr. 10). En este sentido, el Párrafo 11 de la propia Resolución incide en la magnitud de esta forma de violencia de género, al reconocer la violencia sexual y la violación como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, señalando la responsabilidad de los Estados para poner fin a su impunidad y enjuiciar a los culpables:

“Subraya la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas (...)”

Resolución 1325. Párr. 11

La Resolución 1325 y la antecedente Resolución 1820 del año 2000, que reconocía la violencia sexual en los conflictos como táctica de guerra, sirven como herramientas prácticas dirigidas a incluir en las agendas políticas en procesos de paz —tal y como actualmente se intenta que así sea, por ejemplo en Colombia—la protección de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la justicia de género, en el sentido de perseguir el fin a la impunidad de los delitos de violencia de género y violencia sexual (Wilches, 2014).

A pesar de algunas de las críticas feministas vertidas sobre ella, al considerar por ejemplo que únicamente trata a las mujeres como un colectivo homogéneo, ausente por tanto de la perspectiva interseccional (Abad, 2014) necesaria para entender la individualización de las mujeres y de las formas en que se ejerce violencia y discriminación sobre ellas en los conflictos armados. O el hecho de que no esté claro que esta resolución pueda influir en “la dicotomía privada” (Barrow, 2010: 12), al considerarse no ser “lo suficientemente completa para responder a formas estructurales y menos explícitas de violencia” (Barrow, 2010: 12), pues responde a la concepción de la paz y la seguridad basada en el paradigma negativo de la paz —centrada únicamente en la violencia directa—, la Resolución 1325 no debe pasar inadvertida como instrumento fundamental a ser utilizado por la sociedad civil y las organizaciones feministas en la exigibilidad a todos los estados del papel indiscutible que tienen las mujeres en los procesos de paz y de la seguridad internacional y en la responsabilidad de éstos de poner fin a la impunidad por los atroces crímenes de género que se cometen contra los cuerpos de las mujeres en los conflictos armados.

### 3.1.2.5 La Organización Mundial de la Salud y el Secretariado General de las Naciones Unidas: escenarios fundamentales en la significación de la violencia sexual

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado contribuciones cruciales sobre la conceptualización de la violencia sexual, al aportar una amplia definición que incluye, desde la globalidad de sus manifestaciones, hasta un detallado análisis sobre las graves secuelas físicas y psicológicas que implica para la vida y los cuerpos de sus víctimas.

La definición de la OMS es un referente sobre el que las organizaciones no gubernamentales, las propias organizaciones internacionales de derechos humanos, o el movimiento teórico y político feminista emplean cuando se refieren o se trabaja sobre violencia sexual. Se podría considerar que su enunciación contiene el abanico más amplio descriptivo que una organización internacional realiza sobre las distintas manifestaciones de violencia sexual, al referirse a ella en los siguientes términos:

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”

Organización Mundial de la Salud. 2005

“La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física.

La violencia sexual incluye, pero no se limita a lo siguiente:

- ✓ Violación en el matrimonio.
- ✓ Violación por desconocidos o conocidos.
- ✓ Insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual (en la escuela, en el lugar de trabajo, etc.)
- ✓ Violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia particularmente comunes en situación de conflicto armado (por ejemplo fecundación forzada).
- ✓ Abuso sexual de personas físicas o mentalmente discapacitadas;
- ✓ Violación y abuso sexual de niños.
- ✓ Formas tradicionales de violencia sexual, como matrimonio o cohabitación forzados y “herencia de viuda”.

Organización Mundial de la Salud. 2013

La OMS ha centrado también parte de su trabajo sobre violencia sexual en delimitar la importancia de establecer los límites del consentimiento, rompiendo, a través de sus conceptualizaciones, con la ancestral impunidad que amparan ámbitos tradicionales para su sostenimiento: como la familia, el trabajo o la escuela (OMS, 2013). Al distinguirlos y remarcarlos, amplía el reducido perímetro sobre el que se construye la mitología y los prejuicios que perduran, casi intocablemente, al hablar de los espacios en los que

se ejerce violencia sexual. Una delimitación así de exacta se atreve a incluir, de forma indirecta, una de las violencias sexuales más descarnadas de todas: la que infringe el padre o el hermano sobre su víctima. Pero también cualquier otra forma de abuso sexual que se cometa contra los niños y niñas, considerada por la propia OMS como de “carácter generalizado en la niñez” (2013: 4).

Al definir los márgenes del consentimiento, la OMS identifica la coacción en sus diferentes perfiles, abordando desde el uso de la fuerza, a la intimidación psicológica, la extorsión, las amenazas, o la propia incapacidad para decir “no” a consecuencia de circunstancias tales como el hecho de estar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, dormida o mentalmente incapacitada (OMS, 2013). Pero, además, procede a identificar otras aristas claves para definir de manera más concreta el “no” consentimiento:

“Actos en los cuales una mujer:

- ✓ fue forzada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad;
- ✓ tuvo relaciones sexuales contra su voluntad por temor a lo que pudiera hacer su pareja:
- ✓ fue obligada a realizar un acto sexual que consideraba degradante o humillante”.

Organización Mundial de la Salud. 2005

El enfoque interconectado entre la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos que aplica la OMS incorpora el análisis dirigido a visibilizar las consecuencias de la violencia sexual de forma individual y global. Así como el impacto en la salud que entraña haber sufrido alguna forma de violencia sexual, tanto en la niñez, como en la adolescencia o en la edad adulta.

Son diversos los estudios que la OMS (2015, 2014, 2013, 2012 y 2005) ha publicado en relación al comportamiento de riesgo para la salud y sobre los impactos que la violencia sexual implica para sus víctimas. En estos informes se destacan las secuelas en la salud reproductiva, en la salud mental —a nivel conductual—, o en una mortalidad —invisibilizada generalmente en casos de violencia sexual<sup>216</sup>—, consecuencia de suicidios, complicaciones en el embarazo, aborto inseguro, sida, asesinatos durante la violación o en defensa del “honor” o, el infanticidio de un niño o niña nacido como resultado de una violación (OMS, 2013).

---

<sup>216</sup> En el caso español, el portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sólo ofrece datos de las víctimas mortales (incluidos menores) de violencia de género que se hayan sucedido en el entorno de la pareja o expareja. Las mujeres asesinadas por violencia sexual fuera del ámbito íntimo, no quedan reflejadas dentro de la categoría de víctimas mortales por violencia de género.

El informe más impactante de todos —no traducido al castellano en su totalidad— lo publicó la OMS en el año 2013 bajo el título: “*Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*”. Acaparó páginas de numerosos medios de comunicación<sup>217</sup> por los resultados abrumadores que arrojaba en relación a la prevalencia de la violencia hacia las mujeres y sus efectos en la salud, refiriéndose, de forma específica, también a las consecuencias de la violencia sexual en la salud de las mujeres. La OMS presentaba su estudio multipaís, declarando que la violencia hacia las mujeres era un problema de salud de proporciones epidémicas:

“El informe muestra que la violencia contra las mujeres está globalmente generalizada. Los resultados arrojan un poderoso mensaje, la violencia contra las mujeres no es un pequeño problema que sólo se produce en algunos espacios de la sociedad, es un problema global de salud de proporciones epidémicas que requiere una acción urgente ... <sup>218</sup>”.

Organización Mundial de la Salud, 2013: 3.

La OMS, a través de su producción científica, se torna en una organización que permite ampliar los márgenes de interpretación sobre las distintas formas de violencia sexual, remarcar la relación directa entre el derecho humano a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, y el bucle de derechos humanos que se vulneran cuando se agrede sexualmente, visibilizando la magnitud de la violencia sistémica que asola a todas las mujeres en todos los países del mundo. Pero, además, sirve como otro indicador para señalar a los Estados y a los Gobiernos su responsabilidad inmediata en la lucha contra todas las formas de violencia de género.

Para finalizar este apartado, es importante efectuar una pequeña aproximación a dos documentos realizados también en el seno de las Naciones Unidas, y cuyo análisis me ha servido como referente para fijar, de forma aún más consolidada, la delimitación, alcance de la violencia sexual, e identificar la la respuesta que debe ofrecer el Estado:

- 1.- La “Resolución 23/25 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos” dirigida a “Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: prevención de las violaciones y otras formas de violencia sexual y respuesta ante ellas” (2013).
- 2.- El “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer” del Secretariado General (2006).

---

<sup>217</sup> Véase: Salas, J (2013, Junio). La OMS alerta de que la violencia contra las mujeres ha adquirido proporciones epidémicas. *El diario.es*; Morán, C (2013, Noviembre). Violencia de género: epidemia mundial. *20 minutos*; (2013, Junio). La OMS alerta de que la violencia contra las mujeres puede derivar en una epidemia sanitaria. *El Huffington Post*; R.Sahuquillo, M (2016, Noviembre). Una pandemia de violencia contra las mujeres. *El País*.

<sup>218</sup> Traducción propia.

En términos generales, de ambos documentos se desprende que:

- La violencia sexual es una “cuestión de derechos humanos” (Informe Secretariado General, 2006).
- Existe una altísima prevalencia de violencia sexual “que afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las niñas” (Resolución 23/25).
- La violencia sexual se produce en todas las esferas de la sociedad —en el ámbito público y en el privado—, a manos de la pareja o fuera del entorno de la pareja, en tiempos de paz, de guerra, en periodos de “disturbios o transición política, en situaciones de conflicto y situaciones posteriores a los conflictos”, o en consolidadas democracias o Estados de derecho (Resolución 23/25).
- Las mujeres enfrentan numerosas dificultades para poder denunciar a sus agresores sexuales, por miedo a la vergüenza, al estigma, a la duda que se cierne sobre ellas, a las represalias o a las consecuencias económicas que puede suponer una denuncia de estas características.
- La ausencia de respuesta de las instituciones encargadas de responder ante este tipo de violencia machista refuerza su normalización y tolerancia social.
- La violencia sexual conlleva una serie de secuelas físicas, psicológicas, sexuales y reproductivas a corto y a largo plazo, en donde aumenta el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
- Los Estados tienen la responsabilidad de cumplir sus obligaciones en el marco de la prevención, asistencia, investigación y reparación integral a las víctimas de violencia sexual. Y es por ello que deben comprometerse a “poner fin a la impunidad [...], utilizando eficazmente todos los medios oportunos para enjuiciar a fondo a las personas responsables de estos delitos” y proporcionando protección a todo tipo de víctimas. También las más vulnerables, como las mujeres con discapacidad, refugiadas, desplazadas internas, mujeres privadas de libertad, las niñas y mujeres reclutadas contra su voluntad y de forma violenta por las fuerzas armadas y actores armados no estatales, las mujeres y niñas víctimas de trata —incluidas las sometidas a explotación sexual— y esclavitud, o las mujeres migrantes (Resolución 23/25).
- La violencia sexual está relacionada con la falta de derechos de las mujeres relativos al control y a la decisión libre y responsable sobre cuestiones concernientes a la sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva.



El Estudio del Secretariado General (2006) contribuye, además, a situar en el primer plano del Marco Internacional de los Derechos Humanos la violencia hacia las mujeres como una forma de discriminación y un problema de derechos humanos. Consecuencia, como se atreve a exponer, del “patriarcado y otras relaciones de dominación y subordinación” (pp.32-34), de la “cultura” (pp.34-36) y de las “desigualdades económicas a nivel local y mundial” (pp.36-38). Asimismo, conceptualiza, de forma detallada, las formas y las manifestaciones de violencia sexual hacia las mujeres a partir de la siguiente división:

#### **Violencia contra la mujer dentro de la familia:**

- A. **Violencia dentro de la pareja:** incluyendo la violencia sexual: “toda una gama de actos sexual, psicológica y físicamente coercitivos (...) sin el consentimiento de la mujer” (Secretariado General de Naciones Unidas, 2006: 43).
- B. **Prácticas tradicionales nocivas:** la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz, y matrimonio forzado, entre otras.

#### **Violencia contra la mujer en la comunidad:**

- C. **Feminicidio:** señalando que no sólo que el “feminicidio tiene lugar en todas partes” (2006:47), sino que en uno de los países como México —con el caso de Ciudad Juárez—, “la tercera parte de las mujeres fueron brutalmente violadas”.
- D. **Violencia sexual infringida fuera de la pareja:** se remarca que ésta puede ser cometida por un pariente, amigo, conocido, vecino o compañero de trabajo.
- E. **Acoso sexual en el lugar de trabajo, en las instituciones educativas y en los deportes:** establece una relación entre el incremento de las tasas de participación de las mujeres como fuerza de trabajo, y el aumento del acoso sexual laboral. Visibiliza el acoso sexual y la violencia contra las niñas y las jóvenes en instituciones educativas o en actividades deportivas. En este último caso, señala que ésta puede ser cometida por atletas, espectadores, entrenadores, representantes y miembros de la familia o comunidad.
- F. **Trata de mujer:** subrayando que, aunque la magnitud de la trata de mujeres con fines de explotación sexual es difícil de medir, pero que “alcanza a miles de personas cada año” (2006:50)

#### **Violencia contra la mujer cometida o tolerada por el Estado:**

- G. **Violencia sexual que puede ser cometida por agentes del Estado:** se incluyen: miembros del poder legislativo, ejecutivo y judicial, agentes de la ley, funcionarios de la seguridad social, guardias carcelarios, funcionarios de los lugares de detención, funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas militares y de



seguridad. Obviamente, en este apartado habría también que incluir la violencia sexual que se produce derivada de las propias políticas públicas y de la inexistencia de leyes ineficaces.

**H. Violencia contra la mujer en situación de privación de libertad:** refiriéndose también a la violencia sexual que se comete contra las mujeres detenidas, apuntando a que,

“...de forma particular, la violación cometida contra mujeres detenidas se considera una violación particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los seres humanos a su derecho a la integridad física, por consiguiente puede constituir tortura [...] la vigilancia inadecuada cuando las mujeres se bañan o se desvisten en presencia de hombres y el acoso sexual verbal” (2006: 50)

**Violencia contra la mujer en los conflictos armados:** incluyendo la alta incidencia de violencia sexual como parte de todos los conflictos armados y de guerra, puntualizando todas sus formas —torturas, mutilaciones, violaciones, esclavitud sexual, explotación sexual, matrimonios forzados, prostitución forzada—, y declarando su objetivo, no sólo como elemento para humillar al enemigo, también utilizada para desplazar de sus tierras y comunidades y “propagar intencionalmente el VIH” (2006: 51).

### **3.2 Los números incontestables de la violencia sexual**

---

Uno de los ejemplos más evidentes sobre la desatención que la violencia sexual ha supuesto, en relación a otras formas de violencia hacia las mujeres, es la significativa ausencia de cifras oficiales por parte tanto de organismos internacionales, así como desde los propios Estados.

El caso español —sobre el que se trabajará a fondo en otro apartado de esta investigación— es un ejemplo evidente de la insignificante consideración que históricamente se ha tenido hacia la violencia sexual, en términos estadísticos y de prevalencia. Es incluso más significativo aún, si se tiene en cuenta que en nuestro país, desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de modo progresivo, se ha producido una mayor sensibilización en materia de violencia de género.

El portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ofrece, de manera actualizada, las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003. Sin embargo, dichos datos callan las mujeres víctimas mortales por violencia sexual fuera del entorno íntimo, debido a que la LO 1/2004 no contempla como

víctimas de violencia de género otras formas de violencia fuera del entorno íntimo. Por su parte, el Instituto de la Mujer<sup>219</sup>, organismo estatal encargado de:

“...promover y fomentar la igualdad de ambos sexos, facilitando las condiciones para la participación efectiva de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social, así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Es necesario señalar que desde el año 2011 no actualiza las estadísticas que ofrecen los datos relativos a los “delitos contra la libertad sexual”, y que desde el 2010 no se ponen al día los datos sobre “mujeres víctimas de explotación sexual en la Unión Europea”<sup>220</sup>.

Hasta hace solo unos años, ningún organismo público había realizado un análisis detallado estadístico sobre la violencia sexual hacia las mujeres. Los datos más actualizados se publicaron en 2015<sup>221</sup> en la “Macroencuesta de Violencia contra la Mujer”. Y aún así, es necesario señalar que dicho informe sigue ofreciendo importantes lagunas, dado que deja fuera elementos fundamentales sobre la violencia sexual como son:

- El ámbito en el que se ha producido: hogar, escuela, lugar de trabajo, calle, lugar de ocio...
- El tipo de manifestación, que no termina de estar bien definida pues, a excepción de la violación —que sólo se refiere a “penetración vaginal” —, otras violencias sexuales no se conceptualizan detalladamente.
- La edad: sólo se incluye mujeres mayores de 16 años .
- El/los agresor/es: únicamente se contabiliza la vinculación con el agresor, y no el número de ellos, invisibilizando, así, las agresiones grupales.
- Las secuelas: se limita a exponer la salud percibida.
- La denuncia y el apoyo institucional, que ni se contemplan.

---

<sup>219</sup> En 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el Instituto de la Mujer mediante la Ley 15/2014 pasó a denominarse “Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidad”. A pesar de las críticas y reticencias del movimiento feminista que consideraba que con la nueva organización se perderían la esencia y finalidad por la que el Instituto de la Mujer se creó, en un contexto generalizado de desigualdad y discriminación hacia la mujer no superado desde 1983, el gobierno del PP desoyó las demandas de expertas y activistas, cambiando no sólo la denominación del organismo, si no también el objetivo inicial por la que se creó. Desde entonces el Instituto de la Mujer tiene como finalidad combatir de forma general “la discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social”. En esta investigación se nombrará el Instituto de la Mujer utilizando la designación inicial.

<sup>220</sup> Para acceder a las estadísticas del Instituto de la Mujer véase el siguiente sitio web: <http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/Violencia.htm>

<sup>221</sup> Desde 1999 se realizan Macroencuestas de Violencia contra la Mujer (1999, 2002, 2006, 2011 y 2015). A partir de 2011 la macroencuesta se encarga de realizarla la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Sólo desde 2015 se incluye la violencia sexual en la encuesta.

La macroencuesta de 2015 es la primera en la historia de nuestro país que incorpora un apartado específico relativo a la violencia sexual en la pareja o expareja (pp.33-48), incluyendo, de forma novedosa, la que se produce fuera del ámbito de la pareja (pp.285-299). Las cifras que ofrecen se resumen de la siguiente forma:

#### Violencia sexual en el ámbito de la pareja o expareja: España

VIOLENCIA SEXUAL A MANOS DE SU PAREJA, EX PAREJA O FUERA DEL ÁMBITO DE LA PAREJA A LO LARGO DE TODA LA VIDA DE LA MUJER O EN LOS	PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL
<b>Violencia sexual sufrida por las mujeres que han tenido pareja a lo largo de toda su vida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El 6,6% de las mujeres que han tenido pareja han sido obligadas a mantener relaciones sexuales (penetración vaginal) cuando ella no quería.</li> <li>- El 3,5% de las mujeres que han tenido pareja han sido obligadas a mantener otro tipo de práctica sexual que le resultó humillante (no se especifica).</li> <li>- El 6,3% de las mujeres ha mantenido relaciones sexuales (penetración vaginal) sin desearlo, por miedo a lo que sus parejas pudieran hacer si se negaban.</li> <li>- El 3,5% de las mujeres que han tenido pareja ésta intentó obligarla a tener relaciones sexuales contra su voluntad, sujetándola o haciéndole daño sin conseguirlo.</li> </ul>
<b>Violencia sexual sufrida por las mujeres por parte de sus parejas actuales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El 1,3% de las mujeres afirma haber tenido relaciones sexuales (penetración vaginal) de manera obligada con su pareja actual alguna vez en su vida.</li> <li>- El 1,1% de las mujeres afirma haber mantenido relaciones sexuales (penetración vaginal) obligadas, por miedo a las posibles represalias.</li> <li>- El 0,4% de las mujeres manifiesta haber tenido que soportar actos que encuentran humillantes o degradantes.</li> <li>- El 0,2% de las mujeres manifiesta el empleo de la violencia física por parte de la pareja actual en relaciones no consumadas (no se especifica si una relación no consumada es aquella en la que no se haya realizado penetración vaginal).</li> </ul>
<b>Violencia sexual sufrida por las mujeres por parte de sus exparejas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El 10,5% de las mujeres afirma haber mantenido relaciones obligadas con alguna de las antiguas parejas.</li> <li>- El 10,3% de las mujeres afirma haber mantenido relaciones obligadas con alguna de las antiguas parejas, por miedo a lo pudiera suceder si no consentía.</li> <li>- El 6,0% de las mujeres afirma haber mantenido otro tipo de prácticas sexuales consideradas denigrantes por la mujer.</li> <li>- El 5,7% de las mujeres habla de un intento de violación no consumado.</li> </ul>
<b>Violencia Sexual a manos de su pareja, ex pareja o fuera del ámbito de la pareja en los últimos doce meses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El 1,5% de las mujeres ha sufrido violencia sexual por parte de su pareja actual o alguna ex pareja en el último año.</li> <li>- El 1% ha sufrido violencia sexual por parte de la pareja actual.</li> </ul>

**Tabla 6:** elaboración propia a partir de los datos extraídos de la “Macroencuesta de Violencia contra la mujer”. 2015 Violencia sexual en el ámbito de la pareja o expareja: España

### Violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja: España

TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL FUERA DEL ÁMBITO DE LA PAREJA	PREVALENCIA DE VIOLENCIA SEXUAL
Tocamientos de tipo sexual u otro comportamiento sexual no deseado.	- El 4,5% de las mujeres afirma haberlos sufrido.
Obligación de mantener relaciones sexuales que finalmente no se consumaron	- El 2,5% de las mujeres afirman haber sido obligadas.
Violación	- El 1,4% de las mujeres afirman que se las obligó a mantener relaciones sexuales llegando a producirse la violación.
Obligación de realizar cualquier tipo de acto sexual que no quería realizar	- El 2,5 de las mujeres afirman que han sido obligadas a realizar otros actos sexuales que no deseaban.
Totales generales de diferentes formas de violencia sexual	- El 7,5% de las mujeres ha sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o de la expareja en algún momento de su vida

**Tabla 7:** elaboración propia a partir de los datos extraídos de la “Macroencuesta de Violencia contra la mujer”. 2015 Violencia sexual en el ámbito de la pareja o expareja: España

### Violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja en España: vínculo con el agresor (Porcentajes sobre el total de cada grupo)

VÍNCULO CON EL AGRESOR	PREVALENCIA DE VIOLENCIA SEXUAL
Violación a manos de familiares	- 23,9% de mujeres
Violación a manos de desconocidos	- 18,8% de mujeres
Violación a manos de conocidos (amigos, alguien del trabajo, profesores, compañeros de clase, conocidos en general)	- 56% de mujeres
Otra forma de violencia sexual distintas a la violación, a manos de un agresor conocido	- 41,2% de mujeres
Violaciones no consumadas, tocamientos y otras formas de violencia sexual a manos de desconocidos	- 40,4% de mujeres
Violaciones no consumadas, tocamientos y otras formas de violencia sexual a manos de familiares	- 17,1% de las mujeres

**Tabla 8:** elaboración propia a partir de los datos extraídos de la “Macroencuesta de Violencia contra la mujer”. 2015 Violencia sexual en el ámbito de la pareja o expareja: España

A nivel internacional, en relación a estadísticas y prevalencia sobre violencia sexual, los datos que ofrecen organizaciones como Naciones Unidas se contextualizan en estudios generales sobre la violencia hacia las mujeres. He ahí los Estudios Multipaís que realiza la Organización Mundial de la Salud (2002, 2005, 2013) —de los que ya se ha hablado—, sobre “violencia y salud” y “salud de la mujer y violencia doméstica”, en donde se reconocen las “deficiencias existentes en la investigación internacional sobre la violencia contra la mujer” (2005:2).

El estudio del años 2005<sup>222</sup> ofrece también lagunas importantes en sus resultados estadísticos sobre violencia sexual. Por un lado, se estudia de forma acotada —únicamente dentro del entorno de la pareja o expareja—, pero, además, se conceptualiza a partir de las siguientes definiciones: “ser obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad” (no se especifica qué tipo de relaciones sexuales); “tener relaciones sexuales por temor a lo que pudiera hacer su pareja” (tampoco se especifica el tipo de relaciones sexuales); “ser obligada a realizar algún acto sexual que considera degradante o humillante” (no se identifica qué acto sexual es al cual se refieren. Los grados de humillación pueden variar tanto, que alguno de ellos podrían ser formas de tortura sexual, como es, por ejemplo, el hecho de obligar a una persona a ver cómo se viola a otra).

A pesar de ello, algunos de sus datos aportan información significativa sobre el alcance de la violencia sexual en territorios completamente distintos social, cultural y políticamente, ayudando, al mismo tiempo, a desmontar también los mitos y prejuicios la violencia sexual ejercida en el seno de la pareja.

#### Violencia sexual en el entorno de la pareja o expareja: estudio multipaís

PAÍS	PORCENTAJE DE VIOLENCIA SEXUAL INFRINGIDA POR LA PAREJA DURANTE LA VIDA DE LA MUJER, ENTRE MUJERES QUE HAN TENIDO PAREJA ALGUNA VEZ.	PORCENTAJE DE VIOLENCIA SEXUAL INFRINGIDA POR LA PAREJA, ENTRE MUJERES QUE HAN SIDO ALGUNA VEZ VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Perú zona rural	47%	12%
Etiopía zona rural	59%	31%
Perú zona urbana	23%	5%
Tanzania zona rural	31%	17%
Bangladesh zona rural	50%	33%
Samoa	20%	12%
Bangladesh zona urbana	37%	26%
Tailandia zona rural	29%	29%

<sup>222</sup> La información para la realización de este estudio se centró en 15 entornos ubicados en 10 con entornos culturales diferentes: Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República de Tanzania (OMS, 2005).

(Continuación)

PAÍS	PORCENTAJE DE VIOLENCIA SEXUAL INFRINGIDA POR LA PAREJA DURANTE LA VIDA DE LA MUJER, ENTRE MUJERES QUE HAN TENIDO PAREJA ALGUNA VEZ.	PORCENTAJE DE VIOLENCIA SEXUAL INFRINGIDA POR LA PAREJA, ENTRE MUJERES QUE HAN SIDO ALGUNA VEZ VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Brasil zona rural	14%	8%
Tanzania zona urbana	23%	20%
Namibia zona urbana	16%	15%
Brasil zona urbana	10%	6%
Tailandia zona urbana	30%	44%
Serbia y Montenegro zona urbana	6%	4%
Japón zona urbana	6%	16%

**Tabla 9:** elaboración propia, a partir de los datos del “Estudio Multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica”. 2005.

En el año 2013, el informe de la OMS proyectó nuevos datos globales. En sus conclusiones finales la organización estimó que, globalmente, el 35,6% de las mujeres había sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, y/ o violencia sexual —la violencia sexual no está delimita en sus distintas manifestaciones en el estudio— por personas diferentes a la pareja. De este 35,6%, aproximadamente el 7,2% de las mujeres adultas había sufrido violencia sexual a manos de personas diferentes a la pareja.

El informe, a pesar de no especificar las violencias sexuales sobre las que se basaban los resultados, concluía que los resultados variaban, al referirse únicamente a la violencia sexual sufrida a partir de los 15 años. Establecían categóricamente que la prevalencia sería mucho mayor que la resultante (2013: 33), si el estudio se hubiera ampliado a la violencia sexual en la infancia.

En 2014 la Agencia Europea de Derechos Humanos (FRA) publicó la encuesta, hasta entonces, “más exhaustiva” (FRA, Resumen, 2014: 3) que sobre violencia hacia las mujeres había elaborado ningún otro organismo internacional de derechos humanos. Dicha encuesta se realizó a partir de entrevistas a 42.000 mujeres entre 18 y 74 años de edad en los 25 Estados miembros de la Unión Europea, arrojando una serie de datos ilustrativos sobre el alcance y prevalencia de distintas formas de violencia de género, incluida la violencia sexual en el entorno de la pareja o expareja, y fuera de ese ámbito. Incorporaba, por primera vez, datos sobre las violencias que sufren las mujeres a través de Internet y de las redes sociales, otro de los ámbitos desatendidos de forma general por las autoridades públicas, cada vez más cómodo dentro del sistema patriarcal<sup>223</sup>.

<sup>223</sup> En España no se dispone a nivel estatal de ninguna encuesta oficial que refleje las formas de violencia de género que viven las mujeres a través de las TIC, a pesar de que como se ha indicado en el capítulo anterior el delito está tipificado en el Código Penal.

El informe fue demoledor, pues arrojaba a la luz datos hasta entonces invisibilizados por fuentes oficiales, en un contexto de derechos humanos y libertades fundamentales referente en el mundo, tal y como es la Unión Europea. La FRA reconocía, por ejemplo, que “la violencia sexual es un delito generalizado” (FRA, Resumen, 2014: 9) que ha sufrido una de cada 10 mujeres —desde los 15 años de edad—, que una de cada 20 mujeres ha sido violada después de los 15 años (FRA, Resumen, 2014:9), o que entre el 45% y el 55% de las mujeres de la UE ha experimentado alguna forma de acoso sexual desde los 15 años de edad (FRA. Informe de resultados, 2014: 95).

El resultado del estudio situaba a países del Norte de Europa con los mayores índices de violencia sexual: Dinamarca con una prevalencia del 52%, Finlandia con una prevalencia del 47%, o Suecia con una prevalencia del 45%. Frente a otros países que arrojaban cifras insignificantes: Bulgaria el 28%, o Polonia sólo el 19%<sup>224</sup>.

La FRA, preocupada por la interpretación que podían proyectar algunos de los resultados, tuvo que realizar un esfuerzo importante para que, tanto la sociedad civil, como los Estados, no aprovecharan la ocasión para sacar conclusiones desafortunadas sobre la gravedad de los hechos<sup>225</sup>, en lo que consideró expresar, sin tapujo alguno, como una forma de violencia “que afecta de modo desproporcionado a las mujeres y que constituye una gran vulneración de derechos humanos que la UE no se puede permitir pasar por alto” (FRA, 2014: 3).

De forma concreta, la encuesta ofrece datos sobre los niveles de prevalencia de la violencia sexual de forma específica en cada país<sup>226</sup>, y en el total de los 25 Estados. Se resumen a continuación:

---

<sup>224</sup> Según la FRA, en España el porcentaje de acoso sexual se sitúa en el 50% a partir de los 15 años.

<sup>225</sup> En esa fecha yo trabajaba como Responsable del Área de Incidencia Política y Sensibilización Social de una fundación especializada en el trabajo en el marco de la violencia de género. La FRA se puso en contacto con todas las organizaciones no gubernamentales expertas en la materia para que acompañáramos durante el comunicado de prensa la labor de portavocía en cada uno de los países en los que se había realizado la encuesta. La principal preocupación de la FRA era que los resultados se interpretaran de forma desvirtuada, teniendo en cuenta que países como Dinamarca o Suiza disponían de un marco legal y político, así como de una sistema de asistencia integral a las víctimas de violencia de género mucho más desarrollado que países como Bulgaria en los que los estándares mínimos ni se cumplían, pero que sin embargo arrojaban cifras insignificantes de violencia de género. La lectura de resultados que se aportó queda reflejada en el propio Informe (disponible sólo en inglés) y en el Resumen de conclusiones en los siguientes términos: “1) según los países, puede ser más o menos aceptable culturalmente hablar con otras personas de las experiencias de violencia contra las mujeres [...], es necesario tener en cuenta la posibilidad de que en sociedades en las que la violencia por parte de la pareja se considera en general un asunto privado, es poco probable que los incidentes de violencia contra las mujeres se compartan con familiares o amigos, y tampoco se suelen poner en conocimiento de la policía. Tal reticencia puede propiciar que las mujeres se inhiban de hablar con los entrevistadores, 2) un mayor grado de igualdad de género podría dar lugar a mayores niveles de comunicación de casos de violencia contra las mujeres. En las sociedades con mayor igualdad, los incidentes se pueden abordar más y combatir abiertamente, 3) La exposición de las mujeres a factores de riesgo de violencia puede analizarse a escala de los Estados miembros con respecto a factores que podrían aumentar tal exposición (ej; trabajar fuera de casa, salir o tener citas, etc), 4) Las diferencias entre los países en los niveles generales de delitos violentos han de examinarse a la par que los resultados relativos a la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, un grado más elevado de urbanización en un país suele estar relacionado con índices más altos de delincuencia (...).” FRA, Resumen, 2014: 18.

<sup>226</sup> Véase el mapa interactivo que ofrece de forma específica los datos de prevalencia de violencia sexual en cada país miembro: <http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey?mdq1=theme&mdq2=3506>



## I. - Prevalencia de la Violencia Sexual desde los 15 años (UE-28)

Pareja actual	Pareja previa	Cualquier pareja (actual o previa)	Otra persona distinta a la pareja	Cualquier pareja o persona distinta a la pareja
8%	26%	22%	22%	33%

**Tabla 10:** elaboración propia a partir del Informe de la FRA “*Violence against women EU-wide survey. Main results*”. 2014.

## II. - Prevalencia de la Violencia Sexual en los últimos 12 meses (UE-28)

La FRA estima que 3,7 millones de mujeres en la Unión Europea han experimentado alguna forma de violencia sexual en los doce meses previos a la realización de la encuesta:

Pareja actual	Pareja previa	Cualquier pareja (actual o previa)	Otra persona distinta a la pareja	Cualquier pareja o persona distinta a la pareja
3%	3%	4%	5%	8%

**Tabla 11:** elaboración propia a partir del Informe de Resultados de la FRA “*Violence against women EU-wide survey. Main results*”. 2014.

## III. - Otras formas de violencia de Violencia Sexual<sup>227</sup> a manos de la pareja u otras personas desde los 15 años (UE-28)

	Pareja actual	Pareja previa	Cualquier pareja (actual o previa)	Otra persona distinta a la pareja	Cualquier pareja o persona distinta a la pareja
<b>Desde los 15 años</b>					
Relación sexual con uso de la fuerza	1%	5%	4%	2%	5%
Intentar forzarla para mantener relación sexual por la fuerza	1%	5%	4%	3%	6%
Hacerla formar parte en alguna actividad sexual en contra de su voluntad	1%	5%	4%	2%	6%
Consentimiento de actividad sexual por miedo a lo que pueda suceder	1%	6%	5%	2%	6%

<sup>227</sup> La FRA aclara que la variación de la legislación en relación a la violencia sexual en los países miembros no está tipificada de la misma forma en los 28 países. La encuesta se centró en “relación sexual con el uso de la fuerza” (“forced sexual intercourse”) y “intento de mantener una relación sexual por la fuerza” (attempted forced intercourse) y otras “formas de actos sexuales no deseadas” (“other unwanted sexual activity” (FRA, Informe de resultados, 2014: 41).



	Pareja actual	Pareja previa	Cualquier pareja (actual o previa)	Otra persona distinta a la pareja	Cualquier pareja o persona distinta a la pareja
<b>En los últimos 12 meses</b>					
Relación sexual con uso de la fuerza	0,5%	0,4%	0,6%	0,3%	0,8%
Intentar forzarla para mantener relación sexual por la fuerza	0,5%	0,4%	0,6%	0,4%	0,8%
Hacerla formar parte en alguna actividad sexual en contra de su voluntad	0,7%	0,4%	0,7%	0,3%	0,9%
Consentimiento de actividad sexual por miedo a lo que pueda suceder	0,8%	0,4%	0,9%	0,2%	0,9%

**Tabla 12:** elaboración propia a partir de la Tabla 2.7 del Informe de Resultados de la FRA  
*“Violence against women EU-wide survey. Main results”*. 2014.

#### IV. - Perfil del agresor de violencia sexual que no es pareja (UE-28)

RELACIÓN CON EL AGRESOR	%
Jefe/Supervisor	3%
Compañero/compañero de trabajo	5%
Cliente/paciente	3%
Profesor/entrenador/coach	2%
Otro estudiante/compañero de estudios	5%
Médico/trabajador de salud	2%
Miembro de la familia o conocido de la familia (no la pareja)	9%
Una cita/alguien que acabas de conocer	15%
Amigo/conocido	27%
Alguien a quien conocías	24%
Alguien que no conocías	23%

**Tabla 13:** tabla traducida del inglés original, elaborada y adaptada a partir de la Tabla 2.17 del Informe de Resultados de la FRA *“Violence against women EU-wide survey. Main results”*. 2014.

## V. - Espacios en los que se ha producido la agresión sexual

ÁMBITO	%
Casa	19%
Otra casa o apartamento	29%
En algún lugar de un edificio residencial	3%
En la escuela o lugar de trabajo	6%
En un café, bar, restaurante, discoteca	4%
En una tienda	1%
En un coche	11%
En el transporte público	2%
En algún lugar interior	7%
En la calle, una plaza, parking público u otro espacio público.	12%
En un parque, bosque	6%
En algún lugar exterior	8%

**Tabla 14:** tabla traducida del inglés original, elaborada y adaptada a partir de la Tabla 2.18 del Informe de Resultados de la FRA “*Violence against women EU-wide survey. Main results*”. 2014.

## VI. - Acoso sexual

Según la encuesta de la FRA, se calcula que, de los 102 millones de mujeres que hay en la Europa de los 28, aproximadamente, 83 millones de mujeres —es decir, entre el 45% y el 55% de ellas— han experimentado acoso sexual desde los 15 años. Se estima, además, que entre 24 millones y 39 millones de mujeres —del 13% al 21%— han sufrido acoso sexual en los 12 meses previos a la elaboración de la encuesta.

Llama la atención cómo entre las diferentes formas de acoso sexual que distingue la investigación —físico, verbal, no verbal y ciberacoso— el 15,32% de las mujeres indican que han sufrido acoso sexual laboral a manos de un compañero de trabajo. En cuanto al ciberacoso, de alguna u otra forma, el 11% de las mujeres se han enfrentado desde los 15 años a este tipo de acoso.

La encuesta de la FRA no sólo permite evaluar el porcentaje de mujeres que, de forma generalizada y sistémica, han sufrido y conviven con las distintas manifestaciones de violencia sexual, sino que pone luz a la magnitud de esta forma de discriminación y dominación sobre las mujeres. Aproxima, además, a una conceptualización de las violencias

sexuales ausentes en el debate público, ciega para la sociedad y para los y las responsables de las políticas públicas. Categoriza el acoso sexual más allá de un sustantivo; lo nombra detalladamente cuando pregunta sobre “los comentarios sexualmente sugerentes o las bromas sexualmente ofensivas”, “los comentarios intrusivos sobre el aspecto físico que nos hacen sentir incómodas” o “las preguntas intrusivas sobre nuestra vida privada. Es decir, como se indica en los primeros capítulos de esta investigación, “conceptualiza para politizar” (Amorós, 2005).

A través de las encuestas realizadas, los datos exponen un hecho evidente: la violencia sexual es un crimen de género, significado en que más del 90% de las víctimas son mujeres, mientras el 97% de los agresores son hombres (FRA. Informe de Resultados, 2014: 48). De forma paralela, un análisis general de los resultados, permite extraer algunas interpretaciones significativas que arrojan información interesante sobre el enfoque que adquiere la violencia sexual en las escasas encuestas disponibles acerca de su prevalencia.

Se puede concluir, que no existe un consenso pactado sobre la nominación de las múltiples formas de violencia sexual. A veces se esconde en la generalización, sin más, de la “violencia sexual” (OMS, 2005), sin especificar los tipos. En ocasiones, cae en tópicos patriarcales recurrentes, al identificar únicamente la agresión sexual desde la penetración vaginal (Macroencuesta, 2015). Otras veces, más positivamente —como en el caso de la FRA (2014)—, se desgranar al detalle históricas invisibilizaciones de violencias sexuales tales como el acoso sexual, con las que nos hemos acostumbrado a convivir de forma normalizada.

Sus altos porcentajes se podrían corresponder inmejorablemente con la definición de Bordie, al referirse a esa “violencia amortiguada, insensible e invisible a sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento” (2000: 12).

La globalidad de estas cifras nos ayuda a desmontar esos mitos a los que ya nos hemos referido en relación a la violencia sexual —cómplices directos del orden patriarcal—, consiguiendo fragmentar las mentiras sobre la que se busca controlar los cuerpos de las mujeres. Las cifras son claves para identificar a los agresores sexuales y desmontar la ficción acerca de los espacios que apuntalan el control de las mujeres, pero que, históricamente, se han ofrecido como los únicos seguros. Porque lo que las cifras nos cuentan —querámoslo o no— es que los amigos, los maridos y los compañeros de trabajo violan más que los desconocidos (Macroencuesta, 2015; OMS, 2005, 2013; FRA, 2014) ■





## **SEGUNDA PARTE**

---



---

## **CAPÍTULO 4**

# ENTRE LA PASIVIDAD Y EL SILENCIO DEL ESTADO ESPAÑOL FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL





“...En un aposento, el último de toda la casa [...] el marido y el hermano [...] pusieron a la pobre y desdichada doña Inés[...] y la tabicaron, dejando sólo una ventanilla como medio pliego de papel, por donde respirase y le pudiesen dar una miserable comida, porque no muriese tan presto, sin que sus lágrimas ni protestas los enterneciese [...] Aquí estuvo doña Inés seis años...”

“La inocencia castigada” en *Desengaños amorosos*. María de Zayas. 1647

#### 4.1 El deber ineludible de los Estados ante la violencia sexual desde el marco internacional de los derechos humanos

---

Las dificultades manifiestas de los tradicionales enfoques teóricos y prácticos sobre los derechos humanos de las vidas de las mujeres —intrínsecos a la experiencia masculina— siguen mostrando un panorama, en el que sus vulneraciones continúan universalizándose de forma abstracta. Afortunadamente —tal y como se viene reiterando en esta investigación—, la teoría y práctica política feminista interpela, desde su origen, tales interpretaciones, impugnando el falso discurso universalista, e incluso aprovechando la globalización, a fin de activar “prácticas institucionales inéditas, nuevas formas de comunicación y de acción política que buscan la justicia a escala planetaria” (Walby, 2001) <sup>228</sup>:

“...La pretensión de la teoría feminista desde sus orígenes ilustrados es poner de relieve las tensiones y contradicciones que las vindicaciones feministas suscitan en los enfoques teóricos supuestamente universalistas y que, al mismo tiempo son capaces de distorsionar la percepción de lo que atañe a la mitad de la especie humana” (Amorós, 1997)<sup>229</sup>.

La experiencia laboral y política feminista personal me ha permitido formar parte de esa “tensión crítica”<sup>230</sup> a la que se refiere Teresa del Valle (2006), al emitir valores y enjuiciamientos sobre cómo el derecho internacional de los derechos humanos intenta transformar, con grandes dificultades, la violencia sexual sistémica que afrontan las mujeres. Mientras, y al mismo tiempo, desde la “tensión creativa” (del Valle, 2006), busco salidas utilizando las propias herramientas que me ofrece el sistema internacional

---

<sup>228</sup> Cit. por Maqueira, 2011: 28.

<sup>229</sup> *Ibid*, p. 23.

<sup>230</sup> La categoría de tensión, tal y como nos recuerda Maqueira (2011), fue acuñada por Teresa del Valle, que considera fundamental el estudio de la tensión “para la comprensión de los procesos de cambio, ya que permite descubrir características dinámicas y contrapuestas y su activación en contextos específicos. La *tensión negativa* es la que se queda en la delimitación del problema y se apoya en verlo como un conflicto irremediable sin posibilidades de salida. La *tensión crítica* facilita la emisión de valores y enjuiciamientos sobre problemas y áreas de actuación. La *tensión creativa* es la que, analizando las fuerzas contrapuestas, promueve salidas que tienen en cuenta fuerzas sociales generadas por grupos diversos (2011:23, 24)”.

de derechos humanos, para combatir la discriminación y las desigualdad de género que el orden patriarcal apuntala sin tregua. Se podría decir que el movimiento y la teoría crítica feminista, en este ámbito, se debaten en la línea a la que apunta Maqueira:

“...El mundo de estudio y práctica de los derechos humanos mantiene una tensión crítica con las realidades del mundo que vivimos y a la vez establece una “tensión creativa” como “imaginario anticipatorio” (del Valle, 2006) que guía las acciones sociales anticipatorias”. (2011: 29).

En mitad de esta tensión —y a pesar de que el feminismo, desde diferentes enfoques teóricos, sigue considerando que las normas internacionales de derechos humanos ni reflejan ni responden adecuadamente a las necesidades y experiencias de las mujeres de forma global (Benhabib, 1990; Facio, 1992; Charlesworth, 1999, Chinkin y Wright, 1999; Chinkin, 1999; Gallaguer, 1997; West, 2000; Facio y Fries, 1999; Amorós, 2005; Valcárcel, 2008; Bodelón, 2010; Edwards, 2011 ) en línea con las demandas feministas, el marco teórico y práctico que plantea el derecho internacional de los derechos humanos ofrece, sin lugar a dudas, grandes posibilidades en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en sus diferentes manifestaciones.

En este contexto específico, se han señalado diversas herramientas e instrumentos que, de forma estratégica, acompañan el compromiso de las organizaciones internacionales de derechos humanos —la CEDAW, el Comité CEDAW, el Protocolo Facultativo, la Recomendación N°19, Belem do Pará, el Convenio de Estambul, la Relatora, los tribunales penales internacionales *ad hoc*....— y de la sociedad civil, en el incesante trabajo por alcanzar la verdadera universalización de los derechos humanos. Aún así, queda por abordar en esta investigación la norma estándar que el movimiento y práctica política feminista internacionalista<sup>231</sup>, otras organizaciones no gubernamentales, así como las propias organizaciones internacionales de derechos humanos disponen para rendir cuentas —en materia de derechos humanos— con uno de los históricos sostenedores y ejecutores del sistema patriarcal: el Estado.

La norma de “la debida diligencia”, utilizada en esta investigación para medir la respuesta que el Estado español ofrece en materia de violencia sexual, es una norma del derecho internacional consuetudinario y convencional, que establece que los Estados deben

---

<sup>231</sup> Entendiendo el feminismo como un internacionalismo en los términos a los que se refiera Amelia Valcárcel: “... las mujeres podemos actuar en nombre propio y crear nuestras propias redes de mutuo apoyo dentro de nuestros países y entre nuestros países, porque el feminismo es el único internacionalismo que queda en pie. Y además tiene la peculiaridad de que es verdadero” (1997: 80). “El feminismo es un internacionalismo, así ha sido y así habrá de ser ...” (1997:150).

proceder con la debida diligencia para prevenir, castigar, investigar, proteger, reparar y proporcionar alternativas contra todas las formas de violencia cometidas hacia las mujeres, tanto si el ejecutor de la violencia es el Estado, como si son los agentes no estatales, o la violencia se deriva de la propia inacción del Estado.

Como veremos, en diferentes niveles de intervención —de forma individual, para las mujeres; en la comunidad; dentro del Estado; o a nivel transnacional— el estándar de la debida diligencia es un instrumento cuyo potencial puede conseguir que “nuestras aspiraciones de un mundo justo y libre de violencia” (Ertük,2006) se alcancen algún día. Un instrumento más, de gran valor para la eliminación de la violencia contra la mujer y, de forma específica, de la violencia sexual.

#### **4.1.1 El estándar consensuado en la lucha contra la violencia sexual: “la norma de la debida diligencia”**

Referentes e históricas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, en paralela consonancia con el movimiento feminista, han abordado desde sus orígenes la obligación de los Estados en su deber de respetar y proteger los derechos humanos. Una obligación indiscutible en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, como lo recuerda así Amnistía Internacional (2004)<sup>232</sup> cuando advierte del deber “en virtud de los tratados internacionales y del derecho consuetudinario, de respetar, proteger y hacer realidad los derechos en la ley y en la práctica” (2004:11). En el mismo sentido, la propia organización de Naciones Unidas —a través de su Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer— recuerda la obligación de los estados de “actuar con la debida diligencia” (Ertük, 2006:2), adoptando medidas positivas para “impedir la violencia y proteger a las mujeres, castigar a los actores de actos violentos e indemnizar a las víctimas de violencia” (Ertük, 2006:2).

Sin entrar en los debates sobre las tendencias de interpretación sobre el Estado, esta investigación abarca la rendición de cuentas del “Estado de derecho” español, en relación a la violencia sexual, entendido “el Estado” en los términos a los que se refiere Naciones Unidas:

---

<sup>232</sup> En 2004, Amnistía Internacional lanzó la campaña mundial para combatir la violencia contra las mujeres, “No más Violencia contra las Mujeres”. Produjo numerosa documentación sobre el deber del Estado en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Véase el lanzamiento de la campaña en la siguiente página web: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/amnistia-internacional-lanza-una-campana-mundial-para-combatir-la-violencia-contra-las-mujeres-verd/>

“Un gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas, privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Significa ello, la exigencia de la adopción de medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal”.

“El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”. Informe del Secretario General. 3 de agosto de 2004: 5.

Cabe recordar, en este sentido, un aspecto generalmente desconocido por la sociedad civil, fundamental además para poder desarrollar la rendición de cuentas sobre la que se dirige esta segunda parte de la investigación: el Estado es el “sujeto por excelencia del Derecho Internacional” (Pastor Ridruejo, 2010: 283) y, entre sus funciones, está la de “velar por los intereses generales y permanentes de una comunidad humana asentada sobre un territorio [...] La justificación y fundamento último de la soberanía reside en el cumplimiento de tal función” (Pastor Ridruejo, 2010: 293)<sup>233</sup>.

En virtud de lo referido, al hablar de la responsabilidad que juega el Estado en materia de violencia hacia las mujeres —desde la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” de 1993—, de acuerdo con otros instrumentos internacionales previos, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos se adoptó la norma de la “debida diligencia”<sup>234</sup>, sirviendo como criterio para evaluar si el Estado estaba cumpliendo sus obligaciones, en cuanto a la prevención, asistencia, investigación, castigo y reparación integral a todas las víctimas de violencia hacia las mujeres:

“... Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin deberán [...] c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”

“Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.  
Artículo 4. 1993

---

<sup>233</sup> Desde la segunda mitad del s.XIX, el derecho internacional ha dado un giro importante en cuanto a su humanización, lo que ha impuesto, igualmente, la exigencia de la existencia de otros sujetos del Derecho Internacional distintos a los Estados (transnacionales o individuos, por ejemplo) a los que, asimismo, se les puede exigir el cumplimiento de los derechos humanos.

<sup>234</sup> La norma de “la debida diligencia” se incorporó en 1998 al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Velásquez Rodríguez vs Honduras*. La CIDH dictaminó que “un acto ilegal que viola los derechos humanos y que en un comienzo no es directamente imputable al Estado (por ejemplo, porque la persona no ha sido identificada) puede dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado, no por el acto en sí, sino por la falta de debida diligencia para impedir la violación” (párrafo 172).

De forma paralela, otros instrumentos y organismos internacionales han ido matizando y desarrollando la norma, elaborando directrices generales sobre los requisitos de la debida diligencia en el contexto de la violencia hacia las mujeres. A continuación, se recogen algunas de ellas:

– **El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer:**

– Recomendación General Nº 19, establece:

“...en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización” (1992)<sup>235</sup>.

– En el Caso *Karen Tayag Vertido v. Filipinas* (2010), el Comité “...reafirma también que la Convención impone obligaciones a todos los órganos estatales y que los Estados partes pueden ser considerados responsables de las decisiones judiciales que violen las disposiciones de la Convención<sup>236</sup>”, recordando la Recomendación Nº19, en relación a la obligación de los estados de adoptar medidas con “la debida diligencia para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas ...<sup>237</sup>”.

– En el Caso *Ángela González Carreño v. Spain* (2014), el Comité estableció en el párrafo 9.6 que “... considera que los Estados también pueden ser responsables de actos de personas privadas si no actúan con la debida diligencia ...”. Asimismo, a lo largo de diversos párrafos de la Comunicación (Comunicación Nº47/2012) se desarrolla la cuestión de la responsabilidad del Estado en cuanto a la aplicación por las autoridades de los principios de debida diligencia<sup>238</sup>.

– **La Convención de Belem do Pará (1994)** establece específicamente en su Artículo 7 (b) que:

“...los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo: [...] b). Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer ...”.

---

<sup>235</sup> Párr. 9, e).

<sup>236</sup> Párr. 8.4.

<sup>237</sup> *Ibid*, párr. 8.4.

<sup>238</sup> Párr. 9.2.

- **La Convención de Belem do Pará y la Corte Interamericana de Derechos Humanos:** en el caso *Maria da Penha v. Brasil* (2001) la CIDH responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación a la violencia de género contra las mujeres brasileñas:

“... sostienen que esta denuncia no representa una situación aislada en Brasil y que el presente caso es ejemplo de un patrón de impunidad en los casos de violencia doméstica contra mujeres en Brasil, ya que la mayoría de las denuncias no llegan a convertirse en procesos criminales [...]. Los delitos que son incluidos en el concepto de violencia contra la mujer constituyen una violación de los derechos humanos [...]. De acuerdo con la Convención Americana y el artículo 7(b) de la Convención Belém do Pará, de actuar con la debida diligencia para prevenir la violaciones de los derechos humanos”<sup>239</sup>.

- **El Consejo de Europa en su Recomendación Rec. (2002)5 adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa (2002)** indicó que:

“...recomienda que los gobiernos de los Estados miembros: [...] II. Reconozcan la obligación de los Estados de ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia sexual, ya sea estos perpetrados por el Estado o por particulares, y de facilitar protección a las víctimas...”.

- **La Corte Europea de Derechos Humanos** en diferentes sentencias también ha adoptado la obligación de la debida diligencia:

– Caso *Opuz v Turkey* (2009)<sup>240</sup>: el Tribunal se refiere de forma directa a la debida diligencia en los párrafos 131 y sucesivos (146, 147, 148 y 149):

”... 131[...]el Tribunal revisará si las autoridades nacionales han cumplido con su obligación positiva de adoptar medidas dirigidas a prevenir y proteger el derecho a la vida de la madre de la demandante. A este respecto, debe determinar si las autoridades conocían o deberían haber conocido en ese momento la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de la madre de la demandante derivados de los actos delictivos cometidos por H.O. Como se desprende de las observaciones de las partes, una cuestión crucial en este caso, es saber si las autoridades locales han ejercido la debida diligencia para prevenir la violencia contra la demandante y su madre, en particular mediante la adopción de medidas adecuadas penales o preventivas contra H.O, a pesar la retirada de las denuncias por parte de las víctimas”.

---

<sup>239</sup> Párr. 2.O..

<sup>240</sup> El caso *Opuz v. Turkey* es un histórico caso de violencia de género cometido contra una madre y su hija. “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró, por primera vez, que los actos de violencia de género no sólo eran constitutivos de violación de diversos preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino también del principio de no discriminación en el disfrute de esos derechos, recogido en el artículo 14 del Convenio” (Poder Judicial Español). Recuperado el 11 de abril de 2017, desde: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Jurisprudencia-internacional/>.

– Caso *M.A v. Slovenia* (2007): “El Tribunal Europeo determina que el Estado no actuó con la diligencia debida al llevar a cabo las actuaciones penales sobre la violación ...”<sup>241</sup>.

– **El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011)**, delimita de forma clara en su artículo 5, las “Obligaciones del Estado y la diligencia debida”, desarrollando a lo largo de su articulado cada una de las obligaciones del Estado en esta materia. El párrafo 1 se refiere a la necesidad de garantizar que las autoridades, funcionariado, actores estatales e instituciones estatales en nombre del Estado se abstengan de ejercer violencia contra las mujeres. Por su parte, el párrafo 2 establece la obligación de los Estados Partes de ejercer la debida diligencia en relación a todas las formas de violencia contra la mujer ejercida por actores no estatales. Lo destacado de este artículo es que identifica el hecho de que, en ambos casos, se incurre en la responsabilidad del Estado:

“... 2. Las Partes tomarán las medidas legislativas y demás necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio cometidos por actores no estatales. Artículo 5(2)”.

El estándar de la debida diligencia ha sido también utilizado por una amplia variedad de organismos —Naciones Unidas (incluyendo los informes de las y los Relatores), la Comisión de Derechos Humanos (actualmente, Consejo de Derecho Humanos), los Comités...— en temas como la tortura, las detenciones extrajudiciales, las ejecuciones sumarias y arbitrarias, o en cuanto a las personas desplazadas, entre otros.

Como recuerda el Consejo de Europa (CAHVIO, 2010), un excelente análisis sobre la debida diligencia fue realizado por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Yakin Ertük, en su informe anual del año 2006. Informe sobre el cual se apoya parte de esta investigación, a fin de evaluar la respuesta del Estado español, en relación a la violencia sexual hacia las mujeres.

El examen detallado del estándar de la debida diligencia permite, de forma práctica, no solo evaluar, sino también exigir medidas obligadas que el Estado debe ofrecer en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Todo ello, en marcada sintonía con los vacíos que la teoría feminista identifica como detonantes de la discriminación estructural y de la violencia sistémica hacia las mujeres en áreas como el sistema judicial, educativo, político, de seguridad...

---

<sup>241</sup> Párr. 51.



Tal y como señalan, además, algunas feministas, frente a la doctrina liberal —enemiga acérrima de la libertad y autonomía de las mujeres y valedora de la no intervención del Estado en el ámbito privado—, la debida diligencia marca un hito en la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, al identificar al Estado como responsable de los actos de violencia de género que se producen en el ámbito privado (Chinkin, 1999). De esta manera, se rompe así la tradicional dicotomía entre las esferas públicas y privadas, como recuerda la propia Relatora en 2006: “La norma de la debida diligencia ha ayudado a cuestionar la doctrina liberal de la responsabilidad del Estado en relación con las violaciones que se producen en el “ámbito privado” (Ertürk, 2006: 16<sup>242</sup>).

Las obligaciones sobre las que descansa la debida diligencia se han ido estableciendo lentamente debido a la labor de los organismos internacionales de derechos humanos. Pero también gracias a la norma o a la propia jurisprudencia que, en ambos casos, han delimitado los indicadores, en relación a los aspectos que son exigibles a los Estados en su obligación de combatir la violencia hacia las mujeres.

En el año 2006, en su informe específico sobre la debida diligencia, la Relatora Yakin Ertürk reconocía el vacío existente en cuanto al contenido de las obligaciones generalizadas de la norma (2006:9<sup>243</sup>). Desde entonces hasta hoy, los informes, tratados, convenios, comunicaciones y resoluciones judiciales históricas —como la del “Campo Algodonero” de 2009 (*Gonzalez y otras vs México*<sup>244</sup>), entre otras— han configurado una consolidada herramienta que permite evaluar la respuesta de los Estados en su obligación —como sujeto internacional de derecho—, no solo por combatir de forma efectiva y con todos los medios a su alcance la violencia de género, sino que, de forma clara, también insta a los Estados en sus obligaciones en la materia.

---

<sup>242</sup> Párr. 61.

<sup>243</sup> *Ibid*, párr. 30.

<sup>244</sup> Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal (menores de edad), y Claudia Ivette González fueron encontradas asesinadas en un campo algodonerero de Ciudad Juárez, en México, en noviembre de 2011. El contexto de violencia generalizada hacia las mujeres en México era de sobra conocido por el Estado mexicano, y denunciado por ONG y diversas organizaciones internacionales. A pesar de ello, el Estado mexicano no realizó ninguna investigación efectiva de los asesinatos, ni emprendió ninguna labor de búsqueda para hallar a los asesinos. El caso fue llevado ante la CIDH, que declaró, por unanimidad, que en su actuación, el Estado lo hizo conforme a un patrón de indiferencia acerca de la situación crónica de violencia contra las mujeres y las niñas en Ciudad Juárez, perpetuando su situación de discriminación. Entre sus múltiples razonamientos, la Corte sostuvo que los Estados están obligados a tomar medidas integrales para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, y que dicha obligación viene dada de forma genérica por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y se encuentra reforzada y especificada en la Convención de Belem do Pará. Cabe destacar el análisis que realizó la Jueza Cecilia Medina Quiroga con su voto concurrente, en tanto en cuanto consideró que “la descripción de los cadáveres dio muestra de la magnitud del tratamiento que se les infringió, de modo que los hechos permitían ser también calificados como actos de tortura cometidos por agentes no estatales” (párrafo 8.). Para más información sobre el caso, véase la sentencia: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso *González y otras* (“Campo Algodonero”) vs México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Para un resumen del caso véase el sitio web de la organización Women’s Link Worldwide: [http://www2.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=observatorio&id\\_decision=398](http://www2.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=observatorio&id_decision=398)

Ya en 1999, la Relatora Radhika Coomaraswamy elaboró un listado sobre las consideraciones que determinan si un Estado cumple sus obligaciones de debida diligencia. Lo sintetizó en los siguientes puntos:

“Ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las víctimas de violencia de género; políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer, sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la mujer”<sup>245</sup>.

De forma general, la debida diligencia establece cuatro grados de obligación que, según Amnistía Internacional, “crean un círculo virtuoso de buena práctica en el que cada elemento refuerza al siguiente” (2004:33). Desde el pensamiento feminista se podría decir que los cuatro grados de obligación corresponden a los cuatro planos identificados desde los orígenes del movimiento feminista, asimismo cruciales para la desmembración del orden patriarcal y eliminación de la violencia:

- La prevención de la violencia de género en todas sus manifestaciones.
- La protección y atención a las víctimas y/o supervivientes de violencia de género.
- La investigación y la sanción en relación a los hechos y a los agresores.
- La reparación integral a las víctimas y/o supervivientes de violencia de género.

Los grados de obligación que emplea la debida diligencia deben aplicarse a todas las formas de violencia hacia las mujeres, recordando —como establece la Relatora en 2006— que “la multiplicidad de formas que adopta la violencia contra la mujer, así como el hecho de que se produzca frecuentemente en la intersección de diferentes tipos de discriminación, obliga a adoptar estrategias multifacéticas para prevenirla y combatirla” (2006:6<sup>246</sup>).

Así, esta investigación aplica los parámetros de la norma, únicamente en relación a la respuesta del Estado en cuanto a la violencia sexual que —tal y como se ha venido disertando en los capítulos precedentes— ha sido la manifestación de violencia de género más desatendida en los últimos 40 años en el Estado español.

---

<sup>245</sup> Cit. por Yakın Ertük, 2006: 10, párr.32.

<sup>246</sup> Párr.16.

Siguiendo los postulados de las propias Relatoras, utilizando la norma de la debida diligencia, la evaluación de la respuesta en el marco de la violencia sexual ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el papel del Estado en su obligación por “transformar los valores sociales e instituciones sociales que sostienen la desigualdad de género” y, al mismo tiempo, “examinar las responsabilidades compartidas del Estado y de los agentes no estatales en lo que respecta a la prevención de la violencia y la respuesta a ella y otras violaciones de los derechos humanos de la mujer” (Ertük, 2006: 7<sup>247</sup>).

En el caso de esta investigación —además, y de forma paralela— se pretende enfrentar la realidad con la que conviven y han convivido las mujeres, al tratar de identificar los peligrosos vacíos que el Estado español ha arrinconado en su deber por ejercer la debida diligencia en el marco de la violencia sexual, para ofrecer alternativas reales a su erradicación. Tal y como sí sucede con la violencia de género —física, psicológica o económica— que se produce en el entorno de la pareja o expareja.

## 4.2 La falta de respuestas del Estado español ante la violencia sexual

---

En el verano de 2015 —después de casi dos años de intenso trabajo como miembro activista de la “Plataforma CEDAW Sombra España”<sup>248</sup>— más de 250 organizaciones feministas de derechos humanos y de cooperación al desarrollo presentamos en Ginebra —en la 6ª Sesión del Comité CEDAW— el “Informe Sombra sobre la aplicación en España de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres”, en relación al periodo comprendido entre los años 2008-2013.

La presentación de informes sombra por parte de la sociedad civil —*Shadow Report* o informes paralelos— se enmarca en los procedimientos de trabajo que, desde la aprobación del Protocolo Facultativo (1999), sirven para evaluar el cumplimiento de la CEDAW del Estado Parte. En ellos se recoge el monitoreo y experiencia que las organizaciones no gubernamentales han realizado en correspondencia con la actuación del país en cuanto a la Convención. Los

---

<sup>247</sup> Párr.17.

<sup>248</sup> La “Plataforma CEDAW Sombra España” es una plataforma independiente, autofinanciada, formada por más de 250 organizaciones españolas feministas, de mujeres, de derechos humanos y de cooperación al desarrollo, cuyo objetivo fundacional fue el de presentar ante el Comité CEDAW el “Informe Sombra”, paralelo al Estado español. El Estado español, dentro del procedimiento establecido por la Convención CEDAW (Artículo 18) había sido evaluado por el Comité en septiembre de 2013 (7º informe periódico de España) en relación al periodo de 2009-2013. Desde entonces, la Plataforma CEDAW Sombra ha mantenido su actividad de *lobby* y activismo a nivel nacional e internacional, exigiendo al Estado español que cumpla las obligaciones que establece la propia Convención y atienda a las Observaciones Finales y recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW en julio de 2015 (CEDAW/C/ESP/CO/7-8). Para más información sobre la Plataforma CEDAW véase su página web: <https://cedawsombraesp.wordpress.com/>.

informes sombra se hacen llegar al Comité de expertas y expertos, existiendo la oportunidad de presentarlos en sesión abierta, frente a los informes de los Estados Partes.

Tal y como ya se ha explicado, la presentación de informes es una de las obligaciones que tienen que cumplir todos los Estados Partes que ratifican la Convención CEDAW, como queda establecido en el Artículo 18<sup>249</sup>. En este sentido, el informe estatal debe recoger las medidas que se hayan adoptado en el periodo de tiempo establecido —cada cuatro años—, con el fin de cumplir con la Convención<sup>250</sup>.

Hasta la entrada en vigor del Protocolo Facultativo (1999), “la presentación de informes por parte de los Estados al Comité de la CEDAW era prácticamente el único mecanismo para ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones” (Facio, 2011: 5). Por todo ello, el informe sombra es otra herramienta fundamental, que ofrece grandes oportunidades a las organizaciones feministas para rendir cuentas con el Estado y exigirle que cumpla con sus obligaciones, en el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Se podría decir que un buen informe sombra, además, permite a las y los expertos del Comité “complementar lo expuesto por el Estado y también mostrar las falencias y los incumplimientos de éste” (Laporta, 2012). Al mismo tiempo, como recuerda Alda Facio, más allá del monitoreo que realizan las organizaciones no gubernamentales, “puede ayudar a los Estados a entender concretamente cuáles son sus obligaciones, facilitar formulación de políticas públicas, fomentar intercambio de información entre Estados, etc.” (Facio, 2001: 6). En la práctica, difícilmente los Estados reconocen este aspecto, considerando la presentación de los informes sombra como un ataque de la sociedad civil al Gobierno, tal y como viene sucediendo con el Informe Sombra de la Plataforma CEDAW:

“...Ya el título de ‘La igualdad desmantelada’ lleva una reflexión, porque hablar de la desarticulación de las estructuras de igualdad en este país resulta, cuando menos, chocante, en un país que ha pasado la crisis que ha pasado, que tiene una serie de circunstancias muy concretas, y por el que ha habido que trabajar para salir de una situación de emergencia, en la que este país ha estado al borde del rescate, y que lo que realmente, a nuestro juicio, genera

---

<sup>249</sup> Artículo 18: 1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido:

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate; b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite.<sup>2</sup> Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.

<sup>250</sup> Véase los VI y VII Informe periódico de España al Comité CEDAW(CEDAW/C/ESP/CO/7-8) en página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España: [https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/onu/cedaw\\_2.htm](https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/onu/cedaw_2.htm).

situaciones de desigualdad es precisamente que crezca la pobreza y que haya situaciones límite con los índices de paro que había en este país cuando el Partido Popular llegó al poder. [...] reconozco que ustedes hacen un trabajo muy valioso y que tienen ustedes a muchas personas trabajando —cosa que no voy a discutir—, pero me hubiera gustado que hubiera dado usted una explicación por lo menos más objetiva y menos partidista ...”.

Réplica de la Sra. Elorriaga Pisarik, miembro del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, a Bárbara Tardón Recio tras la exposición del “Informe Sombra de la Plataforma CEDAW-España” en la Asamblea de Madrid ante todos los Grupos Políticos. 24 de octubre de 2014<sup>251</sup>.

En el caso español, las “Observaciones Finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de España” (2015) del Comité exponían un panorama desolador y un retroceso generalizado de los derechos humanos de las mujeres entre 2009 y 2014. Lo que las organizaciones feministas firmantes del informe consideraron en calificar como un bochornoso suspenso a España en igualdad de género<sup>252</sup>.

El suspenso —precedido por el demoledor informe sobre la situación de las mujeres en España elaborado por el “Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica” de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH)— venía a confirmar los peores augurios del movimiento feminista. Naciones Unidas y sus expertas avalaban el desmembramiento de la igualdad en nuestro país, minimizado por el gobierno de Mariano Rajoy, y justificado como resultado de la crisis económica. El Grupo de Trabajo lanzó, además, un llamativo toque de atención por el olvido del Estado a las víctimas de violencia sexual durante la dictadura franquista:

“...9. Aún no se han reconocido plenamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, en particular los casos de violencia sexual, agresiones y humillaciones contra las mujeres, a menudo en represalia por su afiliación real o supuesta o la de sus familiares o parejas, ni se ha resarcido a las víctimas [...].

66. Las medidas de protección previstas en la Ley, lamentablemente, no contemplan otros tipos de violencia de género distintos de la violencia en la pareja ....”

Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Misión a España. Junio de 2015

---

<sup>251</sup> Véase la exposición completa y la réplica de los distintos grupos políticos en la Asamblea de Madrid en el Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, disponible en: <http://www.asambleamadrid.es/DDSS%20Legislatura%20IX/IX-DS-680.pdf>.

<sup>252</sup> Véase artículo de la Plataforma CEDAW España sobre “El suspenso en igualdad” en el siguiente enlace: [http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/07/05/suspenso\\_igualdad\\_genero\\_onu\\_espana\\_34845\\_1023.html](http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/07/05/suspenso_igualdad_genero_onu_espana_34845_1023.html).

Entre las observaciones a destacar de junio de 2015, el Comité alertó sobre la alta prevalencia de violencia contra la mujer, indicando su preocupación por la violencia sexual<sup>253</sup>. Señaló, de forma específica, la necesidad de que el Estado español revisara su legislación en materia de violencia contra la mujer, con la finalidad de incluir otras formas de violencia de género<sup>254</sup>. Advirtió, de forma paralela, sobre la necesidad de eliminar la estigmatización que el sistema judicial aplica con las víctimas de violencia de género —aparece nombrada como “violencia doméstica”— y violencia sexual. Asimismo, exhortó al Estado Parte a que recopilara datos estadísticos, no sólo sobre violencia en el entorno de la pareja o expareja, también sobre violencia sexual, desglosados por sexo, edad, nacionalidad, y relación entre la víctima y el autor.

Las Observaciones del Comité CEDAW —en clara sintonía con el informe publicado ese mismo año (junio de 2015) por el “Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica”— tímidamente significaron la violencia sexual como otra forma de violencia hacia las mujeres, que merecía la misma protección y asistencia que otras manifestaciones de violencia machista.

El trabajo previo de *lobby* e incidencia política realizado por las organizaciones firmantes del Informe Sombra —y la información que sobre violencia sexual se incluyó en el mismo informe— fue fundamental para la elaboración de las recomendaciones, tanto del Comité, como del Grupo de Trabajo.

Por primera vez —desde la aprobación de la *Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*— de forma independiente, se significó la violencia sexual más allá de la expresión violencia de género, lo que simbolizó el preludio de una nueva movilización feminista, dirigida a volver a incluir en la agenda feminista y política la lucha contra la violencia sexual. Ese verano, las feministas rendimos culto a la expresión tantas veces señalada en esta investigación: “Conceptualizamos para politizar”.

Desde entonces hasta hoy se vuelve a hablar de violencia sexual, a pesar de que, como se observará en las próximas páginas, no se ha tomado ninguna medida política para combatirla: de forma sistemática, el Estado español elude su responsabilidad frente a la violencia sexual.

---

<sup>253</sup> Párr. 20.

<sup>254</sup> *Idib*, párr. 21.a).

## 4.2.1 El Estado español frente a la prevención de la violencia sexual

“... Los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia”.

Sentencia “Campo Algodonero”. 2009<sup>255</sup>

En relación con la aplicación de la norma de la debida diligencia —tal y como señala Naciones Unidas—, otro principio fundamental es el de “no discriminación”, que implica directamente la obligación del Estado de prevenir, investigar, castigar y proporcionar remedios contra la violencia hacia las mujeres.

En cuanto al primer grado de aplicación, “la prevención de la violencia sexual” —lo que se conoce también en el lenguaje de los derechos humanos como “la prevención del daño”, en lo que se podría considerar la etapa más temprana para la protección de las víctimas—, la evolución de la norma ha conseguido circunscribir, de forma muy detallada, las medidas que los Estados deben tomar para hacer efectiva esta prevención. Sobre dichas medidas se han pronunciado, categóricamente, distintos tribunales de derechos humanos:

“... Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer a las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer”

Sentencia “Campo Algodonero”. 2009<sup>256</sup>

A través del análisis de diversas fuentes —Convenios, Tratados, Informes, Comunicaciones, Resoluciones, Jurisprudencia...— se pueden establecer así una serie de indicadores comunes, cuya ejecución es obligatoria en el marco de la prevención:

1. La adopción de leyes específicas.
2. La elaboración de planes nacionales de acción.

---

<sup>255</sup> Párr. 258.

<sup>256</sup> *Ibid.*, párr. 258.



3. La recopilación estadística y la investigación que dé cuenta de la magnitud de la violencia.
4. La realización de campañas de sensibilización.
5. La capacitación de equipos profesionales.

#### 4.2.1.1 Leyes invisibles a la especificidad de la violencia sexual ejercida contra los cuerpos de las mujeres

El “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer del Secretariado General de Naciones Unidas” (2006) establece —tal y como indican los instrumentos internacionales y regionales sobre los que ya se ha hablado en las líneas precedentes—, de manera detallada, la obligación de promulgar y poner en práctica normas legislativas contra todas las formas de violencia hacia la mujer, y monitorear su cumplimiento.

En este sentido, dada la paradoja que subyace, el caso español plantea un panorama significativo sobre el que merece la pena detenerse. Efectivamente, nuestro sistema legislativo —como se ha visto en el capítulo 2—incorpora, a través del Código Penal, diferentes tipos de violencias sexuales dentro del apartado relativo a los “Delitos contra la libertad e indemnidades sexuales” (Título VIII), así como en el referido a “Delitos contra la Libertad” (Título VI). A pesar de ello, —como se ha desarrollado en el capítulo 3—, desde el enfoque feminista y de derechos humanos, en relación a la violencia sexual, la reforma del Código Penal español sigue entreviendo importantes vacíos en el terreno legislativo, y en aspectos ya señalados: las significaciones de las distintas formas de violencia sexual; la tibieza en la consideración del consentimiento como prueba fundamental para establecer si ha existido o no violencia sexual —frente al uso de la violencia o de la intimidación, como el elemento clave de las agresiones sexuales—; las dificultades relacionadas con la prueba —cuando se utilizan drogas para agredir sexualmente, o la presencia de trauma es requisito necesario para la consideración de agresión sexual—; y un largo etcétera que permite concluir que no existe una legislación específica con enfoque de género que aborde que la violencia sexual es un crimen de género que afecta, de forma sistémica, a todas las mujeres.

La existencia normativa específica sobre violencia hacia las mujeres, en el ámbito de la violencia en el entorno de la pareja o expareja, únicamente se ha desarrollado través de la *Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*. Y en relación al acoso sexual, mediante la *Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres*. En la práctica—desde una perspectiva de género en relación a la violencia sexual,



en sus diferentes manifestaciones fuera del entorno de la pareja—, la ausencia de disposiciones legislativas específicas se traduce, también, en un vacío sobre el resto de obligaciones que establece la debida diligencia, lo que conlleva a una desatención absoluta en cuanto a las medidas integrales que deben emanar para la aplicación efectiva de las leyes: planes nacionales, campañas de sensibilización, provisión de servicios específicos de atención a las víctimas, acceso a la justicia...

Cabe destacar que el Estado español, de forma paralela, incumple además gravemente con el principio de “no discriminación”—contrariando así el derecho internacional de los derechos humanos—, al no respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Como en el caso de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, víctimas de violencia sexual fuera del entorno de la pareja o expareja —o que no sean víctimas de trata—, por distintos motivos que se exponen a continuación.

La normativa de extranjería española —*Ley Orgánica 2/2009, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*—, lejos de proteger a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular víctimas de violencia sexual, “mantiene la posibilidad de sancionar a una mujer por su situación administrativa cuando toma contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” (Naredo, 2014: 20). Con ello, está rechazando las recomendaciones que el propio Comité CEDAW realizó al Estado español en 2009 y en 2015<sup>257</sup>, los Informes Anuales del Comité —sobre los que se ha hablado en el capítulo 3 de esta investigación—, los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como el enfoque de la Relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes (2012).

A pesar de que el marco normativo internacional establece un catálogo definido en relación a los derechos que asisten a todas las mujeres migrantes víctimas de cualquier forma de violencia hacia las mujeres<sup>258</sup>, el Estado español acaba vulnerándolo. Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular que hayan sufrido violencia sexual fuera del entorno íntimo, en caso de querer denunciar a su agresor o agresores sexuales, se enfrentan a una sanción o a la expulsión del país, por no estar incluidas en la categoría de “víctimas de violencia de género” que establece la Ley Orgánica 1/2004.

---

<sup>257</sup> En líneas general, el Comité CEDAW llama la atención al Estado español en relación a los recortes presupuestarios y sus consecuencias en mujeres migrantes, mujeres gitanas, mujeres mayores y mujer con discapacidad, recomendando al Estado Parte que adopte medidas dirigidas a garantizar los derechos humanos de todas las mujeres que viven, de forma especialmente alarmante, diferentes formas de discriminación. Para más información véanse las “Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de España”. (29 de julio de 2015). Doc. ONU. CEDAW/C/ESP/CO/7-8.

<sup>258</sup> Véase informe presentado por la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, de conformidad con la Resolución 1999/44 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. De la ONU: E/CN.4/2002/82 de 6 de enero de 2000.

Pero incluso, en el supuesto de que una mujer migrante que se encuentre en una situación administrativa legal quiera denunciar —en instancias policiales o judiciales— que ha sufrido violencia sexual a manos de su pareja o expareja, las medidas de protección específicas siguen estando condicionadas por una traba, a pesar de lo que establece la Ley de Extranjería:

“Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente”.

Ley Orgánica 2/2009, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social<sup>259</sup>.

Solo, en caso de que se acredite judicialmente su condición de víctima, existe la posibilidad de que a dichas mujeres no se les incoe expediente de expulsión. Lo que ha llevado a que esta situación sea denunciada tanto por las organizaciones no gubernamentales —Amnistía Internacional (2006, 2015); Fundación para la Convivencia Aspacia (2014); Médicos del Mundo (2016); Plataforma CEDAW Sombra-España (2014)—, como por los propios organismos internacionales, o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en 2011.

Cuando una mujer migrante en situación irregular acude a denunciar, los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen que actuar conforme establece la “Instrucción Conjunta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil”<sup>260</sup>, lo que en la práctica se traduce, como informa la propia Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2016), en que deben proceder de la siguiente forma:

- No incoando un procedimiento administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español (infracción grave).
- Suspendiendo el procedimiento administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.

Guía de Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 2016: 25

---

<sup>259</sup> Las modificaciones de la Ley de Extranjería de 2009 y 2011 introducen una medida de protección específica para víctimas de violencia de género en situación irregular o reagrupadas por sus agresores: la posibilidad de una autorización de trabajo y residencia, con vigencia de cinco años.

<sup>260</sup> “Instrucción Conjunta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, sobre la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, respecto a derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, en materia de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a favor de la mujer extranjera”

Tras ello, y concluido el procedimiento penal, la condición de víctima de violencia de género sólo se obtendrá a través de sentencia condenatoria, o con una resolución judicial en la que “se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado ...” (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2016: 26).

A continuación, para que las mujeres migrantes en situación administrativa irregular puedan ser titulares de alguno de los tipos de autorizaciones de residencia y trabajo específicas por razón de violencia de género —con una duración de 5 años—, solo será posible siempre que exista una orden de protección a favor de la mujer o, en su defecto, un informe de Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de violencia de género.

En caso de que la sentencia no sea condenatoria, o de que de la resolución se deduzca que no existe una situación de violencia de género, se le denegará la autorización por residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales, procediendo a incoar o continuar con el procedimiento administrativo sancionador, por estancia irregular en territorio español (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2016).

En virtud de lo anterior, los informes especializados de referentes ONG —en la misma línea que las preocupaciones formuladas por el CERD al Estado español en 2011— expresan el obstáculo que esta disposición (Artículo 31 bis) supone para las migrantes irregulares víctimas de cualquier forma de violencia de género en el entorno íntimo. La disposición se convierte en un elemento disuasorio para las mujeres que, ante la posibilidad de presentar denuncia, no lo hacen por miedo a que sean finalmente expulsadas, que la sentencia no sea condenatoria, o que de la resolución se deduzca que no existe violencia de género.

El acceso a los derechos queda finalmente supeditado a la intervención penal, obviando así otras posibilidades que permitan garantizar y proteger los derechos de las mujeres. Como refiere Encarna Bodelón, “debe garantizarse un acceso a derechos vinculados al resarcimiento de la violencia, más allá de lo que podemos llamar la constatación penal de esta violencia” (2012: 51).

“...12. Le preocupa al Comité la disposición del artículo 31bis de la Ley Orgánica 2/2009 (‘Ley de Extranjería’) sobre mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, la cual puede disuadir a las mujeres extranjeras, en situación irregular, a presentar denuncias por violencia de género por miedo a ser expulsadas del territorio del Estado parte en caso de que los tribunales no dicten una sentencia condenatoria contra el acusado por violencia de género...”

Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 11 de marzo de 2011 (párrafo 12.).

De forma paralela —tal y como el propio Consejo General del Poder Judicial refiere en 2016 a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género—, si tenemos en cuenta “el alto incremento de las sentencias absolutorias en los Juzgados de lo Penal y el elevado número de sobreseimientos provisionales que se vienen acordando por los Juzgados de Violencia contra la Mujer” (2016: 268) y, según los datos que aporta el propio CGPJ, echando un vistazo a las cifras de 2016 —en las que se refleja que los sobreseimientos totales provisionales alcanzaron el 41,54%<sup>261</sup>—, es evidente que la dispensa supone una medida disuasoria para las mujeres irregulares que deseen denunciar en los mismos términos a los que se refiere el CERD (2011).

Por otro lado, tal y como se señaló en capítulos precedentes, otras reformas legislativas acometidas en los últimos años en España —como el Real Decreto *Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones* (RD 16/2012)— han impactado de forma negativa y directa en los derechos humanos de las mujeres en general y, de manera específica, en los de las mujeres migrantes irregulares víctimas de violencia de género y sexual.

En este sentido, a día de hoy, la reforma sanitaria excluye de la prestación sanitaria con fondos públicos a todas las personas extranjeras que no tengan la condición de aseguradas, a pesar de que diferentes organismos internacionales —el Comité de Derechos Humanos (2015), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2012), el Comité contra la Tortura (2015) o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2015)— hayan alertado sobre las frecuentes prácticas discriminatorias en relación al acceso a la vivienda, al empleo, a la educación, la igualdad salarial y la atención de la salud. Exhortando al Estado a:

“...garantizar la igualdad de trato a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción, cualquiera que sea su origen nacional o étnico, incluida la minoría romaní, sean discriminados en el acceso a la vivienda, el empleo, la educación, la igualdad salarial y la atención de la salud”.

Observaciones Finales. Sexto informe periódico de España.  
Comité de Derechos Humanos, 2015<sup>262</sup>.

---

<sup>261</sup> Según datos del Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en 2016, en algunas comunidades, como Madrid o Cataluña, se han denegado más del 50% de las órdenes de protección solicitadas. En otras como Asturias alcanza el 39% o en Canarias el 41%. Véase el Informe resumen. “Violencia sobre la Mujer. Año 2016” del CGPJ:

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Anual-2016>

<sup>262</sup> Párr.9.

A pesar de ello, el RD 16/2012 solamente contempla la asistencia sanitaria en personas migrantes irregulares, en los casos de:

- Atención sanitaria urgente por enfermedad grave o accidente
- Atención al embarazo, parto o postparto.
- Víctimas de trata de seres humanos (sólo en periodo de restablecimiento y reflexión).
- Personas solicitantes de protección internacional o menores de edad.

RD 16/2012. Artículo 3 ter. *Asistencia sanitaria en situaciones especiales*

La OMSe, incluso, los propios protocolos de actuación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad<sup>263</sup> (2006, 2012) indican la necesidad de una atención continuada de cada caso, a través de un tratamiento de las lesiones físicas y secuelas psicológicas, con un “seguimiento adecuado de todo el proceso de atención integral a su salud” (Protocolo Común de Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, 2012: 70). Por tanto, si se tienen en cuenta las graves secuelas físicas y psicológicas que implica para una mujer haber sufrido una agresión sexual, el RD sanitario 16/2012 impide así que las mujeres migrantes en situación irregular, agredidas sexualmente, puedan acceder a un tratamiento, a medio y largo plazo, con una atención y seguimiento adecuado acorde al trauma sufrido.

De esta manera, el RD sanitario 16/2012, no sólo contradice las propias directrices elaboradas por su mismo órgano impulsor —el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad—, sino que, de forma paralela, rechaza también las directrices de la OMS, vulnerando la Recomendación General N°19 (art.12<sup>264</sup>), la Recomendación General N°24<sup>265</sup> de la CEDAW, además del principio de “no discriminación” (Naredo, 2014):

“A todos los pacientes se les debe ofrecer acceso a los siguientes servicios, incluyendo la revisión médica a las dos semanas, a los tres meses y a los seis meses después de la agresión sexual, derivando para intervención psicológica y otros servicios de apoyo...”.

“Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence”. 6.  
*Treatment and follow-up care* (pp.63-74). OMS. 2003

---

<sup>263</sup> Son numerosos los protocolos sanitarios que desarrollan detalladamente las consecuencias que la violencia sexual supone para la salud de las mujeres. El Protocolo Común del año 2013, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señala, entre ellas, los traumatismos físicos (heridas, infecciones de transmisión sexuales...) y los traumatismos psicológicos (ansiedad, culpa, humillación, estrés post traumático...).

<sup>264</sup> “19. En el artículo 12 se requiere que los Estados Partes adopten medidas que garanticen el acceso igual a los servicios de salud. La violencia contra la mujer pone en peligro su salud y su vida”.

<sup>265</sup> “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”. Artículo 12.

“Es importante la derivación y coordinación con atención primaria y trabajo social, asegurando la atención psicológica, social y jurídica de la mujer [...]. Es importante derivar con carácter preferente a la mujer a una consulta de psiquiatría o psicología o a Equipos de Atención psicológica a víctimas de agresiones sexuales.”

Protocolo Común de Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género. *Actuación ante agresiones sexuales. Atención y Seguimiento*. 2012. (pg.69).

Paradójicamente, el Estado se presenta como impulsor de medidas dirigidas a proteger el derecho humano a la salud de todas las mujeres que hayan sufrido violencia sexual, pero, al mismo tiempo, desautoriza sus propios planes de acción, como los protocolos comunes de actuación en violencia de género.

En la práctica,—la reforma sanitaria que cumple en 2017 cinco años desde su aprobación— ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas (REDER<sup>266</sup>: 2017), la mayoría inmigrantes en situación administrativa irregular. Desconocemos cuántas de estas personas son mujeres agredidas sexualmente —no existe ninguna estadística sobre ello—, aunque las palabras de la Ministra de Sanidad traslucen la discriminación y violencia estructural que una norma de estas características implica para un número determinado de seres humanos: “Los inmigrantes ilegales no tienen derecho, pero se les atiende” (Dolores Monserrat, 20 de diciembre de 2016. Comisión del Congreso). Lo que las organizaciones no gubernamentales sí han documentado son los 146 casos de embarazos a las que se les denegó la asistencia sanitaria pública —todas ellas mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual—, y a las que se cobró por dar a luz tras una agresión machista (REDER: 2017).

En el año 2015, con la aprobación del “Estatuto de la víctima” —*Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima de Delito*— se abrían esperanzas a la posibilidad de adaptar el escenario —no sólo jurídico, también social— a todas las víctimas de violencia sexual. Y aunque, como establece el CGPJ, “la respuesta que ofrece el estatuto, no sólo será reparadora del daño en el marco del proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición pueda generar, con independencia de su situación procesal” (2016: 50), la realidad, dos años después, expone un panorama muy lejano al catálogo de derechos que detalla el Estatuto.

---

<sup>266</sup> REDER. Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012. REDER es una red de organizaciones integradas por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Médicos del Mundo, ARI-Perú, Sociedad Española para la Salud Pública y Administración Sanitaria, Plataforma per una atención sanitaria universal a Catalunya y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que denuncian las consecuencias del RD 16/2012.

El derecho a la Reparación, contemplado como una de las responsabilidades del Estado en relación a las víctimas, no es una esfera central en el Estatuto. Tampoco queda garantizada la prohibición de la discriminación —otras de las principales causas por las que las mujeres migrantes irregulares no denuncian—<sup>267</sup>, ni se garantiza la asistencia especializada a todas las víctimas<sup>268</sup>. Pero además, tal y como denunciaba Amnistía Internacional, las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual tampoco tienen asegurados algunos de sus derechos fundamentales a través del Estatuto:

“...a pesar de que las víctimas de trata y de violencia sexual son consideradas por la Directiva europea 2012/29 como víctimas con especiales necesidades, el Proyecto de Ley no garantiza suficientemente derechos fundamentales de estos dos grupos de víctimas, como la protección y la especialización de los exámenes forenses”.

Amnistía Internacional. 2015:17

En este sentido, lo que se deriva de las modificaciones legislativas es un marco normativo regresivo que representa una evidente amenaza para un porcentaje de mujeres víctimas invisibles de violencia sexual. La norma convive con otra serie de factores estructurales y culturales que abocan al silencio a las mujeres migrantes —trabajadoras del servicio doméstico, cuidadoras, mujeres en situación de prostitución, mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o mujeres que trabajan en hostelería, entre otras—, consiguiendo así que los agresores se beneficien del patrón de impunidad persistente, para seguir ejerciendo ese “*contium*” (Kelly, 1988) de violencia hacia las mujeres, como un “dispositivo” (Segato: 2013) intrínseco al sistema patriarcal.

En la línea a la que se refiere la jurista María Naredo, en los ámbitos relacionados con la extranjería y el sistema penal, la legislación, la falta de preocupación profesional, los factores estructurales —situación de irregularidad, precariedad económica, normativa española— además de culturales —racismo, xenofobia, estereotipos de género, prejuicios de género, prejuicios racistas...— son un ejemplo paradigmático del vacío al que se enfrentan

---

<sup>267</sup> En la Ley no se garantiza expresamente la prohibición de discriminación, aunque sí que asegura “las disposiciones de esta Ley serán aplicables [...] a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal” (Artículo 1). Para organizaciones como Amnistía Internacional, “dicha garantía podría carecer de efectividad si no se modifican normas vigentes que constituyen discriminación en el acceso a la denuncia y a la asistencia sanitaria para las persona inmigrantes en situación administrativa irregular” (2015. b: 12).

<sup>268</sup> A pesar de que el Estatuto de la Víctima deriva de la aprobación de la Directiva 2012/29/UE, que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas de delito, refiriendo específicamente “el apoyo específico e integrado a las víctimas con necesidades especiales, incluidos el apoyo para la superación del trauma y el asesoramiento”, como refiere Amnistía Internacional “la ley realiza únicamente una previsión genérica del sistema de asistencia y apoyo especializado a las víctimas” (2015.c: 14).



muchas mujeres, en donde coexisten, simbólicamente, dobles invisibilidades, y se da “la situación de un colectivo socialmente oculto, frente a un tipo de violencia generalmente invisible” (2014: 21).

Se puede concluir, por tanto, que la falta de adopción de leyes específicas —en el sentido al que se refiere la norma de la debida diligencia— sigue sin proporcionar la garantía y cumplimiento de los derechos humanos de forma generalizada en todas las mujeres y ciudadanas españolas, europeas o extranjeras y, de manera específica, en los perfiles de población de mujeres más vulnerables, como son las mujeres migrantes en situación de irregularidad. El Estado español vulnera así, en materia de violencia sexual, el artículo 3<sup>269</sup>, el artículo 6<sup>270</sup> y el artículo 12<sup>271</sup> —Informe Sombra. Plataforma CEDAW Sombra España: 2014— de la ratificada “Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”. Al mismo tiempo, la falta de especialización de la norma implica la ausencia de las medidas integrales que, como sucede con la Ley Orgánica 1/2004, emanan de la propia ley, lo que supone que incumpla diversos artículos del nuevo Convenio de Estambul (2014)<sup>272</sup>. Ambos instrumentos, referentes a la garantía y protección de los derechos humanos de todas las mujeres.

El Estado español, tal y como sucedió con la Ley Orgánica 1/2004, tiene que desarrollar una normativa específica en violencia sexual<sup>273</sup> que vaya más allá del ámbito penal, y en la que se incorpore el enfoque feminista y de derechos humanos. Una normativa integral en la que el Estado asuma las responsabilidades que le corresponden para la erradicación de la violencia sexual y, paralelamente, desarrolle políticas públicas concretas e integrales, en las cuales se reconozca la violencia sexual como una forma de discriminación estructural y sistémica hacia las mujeres.

---

<sup>269</sup> Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

<sup>270</sup> Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

<sup>271</sup> Artículo 12. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

<sup>272</sup> Artículo 4 (Derechos fundamentales, igualdad y no discriminación), artículo 5 (Obligaciones del Estado y diligencia debida), artículo 12 (Obligaciones generales), artículo 16. 3) (Programas preventivos de intervención y tratamiento), artículo 18 (Obligaciones Generales) del Capítulo IV (Protección y Apoyo), artículo 20 (Servicios de Apoyo Generales) dos instrumentos referentes en la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres, artículo 22 (servicios de apoyo especializado), artículo 23 (refugios), artículo 25 (apoyo a las víctimas de violencia sexual), artículo 27 (denuncia), artículo 30 (Indemnización), artículo 44 (Competencia), artículo 49 (obligaciones generales) del Capítulo VI (investigación, procedimientos, derecho procesal y medidas de protección), artículo 53 (mandamientos y órdenes de protección), artículo 55 (procedimientos *ex parte* y *ex officio*), artículo 59 (estatuto de residente) del Capítulo VII (migración y asilo), artículo 61 (no devolución).

<sup>273</sup> El debate, en términos jurídicos en el contexto del “Pacto de Estado”, se contempla en estos momentos, (primavera 2017) entre ampliar la LO 1/2004, o desarrollar una nueva ley de violencia sexual.



#### 4.2.1.2 El mutismo de los Planes Nacionales de Acción

Los Estados tienen el deber de “formular y aplicar, a todos los niveles apropiados, planes de acción para erradicar la violencia contra la mujer” (Plataforma de Acción de Beijing. Objetivo estratégico D.1. 124.j). Tal y como establecen, entre muchos otros instrumentos, la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer (2006), el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la Mujer del Secretariado General de las Naciones Unidas (2006), la Plataforma de Acción de Beijing (1995), la CEDAW y su Comité, o la Convención de Estambul (2011).

Las políticas públicas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres son medidas de obligado cumplimiento que, de forma especial en violencia sexual, se convierten en cruciales para la prevención de la violencia y asistencia integral a sus víctimas, teniendo en cuenta que “su perpetración se comete particularmente como un acto de discriminación en contra de la mujer, por la existencia de patrones socioculturales que subvaloran, cosifican e instrumentalizan a las mujeres y a sus cuerpos” (Sigma Mujer, 2013: 61).

El plan de acción o la política ejecutiva que se desarrolle debe “estar fundamentado en una sólida base documental y voluntad política de ponerlo en práctica, que quede demostrada por la asignación de presupuesto, el establecimiento de plazo y la atribución de vías de responsabilidad” (Ertük, 2008: 19<sup>274</sup>). Además, deberá monitorearse y evaluarse de forma periódica (Informe del Secretariado General, 2006).

La concreción de la obligación del Estado, en cuanto a la adopción de políticas públicas globales y coordinadas, queda claramente establecida en el Convenio de Estambul (2011) en los siguientes términos:

1 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para adoptar y poner en práctica políticas nacionales efectivas, globales y coordinadas, incluyendo todas las medidas pertinentes para prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia contra las mujeres.

2 Las Partes velarán por que las políticas mencionadas en el apartado 1 pongan los derechos de la víctima en el centro de todas las medidas y se apliquen por medio de una cooperación efectiva entre todas las agencias, instituciones y organizaciones pertinentes.

---

<sup>274</sup> Párr. 71.

3 Las medidas tomadas conforme al presente artículo deberán implicar, en su caso, a todos los actores pertinentes como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, regionales y locales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.

#### Artículo 7. Políticas globales y coordinadas

En los términos en los que establece la debida diligencia y los distintos organismos de derechos humanos, el caso español ofrece una fotografía desoladora de los últimos 40 años, en el ámbito específico del desarrollo y ejecución de las políticas públicas, o planes de acción dirigidos a erradicar la violencia sexual. Se puede decir, sin lugar a dudas, que en todo este tiempo no se han desarrollado políticas públicas especiales encaminadas a combatir la violencia sexual, cuya especificidad, como manifestación de violencia, ha sido devorada por otras políticas públicas, orientadas a combatir la violencia de género en el entorno íntimo.

Los grandes avances que se han producido desde hace treinta años en este país en materia de políticas de igualdad, dirigidos a eliminar la desigualdad de género, desafortunadamente no han alcanzado la violencia sexual. Si se realiza un breve recorrido por la historia de los diversos instrumentos incluidos en las políticas de igualdad de este país —planes, leyes, unidades de género, institutos especializados, protocolos...—, desde los años 80 hasta hoy el escenario ofrece una implacable evolución —frenada en los últimos años de gobierno del PP, y desde el inicio de la crisis económica y financiera—, indiscutiblemente crucial para la igualdad de género que, incluso, a pesar de las reticencias del patriarcado, ha conseguido calar en el discurso político y en la sociedad española (Bustelo, 2014). Desgraciadamente, el avance no ha alcanzado la lucha contra la violencia sexual.

Siguiendo el esquema que aplica Encarna Bodelón (2012) en relación al desarrollo de las Políticas Públicas españolas en materia de “violencia patriarcal” (2012: 43), se pueden distinguir cuatro momentos claves en el caso español:

**Los años 70:** en un contexto de dictadura y transición democrática, las políticas públicas aún son “muy débiles” (Bodelón, 2012), pero la impronta del movimiento y discurso político feminista comienza a sentirse en las calles, trascendiendo años más tarde a las instituciones públicas.

**Los años 80:** origen de las primeras políticas públicas contra la violencia de género, “centradas en la violencia contra las mujeres en la relación de pareja” (Bodelón, 2012: 43),

que no verán su consolidación hasta los años 90. Sin embargo, considero que aún en estos años la violencia de género sigue siendo residual a los planes de actuación. Tal y como apunta Astelarra (2005), las políticas públicas durante esta década se encaminan más a alcanzar la igualdad en ámbitos fundamentales: la remuneración entre hombres y mujeres, la igualdad de trato en el acceso al empleo, la formación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo, la seguridad social, el ejercicio de una actividad profesional independiente, los permisos por razones de maternidad o paternidad, o la obligación de la inversión de la carga de la prueba.

Es en esta etapa cuando se crea el Instituto de la Mujer (1983), y se aprueba el “Primer Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1988-1990” (I PIOM). El Plan, que “suponía una estrategia política para mejorar la situación social de las mujeres a través de las 120 medidas agrupadas en seis áreas” (web Instituto de la Mujer) —aprobado en Consejo de Ministros en septiembre de 1987<sup>275</sup>—, señala la tendencia a la que se refiere Astelarra (2005).

A pesar de que el I PIOM “proponía como objeto general definir, planificar y coordinar la política de igualdad del Gobierno durante el periodo de 1988-1990” (Astelarra, 2005: 179) —estableciendo como prioritaria la transformación legislativa—, no aborda la violencia de género en ninguna de las seis áreas: Igualdad en el Ordenamiento jurídico, Familia y Protección social, Educación y Cultura, Empleo y Relaciones laborales, Salud, Cooperación Internacional y Asociacionismo.

En el terreno jurídico, las modificaciones del Código Penal, la legislación procesal y otras normas —como la **Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio de actualización del Código Penal**— introducen el delito de violencia habitual en el artículo 425. Mientras, en materia de violencia sexual, se producen dos avances fundamentales en el terreno legislativo —aún en ese momento, con un desarrollo muy restrictivo, pero singulares para la protección de los derechos de algunas víctimas de violencia sexual—. Se aprueba la *Ley Orgánica 9/1985 del 5 de julio de 1985, de interrupción voluntaria del embarazo*, posibilitando la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, amenaza para la vida o salud de la mujer, o malformación fetal. Y en 1989 —como ya se abordó en el capítulo inicial de esta investigación—, por primera vez en la Historia de este país, la violencia sexual deja de ser signficada en el ordenamiento jurídico como un “crimen contra la honestidad”, para referirse a un “crimen contra la libertad sexual” (*Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal*).

---

<sup>275</sup> Recuperado el 21 de abril de 2017, desde: <http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/historia/home.htm>

**Los años 90 y 2000:** es el periodo caracterizado por Bodelón (2012) como una etapa de “juridificación”, significada por las primeras legislaciones específicas contra la violencia de género, centradas en el entorno íntimo. En esta etapa se aprueba el “Segundo Plan para la Igualdad de Oportunidades de la Mujeres 1993-1995” (II PIOM), el “Tercer Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1997-2000” (III PIOM), y el “Primer Plan de acción contra la violencia doméstica” (1998-2000).

El II PIOM (1993-1995) tuvo como prioridad “la adopción de medidas para avanzar desde la igualdad formal, hacia la igualdad real”, a través del desarrollo de acciones positivas en los ámbitos de la educación y el empleo (web Instituto de la Mujer).

De las 172 actuaciones específicas, llama la atención —de forma positiva— cómo el Objetivo 8.7 del Plan recoge “desarrollar programas dirigidos a mujeres maltratadas y agredidas sexualmente”. Tres de las actuaciones —actuación 8.7.3; actuación 8.7.4 y actuación 8.7.6— encaran medias de sensibilización para equipos profesionales que trabajan “con mujeres que sufren violencia” y población en general y, una de ellas —actuación 8.7.1— refiere la necesidad específica de elaborar protocolos de actuación para “malos tratos y agresiones sexuales”.

El III PIOM (1997-2000) se centró en la “introducción del principio de igualdad en todas las políticas del Gobierno y la promoción de la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social” (web Insituto de la Mujer). El Plan asumía los compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing (1995), incorporando un área específica de violencia —la número 7—, definida en los términos que establecía Beijing, al concretar la eliminación de toda forma de violencia. A pesar de este avance, la medida sólo específica en su aclaración “los malos tratos físicos, o psíquicos en todas las sociedades, sin distinción de clase social, ingresos o cultura, lo que contribuye a mantenerla en un papel subordinado” (medida N°7. III PIOM).

En relación a la actuaciones específicas del III PIOM, tras el detallado análisis de las medidas del “Área de Violencia”, sí que se observa cómo se indica la violencia sexual como otra forma de violencia hacia las mujeres, llegando a describir específicamente sus distintas formas: “violaciones, abusos, acoso e intimidación sexual, tráfico de mujeres y prostitución forzada”. Además, señala el aumento del número de denuncias por violaciones , incluso, muestra el número de hombres en prisión —1.905, en julio de 1996— por cometer delitos contra la libertad sexual de las mujeres. El marco teórico que introduce las acciones, en donde la impronta de Beijing queda patente, acompaña, de forma novedosa y positiva, algunas medidas que, con el paso de los años, dejarán de significarse como tales en los Planes y Estrategias contra la Violencia de Género.

De las once acciones del Objetivo 7.1 del Área de Violencia que promueven medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, hasta cinco de ellas —actuación 7.1.4; actuación 7.1.5; actuación 7.1.6; actuación 7.1.7 y actuación 7.1.8<sup>276</sup>— se centran únicamente en medidas dirigidas a luchar contra la violencia sexual. Se decide, además, un objetivo completo para “Erradicar el acoso sexual en los centros de trabajo” (objetivo 7.2), y otro enfocado a “Promover medidas tendentes a eliminar el tráfico de mujeres y niñas y la explotación de la Prostitución” (objetivo 7.3).

El “Primer Plan de acción contra la violencia doméstica” (1998-2000), prioriza, entre sus medidas, la sensibilización y los servicios de atención a las víctimas (Astelarra, 2005: 206), proponiendo en paralelo, medidas legislativas (apartado 6). La violencia, sin embargo, queda conceptualizada de forma global. A diferencia del III PIOM, se focaliza, principalmente, a lo que por entonces se nominaba como “violencia doméstica”. En ningún caso, la violencia sexual queda específicamente reflejada ni abordada.

El IV PIOM (2003-2006) “basado en las directrices marcadas por la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujer (2001-2005), buscaba potenciar la transversalidad de género[...], promoviendo políticas específicas de igualdad de oportunidades ...” (web Instituto de la Mujer). De las ocho áreas que contempla el Plan<sup>277</sup>, únicamente la 2 y la 5 incluyen actuaciones dentro del marco de algunas violencias sexuales.

El Área 2 (“Área de igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica”) incluye once actuaciones en su Objetivo 2.3, de las cuales cinco de ellas —actuación 2.3.3; actuación 2.3.6; actuación 2.3.7; actuación 2.3.8 y actuación 2.3.9— se dirigen a prevenir y combatir el acoso sexual laboral. Se propone, incluso, la realización de una encuesta sobre el alcance del acoso sexual. Sin embargo, el único estudio que se ha conseguido encontrar sobre el acoso sexual —enfocado al ámbito universitario— es el dirigido por la profesora Esperanza Bosch

---

<sup>276</sup> Actuación 7.1.4.- Impulsar que en las Comisarías y Servicios de la Guardia Civil existan unidades específicas de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales o malos tratos integrados principalmente por mujeres; Actuación 7.1.5.- Facilitar a las mujeres víctimas de abusos y agresiones sexuales una guía de recursos disponibles en la Administración para estas mujeres; Actuación 7.1.6.- Impulsar el desarrollo de programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para mujeres, niñas y adolescentes que hayan sido objeto de abusos y agresión sexual; Actuación 7.1.7.- Impulsar la modificación de la legislación penal, con el fin de garantizar, que en los procesos de abusos y agresiones sexuales cometidos contra menores, no sea válido el consentimiento prestado por estos, así como que sean penalizados con prisión los abusos sexuales y Actuación 7.1.8.- Estudiar la aplicación de la legislación sobre agresiones sexuales y malos tratos con el fin de impulsar las modificaciones normativas que procedan (III PIOM,1997-2000).

<sup>277</sup> 1. Área de Introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas; 2. Área de igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica; 3. Área de participación en la toma de decisiones; 4. Área de promoción de la calidad de vida de las mujeres; 5. Área de fomento de la igualdad en la vida civil; 6. Área de transmisión de valores y actitudes igualitarias; 7. Área de conciliación de la vida familiar y laboral; 8. Área de cooperación. (IV PIOM, 2003-2006).

(2009) (“El acoso sexual en el ámbito universitario: elementos para la implementación de medidas de prevención, detección e intervención”), financiado por el Instituto de la Mujer.

En el Área 5 (“Área de fomento de la igualdad en la vida civil”), de las veintiséis actuaciones, siete de ellas se concretan en medidas en el ámbito de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ninguna dirigida a otras víctimas de violencia sexual.

A lo largo de estos años —como se ha indicado— se producen dos de los hitos históricos más importantes en el marco de la lucha contra la violencia de género, en los términos en los que ya se ha señalado en esta investigación: la aprobación de la *Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, y la *Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres*. Ambas normas guiarán los planes y estrategias públicas que en materia de violencia de género se van a desarrollar hasta el presente.

La Ley 1/2004 supuso también el desarrollo de legislaciones autonómicas en el marco de la violencia de género, así como de planes o protocolos de atención a las víctimas. Como apunta Bodelón, “la ley acompaña toda una estructura de políticas públicas” (2012:49) específicas en este ámbito. Sin embargo —como se ha referido ya en el capítulo 2 de esta misma investigación—, la Ley 1/2004 fragua un relato político en torno a un único sujeto normativo de las políticas públicas en violencia hacia las mujeres, “el que recibe atención, visibilidad y recursos públicos” (López, 2015: 166): las mujeres víctimas de violencia de género —tanto física como psicológica—, pero únicamente en el entorno íntimo.

Gracias al estudio del relato político, de 2004 hasta la actualidad se puede trazar la línea de “la normatividad que lo sostiene” (López, 2015:166), percibiendo, hasta hoy, un modelo diferente de implementación entre los primeros años del desarrollo normativo de la Ley —durante el Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero (2004-2011)— y las legislaturas del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy (2011-actualmente). A pesar de ello, en ambas legislaturas, el sujeto normativo en violencia hacia las mujeres serán las víctimas de violencia de género en el entorno íntimo.

Siguiendo los tres modelos descritos por Bodelón (2012)<sup>278</sup>, las acciones políticas y las reformas legislativas que se desarrollan en la legislatura socialista serán a partir del “modelo feminista”; mientras en la legislatura del Partido Popular, el modelo que se aplica

---

<sup>278</sup> El “modelo feminista”, el “modelo de seguridad” y el “modelo de la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos” (Bodelón, 2012).

será el “modelo de seguridad” que, a día de hoy, “sigue oscureciendo algunas de las políticas públicas e iniciativas del marco explicativo feminista “(Bodelón, 2012: 46). En ambos casos, las mujeres víctimas de violencia sexual desaparecen del relato político.

Sin embargo, la descripción que Bodelón realiza del “modelo feminista” olvida durante todos estos años a las víctimas de violencia sexual, en términos de aplicar la comprensión de la violencia de género como un fenómeno estructural, “atravesado por toda la complejidad de las relaciones de género [...], entender que las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres pueden ser muy diversas [...], que necesitan una atención diferenciada ” (2012:46).

Lo señalan así, desde principios del 2000 hasta comienzos de la crisis económica y financiera, las políticas públicas que se elaboran dirigidas a promover la igualdad de género, y a combatir la violencia contra la mujer:

- II Plan Integral contra la Violencia doméstica 2001-2004.
- Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 2007-2008.

El II Plan Integral contra la Violencia doméstica 2001-2004 se articula en cuatro áreas: medidas preventivas y de sensibilización, medidas asistenciales, y medidas de intervención social e investigación. En el total de las 58 acciones incorporadas en cada área, en ninguna de ellas se especifican medidas en materia de violencia sexual. La violencia se entiende, y significa, en términos generales.

El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 2007-2008 —derivado del mandato de la propia Ley 1/2004— establece tres niveles de prevención —terciaria, secundaria y primaria—, así como once ejes de intervención<sup>279</sup>. Todo el Plan se dirige a combatir la violencia de género en los términos que establece la Ley 1/2004.

**2008-actualmente:** la última etapa —incluida por Bodelón (2012) entre los 90 hasta 2012<sup>280</sup>— se corresponde en esta investigación desde, aproximadamente, el 2008 hasta hoy en día (2017). En ella se han desarrollado los siguientes Planes:

- Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008-2011.

---

<sup>279</sup> a. Justicia, b. Seguridad, c. Salud, d. Servicios Sociales, e. Información, f. Educación, g. Comunicación, h. Investigación y estudio, i. Formación de profesionales, j. Movilización de actores, k. Coordinación de actores y l. Seguimiento y Evaluación.

<sup>280</sup> Bodelón se refiere al cuarto periodo como el “momento actual”, refiriéndose al año 2012, en el momento en que se realiza su publicación. Según refiere ella, “estamos en un cuarto momento, en el que en el contexto de crisis económica, en Europa y otro países, está sirviendo para relegar los derechos de las mujeres y disminuir la atención y recursos hacia este problema social” (2012: 44).



- Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2014-2016.
- Plan de atención y prevención de la violencia de género en la población extranjera inmigrante 2009-2012.
- Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016.

Se puede confirmar que las únicas políticas públicas que abordan residualmente la violencia sexual serán los Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades. El Plan de 2008-2011 señala escasas acciones dirigidas a prevenir el acoso sexual, y a fomentar la educación sexual en materia de derechos sexuales y reproductivos. Mientras, el último Plan (2014-2016) contiene siete ejes de trabajo<sup>281</sup> y, entre ellos, el Eje 3 —específico sobre violencia contra la mujer— es el que modestamente visibiliza la violencia sexual a través de alguna mención específica. Por su parte, el Eje 1 —referido al ámbito laboral— realiza una única mención al acoso sexual.

Aun así, las medidas del Eje 3 se entienden también, únicamente —según quedó establecido por la LO 1/2004—, dirigidas a “promover acciones de prevención frente a la violencia de género”, “mejorar la respuesta institucional dada por los poderes públicos, proporcionando planes personalizados y avanzando hacia la ventanilla única” o “proporcionar una respuesta específica en los grupos especialmente vulnerables; menores, mujeres con discapacidad, mayores, del medio rural e inmigrantes”.

De forma significativa, el Punto 3.4 de este mismo Eje 3 establece “visibilizar otras formas de violencia contra las mujeres: matrimonios forzados, trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina y agresiones sexuales”. En la práctica, las únicas medidas que se han tomado, en cuanto a las otras formas de violencia contra las mujeres, han incluido tan solo la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y la mutilación genital femenina. Cuando se accede a la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el área de “Violencia de Género y Trata”<sup>282</sup> no existe, en los términos que indica el punto 3.4, ninguna medida en materia de “agresiones sexuales. La única que podría considerarse como tal sería la inclusión de algunas manifestaciones de violencia sexual en la Macroencuesta de Violencia de Género del año 2015, abordada en el tercer capítulo de esta investigación.

---

<sup>281</sup> Eje 1. Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la lucha contra la discriminación salarial; Eje 2. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares; Eje 3. Erradicación de la violencia contra la mujer; Eje 4. Participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social; Eje 5. Educación; Eje 6. Desarrollo de acciones en el marco de otras políticas sectoriales y Eje 7. Instrumentos para integrar el principio de igualdad en las distintas políticas y acciones del Gobierno.

<sup>282</sup> Página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: <http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/>



En cuanto al Eje 1 del Plan (2014-2016), dirigido a la “Igualdad entre Mujer y Hombres en el Ámbito Laboral y la Lucha contra la Discriminación Salarial”, de las 34 medidas se incorpora solo una en el sector público —la número 27—, dirigida al “desarrollo y aplicación de implantación de medidas preventivas de acoso sexual y del acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado”.

En relación a la “Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016”, la tendencia de invisibilización de la violencia sexual sigue presente, teniendo en cuenta que en la fecha de su aprobación el Estado español ya había firmado el Convenio de Estambul (2011).

En líneas generales, la “Estrategia” se enfoca a combatir la violencia contra la mujer en el entorno íntimo —tal y como se refleja en la justificación—, en las medidas, acciones, objetivos, o en la propia respuesta institucional. Escasamente se significa la violencia sexual y, cuando se hace, la atención se centra en la trata con fines de explotación sexual, la MGF, así como el acoso sexual:

“...A lo largo de la presente Estrategia se empleará como concepto genérico el de ‘violencia contra/sobre la mujer’ y, como manifestación concreta de la misma, de acuerdo con el art.1 de la LO 1/2004, el de violencia de género, maltrato o malos tratos [...]. Hay que recordar que las actuaciones para hacer frente a otras modalidades de violencia contra la mujer, pueden ser objeto de planes y actuaciones específicas, como es el caso de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ...”.

Fundamento de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la violencia contra la mujer: valores y principios. (2013-2016: 14).

Se podría prever, a través del texto, un intento de acercamiento en el abordaje práctico de otras manifestaciones de violencia sexual —como el acoso sexual o las agresiones sexuales—, aunque finalmente quedan como simples relatos, incongruentes con las medidas que se desarrollan, sólo enfocadas a la violencia de género en el entorno íntimo. Se nombran, pero no se concretan en ningún apartado de la “Estrategia”:

“...ir avanzando también en el afrontamiento de otras formas de violencia contra la mujer [...]. Los matrimonios forzados, las mutilación genital femenina, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el acoso y las agresiones sexuales, requieren que, progresivamente, se vaya realizando un acercamiento a todas estas formas de violencia y también desde la atención especializada ...”.

Visibilización y atención a otras formas de violencia contra la mujer. Estrategia Nacional para la Erradicación de la violencia contra la mujer. 2013-2016 (2013: 108).

Entre los planes citados en esta última etapa, queda por realizar un breve recorrido en relación a la respuesta frente a la violencia sexual que efectuó el “Plan de atención y prevención de la violencia de género en la población extranjera inmigrante 2009-2012”, determinante en el repunte de feminicidios machistas de mujeres migrantes. Ante esta terrible situación, se recibió una respuesta contundente de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista, alarmadas por la falta de protección que las migrantes recibían a pesar de —como ya se ha expuesto— representar un grupo de mujeres especialmente vulnerables frente a todas las formas de violencia de género, tal y como indicaba la LO 1/2004.

El Plan, elaborado por el Gobierno para combatir la violencia de género en población inmigrante —en línea con los Planes estratégicos de Ciudadanía e Integración (2007-2010 y 2011-2014)—, aborda la violencia hacia las mujeres, únicamente, en relación a la violencia en la pareja o expareja, o la trata de personas. Como reconoce la jurista María Naredo (2014), “el importante reconocimiento sobre la “vulnerabilidad” de las mujeres migrantes respecto a estas manifestaciones de la violencia machista no ha alcanzado a la violencia sexual, incluido el acoso sexual en el trabajo”. Paradójicamente, la propia Estrategia Nacional (2013-2016) reconocía que el Plan de Atención para mujeres inmigrantes no había implementado las acciones que en 2009 se exponían:

“...En la presente estrategia se incorporan, junto a otras nuevas, las acciones no implementadas del Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en Población Extranjera Inmigrante 2009-2012”.

Estrategia Nacional para la Erradicación de la violencia contra la mujer.  
2013-2016. (2013:108)

Volviendo al estándar de la debida diligencia, para que los Planes sean efectivos deben acompañar otra serie de medidas dirigidas a cumplir con su finalidad. Entre ellas destacan la creación y funcionamiento de organismos de coordinación públicos estatales que apliquen un enfoque multisectorial, o la asignación de “recursos presupuestarios suficientes para hacer frente a la violencia contra la mujer” (Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer del Secretariado General de Naciones Unidas” 2006: 87<sup>283</sup>).

En este sentido, desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, el Estado español ha ido cumpliendo algunos de estos supuestos, enfocados, de manera general, al marco que establece la norma. Aunque también existen excepciones autonómicas que han permitido desarrollar medidas asistenciales y de prevención en víctimas de violencia sexual. La misma ley establece, en su Artículo 32, la obligación de que los poderes públicos elaboren planes de colaboración que garanticen:

---

<sup>283</sup> Párr. 262.

“...1. [...] la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán aplicar a las Administraciones Sanitarias, la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad.

2. En desarrollo de dichos planes, se articularán protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados, y que garanticen la actividad probatoria en los procesos que se sigan ...”.

Artículo 32. Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integrales  
contra la Violencia de Género

Siguiendo este mandato y las indicaciones de Naciones Unidas, se comprueba que los únicos protocolos estatales que abordan la violencia sexual más allá del entorno íntimo son:

- Los “Protocolos comunes para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género”, de los años 2006 y 2012, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- El “Protocolo de Actuación Frente al Acoso Sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas”(2015), elaborado por el Ministerio de Defensa.
- El “Protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en la administración general del Estado”, elaborado en 2011 por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

No se constatan protocolos estatales elaborados por el Gobierno en el marco de la actuación y/o prevención en materia de violencia sexual, ni en las áreas de educación en el ámbito laboral, jurídico, policial o de intervención especializada<sup>284</sup> (Servicios Sociales y Centros de Atención a las Mujeres).

Los Protocolos Estatales de actuación y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como los específicos del área judicial o interinstitucionales, sólo son hábiles para los casos de violencia de género en el entorno de la pareja o expareja<sup>285</sup>. De esta forma, como se comprueba, el desarrollo de Protocolos especializados, así como

---

<sup>284</sup> Para más información sobre los protocolos en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo en las administraciones públicas y en las empresas, véase Barrère, M.; Bodelón, E.; Gala, C.; Gil, J.M.; Morondo, D. y Rubio, A.; *Acoso sexual y por razón de sexo: actuación de las administraciones públicas y de las empresas*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

<sup>285</sup> Véase “Protocolo de Actuación y Coordinación de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado y Abogados y Abogadas ante la Violencia de Género Regulada en la L.O. 1/2004, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género” (2007); “Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género” (2005); “Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género” (2011).

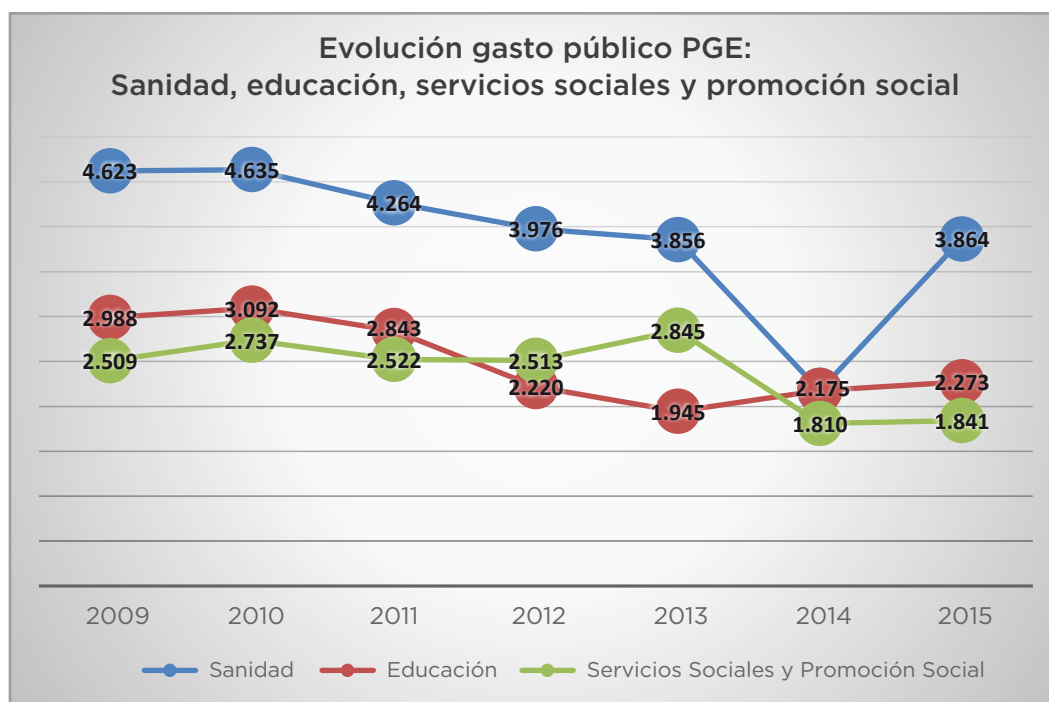
de coordinación interinstitucional, depende de las medidas que tomen a este respecto las diferentes Comunidades Autónomas, frente a la responsabilidad que debe asumir el Estado en este tema.

En el plano de la asignación presupuestaria, especialmente en esta última etapa, se ha experimentado un frenazo considerable en la inversión para la lucha contra la violencia de género, amparado por el proyecto neoliberal y la justificación de la crisis económica: “las estrategias de control del déficit público adoptadas en Europa y España a partir del año 2008 como respuesta a la crisis económica y en el marco del proyecto neoliberal han puesto a lo que hasta ahora era una trayectoria ascendente” (Lombardo y León, 2014: 14).

En este sentido, las organizaciones de mujeres y feministas han denunciado ante el Comité CEDAW el desmantelamiento generalizado de las políticas de igualdad de género a través del escandaloso recorte presupuestario de los últimos nueve años. Lo que en la práctica se ha traducido —como ya se ha analizado— en un claro retroceso de los derechos humanos de las mujeres. El Informe Sombra de la Plataforma CEDAW España (2014) advertía sobre ello para el periodo comprendido entre 2008 y 2014, indicando un recorte del 50% en políticas públicas y organismos de igualdad de la Administración General del Estado, así como de las CCAA.

En materia de violencia de género, la evolución del gasto público y los fuertes recortes entre 2009 y 2016 coincidieron con una serie de acontecimientos políticos —aprobación del Decreto Ley 3/2012 de reforma del mercado laboral, el Real Decreto ley 16/2012 de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud— que impactarán, de manera especial, en las mujeres víctimas de todas las formas de violencia machista. Las políticas de austeridad, reconocidas por el Gobierno de España como “presupuestos austeros”, mantendrán una línea de recortes imparable en áreas fundamentales para la prevención y asistencia a las víctimas y/o supervivientes, como Sanidad, Servicios Sociales y Promoción Social.

La siguiente tabla evidencia la “caída histórica” de las partidas presupuestarias de sectores imprescindibles para la protección y garantía de los derechos humanos de los grupos de población más vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres migrantes y las víctimas/supervivientes de violencia de género. Poniendo por tanto, en riesgo la garantía de los mismos (Oxfam Intermon, 2014).



**Gráfica 1:** elaboración propia a partir del análisis de los PGE entre 2009-2015.

**Fuente:** Presupuestos Generales del Estado<sup>286</sup>. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En el marco de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los recortes evidencian un escenario desolador que simboliza la falta de prioridad que la lucha contra la desigualdad de género supone para el Estado español en estos años. Los recortes presupuestarios en políticas de igualdad, lejos de ser considerados instrumentos esenciales en la inversión social, el desarrollo del Estado de Bienestar o la cohesión social, han ido experimentando un descenso generalizado hasta cotas mínimas —recorte del 47,63% desde 2009 hasta 2016—, representando la falta de prioridad que la igualdad de género supone para el Estado español.

El relato presupuestario en materia de actuaciones para la prevención de la violencia de género traslada el mismo mensaje: recorte del 17% desde 2009 hasta 2016.

#### ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

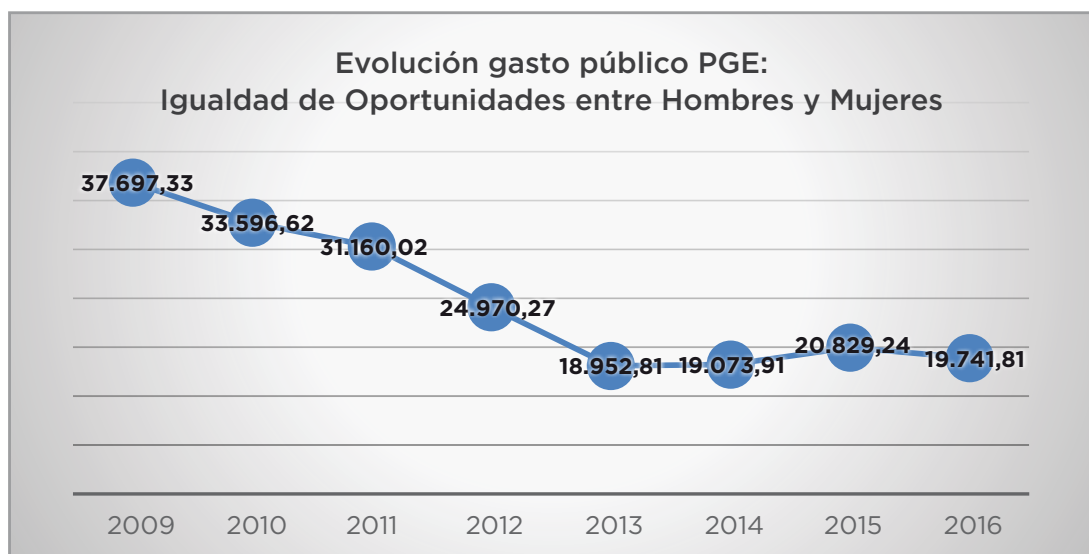
AÑO	ORGANISMO PÚBLICO	PRESUPUESTO
2009	Ministerio de Igualdad	37.697,33€
2010	Ministerio de Igualdad	33.596,62 €
2011	Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad	31.160,02€
2012	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	24.970,27€

<sup>286</sup> Para un análisis detallado de la evolución de los PGE en los últimos años véase la siguiente página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública: <http://www.sepg.pap.minhfp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Paginas/ProyectoPGE2017.aspx>

2013	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	18,952,81€
2014	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	19,073,91 €
2015	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	20.829,24€
2016	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	19.741,81 €

**Tabla 15:** elaboración propia a partir del análisis de los PGE entre 2009-2016.

**Fuente:** Presupuestos Generales del Estado. Ministerio de Hacienda y Función Pública.



**Gráfica 2:** elaboración propia a partir del análisis de los PGE entre 2009-2016.

#### ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS: ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

AÑO	ORGANISMO PÚBLICO	PRESUPUESTO
2009	Ministerio de Igualdad	28.321,18€
2010	Ministerio de Igualdad	31.577€
2011	Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad	30.363,12€
2012	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	23.828,94
2013	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	22.197,34
2014	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	21.855,42€
2015	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	28.728,18€
2016	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	26.228,18 €

**Tabla 16:** elaboración propia a partir del análisis de los PGE entre 2009-2016.

**Fuente:** Presupuestos Generales del Estado. Ministerio de Hacienda y Función Pública.



**Gráfica 3:** elaboración propia a partir del análisis de los PGE entre 2009-2016.

A pesar de que los gastos presupuestarios no indican específicamente las partidas destinadas a la violencia sexual, del análisis de las cifras se desprende que las asignaciones presupuestarias destinadas a ejecutar distintas medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres siguen sin ser consideradas una prioridad para el Estado español que, de forma paulatina, ha ido recortando, hasta hoy, no llegando a alcanzar nunca la cantidad presupuestaria previa al inicio de la crisis. Sólo en 2016, el Estado destinó al gasto público en Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 384.906,94 miles de euros (PGE, 2016), un 93% más que lo asignado a la prevención de la violencia de género.

#### 4.2.1.3 Sin estadísticas y sin equipos profesionales sensibilizados

La elaboración estadística y de “indicadores fiables” sobre la violencia sexual (Ertük, 2006:2) es otra de las responsabilidades y obligaciones que los estados deben desarrollar dentro de su propio sistema nacional estadístico. Las cifras acompañan la conceptualización adecuada de la violencia sexual, entrevén la magnitud del problema para su erradicación a través de políticas públicas, y visibilizan el delito o agresión desde una dimensión no neutral al género. Como se pudo advertir en el capítulo 3, las “estadísticas importan” (Walby, 2017:5), y nos dicen claramente que la violencia sexual es un delito de género.

El Estado español confirma, en este sentido, la indiferencia hacia la recopilación de datos y estadísticas en relación a las distintas formas de violencia sexual. Las macroencuestas y datos estadísticos se circunscriben modestamente —tal y como se diseccionó en el capítulo 3— a la última macroencuesta de violencia de género.



Las únicas cifras disponibles son las que aporta el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior —ofrecidas también por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades—, que ofrecen los datos recogidos sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual a través de la serie histórica de 2011 a 2015:

<b>Delito contra la libertad sexual</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Agresión con penetración	1.094	923	911	810	827
Corrupción de menores o incapacitados	202	223	238	291	342
Pornografía de menores	49	47	113	122	94
Otros delitos contra la libertad/indemnidad sexual <sup>287</sup>	6.078	5.594	5.307	5.728	5.560
<b>Totales</b>	<b>7.423</b>	<b>6.787</b>	<b>6.569</b>	<b>6.951</b>	<b>6.823</b>

**Tabla 17:** elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. 2015

A pesar de que las cifras arrojan datos reveladores —sólo en el año 2015, 827 mujeres fueron violadas con penetración—, no dejan de exponer un porcentaje insignificante sobre el total de las violencias sexuales que sufren las mujeres. La recopilación de datos que realiza el Gobierno español hace referencia, únicamente, al número de hechos denunciados. Asimismo, hay que tener en cuenta de forma significativa que, en caso de agresión sexual, sólo se documentan las agresiones sexuales con penetración, sin distinguir otras agresiones sexuales tales como tocamientos, masturbaciones, contactos corporales... Lo cual simboliza solo la punta del iceberg de las distintas formas de violencias sexuales.

Los obstáculos y dificultades estructurales que enfrentan las víctimas, hacen que la mayoría de los casos no sean denunciados en instancias policiales o judiciales. Una conveniente recopilación estadística y de datos sobre la actividad judicial y la forma de terminación del proceso penal sería —como recuerda Amnistía Internacional siguiendo las directrices de la Relatora— “un indicador útil para medir el cumplimiento de la obligación estatal de proveer justicia y reparación a las víctimas” (2009: 15).

<sup>287</sup> Incluye los delitos de agresión sexual, abuso sexual (s/c penetración), acoso sexual, delitos de contacto mediante tecnología con menor de 13 años con fines sexuales, exhibicionismo, provocación sexual, y los relativos a la prostitución.



Es evidente, por consiguiente, que el Estado español incumple su responsabilidad a este respecto, rechaza las observaciones de los organismos internacionales, y vulnera el artículo 11 de la Convención de Estambul (2011)<sup>288</sup>. La propia Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer reconoce que no existe justificación para que los países ricos no tengan un sistema eficaz que desglose los datos según las distintas formas de violencia:

“...los países desarrollados tienen pocas excusas para no disponer de sistemas eficaces de seguimiento de casos o para no poder desglosar los datos del sistema de justicia por sexo y formas de violencia”.

Yakin Ertük. 2008<sup>289</sup>.

Para finalizar este apartado, los dos últimos indicadores —realización de campañas de sensibilización y capacitación de equipos profesionales— estampan un escenario aún más siniestro. En 40 años de democracia, los organismos públicos estatales no han realizado campañas de sensibilización dirigidas a visibilizar, prevenir u ofrecer asistencia especializada a víctimas de violencia sexual. Las campañas solo se han enfocado a sensibilizar a la sociedad y a las mujeres víctimas de violencia machista —psicológica y física— en el entorno íntimo. En este sentido, no se ha encontrado campañas al respecto en ningún formato de comunicación: anuncios de radio o de televisión, *on line*, formato papel, redes sociales...

La capacitación de los equipos profesionales —operadores jurídicos, personal de inmigración, personal sanitario, personal del tercer sector y servicios especializados— sigue obviando la violencia sexual como una forma de violencia machista, a pesar de que los organismos internacionales establecen prioridad en la formación y sensibilización, como medida necesaria para saber actuar profesionalmente a la hora de enfrentar esta forma de violencia (Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer del Secretariado General de Naciones Unidas”, 2006).

“Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención”.

Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de  
la Discriminación contra la Mujer.

---

<sup>288</sup> Artículo 11 – Recogida de datos e investigación

1 A los fines de la aplicación del presente Convenio, las Partes se comprometen a: a recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio; b apoyar la investigación en los ámbitos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, con el fin de estudiar sus causas profundas y sus efectos, su frecuencia y los índices de condena, así como la eficacia de las medidas tomadas para aplicar el presente Convenio.

<sup>289</sup> Párr. 73.

Tal y como demuestran las propias guías de actuación especializadas de los distintos sectores<sup>290</sup>, los congresos especializados de los últimos 10 años, las formaciones ofrecidas, y la información consultada al respecto se ilustra la misma tendencia que en el resto de supuestos. Véanse algunos ejemplos de congresos destacados en los últimos años:

NOMBRE CONGRESO	VIOLENCIA SEXUAL	TEMÁTICA CENTRADA ESPECÍFICAMENTE EN ALGUNA FORMA DE VIOLENCIA SEXUAL	ORGANISMO ORGANIZACIÓN
1er Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres.2010	No		Junta de Andalucía para la Igualdad y Bienestar Social
2º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres.2011	No		Junta de Andalucía para la Igualdad y Bienestar Social
3er Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres.2012	No		Junta de Andalucía Consejería de Justicia e Interior
4º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres.2013	No		Junta de Andalucía Consejería de Justicia e Interior
5º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres.2014	Sí	Foro de trabajo: Trata de personas con fines de explotación sexual	Junta de Andalucía
6º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres.2015	Sí	Sólo una ponencia de 22 programadas: “Claves para la intervención en abusos sexuales y diversidad funcional”	Junta de Andalucía
1Congreso Internacional sobre Violencia de Género. 2007	No	Sólo una ponencia de 11 programadas: “Trafficking of women and girls from Nepal-A modern day Slavery”	Xunta de Galicia

<sup>290</sup> Véanse, algunos ejemplos: “Guía para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género” del Instituto Canario de Igualdad (2007, 2009, 2011); “Guía de intervención integral contra la violencia de género”. Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha (2008); “Guía de buenas prácticas del abogado/a de la mujer víctima de violencia de género”. Abogacía Española-Consejo General (2012); “Guía de práctica clínica. Violencia contra las mujeres en la pareja”. Junta de Castilla y León-Sacyl (2010); “Guía de los Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género”. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2015); “Guía para o voluntariado en violencia de género”. Xunta de Galicia (2013); “Guía divulgativa procesal para mujeres víctimas de violencia de género”. Junta de Andalucía (2013); “Guía para mujeres maltratadas”. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (2002); “Violencia machista en el ámbito de la pareja”. Ajuntament de Barcelona.

Xornadas galegas sobre Violencia de Xénero.2008	No		Xunta de Galicia
Literatura e violencia de Xénero	No		Xunta de Galicia
1er Congreso Internacional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 2013	No		Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer
Jornadas: Análisis del Código Penal desde la Perspectiva de género 1998	Sí	-Las Agresiones sexuales en el nuevo código Penal: imágenes culturales y discurso jurídico Dña. Adela Asua Batarrita -Acoso Sexual Dña Ángeles Rey Avilés -Prostitución de las Mujeres y Control Dña. María Luisa Maqueda Abreu	EMAKUNDE Instituto Vasco de la Mujer
Congreso "Violencia Doméstica".2003	No		Consejo del Poder Judicial
II Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.2006	No		Observatorio contra la violencia doméstica y de género
III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.2009	No		Observatorio contra la violencia doméstica y de género
IV Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.2011	No		Observatorio contra la violencia doméstica y de género
V Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.2014	No		Observatorio contra la violencia doméstica y de género
VI Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.2016	No		Observatorio contra la violencia doméstica y de género
1er Congreso sobre Violencia Doméstica y de Género. Sabadell 2016	No		Abogacía Española Consejo General

**Tabla 18:** elaboración propia a partir de rastreo en internet de los congresos o jornadas más significativos desarrollados entra 1998 y 2016

#### 4.2.2 “El juez me ha vuelto a violar”: impunidad de los agresores y procesos judiciales traumáticos para las víctimas de violencia sexual

Diferentes organismos internacionales de derechos humanos —entre ellos, algunos en los que la perspectiva de género escasea en sus resoluciones, como el TEDH— han establecido, sin reservas, la obligación del Estado de investigar los actos de violencia contra las mujeres y castigar adecuadamente a los culpables. El Convenio de Estambul dedica todo un capítulo al respecto —Capítulo VI-Investigación, procedimientos, derecho procesal y medidas de protección— y, a su vez, las Relatoras de Naciones Unidas o el Comité CEDAW se han pronunciado en la misma dirección a través, entre otros, de la Recomendación General N°19, que insta directamente a los Estados a establecer procedimientos eficaces de denuncia de la violencia contra las mujeres<sup>291</sup>.

En 2003, el TEDH, a través de la sentencia *M.C c. Bulgaria* —párrafo 185<sup>292</sup>— consideró que los estados tenían el deber positivo de asegurar la eficiencia del derecho penal mediante una investigación y enjuiciamiento eficaces. Asimismo, se quiso destacar también, como criterio ineludible, el papel de los equipos profesionales encargados de velar por una adecuada, rápida y competente investigación: policía, operadores jurídicos y personal médico forense.

Tal y como expone la Relatora Yakin Ertük (2006), la obligación de investigar y castigar la violencia sexual ha sido considerada tradicionalmente en relación a la obligación de aprobar o modificar leyes, o a la adopción de mayores capacidades y competencias para la policía, fiscalía, o jueces y juezas. Sin embargo, la investigación debe de contemplar otra serie de variables que aseguren su eficacia de cara al castigo del/de los agresor/es sexual/es, y de la protección y futura reparación integral de las víctimas.

Las organizaciones no gubernamentales de mujeres y feministas recuerdan que los tipos penales han de establecer definiciones claras que faciliten y orienten las investigaciones de todas las formas de violencia sexual (Sisma Mujer, 2013). Especialmente, si se tienen en cuenta las múltiples caras que configuran esta manifestación de violencia —sostenidas por un conjunto inabarcable de mitos que, en cada una de las circunstancias, siempre se duda de que la agresión sexual se haya producido—, la conceptualización de los tipos penales no debe arrojar incertidumbres sobre los elementos que configuran el crimen. Elementos como la descripción

---

<sup>291</sup> Párr. 24.i

<sup>292</sup> Cit. por “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer “del Secretariado General de Naciones Unidas. (2006: 88).

clara sobre los márgenes del consentimiento —que han quedado sobradamente definidos por los organismos internacionales de derechos humanos, como la Corte Penal Internacional— deben estar trazados a través de una línea rigurosa y perfectamente perfilada: “el consentimiento no podrá interferirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual” (Regla N°7. Reglas de Procedimiento y Prueba. Corte Penal Internacional. 2002).

La ausencia de investigaciones adecuadas y de castigos ejemplares —como ha venido sucediendo en la Historia de los distintos crímenes de género— traslada un mensaje de impunidad a la sociedad, a las víctimas y a los agresores, que el patriarcado afianza como un sistema intocable. Así se recuerda en la sentencia de “Campo Algodonero”:

“...La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra las mujeres es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y sensación de seguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”.

Sentencia “Campo Algodonero”. “González y otras vs México”. 2009.  
Párrafo 400.

El bajísimo porcentaje de casos que llegan al sistema judicial es, de forma generalizada, una de las características que acompaña a las agresiones sexuales. Las particularidades especiales de esta forma de violencia, junto con el impacto emocional que genera en las víctimas —sentimiento de vergüenza, miedo a no ser creídas, trastornos disociativos, fallos léxicos...—, y los obstáculos añadidos que ofrecen las instituciones, generan un clima propicio para consolidar la impunidad de los agresores y la desprotección para las mujeres (Sisma Mujer, 2013). Lo que hace aún más necesaria una investigación diligente y efectiva.

En este sentido, la investigación penal que recae sobre un conjunto de funcionarios y funcionarias debe evitar la revictimización a la que se enfrentan las víctimas de violencia sexual —de forma generalizada—, con la finalidad indiscutible de identificar al responsable o responsables de la agresión, en todos los casos. Al mismo tiempo, la investigación penal tiene que realizarse desde un enfoque diferencial que evite la discriminación y los estereotipos de género.

Es precisamente la “complejidad probatoria” (Sisma Mujer, 2013: 125) de este tipo de violencia machista la que justifica la necesidad de una justicia especializada encaminada a garantizar y proteger los derechos humanos de las víctimas. Los Estados tiene que “eliminar todas las barreras que impiden el acceso de las mujeres a la justicia y

velar porque todas tengan acceso a servicios de asistencia letrada” (Resolución 67/144 de las Naciones Unidas, 2013: 9).

En el caso español, la falta de justicia especializada en violencia sexual que incorpore el enfoque diferencial reproduce todas las dificultades sobre las que se hace hincapié en los párrafos anteriores. De forma paralela, las actuaciones de los equipos profesionales siguen si adecuarse a los estándares que establecen los propios organismos internacionales, tal y como denuncian las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos: Amnistía Internacional, 2009; Amnistía Internacional, 2012; Amnistía Internacional, 2016; Fundación para la Convivencia Aspacia, 2014; Mugarik, 2017; Creación Positiva, 2017.

Es significativo, a este respecto, que no haya ni protocolos, ni guías de alcance estatal —similares a los que sí existen en violencia de género dentro del entorno de la pareja o expareja— que garanticen la correcta atención policial a las víctimas de violencia sexual. En la práctica, todo ello se traslada a que el trato que reciben las mujeres cuando acuden a instancias policiales dependerá de la sensibilidad personal que cada agente tenga sobre este tema. Un Estado de derecho no puede ni debe dejar en manos de sensibilidades personales la protección de las víctimas de vulneraciones extremas de derechos humanos, como puede ser un abuso sexual infantil prolongado hasta la adultez, una violación grupal, o cualquier acto de tortura sexual a manos de agentes estatales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad son agentes fundamentales para lograr, además, la efectiva aplicación de los estándares internacionales, y garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Como se apuntaba, las particularidades de la violencia sexual implican que, cuando una víctima da el paso y acude a denunciar, los agentes deban poner en funcionamiento, de forma diligente, todas las herramientas a su alcance, con el fin de garantizar la obtención del mayor número de pruebas que puedan ser utilizadas en las distintas etapas procesales. La asistencia sanitaria inmediata, el examen médico forense o la actuación del Ministerio Fiscal son decisivos, además de ser una obligación que el Estado debe garantizar en esta fase del proceso.

El Estado —como establece la OMS (2003) y el Protocolo Común del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales Igualdad (2012)— ha de garantizar la recopilación de pruebas forenses y la asistencia médica inmediata después de una agresión sexual, siendo una actuación sanitaria específica “por las medidas e implicaciones médico-forenses y legales que conllevan” (2012:17). Las víctimas deben disponer las 24 horas del día (OMS, 2003) de los servicios sanitarios —Hospitales o Centros Médicos—, de forma accesible. Sin embargo, a este respecto, la ausencia de una clara política pública en la actuación de

los servicios sanitarios, policiales o forenses, en el caso español genera una disparidad de criterios en cada comunidad autónoma. Hecho que contradice las propias directrices de la OMS o el Protocolo del Ministerio, dificultando así la investigación, y favoreciendo la victimización secundaria.

Mientras que tanto la OMS como el Protocolo Común estatal del año 2012 señalan que tras una agresión sexual hay que priorizar la atención sanitaria —en el sentido de que si la víctima acude a un dispositivo de Atención Primaria, o a cualquier otro no hospitalario, “se remitirá a la víctima lo más rápidamente posible y en ambulancia al hospital más cercano, sin que medien lavados, ni cambios de ropa” (Protocolo Común, 2012: 65)—, protocolos como el del Municipio de Madrid, por ejemplo, rehúsan estas actuaciones, obstaculizando la atención sanitaria inmediata, fundamental tanto para la salud de la víctima, como también para la obtención de pruebas.

En el Municipio de Madrid, para que el personal médico forense actúe, las víctimas, antes de acudir a un centro sanitario, tienen que poner una denuncia en la policía o en el Juzgado. Además, sólo serán atendidas por personal médico forense en un único centro hospitalario de toda la ciudad: el Hospital Universitario La Paz. Si acuden a cualquier otro centro hospitalario que no sea éste, la asistencia médico forense especializada no se proporcionará. Del mismo modo, medicina forense no acudirá al Hospital de la Paz a menos que se haya interpuesto la denuncia, siempre que no hayan transcurrido más de 72 horas. Tampoco se tomará declaración de la denuncia en dependencias policiales ajenas a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) que, según su Protocolo, se encargará de centralizar las denuncias (Protocolo de actuación coordinada de los organismos competentes en materia de agresiones sexuales del Municipio de Madrid.2007).

En el año 2009, Amnistía Internacional advertía de la importancia de la actuación del Ministerio Fiscal en la persecución de este tipo de delitos, y en la protección de los derechos de las víctimas. Sin embargo, la falta de justicia especializada en violencia sexual implica que, aún en 2017, el Ministerio Fiscal sólo actúe de forma especializada en los casos en los que existe violencia de género en el entorno íntimo. En estos supuestos, tampoco la actuación de la Fiscalía y la de la policía es homogénea, frente a lo que ocurre en violencia de género en pareja o expareja, por ser especializada. Lo que implica que, finalmente, su actuación dependa “en gran medida, de la sensibilidad personal de cada fiscal en este ámbito” (Amnistía Internacional, 2009: 29).

La ausencia de protocolos interinstitucionales de actuación de los equipos profesionales o la reiterada falta de especialización complican la investigación, tanto en la fase de instrucción, como en la de enjuiciamiento, fundamentales para que el delito no quede impune y se castigue



al/a los culpable/s. Tal y como sucede con: las psicólogas y psicólogos forenses encargados de realizar los exámenes periciales —cuya labor es fundamental para la obtención de pruebas, en caso de que no existan evidencias forenses, como es habitual cuando se ha producido una violación sin uso de la fuerza, abusos sexuales o la agresión sexual ha ocurrido por sumisión química<sup>293</sup>—; las abogadas y abogados de turno de oficio —solo es especializado el servicio para víctimas de violencia de género en el entorno íntimo—; o la insuficiente formación especializada de los propios magistrados y magistradas. Todo ello supone que, durante el proceso, de forma paralela, los derechos de las víctimas y supervivientes quedan también vulnerados.

Diversas investigaciones —Amnistía Internacional, 2009; Save the Children, 2012, Fundación para la Convivencia Aspacia, 2014; Sisma Mujer, 2013; Mugarik 2017— reiteran los obstáculos institucionales que enfrentan las víctimas en la fase judicial, lo que impide “el avance procesal de las investigaciones usualmente asociados a la reproducción de patrones discriminatorios contra las mujeres” (Sisma Mujer, 2013: 129). Teniendo en cuenta que, en los casos de violencia sexual, la mayoría de las veces la víctima es la única testigo y que numerosos casos se denuncian pasado un tiempo desde la agresión —como sucede con el abuso sexual infantil—, las organizaciones advierten de la necesidad de que el sistema judicial deba dar “validez al testimonio de la víctima sin que se invalide por ausencia de denuncia inmediata de los hechos de violencia sufridos, ni por falta de precisión en el relato de la víctima o de detalles de acontecimientos y fechas” (*Sisma Mujer*, 2013: 136).

A pesar de la reiterada preocupación en relación a este aspecto, la exigencia de la prueba de cargo<sup>294</sup>, más allá de la declaración de la víctima, sigue pesando en el sistema jurídico español en casos de violencia sexual, como demuestran los datos extraídos del informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, sobre la “Aplicación de la Ley Integral por las Audiencias Provinciales” (2016).

---

293 Los centros sanitarios y equipos forenses alertan en los últimos años del aumento del caso de agresiones sexuales por sumisión química (suministro de drogas en la bebida alcohólica que anula la voluntad de la víctima), complican la recogida de muestras biológicas. Véase el artículo del diario Público, “Crece casi un 30% los casos de violaciones por medio de la sumisión química”. Recuperado el 28 de abril de 2017, desde: <http://www.publico.es/politica/crece-30-casos-violaciones-ayuda.html>.

294 Como refiere el CGPJ, el derecho a la presunción de inocencia (Artículo 24.2 de la Constitución Española), es un pilar básico del sistema penal español, lo que implica que la carga de la prueba debe recaer sobre la parte acusadora, que debe probar la culpabilidad del acusado, “siendo precisa una mínima actividad probatoria de cargo, realizada con las garantías necesarias, obtenida en estricto respeto a los derechos fundamentales y referida a todos los elementos esenciales del tipo penal ...”. Observatorio contra la Violencia Doméstica y De Género, 2016: 37.



Aunque el informe se centra en el ámbito de la pareja o expareja, los resultados arrojan información relevante sobre este asunto: de las 496 sentencias analizadas, 90 de ellas han sido consideradas como “delito contra la libertad e indemnidad sexuales”. Del total de las 90, el 58% fueron significativamente absolutorias.

Las expertas juristas advierten de la necesidad de abrir el debate sobre la exigencia de la suficiencia probatoria o la inversión de la prueba, dado que la información que arrojan los datos —con una mayoría de sentencias absolutorias sólo en el entorno de la pareja o expareja— ha sido “por no considerar las declaraciones de la víctima prueba de cargo suficiente para anular la presunción de inocencia” (Cristina Fabre. Técnica del CGPJ). Todo ello, a pesar de que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que “la declaración de la víctima puede por sí sola ser suficiente como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado” (Observatorio contra la Violencia Doméstica y De Género. Aplicación de la Ley Integral por las Audiencias Provinciales. 2016: 37).

Algunos de los fundamentos jurídicos de las sentencias analizadas en el informe del CGPJ ejemplifican las observaciones a las que apuntan la expertas y las organizaciones:

“...Junto al testimonio de la víctima, insuficiente como hemos dicho para enervar la presunción de inocencia, la prueba, toda ella de carácter personal, se ha materializado en la declaración del acusado, que negó los hechos imputados, y sólo se explica el contenido de la denuncia por el ‘enfado del ex marido ese día’, explicación ésta que no se aleja del móvil extraño apuntado...”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 2016

“...SAP de Madrid número 353/2014, que absuelve por un delito de abusos sexuales y por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, porque la única prueba de cargo es la declaración de la víctima, persona con una leve discapacidad mental, la cual se analiza con particular detalle, indicando las contradicciones, incoherencias e imprecisiones en las que incurre...”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. 2016

“...SAP A Coruña 99/2013 considera que la declaración de la víctima es en abstracto, prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, ya que no concurren móviles espurios y resulta verosímil al existir una corroboración objetiva, de carácter psíquico (un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático compartido por varios profesionales y que todos relacionan con una agresión sexual), sin embargo, aprecia importantes lagunas

y contradicciones que impiden tener la convicción más allá de toda duda razonable, de la existencia de una relación sexual sin consentimiento y de que el acusado tuviera conocimiento de la ausencia de consentimiento, puesto que la víctima no recuerda haberle dicho al acusado de forma clara que se estuviese quieto, que no quería mantener relaciones sexuales con él...”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. 2016

“...SAP de Albacete número 303/2014 absuelve por el delito contra la libertad sexual por falta de prueba del dolo por parte de los dos acusados, al no resultar acreditado de forma clara y suficiente que conocieran el trastorno de la mujer (pareja sentimental de ambos en diferentes momentos) consistente en una discapacidad intelectual y dificultad para tomar decisiones, trastorno no visible o solo apreciable en casos de relaciones continuadas, según las pruebas periciales...”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete. 2016

En cuanto a la obligación del Estado en el marco de la sanción o pena a los culpables, es importante también recordar que la sanción a los responsables se corresponde con un derecho a la justicia y reparación de las víctimas de violencia sexual, siendo, por ello, otra de las responsabilidades que los Estados deben asumir en este ámbito.

Las penas adecuadas —como recuerdan los organismos internacionales de derechos humanos— no sólo implican un castigo hacia los culpables, sino que trasladan a la ciudadanía un mensaje contundente sobre la gravedad de lo que se ha juzgado. De forma paralela, acompañan la posibilidad de transformar la cultura patriarcal que arroja la violencia sexual. Como afirma la propia Relatora Yakin Ertük, “las actuaciones en este nivel pueden tener efectos transcendentales, en el sentido de que las condenas a las prácticas patriarcales pueden dar lugar a cambios en las normas socioculturales” (2006: 24<sup>295</sup>).

Las condenas han de trasladar la seriedad comparable a otros delitos violentos, en donde jueces/ juezas y fiscales deben considerar, en el proceso de determinación de la pena, que se tenga en cuenta el alcance que el daño físico y/o psicológico ha implicado para la víctima e, incluso, como advierte Naciones Unidas, “las repercusiones de la victimización” (Resolución 52/86 de las Asamblea General de la ONU). El Estado, y el poder judicial de forma específica, deben transmitir un mensaje inequívoco de que la violencia sexual es un acto penal grave que será investigado, enjuiciado y castigado ejemplarmente. A pesar de ello, las escasas investigaciones, relativas a la respuesta del sistema judicial español en relación a

---

<sup>295</sup> Párr.90.

la violencia sexual, destapan un sistema incapaz de proteger y garantizar los derechos de las víctimas en los términos que apunta el derecho internacional de los derechos humanos, como se desprende de las propias sentencias.

La investigación más reciente —”Mar jurídic internacional, estatal i autonòmic de les violències sexuals (matrimonis forçats, mutilacions genitals femenines, tràfic d’essers humans amb finalitat d’exploació sexual, assetjament i agressions sexuals”. 2016)—, elaborada en 2016 por el *Grup de Recerca Antigona*, de la Universidad Autónoma de Barcelona —citada en el segundo capítulo de esta investigación— analiza las resoluciones de 45 sentencias de las audiencias provinciales de la Comunidad Autónoma de Catalunya durante el año 2014.

El análisis, no sólo advierte de forma generalizada sobre la aplicación de estereotipos de género y mitología sobre la violencia sexual en los tribunales catalanes de forma naturalizada —que “se dejan entrever a partir de algunas conceptualizaciones del discurso jurídico” (2016: 78)—, sino que, paralelamente, señala un dato relevante e indicativo sobre lo expuesto, respecto a las dificultades que el sistema judicial español tiene para proteger a las víctimas o condenar a los culpables de este tipo de delitos: los casos que no se corresponden con el mito patriarcal sobre cómo se espera que sea una agresión sexual —la mayoría según las estadísticas y e investigaciones científicas— quedan absueltos o con sanciones menores.

“de las sentencias analizadas, si bien hay un mayor número de casos iniciados judicialmente donde el agresor y la víctima se conocen (23 casos de un total de 45), llama poderosamente la atención que todas las absoluciones, excepto 2, se dicten para estos casos de agresores y víctimas conocidos (16 casos del total de 45). En efecto, los presuntos agresores sexuales que tiene una relación previa con la víctima (o que se conocen por diversas circunstancias) son mayoritariamente absueltos (de 23 casos en los que la víctima y el agresor se conocen 14 de los agresores fueron absueltos) o bien sancionados bajo la figura de “abuso sexual” (2016: 80).

#### **4.2.3 La soledad de las víctimas ante la falta de protección y atención especializada**

Desde los años 70, el movimiento feminista se encargó de dotar de servicios de protección y atención a las mujeres que sufrían violencia física, psicológica o sexual. El feminismo de los años 70 nombró y adaptó lo que hoy se conocen como “servicios de atención especializados para víctimas/supervivientes de violencia de género”, cuyas raíces se encuentran imbricadas en el activismo y voluntariado que las feministas desarrollaron ante la impasibilidad de los Gobiernos y estados frente a la violencia machista (Kelly, 2008).

Durante cuatro décadas —gracias al marco teórico feminista y al trabajo inconmensurable de las organizaciones no gubernamentales de mujeres— las víctimas pudieron encontrar espacios para su protección, recuperación, y su derecho a vivir una vida libre de violencia.

Los servicios de atención y protección han ido evolucionando y mejorando a lo largo de los últimos cuarenta años, como en el caso español, de forma paralela al desarrollo de un marco teórico y normativo, en relación con la obligación de todos los estados para cumplir con su obligación de debida diligencia en la protección de las víctimas de todas las formas de violencia hacia las mujeres. A pesar de los grandes avances, en los últimos ocho años los recortes presupuestarios han hecho que algunos centros se hayan cerrado, los servicios que se prestaban hayan desaparecido, o los equipos profesionales hayan tenido que reducir sus horas laborales a menos de la mitad (Informe Sombra, Plataforma Informe Sombra-España: 2014), repercutiendo, de forma directa, en la calidad de los servicios y en los derechos de las mujeres.

Las directrices sobre el grado de protección que los estados deben realizar en relación a la violencia de género en todas sus manifestaciones han quedado establecidas, como con el resto de grados de obligación —prevención, investigación y sanción, y reparación—, a través de la jurisprudencia de distintos tribunales internacionales de derechos humanos, así como por la normativa en la materia e instrumentos internacionales de derechos humanos.

En este sentido, la protección abarca una amplia gama de obligaciones —aprobación de marcos legislativos apropiados, provisión de servicios especializados, acceso a la justicia, asistencia letrada, implementación de medidas de protección y asistencia inmediatas...— sobre las que se han pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>296</sup>, el Comité CEDAW, la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y, más recientemente, el Consejo de Europa, a través del ya referido Convenio de Estambul (2011):

“...3. Las Partes velarán por que las medidas tomadas conforme al presente capítulo:

- se basen en una comprensión fundamentada en el género de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y se concentren en los derechos humanos y la seguridad de la víctima;
- se basen en un enfoque integrado que tome en cuenta la relación entre las víctimas, los autores de los delitos, los niños y su entorno social más amplio;
- estén dirigidas a evitar la victimización secundaria;
- estén dirigidas a la autonomía e independencia económica de las mujeres víctimas de violencia;
- permitan, en su caso, el establecimiento de un conjunto de

---

<sup>296</sup> Véase el caso *Osman v. United of Kindom*. 1998.

servicios de protección y apoyo en los mismos locales; - respondan a las necesidades específicas de las personas vulnerables, incluso los hijos de las víctimas, y sean accesibles para ellos.

Convenio de Estambul (2011). Artículo 18. 3. Obligaciones Generales. Capítulo IV. Protección y Apoyo.

De forma específica, la protección, frente a la violencia sexual —como recuerda el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas— incluye también la implementación efectiva de medidas ejecutadas a través de políticas públicas específicas. Todas ellas dirigidas a garantizar la seguridad de las mujeres y de las niñas en espacios públicos, a través de la adecuación de las infraestructuras, de la planificación urbana apropiada, de la adaptación del alumbrado público (Resolución 23/25 del Consejo de Derechos Humanos. 2013), desde las necesidades y experiencias de las mujeres, “claves para una gestión de la seguridad pública” (Naredo, 2009: 67), a partir de un enfoque feminista y de derechos humanos.

El asunto de la seguridad de las mujeres en materia de violencia sexual ha sido tradicionalmente abordado desde un enfoque patriarcal, sobre el que se ha disfrazado, bajo un prisma de seguridad, el control de los cuerpos de las mujeres. En el año 2014 salieron a la luz algunas de las recomendaciones que el Ministerio de Interior español formulaba como preventivas frente a la violación. Las medidas, aparentemente coherentes con la realidad que enfrentan las mujeres para prevenir una violación a manos de desconocidos, ocultan, sin embargo, un mensaje dirigido a coartar la libertad y a consolidar el mito sobre la posibilidad de controlar la violación como una ecuación matemática, mediante instrucciones en las que la responsabilidad recae, únicamente, en la víctima.

El mensaje podría transportarnos al cuento de Caperucita Roja que, como recuerda Esperanza Bosch, “lanza un mensaje aterrador a través de la apariencia de un cuento infantil” (2015). En este caso, las instrucciones, supuestamente neutrales, proyectan también un mensaje aterrador: los violadores andan sueltos y si no quieres que te violen, no se te ocurra hacer nada de lo que señalamos, porque la responsabilidad última es sólo tuya:

- “. No haga auto-stop ni recoja en su coche a desconocidos.
- . Por la noche evite las paradas solitarias de autobuses. Si el autobús está muy concurrido, procure sentarse cerca del conductor.
- . No pare por descampados, ni calles solitarias sobre todo de noche, ni sola, ni acompañada.
- . Si se ve obligada a transitar habitualmente por zonas oscuras y solitarias, procure cambiar su itinerario. En otros países se utilizan silbatos para ahuyentar al delincuente. Considere la posibilidad de adquirir uno.
- . Evite permanecer de noche en un vehículo estacionado en descampados, parques, extrarradios, etc.

. Antes de aparcar su vehículo mire a su alrededor, por si percibiera la presencia de personas sospechosas ...”.

“Prevención de la violación”. Ministerio del Interior.  
Página web “Servicios al Ciudadano”. 2014

Tras hacerse eco diversos medios de comunicación de las Instrucciones, y ante la avalancha de denuncias que recibieron, tanto de las organizaciones feministas como de algunos grupos políticos —PSOE e IU—, el Ministerio del Interior dijo verse obligado a modificar y actualizar las instrucciones. Dos años después, ha resultado imposible encontrarlas modificadas o actualizadas.

Lo que es evidente es que el miedo que proyecta este tradicional “modelo de seguridad” (Bodelón, 2012) no deja de ser otro “instrumento del patriarcado” (Naredo, 2010) dirigido a controlar el cuerpo y la libertad de las mujeres. Pero este modelo, ni mucho menos sirve para prevenir una agresión sexual, cuyos principales responsables no son desconocidos —en el 80% de los casos, forman parte del entorno cercano a las víctimas—, y cuyo desenlace se produce por muchas otras circunstancias. Todas las mujeres y adolescentes conocen “al dedillo” cada una de las instrucciones redactadas por el Ministerio del Interior, pero pocas serían capaces de identificar indicadores de violencia machista que puedan prevenir frente a cualquier forma de agresión.

El enfoque reduccionista, que apela a la seguridad únicamente como sinónimo de “ausencia de criminalidad” (Naredo, 2010: 79), ignora con alevosía los múltiples factores estructurales sobre los que se afianza la discriminación y violencia hacia las mujeres en todas sus formas, mientras disfraza, de manera justificada, las dificultades que entraña ejercer la libertad. Como apunta la jurista María Naredo:

“... la seguridad no sólo está reñida con la libertad, sino que más bien no resulta concebible sin ella. Está íntimamente relacionada con la libertad de movimiento y uso de los espacios urbanos, y con la libertad en las relaciones personales, en especial en la esfera íntima...” (2010: 80).

La respuesta —aún pendiente en el caso español, derivada de las políticas de seguridad neutras al género, centradas en poner el acento en los espacios públicos y en el tradicional mito de las personas desconocidas como fuentes de peligro (Naredo, 2010: 81), desarrolladas y ejecutadas al margen de las necesidades de las mujeres— debe responder, como apunta Naredo, a un enfoque democrático de la seguridad pública. La perspectiva ha de estar dirigida a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de movimiento y del uso de los espacios públicos, sin el miedo constante a que su ejercicio nos haga responsables de la violación de nuestros cuerpos.

### 4.2.3.1 La ausencia de servicios especializados

El Estado y sus instituciones —como han establecido los organismos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia específica al respecto<sup>297</sup>—tiene el deber de ofrecer, de forma inmediata, servicios de apoyo y asistencia a mujeres, adolescentes, niñas/ niños que hayan sufrido alguna forma de violencia sexual. Como reconoce la Relatora Yakin Ertük, “los Estados deben garantizar que se proporcione a las víctima de la violencia, servicios de atención de salud física y psicológica y de asistencia jurídica de calidad” (2006: 21<sup>298</sup>).

Tanto los instrumentos no vinculantes, como lo que sí que lo son, forman parte de principios de derechos humanos sobre los cuales se elaboran los mínimos estándares que los estados, incluido el español, tienen que adaptar en relación a los servicios especializados para las víctimas y supervivientes de violencia sexual.

El informe publicado por el Consejo de Europa en 2008 —sobre los estándares mínimos de cumplimiento de los servicios de atención especializados (*Combating violence against women: minimum standards, for support services*), dirigido por la profesora Liz Kelly— expone de forma clara y concisa, desde un marco feminista y de derechos humanos, uno de los mejores análisis sobre los estándares de los servicios de atención, y sobre el cumplimiento que los estados deben adoptar para desempeñar su obligación de protección a las víctimas de todas las formas de violencia sexual.

Para poder evaluar de manera más precisa la respuesta del estado español a este respecto, es importante delimitar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de servicios de atención especializados para víctimas y supervivientes de violencia sexual. En este sentido, como apunta Kelly (2008), los “servicios de apoyo” incluyen a todas las organizaciones que proveen a las mujeres de una gama de opciones dirigidas a crear seguridad, buscar justicia, y reparar el daño frente a la violencia sufrida. Generalmente, son servicios que desarrollan tanto ONG especializadas —tradicionalmente organizaciones feministas—, como otras ONG del tercer sector y, en los últimos años, empresas de servicios sociales o de otros ámbitos.

Los organismos internacionales de derechos humanos han definido los distintos tipos

---

<sup>297</sup> Véase entre otros: “Convención Europea para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de 1950” (artículo 2, artículo 3, artículo 8, artículo 10, artículo 14); “Carta Social Europea de 1961” (artículo 11, artículo 14, artículo 13, artículo 17); “La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer de 1979”; la Recomendación General Nº19 de 1992, la Recomendación General Nº 12; “La Declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993”; la Recomendación (2005) 5 del Consejo de Europa; “Declaración de Beijing y Plataforma de Acción de 1995”; la “Carta de los derechos fundamentales de la unión europea del año 2007” (artículo 1, artículo 3, artículo 8, artículo 21, artículo 22, artículo 25 y 26).

<sup>298</sup> Párrafo 83.



de servicios que deben ofrecerse a las víctimas de violencia de género: casas de acogida o refugios, centros de intervención y atención, centros de salud especializados —entre los que se incluyen los centros de agresiones sexuales (*Sexual Assault Centres*)—, servicios de asesoramiento legal, líneas telefónicas especializadas, centros de crisis (*Rape Crisis Centers*), grupos de autodefensa, proyectos de intervención y proyectos de acercamiento (*outreach*).

Cada uno de estos servicios tiene que cumplir una serie de estándares mínimos (Kelly, 2008; Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer del Secretariado General de Naciones Unidas, 2006), en los que, en cualquier caso, deben garantizar la confidencialidad, la accesibilidad —todas las mujeres pueden acceder a ellos, sin ningún tipo de discriminación—, y la disponibilidad —en situación de crisis, a medio y a largo plazo—, teniendo que estar accesibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana.

De forma específica en violencia sexual, el Estado debe disponer de los siguientes servicios especializados (Kelly, 2008) dirigidos a proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas de violencia sexual:

- **Centros de Crisis/Atención Especializados en Violencia Sexual (*Rape Crisis Center*)**<sup>299</sup>: tiene que haber, al menos, uno por cada 200.000 mujeres y, como mínimo, uno por cada región, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año<sup>300</sup>. Son centros cruciales para apoyar, acompañar e intervenir con las víctimas que han sido agredidas sexualmente o han sufrido cualquier otra forma de violencia sexual, y no desean denunciar.
- **Casas de acogida o refugios**: al menos, debe existir un refugio en cada provincia o región, accesible para mujeres con enfermedad mental, migrantes en situación administrativa regular o irregular, mujeres con diversidad funcional, mujeres drogodependientes, mujeres/jóvenes o niñas que necesitan protección frente a la mutilación genital femenina, matrimonio forzado o matrimonio infantil o precoz, o crímenes de honor.

---

<sup>299</sup> Véase: Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (artículo 4.c), Plataforma de Acción Beijing (párrafo 124, b), Recomendación (2002)5 del Consejo de Europa.

<sup>300</sup> Véase: CEDH (artículo 3), ICCPR (artículo 6) y UDHR (artículo 1), Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Artículo 4 c), Plataforma de Acción de Beijing (párrafo 124.b), Recomendación (2002)5 del Consejo de Europa.



- **Centros de agresiones sexuales (*Sexual Assault Centres*)**<sup>301</sup>: debe haber uno por cada 400.000 mujeres, para facilitar y reportar las agresiones sexuales más recientes, con un alto grado de calidad forense y atención médica.
- **Líneas de atención (*Help Line*)**: tiene que existir una línea de atención telefónica que cubra todas las formas de violencia hacia las mujeres o, si no, una específica para violencia de género en el entorno íntimo y otra para violencia sexual.

Los estándares para los servicios de atención especializados a víctimas y supervivientes de violencia de género se han desarrollado de forma mucho más concreta y definida que en el caso de los servicios de atención para víctimas y supervivientes de violencia sexual. Como refiere Kelly (2008), pocos estados han prestado la atención que merecen estos servicios, en la misma medida que el resto de recursos especializados, probablemente derivado —como se ha venido indicado a lo largo de toda esta investigación— de la desatención generalizada de los últimos años hacia la violencia sexual.

El caso español no es tampoco una excepción. Las escasas investigaciones sobre el mapa de recursos de atención especializados a víctimas de violencia sexual en el Estado español —así como la investigación comparativa que se ha realizado al respecto para este capítulo<sup>302</sup>— revelan un abandono absoluto del Estado hacia las víctimas de violencia sexual, ejemplificado en el incumpliendo de cada uno de los estándares identificados por el Consejo de Europa (2008), la OMS (2003, 2004) o el propio Secretariado General de las Naciones Unidas en su “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer” (2006). Como recuerda el Secretariado General, “la falta de acceso oportuno a tales servicios puede impedir que las mujeres obtengan las pruebas necesarias para formular un cargo por violación” (2006: 108<sup>303</sup>), u otras formas de violencia sexual.

En el Estado español no existe en ninguna comunidad autónoma algún centro de crisis (*Rape Crisis*) —Plataforma CEDAW Sombra-España, 2014; Médicos del Mundo, 2016—, lo que implica que, ante situaciones de emergencia, las víctimas sólo pueden recurrir a la policía tras una agresión sexual. La especificidad que requiere la atención e intervención

---

<sup>301</sup> Véase: CEDH (artículo 3), ICCPR (artículo 6) y UDHR (artículo 1), Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Artículo 4 c), Plataforma de Acción de Beijing (párrafo 124.b), Recomendación (2002)5 del Consejo de Europa.

<sup>302</sup> La página web que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género habilita para la búsqueda de recursos de apoyo y prevención en casos de violencia de género (WRAP) no distingue los tipos de recursos especializados para víctimas de violencia sexual: <https://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action>

<sup>303</sup> Párr.323.

frente a las agresiones sexuales no tiene un equivalente especializado, como sí sucede con los servicios de emergencia y atención especializados para víctimas de violencia de género en el entorno de la pareja o expareja.

Respecto a los centros de agresiones sexuales (*Sexual Assault Centers*), sólo 9<sup>304</sup> de 17 comunidades autónomas disponen de ellos (Médicos del Mundo, 2016; Plataforma CEDAW Sombra-España, 2014). En las 9 comunidades autónomas en las que sí que existen, éstos se encuentran en los centros urbanos de las capitales de las Comunidades, lo que implica que la accesibilidad no está garantizada para otras víctimas que vivan lejos de las ciudades, como es el caso de las mujeres de entornos rurales. El estándar que establece la existencia de uno por cada 400.000 mujeres es, en todos los casos, incumplido. Las víctimas sólo pueden acceder a recursos de atención para víctimas de violencia de género en el entorno íntimo. Sin embargo, dichos recursos no disponen de los equipos especializados en violencia sexual, cuya intervención debe ser coordinada e interdisciplinar desde la especificidad de esta forma de violencia de género: especialización en trauma severo o estrés postraumático, entre otros.

En relación a las casas de acogida, refugios, pisos de emergencia y pisos tutelados de la geografía española, como queda claramente establecido en la “Propuesta de pautas para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo” (2014) —elaborada por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género— estos espacios están dirigidos a prestar una intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo, en los términos que establece la LO 1/2004.

En cuanto a las líneas de atención (*Help Line*), el Estado español pone a disposición el 016, línea telefónica general de atención a la violencia de género. Sin embargo, es un servicio de asesoramiento, y no de emergencias, dirigido especialmente a las víctimas de violencia de género en el entorno íntimo. No es una línea especializada de atención a víctimas de violencia sexual, como lo es el 900 105 090 para las víctimas de trata con fines de explotación sexual. En caso de solicitar asistencia jurídica especializada, el servicio 016 no está disponible desde las 21 horas hasta las 9 horas del día siguiente, y sólo desde las 13 a las 20 horas, los sábados, domingos y días festivos.

---

<sup>304</sup> Madrid, Andalucía, Castilla y León, Valencia, Catalunya, Cantabria, Asturias, Aragón y Extremadura.

#### 4.2.3.2 El tortuoso camino en el acceso a la justicia y a la protección

En el marco de la protección —en relación constante con otras de las obligaciones ya señaladas—, la norma de la debida diligencia exige también que “los Estados garanticen que las mujeres y las niñas que son víctimas de violencia o corren el riesgo de serlo, tengan acceso a la justicia” (Ertük, 2006). Para que esto sea así, el resto de obligaciones han de desarrollarse en la medida que la propia norma establece: leyes especializadas, desarrollo de políticas públicas, formación a los equipos profesionales, elaboración e implantación de protocolos de actuación y coordinación unificados... Sin embargo, en el Estado español —como ya se ha indicado en este mismo capítulo—, el déficit en el desarrollo y ejecución del resto de obligaciones implica que las víctimas de violencia sexual se enfrenten a numerosos obstáculos en el acceso a la justicia para garantizar su derecho a la protección.

Aunque el Estado tiene la obligación de eliminar todas las barreras de acceso a la justicia (Resolución 67/144 de Naciones Unidas, 2013: 9), diversas limitaciones —algunas ya señaladas— manifiestan la evidente desprotección a la que se enfrentan las víctimas de violencia sexual, frente a otras víctimas de violencia de género o, incluso, otras violencias, como la terrorista.

Para que la participación de la víctima durante el proceso judicial sea lo menos revictimizante y traumática posible, la asistencia psicosocial no es sólo una de las obligaciones que el Estado debe prestar a las víctimas, sino también una necesidad constatada, derivada de la falta de especialización del sistema judicial frente a este tipo de delitos. La ausencia de recursos públicos dirigidos a realizar el acompañamiento e intervención especializada en violencia sexual, durante el proceso judicial, conlleva consecuencias devastadoras para las víctimas. Cuando deciden poner en manos de la justicia sus casos, teniendo que exponerse al trauma de la experiencia vivida, sus derechos tampoco están garantizados durante el proceso penal (Amnistía Internacional, 2006), a pesar de que tanto el Estatuto de la Víctima —*Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima de delito*—, como el Consejo de Europa —Recomendación (2006) del Consejo de Europa sobre asistencia a víctimas de delito— establecen un decálogo de obligaciones de los poderes públicos en el marco del proceso penal, dirigidas a “reparar el daño” y “minimizar los efectos traumáticos en lo moral” (Preámbulo. “Estatuto de la Víctima”, 2015).

En el caso español, la realidad que afrontan las víctimas en los procesos judiciales se caracteriza —como señala Amnistía Internacional— por “una excesiva dilación de los procesos penales, que se suelen prolongar entre un año y medio y dos años, pero que pueden llegar a dilatarse hasta tres o cuatro años, si el acusado no está preso” (2006: 32). De forma paralela a ello, las dificultades para el acceso efectivo a la justicia y a la protección se agravan por otras circunstancias intrínsecas al

propio sistema judicial: estereotipos de género de los operadores judiciales<sup>305</sup>, espacios no adaptados durante el juicio oral<sup>306</sup>, ausencia de equipos profesionales expertos, o dificultades para la obtención de medidas de protección o alejamiento, entre otras.

Las medidas de protección son también limitadas, en comparación con las que pueden obtener las víctimas de violencia de género, al no estar incluidas en esta categoría las víctimas de violencia sexual fuera del entorno íntimo. La orden de protección, por ejemplo —regulada por la Ley 27/2003— es un instrumento que, como establece la propia norma, únicamente es posible solicitarla en caso de ser “víctima de violencia doméstica y de género”. De esta manera, las medidas —penales, civiles, y de asistencia y protección social— que pueden adoptarse derivadas de la orden de protección —según establece la LO/20004—, sólo están diseñadas para proteger a las víctimas de violencia doméstica y/o de género, que sí podrán solicitar una orden de alejamiento, tal y como queda regulado en la *Ley de Enjuiciamiento Criminal* en el artículo 544ter. En el caso de las víctimas de violencia sexual podrán solicitar medidas cautelares de alejamiento, como queda establecido el artículo 57 del Código Penal<sup>307</sup>.

A diferencia de las víctimas de violencia de género en el entorno íntimo, no existe en España un sistema de atención jurídica especializado en los Colegios de Abogados y Abogadas para la defensa jurídica de las víctimas de violencia sexual, lo que supone que tengan que ser asistidas por el turno penal ordinario. En ese mismo sentido, al no estar incluida la violencia sexual fuera del entorno de la pareja o expareja en la LO 1/2004, los derechos que se derivan en esta fase del proceso no quedan garantizados, como es la atención inmediata desde el momento de la presentación de la denuncia.

---

<sup>305</sup> Las preguntas de la defensa del acusado, suelen estar dirigidas en una estrategia centrada en desvelar las contradicciones en el relato de la víctima (Amnistía Internacional 2006), en otras ocasiones, el juez o la jueza dictan resoluciones judiciales cargadas de estereotipos de género sobre violencia sexual, que reflejan la ausencia de la perspectiva de género de los propios magistrados y magistradas en cuanto a este tipo de delitos. Véase sentencia Nagore Laffage, asesinada por José Diego Yllanes (Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 2010): “José Diego Yllanes pensó erróneamente que Nagore Laffage Casasola quería una relación apasionada, por lo que procedió a quitarle la ropa de forma brusca [...]. Nagore Laffage Casasola interpretó erróneamente la actuación violenta del acusado como un intento de agresión sexual ...”.

<sup>306</sup> En algunos juicios, las víctimas tienen que ver a sus agresores sexuales, sin que se hayan puesto medidas adecuadas para evitar la confrontación visual. Como señalan algunas profesionales expertas cuyos testimonios han sido recogidos por Amnistía Internacional, “la legislación sobre protección de testigos es insuficiente y, en la práctica, se traduce prácticamente al uso del “biombo”, y por decisión discrecional del Juez o Jueza, dependiendo mucho de sus prejuicios” (2006: 32).

<sup>307</sup> “Los Jueces o Tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias, dentro del período de tiempo que los mismos señalen, que, en ningún caso, la imposición de una o varias de las siguientes prohibiciones: - La de aproximación a la víctima, o a aquellos familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, -La de que se comunique con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o tribunal, -La de volver al lugar en que se haya cometido el delito o de acudir a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos...”.

Como se ha ido señalando a lo largo de toda la investigación, las características de este delito —en relación con otra serie de factores estructurales del propio sistema judicial— presentan un camino lleno de complicaciones, en muchas ocasiones insalvables para las víctimas, que complican en extremo el acceso a la justicia o a las medidas de protección. Esto hace que, en ocasiones, antes de iniciar el proceso, las víctimas desistan por el temor a lo que les espera frente a procesos judiciales tan dilatados en el tiempo y altamente victimizadores (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016)<sup>308</sup>.

El diseño que a continuación se muestra representa, de forma simbólica, el camino de obstáculos con los que se encuentran las víctimas de violencia sexual en su recorrido hacia la obtención de justicia, protección y reparación integral. De forma general, sin entrar al detalle en cada una de las barreras identificadas y utilizando como hipótesis el perfil de una víctima de violencia sexual —ciudadana española de mediana edad, agredida sexualmente a las 6.30 de la mañana— se han identificado hasta 20 obstáculos desde el momento de la agresión hasta la reparación integral. Si se incorporara un enfoque interseccional al caso, los obstáculos se triplicarían:

### OBSTÁCULOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, SEGÚN LOS HITOS QUE ACOMPAÑAN EL PROCESO HACIA LA OBTENCIÓN DE JUSTICIA.



**Figura 2:** elaboración propia. Simulación del camino que debe recorrer una víctima de violencia sexual

<sup>308</sup> Véase extracto de entrevista: “Jueza 1: ¿Sabes cuánto tiempo puede durar un proceso penal por agresiones sexuales?. Pues meses. ¿Meses? Sí. Porque a veces se deben extraer una serie de cultivos si ha habido penetración... Depende de cuándo tenemos los informes definitivos que nos informen a quién pertenecen los restos biológicos, si ha habido testigos, o si no lo ha habido... Claro. Y, por ejemplo, ¿en el caso de una víctima que denuncia? ¿Si se acuerda hacer un dictamen psicológico para poder ver las secuelas que pueda tener la víctima más allá de las secuelas físicas que le haya producido el hecho para tratar de dar una reparación integral? Exactamente [...]. Aparte de acreditar los hechos, hay que evaluar hasta las últimas consecuencias. Todo ello, fácilmente, dos años. (Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016: 12)

**TABLA: HITOS Y OBSTÁCULOS EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE JUSTICIA**  
(Elaboración propia a partir de la simulación de una agresión sexual en la ciudad de Madrid)

HITO	OBSTÁCULO
<b>Agresión sexual</b>	
<b>1- Asistencia inmediata especializada e información</b>	<b>- 2 obstáculos:</b> no existe teléfono especializado para solicitar información, tampoco podría acudir a ningún centro de atención especializada (Rape Crisis) por no existir.
<b>2- Protección y asistencia inmediata: policía y atención sanitaria</b>	<b>- 4 obstáculos:</b> divergencias en las actuaciones (si la víctima decide acudir a un hospital que no sea La Paz, no será atendida por medicina forense), sólo podrá ser atendida por la policía del UFAM (donde quedan centralizadas las denuncias). Ningún profesional especializado acompañará a la víctima en dependencias policiales durante la formalización de la denuncia. No dispondrá de abogado o abogada de oficio especializado.
<b>3- Atención médica y acompañamiento psicosocial</b>	<b>- 3 obstáculos:</b> tendrá que acudir por su propio pie al Hospital de la Paz para ser atendida por un equipo de médicos/as forenses de guardia, de lo contrario, éstos no se trasladarán a otros centros sanitarios. No estará acompañada por equipos profesionales expertos en violencia sexual. Si acude antes al hospital que a la policía o al juzgado, no será reconocida por ginecólogo/a de guardia y personal médico forense.
<b>4- Protección, investigación y asistencia.</b>	<b>- 3 obstáculos:</b> desde dependencias policiales no está garantizada la coordinación y derivación con otros equipos profesionales de servicios especializados de atención a víctimas de violencia sexual, por no existir protocolos de coordinación y servicios disponibles (en Madrid el servicio para víctimas de violencia sexual, no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana). Si fuera una mujer en situación administrativa irregular se incoaría expediente de expulsión. Inexistencia de protocolo de coordinación entre policía y ICAM. Turno de oficio no especializado.

HITO	OBSTÁCULO
5- Atención psicosocial especializada.	- <b>1 obstáculo:</b> el centro de atención especializado, al no estar abierto las 24 horas del día, la víctima no podría acudir hasta su apertura.
6- Protección y obtención de justicia: fase de instrucción.	- <b>3 obstáculos:</b> sistema judicial no especializado y ministerio fiscal no especializado. Ningún acompañamiento psicosocial garantizado durante la fase de instrucción.
7- Protección y obtención de justicia: Juicio	- <b>3 obstáculos:</b> sistema judicial no especializado, magistrados y magistradas sin formación especializada (estereotipos de género), juicio oral, dilación del procedimiento penal.
8- Reparación integral.	- <b>1 obstáculos:</b> Si estuviera en una de las 8 comunidades autónomas sin servicios de atención especializados para una intervención psicosocial, no dispondría de psicólogas expertas en trauma.
<b>TOTAL</b>	<b>20 obstáculos</b>

Tabla 19: elaboración propia.

#### 4.2.4 La libertad y el derecho a una nueva vida: desamparadas ante la reparación integral

Las características especiales que entraña la violencia sexual la convierten en una violación de derechos humanos, en donde la reparación integral cobra especial importancia para la restitución de la dignidad, autoestima y libertad de la víctima.

La mitología que acompaña a las víctimas antes de la agresión sexual, durante y después, anclada en todo momento por una duda patriarcal latente sobre la veracidad del hecho —inconcebible en ningún otro delito: racismo, terrorismo, asesinato...—, sobrevuela sobre la víctima hasta que la reparación integral no se haya producido. A pesar de ello, las propias particularidades del daño y la configuración del sistema español, ciego a la reparación, la complica para las víctimas, en los términos que guía el marco internacional de derechos humanos.

El desarrollo de la significación de “reparación” en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, en relación a la violencia hacia las mujeres



—avalado desde su enfoque de género por el movimiento y marco teórico feminista—, hace referencia a toda una serie de medidas que los Estados tienen la obligación de ejecutar cuando no han cumplido —por acción u omisión— con las normas y principios internacionales de derechos humanos. Las medidas tienen que estar dirigidas “al resarcimiento, reparación de los daños sufridos y otros medios de compensación justos y eficaces (Belem do Pará. Artículo 7.g. 1994)” para las víctimas de violencia de género<sup>309</sup>.

Diversos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos<sup>310</sup>, así como distintos organismos de derechos humanos — la Comisión de Derechos Humanos (Resolución 2005/35), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité CEDAW (Recomendación General N° 19, párrafo 24.i<sup>311</sup>), la Relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer o el Secretariado General de las Naciones Unidas, entre otros— han desarrollado los principios básicos y directrices, en relación a los derechos de las víctimas de violencia de género en materia de reparación, aplicables, de forma específica, a las distintas manifestaciones de violencia hacia las mujeres.

La reparación es una obligación del Estado con una gran transcendencia directa para las mujeres que hayan sido víctimas de alguna manifestación de violencia machista. Pero también, de forma indirecta, porque su efectiva implementación adquiere una dimensión global dirigida a desmontar la base de la estructura patriarcal que sostiene el “triángulo de la violencia” (Galtung, 2003), al pretender corregir, también, la discriminación que justifica el ejercicio de la violencia directa (la agresión sexual). Como recuerdan las organizaciones feministas, “de poco sirve la reparación si no tiene como objetivo último la modificación de las estructuras sociales y patriarcales causantes de la violencia cometida contra las víctimas” (Sisma Mujer, 2013: 171). En la misma dirección, la sentencia de “Campo Algodonero” (2009), traslada esta idea de forma clara en su párrafo 450:

“Teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación (...).

Sentencia “Campo Algodonero”. CIDH. 2009. Párrafo 450

---

<sup>309</sup> Según el derecho internacional de los derechos humanos, el concepto “reparación integral” (*restitutio in integrum*) implica el “restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero. 2009. Párr. 450)

<sup>310</sup> Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

<sup>311</sup> “i) Que se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, incluida la indemnización” (Recomendación General N°19).



Es importante subrayar que la reparación está en relación constante con la justicia, en el sentido en que la propia justicia es parte de la reparación (Sisma Mujer, 2013). Por ello, es fundamental que el sistema judicial español esté especializado en violencia sexual, para poder aplicar la reparación desde la dimensión del dolor que esta grave vulneración de derechos humanos implica para sus víctimas, y para la sociedad en su conjunto. En este sentido, es necesario recordar nuevamente las palabras de la Relatora Yakin Ertük, al referirse a los efectos transcendentales que las actuaciones del sistema judicial pueden tener para la sociedad en su conjunto: “las actuaciones en este nivel pueden tener efectos transcendentales, en el sentido de que las condenas a las prácticas patriarcales pueden dar lugar a cambios en las normas socioculturales” (2006: 24<sup>312</sup>).

La justicia adquiere un poderoso papel restitutivo, del mismo modo que puede tener el efecto contrario, pero cuando repara conforme al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, “se convierte en una de las formas para el restablecimiento de derechos de las mujeres y la transformación de creencias culturales y sociales que legitiman la violencia sexual” (Sisma Mujer, 2013: 168).

Los principios y directrices relativos a la reparación, aplicables a las víctimas de violencia sexual, establecen las siguientes obligaciones (Resolución 2005/35. Comisión de Derechos Humanos):

- **Restitución** (principio 19): siempre que sea posible, el Estado debe devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de derechos humanos, a través del restablecimiento de su libertad, disfrute de los derechos humanos, identidad, vida familiar, ciudadanía, residencia, devolución de sus bienes, reintegración en su empleo, etc.
- **Indemnización** (principio 20): el Estado tiene que proporcionar una indemnización proporcional y apropiada a la gravedad de la violación, evaluando el daño físico o psicológico, los daños materiales, el daño a la reputación o a la dignidad, y los gastos derivados de las asistencias jurídicas, psicológicas, médicas o sociales que se hayan prestado desde que se ha producido la vulneración de derechos.
- **Rehabilitación** (principio 21): el Estado tiene la obligación de prestar atención médica, psicológica, jurídica y social.
- **Satisfacción** (principio 22): el Estado debe hacer que cesen las violaciones de derechos humanos, que se verifiquen los hechos y se revele la verdad de manera pública —siempre y cuando no implique un mayor daño para la víctima—, se realice

---

<sup>312</sup> Párr. 90.

una disculpa pública o declaración oficial que restablezca la dignidad de la víctima, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas vinculadas a ella, que se apliquen las sanciones judiciales y administrativas a los responsables. También se incluyen las conmemoraciones y homenajes públicos a las víctimas.

- **Garantías de no repetición** (principio 23): el Estado tiene la obligación de implementar medidas preventivas que garanticen la no repetición de los hechos, como la sensibilización sobre el tema al conjunto de la ciudadanía, la formación de equipos profesionales, el control y funcionamiento efectivo de las medidas penales y civiles que se hayan dictaminado, y la prestación de servicios y recursos especializados de atención.

La Relatora sobre la Violencia contra la Mujer se ha pronunciado en la misma dirección, al establecer como “reparaciones adecuadas” (2006<sup>313</sup>) en el contexto de la violencia de género, aquellas dirigidas para que las mujeres puedan acceder a compensaciones penales y civiles, al acceso efectivo a recursos de apoyo y protección. Pero también a indemnizaciones económicas por el daño físico y/o psicológico —u otras oportunidades perdidas—, así como por el menoscabo a la reputación o a la dignidad, y por aquellos gastos derivados de la violencia sufrida, ya sean médicos, sociales o jurídicos.

Trasladar las medidas citadas al contexto español en el marco de la violencia sexual nos acerca a un escenario tan gris como el resto de las obligaciones expuestas. La reparación sigue siendo un derecho aún más pendiente que las otras obligaciones —Amnistía Internacional, 2015; Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016— que, aunque deficientes en todos los casos, atisban algunas mínimas respuestas. Sin embargo, cuando se habla de la reparación a víctimas de violencia de género, incluyendo también la violencia sexual, el alcance y significación de casos como el de Ángela González Carreño —tal y como reconocen organizaciones internacionales como Amnistía Internacional—siguen sin contemplarse (Dictamen adoptado por el Comité CEDAW. Comunicación núm. 47/2012<sup>314</sup>) o recientes investigaciones (Daza, 2016; ; Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016 ):

“Las mujeres víctimas de violencia cometida por particulares o por agentes del Estado, cualquiera que sea la agresión sufrida, no tienen garantizado el derecho a la reparación, porque la Ley Integral ni ninguna norma posterior ha abordado este importante derecho ...”

Amnistía Internacional, 2015:11

---

<sup>313</sup> Párr.84.

<sup>314</sup> El Estado español aún no ha implementado ninguna de las recomendaciones dictadas por el Comité CEDAW relativas a la reparación del daño.

El Informe Sombra, presentado por la Sección española de Amnistía Internacional ante el Comité CEDAW en 2015, vislumbra el mismo panorama en 2017. Ni la Ley Orgánica 1/2004 incluye el derecho a la reparación, ni se ha cubierto el vacío con la oportunidad que brindaba, en este sentido, la Ley del “Estatuto de la Víctima” —*Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima de Delito*—, ni tampoco las políticas públicas lo han incluido, como también se ha examinado .

Entre los derechos de las víctimas, el “Estatuto de la Víctima” deja fuera la reparación (Daza, 2014), a pesar de que sí que reconoce —Artículo 3. Derecho de las Víctimas— otros derechos como el de protección, información, apoyo, asistencia y atención. Desde el enfoque de género y derechos humanos —como se ha abordado en este capítulo—, esta obligación no ha conseguido la atención que merece en la norma citada, algo que ya advirtieron organizaciones como Amnistía Internacional en sus “Recomendaciones al Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima” (2015), cuando en 2014 el Gobierno aprobaba el *Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima de Delito*.

Esta investigación no está dirigida a entrar en un análisis jurídico detallado de la norma en el plano de la reparación. A pesar de ello, un enfoque interdisciplinar de las normas—y no necesariamente jurídico— reconoce los vacíos identificados en la práctica, en relación a la indemnización, garantías de no repetición o satisfacción para las víctimas de violencia sexual.

Juristas especializadas en la materia (Daza, 2014; Naredo, 2014), y las escasas investigaciones producidas al respecto —Amnistía Internacional, 2006; Amnistía Internacional, 2015; Toledo, Bodelón, Tur, et al., 2016—, advierten, por ejemplo de un marco normativo —*Ley 35/1995, de ayudas a víctimas de delitos violentos o contra la libertad sexual*— ineficaz para garantizar el derecho a la indemnización y la rehabilitación de las víctimas de violencia sexual. De esta forma, la crítica al “Estatuto de la Víctima” discurre en este aspecto, como refiere Daza (2014), al hecho de que “debería aprovecharse para unificar en el mismo la regulación generalista sobre las víctimas, y actualizar y reformar la normativa del programa de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, bien necesitada de ello” (2014: 274).

En la práctica, las organizaciones de mujeres y juristas expertas que atienden a las mujeres víctimas de violencia sexual —Amnistía Internacional, 2015; Fundación para la Convivencia Aspacia, 2015— reseñan los enormes problemas para el cobro de las indemnizaciones, la falta de la proporcionalidad de éstas en relación a la gravedad del daño, las limitaciones de la Ley 35/1995 en caso de insolvencia del acusado, o la imposibilidad de garantizar ayudas provisionales cuando el agresor sexual se declara insolvente.

Ejercer, sin dudas, el derecho a la indemnización, tras haber sido víctima de violencia sexual, es otra dificultad que afrontan las mujeres ante el miedo a que la mitología patriarcal responda, considerando que exigirlo sin titubeos es una prueba del engaño de la acusación, o de frivolidad por parte de la víctima. Por ello, el Estado debe proporcionar, de forma inmediata y ágil, todos los medios para que las mujeres puedan acceder a la indemnización que le corresponda, proporcional al daño.

Los obstáculos para acceder al derecho a la indemnización se ven aún más agravados cuando la víctima es una mujer migrante en situación irregular. La Ley 35/1995 contempla como persona beneficiarias a:

“...quienes, en el momento de perpetrarse el delito, sean españoles o nacionales de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o quienes, no siéndolo, residan habitualmente en España o sean nacionales de otro Estado que reconozca ayudas análogas a los españoles en su territorio”. Artículo 2.

La residencia habitual —según el Reglamento (1997) que desarrolló la Ley (Artículo 2)— se refiere a la “residencia regularizada, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Extranjería”. Con lo cual, como reconoce Naredo, las migrantes irregulares víctimas de violencia sexual no podrían acceder, en ningún caso, a las indemnizaciones que contempla esta ley, al no entrar en dicha categoría:

“...la interpretación restrictiva resulta discriminatoria, ya que impide a las mujeres inmigrantes en situación irregular, cuya violación de los derechos humanos ha quedado acreditada en sentencia firme, beneficiarse de estas ayudas”. (2014: 35).

En relación a las obligaciones reparatorias en el plano de la rehabilitación y garantías de no repetición, en apartados anteriores se han detallado las enormes dificultades que abordan las víctimas de violencia sexual a nivel territorial para poder ver garantizados sus derechos a la asistencia médica, asistencia psicológica, jurídica o social, en relación a su condición como víctimas de violencia sexual fuera del entorno de la pareja o expareja. Pero también ante la inexistencia de recursos especializados, la falta de protocolos consensuados de coordinación interinstitucionales o la inexistente capacitación especializada de los y las operadores/as jurídicos/as.

Las garantías de no repetición son, a la vista, un espejismo ante una perspectiva en la que las medidas dirigidas a prevenir nuevas agresiones sexuales, o a asegurar la protección efectiva de las víctimas, siguen siendo inexistentes en las políticas públicas o en la propia normativa recientemente aprobada (“Estatuto de la Víctima”, 2015). Como

recuerda Amnistía Internacional, “reduce las medidas de protección a la prevención de la victimización secundaria derivada del procedimiento penal (Arts.19 y siguientes) y no establece medidas de protección frente a represalias y a nuevas agresiones en contextos distintos al procesal” (2015: 11).

La reparación en violencia sexual debe enfocarse desde una perspectiva global que tenga en cuenta los efectos diferenciales de la violencia sexual (Sisma Mujer, 2013), cuyas secuelas y consecuencias en la vida de las mujeres —en sus proyectos de vida— son distintas a otras violencias, aunque tengan elementos en común. En este sentido, debe contemplar los diferentes niveles de daño que enfrentan las víctimas —emocional, relacional y subjetivo—, aplicando reparaciones adecuadas a cada nivel, pero apuntando, en todo caso, al restablecimiento de los derechos vulnerados, como pueden ser el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a una vivienda, el derecho a una educación...

La relación entre este enfoque y la superación del daño está íntimamente relacionada. En este sentido, las expertas psicólogas apuntan que “la protección y la garantía de derechos a la verdad, la justicia y la reparación son un elemento determinante en la superación de los efectos emocionales de la violencia sexual” (Morales, 2012: 1). Como recuerdan, así mismo, las relatoras (2006, 2016), la reparación debe ser transformadora de forma global e individual, incluyendo, como elemento central, la “justicia restitutiva” y, de forma transversal, su transcendental papel en la lucha contra la impunidad ■





## CONCLUSIONS

---





The anguish faced by the victims and survivors of sexual violence in Spain can be framed within a deliberate strategy that has been flawlessly constructed, executed and sustained by the patriarchal system and “patriarchal ideology” existing around the world since antiquity (Amorós, 1985); its aim being to control women’s bodies and freedoms through a multitude of mechanisms (Foucault, 1975).

The options at our disposal in the dismantling of this patriarchal structure – a structure which supports sexual violence, other forms of violence and discriminatory acts against women – necessarily require an analysis of its origins, the elements which justify its existence, the actors who enact it and the real alternatives that will help eradicate this patriarchal structure. Similarly, and if we recall the feminist mantra of “What is not named does not exist” – adapted from a sentence originally coined by George Steiner, meaning that a society “cannot prohibit that which it cannot name” (Steiner, 2002:76) – the detailed signification of sexual violence is a political exercise that must be included in any strategy aimed at mitigating this problem. A feminist perspective must “conceptualise in order to politicise” (Amorós, 2005) sexual violence in the terms I have referred to and which have been reiterated in the conclusions of this work.

The conclusions resulting from my research are presented below, along with a few brief recommendations to be considered as part of our fight against sexual violence, understood as the extreme manifestation of gender-based violence:

1. Sexual violence and its multiple expressions are extreme forms of gender-based violence, whose goal is to control women’s bodies and freedoms through “physical and moral domination” (Segato, 2013), which consents to all of its manifestations, including abuse, harassment, rape, assault, sexual torture, female genital mutilation, trafficking of women for sexual exploitation, forced marriage, and forced nudity.

Sexual violence takes place in varying degrees and in many different settings. General Recommendation No. 19 of the CEDAW Committee and the Secretary-General of the United Nations (2006) establish the various settings where all the manifestations of gender-based violence take place: in the street, home, workplace, rural areas, during war, dictatorships, established democracies and countries governed by the rule of law. And more recently, this list has been expanded with the addition of digital environments that are home to *sexting* without consent, *ciberbullying* and *grooming*, among others. As has been shown, sexual violence exists in any sphere where people interact and socialise with others, spreading its tentacles, unfettered, throughout history.

Although we may claim that it is clear that extreme forms of sexual violence (rape, sexual abuse of children, sexual torture, etc.) exist whose consequences lead to serious physical and psychological effects for its victims, if we take into consideration the position of Liz Kelly (1988), it is my contention that extreme forms of sexual violence can be understood as falling within a continuum of sexually violent acts that are inseparable and interconnected as if to form a network. This overarching vision allows us to understand that all forms of sexual violence that co-exist with us – and not only the more extreme forms – carry devastating consequences, and not only for those who have suffered the most brutal forms of sexual violence, but for all women: “all forms of sexual violence are serious and that it is inappropriate to create a hierarchy of abuse within a feminist analysis” (Kelly, 1988: position 1480).

The damage that results from childhood sexual abuse perpetrated by a father to his daughter, the raping of a woman by her co-worker, the sexual torture suffered by a woman in a situation of conflict are all, from a psychological standpoint, profoundly traumatic and have dire, and often irreparable effects on their life plans. But I also consider it fundamental, as Kelly claims (1988), to avoid establishing hierarchies of sexual violence within feminism, and to understand that its more extreme forms are part of that continuum that women have lived with since their birth. Therefore, the damage is individual, but also collective, a concept that international jurisprudence in the field of human rights has skilfully called “communities of damage”, a notion which has been developed to a greater extent in Inter-American Court of Human Rights than in its European counterpart.<sup>315</sup>

Along these lines, and through court resolutions adopted from a gender-based perspective and within the scope of human rights, the right to compensation for victims of gender-based violence complements “the Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law” (General Assembly of

---

<sup>315</sup> For more information on this subject, see Chapter 6 (“Compensation from the Gender-Based Perspective”) part of the research work carried out by the Supreme Court of Justice of Mexico and the non-governmental organisation *Women’s Link Worldwide* (2014): “*El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada* (The principle of gender equality in comparative jurisprudence)”. Mexico D.F.

the United Nations, 2005)<sup>316</sup>. These guidelines, as Fries (2008) points out, establish definitions that are intentionally geared towards “recognising historically discriminated groups, collectives and communities”. At the same time, as in the case of women, “contemporary forms of victimisation, while essentially directed against persons, may nevertheless also be directed against groups of persons who are targeted collectively” (General Assembly of the United Nations, 2005).

**2. Sexual violence has existed and been exercised from antiquity to the present – this has been reflected and well-documented in historical writings – and its main characteristic is the persistent invisibilisation and acceptance of the forms in which it is committed, and above all, the negation of the subject upon whom it has been exercised, i.e. women and children.**

The literature in this field and recent studies and statistics regarding its prevalence (FRA, 2014; WHO, 2013) confirm that sexual violence is inarguably a gender-based crime that is “ahistoric” (Osborne, 2009; Vigarello, 1998; Bourke, 2009; Maillard, 2012; Dunn, 2013; Córdoba de la Llave, 2008; Gil Ambrona, 2008), adapting itself to each historical period, and interpreted according to the ideological parameters of the era. Yet each instance shares a series of common threads that persist throughout history of humanity: the pain and the suffering it causes among its victims; the way it is committed through “the predatory occupation of feminine or feminised bodies” (Segato, 2014: 152); the resulting delegitimisation and negation of the dignity and humanity of the victims and their individual freedom; social and judicial tolerance of such acts; the repeated impunity of its aggressors; and the patriarchal doubt as to the veracity of victims’ claims – repeatedly nourished by all the rape myths surrounding sexual violence – which hovers over its victims unlike any other crime.

Throughout history, sexual violence has been referred to in many different ways. The terms used often led to interpretations that were significantly disproportionate to the pain caused: statutory rape, abduction, indecent assault, “carnal knowledge of the female”, forcible assault, “sleep with a woman”, rape, sexual abuse, sexual assault, etc. Even today, whenever sexual violence is discussed, speakers are often unaware of the multiple forms of rape; as if only forcible penetration were the only sexual violent act to exist, the most terrible act.

---

<sup>316</sup> These principles are known as the “the Van Boven/Bassiouni Principles”. For more information see the document prepared by the General Assembly of the United Nations on 16 December 2005: “Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law”. 64th plenary session, Resolution 60/147.

The terms used and their interpretations are the result of an ideological discourse that is patriarchal and misogynist in nature (Bosch & Ferrer, 1999) which, since the Middle Ages has embodied an entire theory regarding women: on their biological characteristics – imperfect and inferior – and their mundane bodies susceptible to conquest and domination. This patriarchal ideology – which delegitimises women’s bodies and is supported by great thinkers and theorists known for their misogynistic discourses in the fields of crime, medicine and psychology (Bourke, 2009), would leave its mark up to the present day.

**3.** Since the 1960s, and thanks to the feminist movement and its theoretical framework, sexual violence – as a manifestation of violence committed against women – would be decisively interpreted as a political problem and a violation of women’s human rights. This new perspective was the result of an interdisciplinary approach which afforded the study of the origins, causes, as well as the specific consequences this form of violence entails for its victims, and in general, for society as a whole. Feminist political theory was the first and until very recently, was considered to be the only school of thought to use an interdisciplinary approach to define a causal relationship between the patriarchal system and sexual violence (Millet, 1975; Brownmiller, 1975, Griffin, 1986; Kelly, 1988; MacKinnon, 1995; Segato, 2003). In this sense, the feminist movement and feminist thinkers have achieved the following:

- A conceptualisation of all aspects of sexual violence in its multiple manifestations.
- Being the first to consider rape as being both a political and sexual issue, as posited in *Sexual Politics* (Millet, 1975).
- Being the first to dissect – and up to the present day they have been the only ones to do so – each of the elements that make up sexual violence, its intentionality and its consequences, understanding sexual violence to be an “institution” (Whisnant, 2013) or political practice, and even a “terrorist institution” (Card, 1991; Burgess-Jackson, 1996), as part of an earlier debate on whether sexual violence is just about power or whether it involves sexuality as well.

Feminist theory has also been responsible for “reconceptualising” (Sánchez, 2014) extreme sexual violence in keeping with the description of certain facts which go unnoticed in accounts of human rights violations. This is a consequence of the notion of “interactive universalism” (Benhabib, 1990), or of the “false universalism” (Valcarcel, 2008, 2010) which assumes the male to be the universal subject, a notion

which can be found in present-day realities of interventions carried out by cooperative development NGOs or in missions carried out by International Organisations in countries experiencing or surviving armed conflict.

**4.** The feminist theoretical thinking and movement have been able to define the conceptual boundaries and strategies needed to visibilise and combat sexual violence from a gender-based perspective, making it patently clear that it is a violation of human rights; deconstructing the notion that consent and the use of force are the only strategy used in sexual assault; and identifying aggressors not as males unable to control their “false” instincts, but as co-workers, husbands, fathers, brothers, etc. who are aware of their actions.

In spite of this, since the 1990s, both Spanish and European<sup>317</sup> feminist movements have overlooked and neglected sexual violence and its victims. In Spain, this neglect is such that its consequences have been felt yet generally overlooked up to present day, this possibly owing to women’s organisations and the feminist movement being overwhelmed by the incessant and exhausting work involved in the implementation of the Organic Law 1/2004 on Integrated protection measures to combat gender-based violence (*Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*), whose detractors have done their utmost to destroy from the very day the law was passed.

Surprisingly, the same thing is also occurring in the Spanish academic sphere, which has witnessed a paucity of feminist publications (Boledón, 2010; Osborne 2009; Bosch, 2009; Durán, 2012; Sánchez, 2014) dissecting the notion of sexual violence, quite unlike the large number of works published on the topic of gender-based violence in intimate relationships.

**5.** Faced with the unfavourable Spanish and European context in these matters, attempts have been made to mitigate the existing deficiencies by looking to other countries which will undoubtedly be crucial in future public policy-making here. It is important at this point to highlight other spaces where Latin American women scholars, feminist legal theorists and feminist movements figure prominently (Mackinnon, 1989; West, 2000;

---

<sup>317</sup> Between 2010 and 2016 as part of my work as spokeswoman for a women’s organisation here in Spain I have been collaborating with Europe’s largest network of women’s and feminist organisations combating against gender-based violence within Europe (WAVE, or *Women Against Violence Europe*). This organisation is a European leader in the fight against gender-based violence, in addition to enjoying advisory status to the United Nations and being actively involved in the drafting of the Istanbul Convention (2011). Its President, Rosa Logar, is a member of the GREVIO committee. So far, the organisation has not included any objectives or activities specifically targeting sexual violence.

Facio & Fries 1999; Charlesworth, Chinkin & Wright, 1991; Barlett & Kennedy, 1991; Charlesworth, 1999; Bodelón, 2010; Edwards, 2011), and the international human rights instruments, whose “magna Carta of Women” by CEDAW (Facio, 2014) – will continue to represent the best instruments in the fight against sexual violence at the international level.

The opportunities afforded by international regulations and jurisprudence in the field of gender-based violence – and especially in the case of sexual violence – or the conventions on violence against women – as in the case of the Convention of Belém do Pará (1994) and the recent Istanbul Convention (2011) – are undoubtedly tools aligned with feminism in the fight against all forms of sexual violence. In many instances, the legal precedents of the International Courts or other international human rights instruments, such as the Special Rapporteur on violence against women, offer a detailed signification of sexual violence that surpasses and is more appropriate than that offered by Spanish law, the latter lacking a gender-based perspective required by the Spanish Criminal Code in order to address gender-based crime of this magnitude as has been repeatedly observed throughout this study. In this sense, the boundaries of “consent” are best delineated in the jurisprudence of International Criminal Courts such as those found in Ruanda or the former Yugoslavia.

6. The ceaseless mobilisation on the part of the feminist political movement has resulted in many accomplishments, including the inclusion of violence against women on the public and policy-making agenda, turning the issue into a matter of state, as well as the passing of key laws that protect and guarantee the rights of women, such as the historic Organic Law 1/2004 on Integrated protection measures against gender-based violence (*Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*) or Law 3/2007 on Effective equality for men and women (*Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres*). However, specific work on sexual violence has yet to be tackled by this movement.

In this sense, in the field of violence against women, the State has, in general, failed to observe and apply international human rights law within its territory – and in those territories under its effective control and jurisdiction – in the terms set forth in the international human rights framework, and in the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Convention against Torture) and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).



This has been denounced by non-governmental women's and human rights organisations: CEDAW Shadow Report on Spain, 2014; Amnesty International, 2006, 2009, 2011, 2015; Doctors of the World, 2016. These organisations cite international bodies in their reports, such as the CEDAW Committee or the United Nations, through their "Concluding Observations on the Combined Seventh and Eighth Reports of Spain" (2015) or the observations of the "Working Group on the Issue of Discrimination of Women in Law and in Practice" (2014), and the "Concluding Observations of CERD on the 18<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Reports on Spain" (2011), among others.

As has been explained in detail in the last chapter of this study, the situation has been made worse in the particular case of sexual violence, which in the last 30 years represents a stage rife with shadows and obstacles for its victims and survivors. The response offered by the Spanish government, evaluated in this study against the due diligence standard which establishes the four responsibilities of the state to combat violence against women (prevention, protection and attention; investigation and sanction; and full compensation for victims) is distressing and a cause for concern.

My research has shown that the Spanish state has failed to fulfil its obligations and responsibility in combating sexual violence. The consequences of this have a direct impact on every victim and survivor, but particularly on the most vulnerable groups, such as immigrant and refugee women. If undocumented, the latter groups are doubly punished: for the violence they have suffered as well as their undocumented status.

This allows us to conclude that sexual violence is a form of violence against women that has been the most ignored form of violence in the last 40 years. And this is true even when we consider other extreme manifestations of gender-based violence, such as the trafficking of women for the purposes of sexual exploitation, forced prostitution and female genital mutilation. If we chart the historical role played by the feminist movement in Spain it is evident that without the feminist political thinking and movement, the issue of violence against women would have never left the bedroom, reached our institutions, or have been addressed through specific laws directed to combating our historical discrimination.

This is why we cannot expect States to take up the reins in this field. As feminists, it is our duty to summon and reprimand them to ensure they fulfil their obligations. This has to be done in order to protect and guarantee the rights of victims and survivors of sexual violence, as in the case of gender-based violence in intimate relationships. And in particular, to tackle, once and for all, one of the basic pillars upon which the patriarchal system is based: the control of women's bodies, through sexual violence.



To conclude this work, I would like to offer some brief recommendations with an aim to providing alternatives in the near future in the fight against sexual violence – in tune with the current political and social context – and whose consequences may change the lives of millions of women.

Occurring in the last year (2016-2017), albeit residually, a number of national feminist and human rights organisations such as 7N or Amnesty International have begun to include in their already-full political agendas the demand that sexual violence be taken into consideration, as in the case of other acts of gender-based violence. In this sense, some of these organisations have called for the extension of Organic Law 1/2004 of Integrated protection measures against gender-based violence (*Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección contra la Violencia de Género*) to other forms of violence against women, while other organisations and women experts recommend the drafting of a new law specifically targeting sexual violence.

At the same time, media sources have begun to report on these demands and are significantly starting to include and analyse the issue of sexual violence in their reports. Despite this, sexual violence is still being interpreted in rape myth terms, which emphasises this extreme form alone, as though this were its only manifestation.

Feminist voices do not seem to have reached the political sphere, and much less the Spanish government, which, in the midst of discussion on the “Government Agreement on Combating Gender-Based Violence” (*Pacto de Estado contra la Violencia de Género*), the only action it has decided to implement is increasing the amount of funds earmarked in its general budget for the prevention of Gender-Based Violence by four million Euros (May 2017). This amount, in economic terms, will only allow for management of two comprehensive centres for victims and survivors of sexual violence<sup>318</sup>.

## **General recommendations**

---

In keeping with the research undertaken as part of this study, according to the provisions of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and the recently ratified Istanbul Convention (2011), the options that should be provided as part of the fight against sexual violence – if we take into

---

<sup>318</sup> For more information see the public tenders for centres providing assistance for victims of gender-based violence.

account the magnitude and prevalence of this problem – must be applied across the board, be evaluable and in line with the international human rights framework. In this sense, a series of general recommendations are offered below:

1. Immediate development of Public Policies through an Action Plan that includes specific measures directed to combating sexual violence in all of its forms, and fulfilling the four areas of obligation of the State. These have been analysed in detail in Chapter 4 of this study: prevention, investigation and sanction, assistance and integrated compensation.
2. Development and implementation of a system that will monitor and evaluate public policies requiring cooperation with independent organisations consisting of women feminists who are experts in the field, feminist organisations and different social actors: the police force, legal workers, healthcare workers, specialised services, education workers, emergency services, political groups and a Government Office for Gender-Based Violence.
3. Allocation of specific funding to combat sexual violence as part of the General State Budget in order to fulfil the state's four areas of responsibility cited above: prevention, investigation and sanction, assistance and integrated compensation.
4. Immediately guarantee access to specialised care centres for all victims of sexual violence. These must be accessible, readily available and non-discriminatory, with interdisciplinary teams consisting of lawyers, psychologists, counsellors, social workers and criminologists. They must be open 24 hours a day, 7 days a week and be found across the country in every autonomous region in Spain.
5. Adapt regulations to sexual violence – using a gender-based and human rights approach – to guarantee appropriate application of procedural law for victims of sexual violence.
6. Specialised training for legal workers who work with victims and survivors of sexual violence.
7. Reforms to immigration laws that will protect women who are victims of sexual violence.
8. Reforms to Royal Decree 16/2012 which guarantee the right to health for all women victims of sexual violence regardless of their documented status.

9. Include lines of research in Spanish Universities and Higher Institutes for Gender Studies Research that are directed to the analysis of origins, causes, consequences and ways to combat sexual violence as a form of gender-based violence and instrument that sustains the patriarchal system.

Using a theoretical framework, this research has sought solutions to a horrific situation steeped with errors. Yet, in practical terms, the arduous work of recent months has also brought on emotions that go far beyond mere theory. These scars have left their mark on me and represent the footing upon which this work rests ■





## BIBLIOGRAFÍA

---



## BIBLIOGRAFÍA

---

- ACCATI, L. (2005). Hijos omnipotentes y madres peligrosas. El modelo católico y Mediterráneo. En Morant, I; Ortega, M; Lavrin, A; Pérez Cantó, P. *Historia de las Mujeres en España y América Latina. El Mundo Moderno* (pp.63-104). Madrid: Cátedra.
- AGRA, M. (2010). Conceptualizar es politizar. Más que una consigna. En López, M; Possada, L (Eds.). *Pensar con Celia Amorós* (pp.16-19). Madrid: Fundamentos.
- ÁLVAREZ, S. (2001). Diferencia y teoría feminista. En Beltrán, E.; Maquieira, V.; Álvarez, S; Sánchez, C (Eds.). *Feminismos. Debates teóricos contemporáneos* (pp. 243-278). Madrid: Alianza.
- AMORÓS, C. (1991). *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Barcelona: Anthropos.
  - 2005. *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias...por las luchas de las mujeres*. Madrid: Cátedra. Feminismos .
  - (2008). *Mujeres e imaginarios de la globalización (reflexiones para una agenda teórica global del feminismo)*. Argentina: Homos Sapiens.
- ASTELARRA, J. (2005). *Veinte años de políticas de igualdad*. Madrid: Cátedra. Feminismos.
- ATENCIO, G. (2015). *Feminicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres*. Madrid: FIBGAR y CATARATA.
- BARLETT, K & KENNEDY, R. (1991). *Feminist legal theory: readings in law and gender*. Boulder: Westview Press.
- BARTOLOMEI, M (2015). *Género y derechos humanos. La violencia sexual como crimen de lesa humanidad*. En García, C; Maquieira, V; Mó, E; Sánchez, C; Sebastián, J. (Eds.). *Violencia de Género: escenarios y desafíos* (pp.131-157). Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
- BARROW, A. (2010). Las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad: promover las cuestiones de género en los conflictos armados y en el derecho internacional humanitario. *International Review of the Red Cross*, 877, pp.1-17.



- BAZÁN DÍAZ, I. (2011). María San Juan (Guernica, 1489-1490): una mujer acosada para forzar una relación sexual no consentida. En Fuente, J; Morán, R. (Eds.) *Raíces Profundas. La violencia contra las Mujeres (Antigüedad y Edad Media)* (pp.277-303). Madrid: Ediciones Polifemo.
- BENHABIB, S. (1990). El otro generalizado y el otro concreto: la controversia Kohlberg-Gilligan y la teoría feminista. En Benhabib, S; Drucille, C. (Eds.). *Teoría feminista y teoría crítica. Ensayos sobre la política de género en las sociedades de capitalismo tardío* (pp. 119-150). Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.
- BERGOFFEN, D. (2003), February 22, 2001: Towards a Politics of the Vulnerable Body. *Hypatia*, 18(1), pp. 116-134.
- BODELÓN, E. (2012). Las Políticas Públicas contra la Violencia Patriarcal en España y Brasil. *EMERJ. Revista da escola da Magistratura de Rio de Janeiro*, 15 (57), pp.43-59.
  - 2010. Derecho y justicia no androcéntricos. *Quaderns de Psicologia*, 12 (2), pp 183-193.
- BORDIEU, P. (2000). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- BOSQUE, I. (2012). “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer” en EL PAÍS. Recuperado el 17 de junio de 2013, desde: [http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/1330717685\\_771121.html](http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/1330717685_771121.html).
- BOSCH, E. & FERRER, V. (2002). *La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata*. Madrid: Cátedra. Feminismos
- BOURKE, J (2009). *Los violadores. Historia del Estupro de 1860 a nuestros días*. Barcelona: Crítica.
- BROWNMILLER, S. (1981). *Contra nuestra voluntad. Un estudio sobre la forma más brutal de agresión a la mujer: la violación*. Barcelona: Planeta.
- BURT, M.R. (1980). Cultural Myths and support for rape. *Journal of Personality and Social Psychology*. 38 (2), pp.217-230.
- BUSTAMANTE D.; VÁSQUEZ P. (2011). La convención Belém Do Pará un balance de su aplicación en la jurisprudencia de la corte interamericana, a 16 años de su entrada en vigor. *Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas*, 11 (20), pp. 15-35.

- BUTLER, J. (2006). *Vida precaria: el poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires: Paidós.
- CAVARERO, A. (2011). *Horrorism. Naming contemporary violence*. New York: Columbia University Press.
- CHIAROTTI, S. (2015). Nuevos paradigmas de justicia. En Chiarotti, S; Montaña, J. *Reflexiones feministas. Nuevos paradigmas de justicia sobre violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe* (pp.7-17). Perú: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres-CLADEM.
- CHENSHAW, K. (1989). Demarginalizing the Interseccion of Race and Sex: a Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminista Theory and Atiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, (1), 8, pp.139-167.
- CHO S., CRENSHAW K., McCALL L. (2012). Towards a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis. *Signs. Chicago Journals*, (38), 4, pp. 785-810.
- DAZA, M. (2016). *Escuchar a las víctimas. Victimología, Derecho Victimal y Atención a las Víctimas*. Valencia: Tirant lo blanch.
- DE MIGUEL, A. (2005). La violencia de género: la construcción de un marco feminista de interpretación. *Cuadernos de Trabajo Social*, (168), pp.231-248.
  - 2008. La violencia contra las mujeres. Tres momentos en la construcción del marco feminista de interpretación. ISEGORÍA. *Revista de Filosofía Moral y Política*, (38), pp.129-137.
- DE VICENTE MARTÍNEZ, R. (2001). Los delitos contra la libertad sexual desde la perspectiva de género. En Hurtado, J (dir.). *Derecho Penal y Discriminación de la Mujer. Anuario de Derecho Penal 1999-2000* (pp.83-100). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- DUNN, C, (2013). *Stolen women in Medieval England. Rape, adduccion and adultery, 1100-1500*. New York: Cambridge University Press
- DURÁN, M, (2012). *Valoración social de la violencia sexual: el rol de los mitos sobre las agresiones sexuales*. IX Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género.
- EDWARDS, A. (2011). *Violence against women under international Human Rights Law*. New York: Cambridge University Press.

- EDWARDS K., TURCHICK J., DARDIS C., REYNOLDS N., GIDYEZ C. (2011). Rape Myths: History, Individual and Institutional Level Presence, and Implications for Change. *Feminist Forum. Springer*, (65), pp.761-773.
- FACIO, A & FRIES, L. (Eds.). *Género y Derecho*. Santiago de Chile: Lom/American University, 1999.
- FACIO MONTEJO, A. (1992). *Cuando el género suena, cambios trae. Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal*. San José: ILANUD
  - 2001. *Como hacer informes paralelos a la CEDAW*. Costa Rica: ILANUD.
  - 2010. *El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: análisis de los casos ante el Comité de la CEDAW*. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- FERIA-TINTA, M. (2007), Primer caso internacional sobre violencia de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El caso del penal Miguel Castro Castro; un hito histórico para Latinoamérica. *Revista CEJIL*. Año II, (3), pp. 30-45.
- FERNÁNDEZ RODRIGUEZ DE LIÉVANA, G. (2015). Los estereotipos de género en los Procedimientos Judiciales por Violencia de Género: el papel de Comité CEDAW en la eliminación de la discriminación y de la estereotipación. *Oñato Socio-legal Series*, 5 (2), pp. 498-519.
- GALTUNG, J. (2003b). Violencia cultural. Bilbao: Gernika Gogoratuz (documento de trabajo núm. 14).
- GARCÍA, L. (2011). ¿Qué es un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben. *A Parte Rei. Revista de Filosofía*, 5, pp.1-8.
- GIL AMBORNA, A. (2008). *Historia de la violencia contra las mujeres. Misoginia y conflicto matrimonial en España*. Madrid: Cátedra.
- GÓMEZ BRAVO, G. (2005). *Crimen y castigo. Justicia y Violencia en la España del SXIX*. Madrid: Catarata.
- GOLDMAN, E. (1906), *La tragedia de la emancipación de la mujer*. Recuperado el 20 de febrero de 2017, desde:  
<https://www.marxists.org/espanol/goldman/1906/001.htm>

- GONZÁLEZ AMUCHÁSTEGUI, J. (1996). Mujer y derechos humanos: concepto y fundamento. En *Derechos humanos de las mujeres. Aproximaciones conceptuales* (pp.187-217). Lima: Movimiento Manuela Ramos/UNIFEM.
- GONZÁLEZ SUÁREZ, A. (2014). El quebranto del silencio: la violación como arma de guerra. En Quesada, F. (Ed.). *Guerras, prestigio e imaginarios de género. Cuerpos territorios y anexiones* (pp.35-69). Madrid: Biblioteca Nueva/Minerva.
- GONZÁLEZ, A. (1979). *El feminismo en España, hoy*. Madrid: ZERO ZYX.
- GRIFFIN, S. (1986). RAPE. *The Politics of Consciousness*. New York: Harpercollins.
- GUERRA LÓPEZ, S. (2006). Mito y violencia sexuada en las Metamorfosis de Ovidio. En Molas Font, D; Huntingford, E; Guerra López,S; Zaragoza Gras,J. *La violencia de género en el mundo antiguo* (pp.169-176). Madrid: Instituto de la Mujer. Colección Estudios.
- KELLY, L. (1988). *Surviving sexual violence*. Cambridge: Polity Press.
- LAGARDE, M. (2009). Claves feministas en torno al feminicidio. En Molina, E.; San Miguel, N (Coords.). *Nuevas líneas de investigación en género y desarrollo* (pp.211-233). Madrid: UAM, Colección Cuadernos Solidarios, nº 3, vol. I.
- LAQUEAUR, T. (1994). *La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud*. Madrid: Cátedra.
- LAPORTA, E. (2012). *Informes sombra: instrumentos para obligar a los Estados a cumplir con la CEDAW*. Recuperado el 15 de abril de 2017, desde:  
<http://www.feminicidio.net/articulo/informes-sombra-instrumentos-para-obligar-los-estados-cumplir-con-la-cedaw>
- LARRARDE, J.M. (2012). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la protección de los derechos humanos de las mujeres. *Criterio jurídico garantista*. Año 4 (7), pp. 58-79.
- LLEDÓ, E (Coord.), CALERO, M.A. & FORGAS, E. (2004). *De mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en la 22.ª edición del DRAE*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer).
- LOMBARDO E.; LEÓN M. (2014). Políticas de igualdad de género y sociales en España: origen, desarrollo y desmantelamiento en un contexto de crisis económica. *Investigaciones Feministas*, 5, pp. 13-34.

- LÓPEZ, S. (2015). Relatos que condicionan experiencias: implicaciones de los relatos de las políticas públicas sobre la violencia contra las mujeres y el aborto en España. *Revista de estudios políticos*, 167, pp. 165-191.
- LORENTE, A. (2010). Violación y transgresión. Medicina Forense y Moral Sexual en la España del Siglo XIX. Asclepi. *Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia*, LXII, nº1, pp. 177-208.
- MACKINNON, C. (1995). *Hacia una teoría feminista del Estado*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- MAILLARD ÁLVAREZ, N. (2012). Una aproximación a la violencia sexual en Sevilla a través de los perdones de estupro (siglos XV-XVII). *Archivo Hispalense. Revista Histórica, Literaria y Artística*, Tomo XCV (288-290), pp. 149-163.
- MANTECÓN NOVELLÁN, T. (1997). *La Muerte de Antonia Isabel Sánchez. Tiranía y escándalo en una sociedad rural del Norte español en el Antiguo Régimen*. Alcalá de Henares: Centro Estudios Cervantinos.
- 2013. Impacto de la violencia doméstica en sociedades tradicionales: La muerte de Antonia Isabel Sánchez, quince años después. *Memoria y civilización. Anuario de Historia. Revista del Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Navarra*, 16, pp.86-115.
- MAQUEIDA, V. (2011). Mujeres, globalización y derechos humanos. Reflexiones desde la categoría de “tensión”. *Pensamiento Iberoamericano*, 9, pp. 21-41.
- MARTÍN, A. (2005). Mujeres anónimas del pueblo llano: heterodoxas y excluidas. En Morant, I;Ortega, M; Lavrin, A; Pérez Cantó, P. *Historia de las Mujeres en España y América Latina. El Mundo Moderno* (pp.63-104). Madrid: Cátedra.
- MARTÍN, M. & LIROLA, I. (2013). *Los crímenes de naturaleza sexual en el derecho internacional humanitario*. Barcelona: Instituto Cartalá per la Pau.
- MERINO, V. (2007). Aportaciones conceptuales de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer. *Anuario de filosofía del derecho*, 24, pp. 387-408.
- MILLETT, K. (2010). Política Sexual. Madrid: Cátedra. Feminismos.
- MOLAS FONT, M.D. (2006). La violencia contra las mujeres en la poesía griega. De Homero a Eurípides. En Molas Font, D; Huntingford, E; Guerra López,S; Zaragoza Gras,J. *La violencia de género en el mundo antiguo* (pp.34-69). Madrid: Instituto de la Mujer. Colección Estudios.

- MORAGA, M<sup>a</sup>A. (2008). Notas sobre la situación jurídica de la mujer en el Franquismo. *Feminismos/s*, 12, pp. 229-252.
- MORÁN, R. (2011). Silencio de Mujer. Mala voz de Fueros. En Fuente, M.J.; Morán, M.; (Coords). *Raíces Profundas. La violencia contra las Mujeres (Antigüedad y Edad Media)* (pp.277-303). Madrid: Ediciones Polifemo.
- MORALES, C. (2012). Violencia sexual contra las mujeres: compresiones y pistas para un abordaje psicosocial. *Clave de Psicología: reflexiones urgentes en torno a la violencia sociopolítica y el malestar ético*, 1, pp.1-21.
- MURRAY, E, (1977). *The political language of helping professions*. Recuperado el 21 de junio de 2016, desde: <http://www.irp.wisc.edu/publications/dps/pdfs/dp19574.pdf>
- NAREDO, M. (2009). Adecuación de las políticas públicas de seguridad a las necesidades de las mujeres: una cuestión urgente. *Revista Catalana de Seguridad Pública*, pp. 67-79.
  - 2010. El miedo de las mujeres como instrumento del patriarcado. Claves para una política pública de seguridad ciudadana que incorpore las necesidades y demandas de las mujeres. *PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global*, 109, pp. 79-86.
  - 2014. *Violadas y Expulsadas. Entre el miedo y la desprotección. Mujeres Migrantes en situación irregular frente a la violencia sexual en España*. Madrid: Fundación para la Convivencia Aspacia.
- NAREDO, M & TARDÓN, B. (2017). Dimensión política legal. *Flores en el asfalto. Causas e impactos de las violencias machistas en las vidas de mujeres víctimas y sobrevivientes*. Pp. 83-106. Bilbao: Mugarik Gabe.
- OCHY, C. (2005). Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas. El dilema de las feministas negras. En *Mujeres desencadenantes. Los estudios de género en la República Dominicana al incidio del tercer Milenio'*. Santo Domingo: INTEC.
- OSBORNE, R. (2009). *Apuntes sobre violencia de género*. Barcelona: Bellaterra.
- PASTOR RIDRUEJO, J.A. (2010). *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*. Madrid: Tecnos.
- POSADA, L. (1992). Cuando la razón práctica no es tan pura (Aportaciones e implicaciones de la hermenéutica feminista alemana actual: a propósito de Kant). *ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política*, N° 6, pp. 17-36.



- R.WALKOWITZ, J (1995). *La ciudad de las pasiones terribles. Narraciones sobre peligro sexual en el Londres victoriano*. Madrid: Cátedra. Feminismos.
- RIVIERE, A (1994). “*Caídas, miserables, degeneradas*”. *Estudio sobre la prostitución en el siglo XIX*. Madrid: Horas y Horas.
- SÁNCHEZ, C. (2001). Genealogía de la vindicación. En Beltrán, E.; Maquierira, V.; Álvarez, S; Sánchez, C (Eds.). *Feminismos. Debates teóricos contemporáneos* (pp. 17-73). Madrid: Alianza.
- 2009. Hacia un universalismo interactivo y globalizado. En Máiz, R. (Coord.). *Teorías políticas contemporáneas* (pp.415-426). Madrid: Tirant lo Blanch.
- 2014. Sobre el mal y las violaciones masivas contra las mujeres. Aproximaciones desde filósofas contemporáneas. En Quesada, F. (Ed.). *Guerras, prestigio e imaginarios de género. Cuerpos, territorios y anexiones* (pp.345-371). Buenos Aires, Argentina: Biblioteca Nueva/Minerva.
- SCOTT, J. (1990). El género una categoría útil para el análisis histórico. En Nash , M; Amelang, J (Eds). *Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea* (pp. 23-56). Valencia: Alfons el Maganim.
- SEGATO, R.L. (2003). *Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos*. Buenos Aires: Prometeo.
- SEGATO, R.L (2013). *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- 2014. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. En Quesada, F. (Ed.). *Guerras, prestigio e imaginarios de género. Cuerpos territorios y anexiones* (pp.147-183). Madrid: Biblioteca Nueva/Minerva.
- STEINER, G. (2002). *Extraterritorial*. Madrid: Siruela.
- STUART MILL, J. (2010). *El sometimiento de la mujer*. Madrid: Alianza Editorial. (Original 1869).

- TAJAHUERCE I., MATEOS C., (2016). Simulaciones sexo genéricas, bebés reborns y muñecas eróticas hiperrealistas. *Opción. Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía, Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología*. Año 32 (81), pp. 189-2012.
- VALCÁRCEL, A. (1997). *La política de las mujeres*. Madrid: Cátedra. Feminismos.
- 2008. *Feminismo en el mundo global*. Madrid: Cátedra. Feminismos
- VIGARELLO, G. (1999). *Historia de la violación. Siglos XVI-XX*. Madrid: Feminismos. Ediciones Cátedra.
- VIVES, L. (1940). *Instrucción de la Mujer Cristiana*. Madrid: Espasa Calpe. (Original: 1523)
- W.SCOTT, J. (1993). La mujer trabajadora en el SXIX. En Duby, G; Perrot, M (Dir.). *Historia de las mujeres en Occidente* (pp. 427-461). Madrid: Taurus
- W.SCOTT, J. (2008). *Género e Historia*. México: Fondo de cultura económica. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- WEST, R. (2004). *Género y teoría del derecho*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- WHISNANT, R, Feminist Perspectives on Rape, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Recuperado el 30 de enero de 2017, desde: <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-rape/>.
- WHILCHES, I. (2014). *Guía metodológica actualizada para la sensibilización y la prevención de las violencias basadas en el género*. Bogotá: Global Communities.

**Informes e investigaciones de organizaciones nacionales, internacionales, organizaciones no gubernamentales y grupos de investigación académicos.**

- ADAVAS. (2010). *20 años contra la violencia machista. Memoria de actividades 1991-2010*. León: ADAVAS. Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica. Recuperado el 9 de marzo de 2017, desde: [http://adavas.org/wp-content/uploads/2016/04/MEMORIA\\_1991-2010.pdf](http://adavas.org/wp-content/uploads/2016/04/MEMORIA_1991-2010.pdf)



- AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2004). *Hacer los derechos realidad. El deber de los Estados de abordar la violencia contra las mujeres*. Madrid: Editorial Amnistía Internacional (EDAI).
- 2005. *Cómo utilizar el derecho penal internacional para impulsar reformas legislativas que incorporen la perspectiva de género*. Madrid: Editorial Amnistía Internacional (EDAI).
- 2009. *España. Una vida sin violencia para mujeres y niñas. Las otras víctimas de violencia de género: violencia sexual y trata de personas*. Madrid: Sección española de Amnistía Internacional.
- 2011. *Rape and sexual violence. Human Rights Law and Standards in the International Criminal Court*. London: Amnesty International Publications.
- 2013. *Combatir la crisis con dignidad y derechos*. Madrid: Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam.
- 2015 (a). *Recomendaciones de Amnistía Internacional al Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima*. Madrid: Sección Española de Amnistía Internacional.
- 2015 (b). *Informe al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. 61º Periodo de Sesiones, 6-24 julio, 2015*. London: Amnesty International Publications.
- 2015 (c). *Una reforma constitucional para blindar los derechos humanos*. Madrid: Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam.
- AYUNTAMIENTO DE MADRID. (2007). *Protocolo de actuación coordinada de los organismos competentes en materia de agresiones sexuales*. Madrid: Área de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
- BOSCH, E (Dir.), FERRER,V., NAVARRO, G., FERREIRO, V., RAMIS, M.C & ESCARRER,C. (2009). *El acoso sexual en el ámbito universitario. Elementos para mejorar la implementación de medidas de prevención, detección e intervención*. Madrid: Instituto de la Mujer.
- COMISIONES OBRERAS. (2011). *La acción sindical frente al acoso sexual*. Madrid: Secretaría confederal de la Mujer de CCOO.
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (2016). *Estudio sobre la aplicación de la ley integral contra la violencia de género por las audiencias provinciales*. Madrid: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

- CORPORACIÓN SISMA MUJER. (2013). *Lineamientos de política criminal para la protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia sexual*. Bogotá: Documentos Corporación Sisma Mujer.
- CORPORACIÓN HUMANAS & FOKUS. (2011). *Diez años de la Resolución 1325 en Colombia*. Bogotá: Ediciones Ántropos.
- CORPORACIÓN HUMANAS. (2008). *Sin tregua. Políticas de reparación para mujeres víctimas de violencia sexual durante dictaduras y conflictos armados*. Santiago de Chile: Corporación Humanas.
- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (2016). *Guía de derechos de las mujeres víctimas de violencia de género*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. (2015). *Violence against women: an EU-wide survey. Main results*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- FEMINNIST ALLIANCE AGAINST RAPE AND AEGIS (30 de julio de 1974). Initial invitation letter. *Faar-Aegis.org*. Recuperado el 26 de Enero de 2017, de [http://www.faar-aegis.org/Intro\\_74/intro\\_74.html](http://www.faar-aegis.org/Intro_74/intro_74.html)
- FUNDACIÓN PARA LA CONVIVENCIA ASPACIA. (2015). *Violadas y Expulsadas. Entre el Miedo y la Desprotección*. Madrid: Fundación para la Convivencia Aspacia.
- GUARDIA CIVIL; DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA MANDO DE OPERACIONES. JEFATURA DE POLICÍA JUDICIAL. (2015). *Estudio Criminológico 02/2015. La Trata de Seres Humanos y conductas afines en España*. Madrid: Gobierno de España. Ministerio del Interior. Recuperado el 14 de marzo de 2017, desde: [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44810/1/9789275316351\\_spa.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44810/1/9789275316351_spa.pdf)
- HUMANAS-CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO-Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. (2008). *Sin tregua-políticas de reparación para mujeres víctimas de violencia sexual durante dictaduras y conflictos armados*. Santiago de Chile: Corporación Humanas. Recuperado el 6 de Julio de 2016, desde: [http://www.humanas.org.co/archivos/sin\\_tregua.pdf](http://www.humanas.org.co/archivos/sin_tregua.pdf).

- MÉDICOS DEL MUNDO (2016). *Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España*. Madrid: Médicos del Mundo.
- 2014. *Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo*. Madrid: Médicos del Mundo.
- MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. (2012). *Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones.
- 2015. *Macroencuesta de violencia contra la mujer*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones.
- MINISTERIO DEL INTERIOR. (2015). *Anuario estadístico del Ministerio del Interior*. Bilbao: Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica.
- MUGARIK GABE. (2017). *Flores en el asfalto. Causas e impactos de las violencias machistas en las vidas de mujeres víctimas y sobrevivientes*. Bilbao: Mugarik Gabe.
- OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO. (2016). *Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y CONSEJO DE EUROPA. (2014). *Herramientas regionales de lucha contra la violencia hacia las mujeres. La Convención de Belém do Pará y el Convenio de Estambul*.
- PLATAFORMA CEDAW SOMBRA-ESPAÑA. (2014). *Informe sombra 2008-2013 sobre la aplicación en España de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres (CEDAW). 61ª Sesión del Comité CEDAW-Naciones Unidas*. Madrid.
- REDER. RED DE DENUNCIA Y RESISTENCIA AL RDL 16/2012. (2017). *Cinco mitos para cinco años de exclusión sanitaria*. Madrid.
- TOLEDO, P & PINEDA, M. (2016). *L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya*. Barcelona: ANTÍGONA. Grupo de Recerca Antígona i Creació Positiva.
- TOLEDO, P., BODELÓN, E., TUR, N & MARTÍNEZ, M. (2017). *Marc jurídic internacional, estatal i autoòmic de les violències sexuals (matrimonis fòcats, mutilacions genitals femenines, tràfic d'essers humans amb finalitat d'explotació sexual, assetjament i agressions sexuals)*. Barcelona: ANTÍGONA. Grup de Recerca de Drets i Societat en Perspectiva de Gènere-UAB.

- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN & WOMEN’S LINK WORLDWIDE. (2014). *El principio de igualdad de género en la jurisprudencia comparada*. México D.F.
- WOMEN’S LINK WORLDWIDE. (2011). *Crímenes de género en el derecho penal internacional*. Guatemala: Women’s Link Worldwide.

## **Convenciones, resoluciones, decisiones, investigaciones, informes especiales y estudios de las Naciones Unidas**

### **Resoluciones y Declaraciones:**

- Resolución 827/1993 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. S/RES/827 (25 de mayo de 1993), disponible en:  
<http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1993.shtml>
- Resolución 955/1994 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas .S/RES/955 (8 de noviembre de 1994), disponible en:  
<http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1994.shtml>
- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre “la eliminación de la violencia contra la mujer” E/CN.4/RES/2003/45 (23 de abril de 2003), disponible en:  
<http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx>
- Resolución 67/144 de la Asamblea General “Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer”. A/RES/67/144 (20 de diciembre de 2012), disponible en:  
<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2014/9425>
- Resolución 52/86 de la Asamblea General “Medidas de prevención del delito y de la justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer”. A/RES/52/86 (2 de febrero de 1998), disponible en:  
<http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/52/86&Lang=S>
- Resolución 13/25 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. S/RES/1325 (2000) (31 de octubre de 2000), disponible en:  
[http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325%20\(2000\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325%20(2000))

- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución 48/1004 de la Asamblea General. A/RES/48/104 (20 diciembre de 1993), disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>
- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995, disponible en: [http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa\\_s\\_final\\_web.pdf?vs=755](http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?vs=755)

### Informes, investigaciones y estudios:

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2002). *Informe mundial sobre violencia y salud*. Washington, D.C: Organización Panamericana de la Salud.
  - 2002. *World report on violence and health*. Geneva: WHO.
  - 2003. *Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence*. Geneva: WHO.
  - 2005. *Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica*. Ginebra: WHO.
  - 2011. *Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres*. Washington, D.C: Organización Panamericana de la Salud.
  - 2013. *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*. Geneva: WHO.
  - 2014. *Atención de salud para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual*. Washington, DC: Organización Panamericana de Salud. Ginebra: WHO.
- CONSEJO DE SEGURIDAD. *El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*. Informe del Secretariado General, S/2004/616 (3 de agosto de 2004), disponible en: <http://www.un.org/es/sc/documents/sgreports/2004.shtml>
- COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. *Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 55<sup>a</sup> período de sesiones (8 a 26 de julio de 2013), 56<sup>a</sup> período de sesiones (30 de septiembre a 18 de octubre de 2013), 57<sup>o</sup> período de sesiones (10 a 28 de febrero de 2014)*. A/69/38.

- *Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 52º período de sesiones (9 a 27 de julio de 2012), 53º período de sesiones (1 a 19 de octubre de 2011), 54º período de sesiones (11 a 1 de marzo de 2013).* A/68/38.
- *Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 49º período de sesiones (11 a 29 de julio de 2011), 50º período de sesiones (3 a 21 de octubre de 2011), 51º período de sesiones (13 de febrero a 2 de marzo de 2012).* A/67/38.
- *Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 46º período de sesiones (12 a 30 de julio de 2010), 47º período de sesiones (4 a 22 de octubre de 2010), 48º período de sesiones (17 de enero a 4 de febrero de 2011).* A/66/38.
- *Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 42º período de sesiones (20 de octubre a 7 de noviembre de 2008), 43º período de sesiones (19 de enero a 6 de febrero de 2009).* A/64/38.
- Dictamen. Comunicación núm. 18/2008. CEDAW/C/D/18/2008.
- Dictamen. Comunicación núm. 47/2012. CEDAW/C/58/D/47/2012.
- Dictamen. Comunicación núm. 31/2011. CEDAW/C/53/D/31/2011.
- Dictamen. Comunicación núm. 34/2011. CEDAW/C/57/D/34/2011.
- Dictamen. Comunicación núm. 22/2009. CEDAW/C/50/D/22/2009.
- *Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención. Séptimo y octavo informes periódicos que los Estados partes deberían presentar en 2013. España.* CEDAW/C/ESP/7-8.
- *Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de España.* ONU. CEDAW/C/ESP/CO/7-8.
- Recomendación General Nº19, adoptada por el Comité para la violencia contra la mujer. Recuperada el Comité para la Discriminación contra la Mujer, 11º período de sesiones, 1992. HRI/GEN/1/Rev.1.
- RELATORA ESPECIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CON INCLUSIÓN DE SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS. *Informe preliminar presentado por el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias* Sra. Radhika Coomaraswamy, de conformidad con la resolución 1994/45 de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN/1995/42.

- *Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión. E/CN.4/1998/54 .*
- *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, preparado de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos. Políticas y prácticas que repercuten sobre los derechos reproductivos de la mujer y contribuyen a la violencia contra la mujer, las causas y o la constituyen. E/CN.4/1999/68/Add.4.*
- *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. Indicadores sobre la violencia contra la mujer y la respuesta de los Estados. A/HRC/7/6.*
- *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: la violencia contra la mujer. Hacia una aplicación efectiva de las normas internacionales para poner fin a la violencia contra la mujer. E/CN.4/2004/66.*
- *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo. A/69/368.*
- *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. Economía política de los derechos de la mujer. A/HRC/11/6.*

## Artículos periodísticos

- DE LA CUADRA, B. (1987, Diciembre). Experiencia piloto para atención inmediata a las víctimas de agresiones sexuales. *EL PAÍS*. Recuperado el 9 de marzo de 2017, desde: [http://elpais.com/diario/1987/12/28/sociedad/567644402\\_850215.html](http://elpais.com/diario/1987/12/28/sociedad/567644402_850215.html)
- SABELA, A. (2016, Marzo). Las víctimas “olvidadas” de Franco: violencia sexual, tortura y humillación contra las mujeres. *Infolibre.es*. Recuperado el 22 de febrero de 2017, desde: [http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/16/las\\_mujeres\\_victimas\\_del\\_franquismo\\_piden\\_justicia\\_argentina\\_46475\\_1012.html](http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/16/las_mujeres_victimas_del_franquismo_piden_justicia_argentina_46475_1012.html)



- RODRIGUEZ, A. (1991, Abril). Constituida la primera Asociación de Mujeres Violadas de la Región. *La Crónica*. Recuperado el 9 de marzo de 2017, desde:  
<http://www.archivofeminismosleon.org/constituida-la-primera-asociacion-de-mujeres-violadas-de-la-region/>
- ARGOS, L. (1992, Junio). La pornografía es el fascismo de la democracia, dice Catharine MacKinnon. *EL PAÍS*. Recuperado el 27 de febrero de 2017, desde:  
[http://elpais.com/diario/1992/06/13/sociedad/708386411\\_850215.html](http://elpais.com/diario/1992/06/13/sociedad/708386411_850215.html)
- LIPCOVICH, P (24 de julio de 2008). El detenido que nadie pudo imaginar. *Página 12*. Recuperado el 10 de marzo de 2017, desde:  
<https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-108374-2008-07-24.html>.
- DOMINGUEZ, Y. (27 de noviembre de 2016). No soy un violador, soy un hombre normal. *Huffington Post*: [http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/no-soy-un-violador-soy-un\\_b\\_13231048.html](http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/no-soy-un-violador-soy-un_b_13231048.html)
- GIMENO, B. (8 de mayo de 2017). El juicio contra la manada de San Fermín es histórico. *Eldiario.es*. Recuperado el 12 de mayo de 2012, desde:  
[http://www.eldiario.es/tribunaabierta/juicio-manada-San-Fermin-historico\\_6\\_641545866.html](http://www.eldiario.es/tribunaabierta/juicio-manada-San-Fermin-historico_6_641545866.html)
- JOHNSON, T. (25 de noviembre de 2014). College Rape and Radical feminism: the forgotten feminist roots of today's anti-rape activism. *The Huffington Post*. Recuperado el 29 de junio de 2016, desde:  
[http://www.huffingtonpost.com/thea-johnson/the-forgotten-feminist-roots-of-todays-anti-rape-activism\\_b\\_6212932.html](http://www.huffingtonpost.com/thea-johnson/the-forgotten-feminist-roots-of-todays-anti-rape-activism_b_6212932.html)
- CONSTENLA, T. (14 de junio de 2008). El lenguaje es sexista. ¿Hay que forzar el cambio?. *EL PAÍS*. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde:  
[http://elpais.com/diario/2008/06/14/sociedad/1213394401\\_850215.html](http://elpais.com/diario/2008/06/14/sociedad/1213394401_850215.html)
- *Creada la primera asociación de asistencia a mujeres violadas* (1986). *El PAÍS*. Recuperado el 20 de enero de 2017, desde:  
[http://elpais.com/diario/1986/11/14/madrid/532355059\\_850215.html](http://elpais.com/diario/1986/11/14/madrid/532355059_850215.html).
- CRISTOBAL, P. (6 de febrero de 2006). Violación una fantasía muy femenina. *20minutos.es*. Recuperado el 27 de febrero de 2017, desde:  
<http://www.20minutos.es/columna/87951/0/Violacion/fantasia/femenina/>



- MENESES, R. (24 de junio de 2015). Acnur denuncia abusos sexuales a mujeres y niños refugiados. *El Mundo*. Recuperado el 7 de marzo de 2017, desde:  
<http://www.elmundo.es/internacional/2015/10/23/562a18ce22601d64298b4664.html>
- KELLY, L. (2008). Rape a forgotten issue. *New Statesman*. Recuperado el 20 de Enero de 2017, desde:  
<http://www.newstatesman.com/life-and-society/2008/03/sexual-violence-rape-women>
- TORRÚS, A. (2016). Querella contra el franquismo por todos sus crímenes contra las mujeres. *Público*. Recuperado el 22 de marzo de 2017, desde:  
<http://www.publico.es/politica/mujeres-querellan-dictadura-franco.html>

### **Tesis doctorales**

- DAZA, M. (2014). *Victimología hoy, derecho victimal europeo y español y atención a las víctimas de delitos en España*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada, España.
- ROMERO, M. (2012). *Percepción social de las agresiones sexuales hacia mujeres: el papel del alcohol y los mitos sobre la violación*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada, España.

### **Fuentes audiovisuales**

- MUJERES EN RED. (2011), *Teoría feminista. Celia Amorós* (conferencia). Recuperado el 20 de mayo de 2017, desde:  
[https://www.youtube.com/watch?v=v\\_xOnIGkTQ8](https://www.youtube.com/watch?v=v_xOnIGkTQ8)
- ESCUELA FEMINISTA ROSARIO DE ACUÑA. (2015). *Amor, sexo y patriarcado. Esperanza Bosch* (conferencia). Recuperado el 14 de abril de 2017, desde:  
<https://www.youtube.com/watch?v=NzmZS5PJjDY&t=18s>
- FEDERACIÓN FEMINISTA GLORIA ARENAS. (2014). *La carta magna de todas las mujeres. Alda Facio* (ponencia). Recuperado el 26 de mayo de 2017, desde:  
[https://www.youtube.com/watch?v=fs\\_pwSCtIsQ](https://www.youtube.com/watch?v=fs_pwSCtIsQ)